



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2023.

EXCMO. SR. PRESIDENTE: DON LORENZO DEL RÍO FERNÁNDEZ; **ILTMOS. SRES. VOCALES:** D. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ-CARRILLO, D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS, D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, D^a MARÍA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, D^a MARÍA LUISA ALEJANDRE DURÁN, D. MANUEL ESTRELLA RUIZ, D. LUIS MIGUEL COLUMNA HERRERA, D. ANTONIO GERMÁN PONTÓN PRÁXEDES, D. FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ ZAMORANO, D. FRANCISCO JOSÉ GUERRERO SUÁREZ, D. JOSÉ MARÍA PÁEZ MARTÍNEZ-VIREL, D. ESTEBAN BRITO LÓPEZ, D^a MARÍA JOSÉ RIVAS VELASCO, D^a MARÍA LUISA ZAMORA SEGOVIA, D. JOAQUÍN YUST ESCOBAR, D^a FRANCISCA MARTÍNEZ MOLINA, D. MIGUEL ANGEL PAREJA VALLEJO, D. ALBERTO MANUEL DEL ÁGUILA ALARCÓN, D. ÁLVARO MARCOS MARTÍN GÓMEZ, D. JUAN JOSÉ PARRA CALDERÓN, D. ANTONIO PASTOR SÁNCHEZ; **ILTMO. SR. SECRETARIO DE LA SALA DE GOBIERNO:** D. PEDRO JESÚS CAMPOY LÓPEZ

En Granada, en el día de la fecha, siendo las 11 horas y 30 minutos, se reúnen los miembros del Pleno que con anterioridad se relacionan, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. DON LORENZO DEL RIO FERNANDEZ, justificándose la inasistencia de los Ilmos. Sres. Vocales, D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES, D^a. LOURDES GARCÍA ORTÍZ, D. RAFAEL MORALES ORTEGA, D^a. ROCÍO MARINA COLL, D^a. LARA INMACULADA BLANCO CORONIL, D. JESÚS MANUEL MADROÑAL NAVARRO y D. MIGUEL FRANCISCO SÁNCHEZ GASCA; se inicia la sesión procediéndose a la exposición, estudio, deliberación y decisión de los diversos asuntos pendientes, que fueron resueltos en la forma que a continuación queda reflejada:

1.- ÁREA DISCIPLINARIA

1.1- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000032/2023 interpuesto por
por no estar de acuerdo con la resolución adoptada por el Juzgado de lo Social nº de los
de en el PMU 13 /2023 de fecha 23 de Enero de 2023. Ponente: M^a José Rivas Velasco y la
Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el seno de la pieza de sanción por mala fe procesal 13/2023 derivada del



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Procedimiento ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000028 /2021, seguido ante el Juzgado de lo Social número de de , se dictó auto de fecha diecisiete de enero de 2023, que fue mantenido en auto de fecha 23 de enero de 2023 tras haber formulado recurso de audiencia, acordando lo siguiente: Imponer al Graduado Social, D. bi, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: Una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio.

SEGUNDO.- *Los hechos recogidos en el mismo son los siguientes: En esta ejecución, que tiene nada menos que 116 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra una diligencia de ordenación que únicamente informaba al juzgador sobre la aclaración del auto despachando ejecución, vertiendo además, como viene siendo una constante inaceptable, acusaciones, provocaciones y faltas de respeto a la letrada de administración de justicia y quejas en un vía procesal inadecuada, como en la providencia de 16 de septiembre de 2022 que inadmite a trámite el recurso de revisión contra el decreto de 29 de julio de 2022 quien inadmitía reposición interpuesto contra diligencia de ordenación que únicamente daba traslado al juzgador para resolver sobre la admisión a trámite del recurso presentado, vertiendo además, como viendo siendo una constante inaceptable, acusaciones, provocación y falta de respeto a la letrada de administración de justicia y quejas en vía procesal y adecuada.*

TERCERO.- *En fecha 23 de enero de 2023 se tuvo por cumplido el trámite del recurso, como consta en la providencia dictada, tras formular recurso de reposición se mantuvo la decisión adoptada; y el 6 de febrero se dictó denegando el recurso de audiencia interpuesto. Tras ello, formula recurso de alzada frente a los dos autos de fecha 23 de enero de 2023 y 6 de febrero de 2023 ante la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia al que fue remitido con testimonio de la documentación oportuna y el preceptivo informe del Juez emitido tras requerimiento previo.*

CUARTO.- *La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia adoptó acuerdo de designar ponente y llevar el mismo al conocimiento del Pleno de 18 de julio de 2023.*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Reitera el recurrente los motivos por los que solicitó la audiencia en justicia prevista en el artículo 75. 4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, solicitando la revocación de la sanción impuesta. Fundamentalmente y en síntesis, mantiene que considera que está siendo objeto de una persecución por parte del juez al haber sido abiertas 21 piezas con un montante total de*



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

8400 € en multas. Considera que las dilaciones indebidas en los procedimientos alcanzan años habiendo hecho el juez caso omiso a lo que se exponía en su recurso. Efectúa una serie de afirmaciones que es preciso destacar, habida cuenta la reiteración con la que nos encontramos en la Sala de Gobierno de recursos de alzada del mismo recurrente. En este recurso, aparte de reclamar se entre a valorar por esta Sala de Gobierno la que considera una providencia ilegal, al inadmitir recurso de reposición pese a concurrir los requisitos legales, y en lo que respecta al presente, imputa al Juez ocultaciones deliberadas, actuaciones ilegales, mala fe, afirmando sufrir una persecución derivada de lo que indica, es el odio que le tiene el Juez. Tales manifestaciones que son inanes a los efectos del presente, el contenido del recurso ha de reconducirse a que indica fundamentalmente que se han tenido en consideración otros procedimientos que no son objeto de la presente de ejecución.

En tanto que los autos que contienen tanto la imposición de la sanción como el dictado tras el trámite de audiencia al recurrente se encuentran debidamente fundamentados exponiendo los motivos por los que el Magistrado entiende conculcada la buena fe procesal a los que ha de remitirse la presente resolución, desde una perspectiva jurídica lo que discute el recurrente es el contenido de las mismas en relación con la acreditación de la conducta que le fue imputada y que generó la sanción.

SEGUNDO.- No hemos más que reiterar lo indicado en recursos precedentes, en tanto que la conducta imputada en el auto resolutorio al recurrente es sustancialmente idéntica a la que ha sido sometida a la consideración de esta Sala en numerosas ocasiones. Así indicamos previamente en el recurso deliberado en Pleno de 25 de abril de 2023, lo siguiente que es plenamente aplicable al presente y que reproducimos: Centrados en esos términos el objeto del recurso hay que tener en cuenta los efectos de la resolución del presente también los parámetros que recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de mayo de 2017 respecto de la prueba indiciaria que destruye la presunción de inocencia al afirmar “ ..La aptitud de la prueba de indicios para contrarrestar la mencionada presunción, a la vista de la necesidad de evitar la impunidad de múltiples delitos, particularmente los cometidos con especial astucia, y la advertencia de que habría de observarse singular cuidado a fin de evitar que cualquier simple sospecha pudiera ser considerada como verdadera prueba de cargo. A partir de tal fecha con frecuencia se ha venido aplicando y estudiando por los Tribunales de Justicia esta clase de prueba que ha adquirido singular importancia en nuestro Derecho Procesal, porque, como es obvio, son muchos los casos en que no hay prueba directa sobre un determinado hecho, y ello obliga a acudir a la indirecta, circunstancial, o de inferencias, para a través de los hechos plenamente acreditados (indicios), llegar al conocimiento de la realidad de aquel necesitado de justificación, por medio de un juicio de inducción lógica conforme a las reglas que ofrece la experiencia sobre la base de la forma en que ordinariamente se desarrollan los acontecimientos (SSTC. 229/88, 107/89, 384/93, 206/94, 45/97 y 13.7.98). Del mismo modo esta Sala de casación del Tribunal Supremo ha generado una amplia jurisprudencia al respecto, según la cual la realidad del hecho y la participación en el mismo del acusado puede ser establecida por la fórmula de indicios (SSTS. 17.11 y 11.12.2000 , 21.1 y



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

29.10.2001 , 29.1.2003 , 16.3.2004) siempre que concurren una serie de requisitos: a) Pluralidad de los hechos-base o indicios...b) Precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo y ello para evitar los riesgos inherentes que resultarían de admitirse una concatenación de indicios, con la suma de deducciones resultantes que aumentaría los riesgos en la valoración. c) Necesidad de que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar. d) Interrelación. Derivadamente, esta misma naturaleza periférica exige que los datos estén no solo relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados; es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas represente sobre las restantes en tanto en cuanto formen parte de él. La fuerza de convicción de esta prueba dimana no sólo de la adición o suma, sino también de esta imbricación. e) Racionalidad de la inferencia. Esta mal llamada prueba de presunciones no es un medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente acreditados. Por ello, entre éstos y el dato precisado de acreditar ha de existir, conforme a lo requerido por el art. 1253 Cc. "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano", enlace que consiste en que los hechos-base o indicios no permitan otras inferencias contrarias igualmente válidas epistemológicamente. f) Expresión en la motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia. Pues solo cuando se contienen en la motivación de la sentencia exigida por el art. 120.3 CE. ... (SSTs. 24.5 y 23.9.96 y 16.2.99)".

Valorando con tales parámetros tanto lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, pese a la afirmada prueba insuficiente para poder imputar responsabilidad que finalmente dio lugar a la sanción, se entiende la existencia de datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos interpuestos por el Sr. , y como hemos indicado en otros recursos interpuestos por el mismo recurrente al haber sido sancionado por conductas parecidas en otros procesos, que sin perjuicio de que el mismo tenga derecho a articular los recursos que la Ley brinda frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, sin embargo, estamos a juicio de esta Sala ante un uso de esa facultad que excede ese derecho.

Al igual que en ocasiones anteriores el uso de los recursos frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe ya que, como se indica en el auto recurrido, cuenta con 116 acontecimientos el proceso del que deriva la presente pieza, siendo suficientemente explicativo de la situación que genera la utilización injustificada de recursos y peticiones de aclaración de cualquier resolución que se dicte en un proceso, provocando con ello en la práctica la paralización del mismo, para seguidamente imputar dilaciones indebidas al propio órgano judicial, formulando peticiones que han dado lugar a 116 actuaciones en un único procedimiento que son prueba más que suficiente del abuso del proceso por parte del recurrente. Indicar, que, excede del ámbito de este recurso el control de legalidad que reclama respecto de la providencia que inadmite la petición del recurrente al ser una cuestión jurisdiccional, no gubernativa como la presente; así como que, en modo alguno el trámite seguido excede del ámbito del art. 75 de la Ley de la Jurisdicción social



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

invocado, ya que, la sanción se impone en base a la infracción de los deberes de buena fe procesal que dispone el art. 247 LEC en relación con el artículo referido.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional.

TERCERO.- *Dicho lo cual, entendiendo acorde a derecho la tipificación disciplinaria que ahora nos ocupa, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción que debe de regir en cualquier régimen jurídico sancionador, estimamos correcto el importe impuesto y se propone al Pleno de esta Sala de Gobierno TSJA mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 € .*

En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, ACUERDA DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Graduado Social Don , frente a los autos de fecha 23 de enero y 6 de febrero de 2023.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano de los Juzgados de , para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.2- RECURSO DE ALZADA 31/2023 interpuesto por por no estar de acuerdo con la resolución adoptada por el Juzgado de lo Social nº de los de en el PMU 20/2023 de 7 de febrero de 2023. Ponente: Juan José Parra Calderón y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

ACUERDO

En la Ciudad de Granada, a 18 de Julio de 2.023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Que por el Sr. Juez del Juzgado de lo Social Número de se dictó Auto 39/2023 de fecha 7-2-2023 imponiendo la multa de 400 euros a D. por temeridad, abuso del derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y a la autoridad judicial al haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante ese Tribunal.

En fecha 11-2-2023 se presentó recurso de audiencia en justicia contra el Auto al anterior por el Graduado Social antes citado.

En fecha 14-2-2023 se dictó Auto por el Juzgado de lo Social Número de desestimatorio del recurso de audiencia.

En fecha 19-2-2023 se presentó recurso de alzada por el Sr. por no estar de acuerdo con la imposición de la multa coercitiva de 400 euros, realizando alegaciones similares al recurso de audiencia en justicia, tales que tiene acumulado un montante de 8.400,00 euros en multas al ser el Graduado Social de con más trabajo, siendo objeto de persecución por el Juzgador con la ayuda de la LAL los cuales se se ponen de acuerdo al dictar la DO, el Auto y el Decreto el mismo día 3-2-2023, velocidades jamás vista; alega son 44 que ha opuesto ante la Sala de Gobierno, sin resolverse ninguna de ellas; habla de cinco juras de cuentas solicitadas y aún no tramitadas, que revela un auténtico abuso de autoridad del Juzgador y de la LAJ, retrasando el pago de mis minutas; lo que existe es mala fe y abuso de autoridad hacia mi persona, ocultando deliberadamente resoluciones inadecuadas, dictando Providencias y Autos ilegales, que revelan auténticas faltas de respeto y acusaciones infundadas hacia su persona, con tremenda mala fe y temeridad por el Juzgador, alega que resulta repugnante e inadmisibile las manifestaciones del Juzgador sobre su actuación procesal.

La presente Pieza se refiere a la SS 447/20, sin que se aprcie ninguna actuación irregular por este recurrente de las comprendidas en el ámbito de los cinco puntos manifestados por el Juzgador a quo, atacando mi honorabilidad, pues jamás he pretendido ocasionar dilaciones indebidas, etc.

SEGUNDO. - Que consta informe a los efectos del artículo 556 de la LOPJ realizado por el Magistrado Don .

TERCERO. - Recibidas las actuaciones, por Acuerdo del Excmo. Sr. Presidente de fecha 30-6-2023, se formó el oportuno expediente (recurso de alzada 31/2023).

CUARTO. - Dada cuenta a la Sala de Gobierno reunida en Comisión, en la misma se acordó pasar el asunto al conocimiento del próximo Pleno, designando Ponente al que suscribe.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La impugnación tiene su origen en el procedimiento SSS 447/2020 de dicho Juzgado de lo Social, donde constan 153 acontecimientos, habiendo sido requerido dicho profesional para que cesara en su comportamiento irregular en el Auto de fecha 1-9-2022 que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 3-3-2022 que acordaba el archivo de la erróneamente calificada como demanda, a consecuencia de un error de la propia parte en su escrito que especificaba expresamente que “se basa su demanda en los siguientes hechos”. De igual forma, el citado Auto acordó djar sin efecto la Providencia de 24-2-2022 en la que se acordaba un cambio d e señalamiento anotado en la agenda por error, redactando el profesional el escrito efectuando una serie de descalificaciones a la LAJ como “fue tal la obsesión” o a la autoridad judicial como “si ha actuado por soberbia”, expresiones que exceden del derecho de defensa y que, además, se dirigen a dilatar el procedimiento, ya que consta el archivo, de manera que los demás escritos solo van dirigidos a dilatar el procedimiento, y no obtener resolución fundada en derecho.

SEGUNDO. – Las actuaciones realizadas por este Graduado Social pueden considerarse irregulares e improcedentes, siendo el mismo modus operandi: recurrir resoluciones contra las que expresamente no cabe recurso alguno para intentar conseguir una resolución ajustada a sus intereses, pedir aclaraciones de las aclaraciones para conseguir una resolución ajustada a sus intereses, recursos innecesarios como las de mero traslado al Juzgador para resolver, faltas de respeto a la LAJ y al Juzgador, etc. Lo anterior ocasiona un auténtico desorden y provoca multitud de dilaciones en claro fraude de ley, beneficiándose claramente de sus propios actos fraudulentos, lo que denota evidente mala fe procesal, abuso del derecho y temeridad procesal.

Las alegaciones realizadas en el recurso de audiencia en justicia son ininteligibles, y ni siquiera ataca la resolución recurrida, hablando de omisiones y de ocultaciones de resoluciones, para terminar, diciendo que lleva un total de 8.400,00 euros en multas impuestas, imputando a la Secretaria de Gobierno del TSJ la autoría de su imposición, hablando de la mala fe del Juzgador ante tan insostenibles acusaciones. Lo mismo reitera en el recurso de alzada.

La realidad es que se ha impuesto la multa de 400,00 euros de conformidad con los artículos 553, 546.3 de la LOPJ este último en relación con el artículo 75.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, siguiendo el Juzgador a quo con el criterio uniforme establecido por esta Sala de Gobierno en Acuerdos anteriores, tales como el 26-4.-2022 desestimatorio del recurso de alzada confirmando el Auto de fecha 20-5-2021 donde se le imponen 400,00 euros de multa por hechos similares, y Acuerdo de fecha 19-12-2022, o el de la Pieza Separada 57/2022 por mala fe procesal 997/2016, así como el Acuerdo de Plano de la Sala Segunda del TS de fecha 25-4-2023 relativo a la prueba indiciaria, al existir el dato objetivo que se considera como indicio potencial y suficiente al existir 153 acontecimientos que exceden de lo mínimamente exigible para este tipo de procedimientos de ejecución.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, ACUERDA DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Graduado Social Don , confirmando íntegramente la sanción impuesta de MULTA DE 400,00 euros en el Expediente aludido.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano de los Juzgados de , para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.3- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000019/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con el Auto de fecha 23 de Enero de 2023 dictado en el procedimiento Pieza Imp.Multa Co.16/2023 del Juzgado de lo Social nº de los de . Ponente: Miguel Ángel Pareja Vallejo y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

HECHOS

PRIMERO.- *Por don , Graduado Social, se interpuso recurso de alzada contra el Auto de 6 de febrero de 2023, ratificando la sanción impuesta por Auto de 23 de enero de 2023, dictados por el Magistrado Ilmo. Sr. D. , titular del Juzgado de lo Social nº de , en los Autos Pieza Imposición Multas Coercitivas (PMU) 16/2023, dimanante del Procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales nº 72/2021, por el que se acordaba la imposición de una multa de 400 euros al mismo, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a las partes y Autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC, en adelante), y con el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS, en adelante).*

En fecha 16 de marzo de 2023, por el citado Magistrado, se emitió preceptivo Informe a los efectos del Art. 556 LOPJ.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

SEGUNDO.- Con carácter previo a la resolución del presente recurso de alzada deben destacarse los siguientes hechos que constan en lo actuado:

1) En el Procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 72/2021, que según las resoluciones recurridas tiene 103 acontecimientos, el Graduado Social don _____ ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el Auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 20 de junio de 2022 que inadmitía la reposición interpuesta contra una Diligencia de Ordenación que únicamente informaba la parte ejecutante que se tenían por efectuadas la manifestaciones de dicha parte y se le remitía al contenido del Auto de 14 de julio de 2021, así como, acordaba la notificación por edictos de la parte ejecutada al haber resultado infructuosos los demás actos de comunicación ordinarios, y en el Decreto que se recurre en revisión, se manifiesta que se han cumplido con los preceptos legales que determinan la necesidad de notificación por edictos y que se ha procedido al despacho ejecución al haber resultado firme la sentencia del declarativo con efectos desde el día 8 de marzo de 2022, resultando el trámite siguiente el de la celebración del incidente de no readmisión que fue señalado para el día 7 de junio de 2022 que no fue celebrado porque el Graduado Social don _____ manifestó por vía telefónica que no era necesario y debía resolverse por escrito, de lo que queda constancia por los presentes que estuvieron en sala (auxilio judicial, letrados y el mismo juzgador) cuando si era necesaria su celebración y resolución, ocasionando una vez más las dilaciones indebidas de las que el mismo Graduado Social don _____ se queja.

Sobre la base de lo anterior, el referido Magistrado Juez dictó Auto de fecha 17 de enero de 2023 que acuerda proceder, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la LRJS y 247 de la LEC, a la apertura de la correspondiente pieza de sanción pecuniaria al Graduado Social don _____, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la Autoridad judicial, con traslado para alegaciones por plazo de tres días siguientes a la notificación de esta resolución.

2) Con fecha 20 de enero de 2023 el Graduado Social don _____ en vez de presentar alegaciones lo que presenta es un recurso de reposición solicitando la anulación del Auto de 17 de enero de 2023, dictándose por el Juzgado de lo Social número _____ de _____ Providencia de 23 de enero de 2023 en la que se acordó la inadmisibilidad de dicho recurso, sobre la base del artículo 75 de la LRJS que establece que el presunto infractor debe de efectuar alegaciones previas a la imposición de sanción disciplinaria, no siendo objeto de recurso de reposición al tratarse de un trámite procesal gubernativo-administrativo que no se rige por las reglas ordinarias de los recursos del orden social, sino que tiene sus propias normas tal y como sucede con los posteriores recursos de audiencia y de alzada.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

No obstante lo anterior, en aras de no ocasionar una posible indefensión, el Magistrado Juez, en la citada Providencia de 23 de enero de 2023, pasa a resolver lo expuesto por el Graduado Social don , y así éste pone de manifiesto que lejos de cumplir el mandato de que la sanción que se decida imponer sea reservada para una resolución autónoma independiente se ha incumplido, ya que en vez de la apertura de una pieza separada lo que se hace es dictar el Auto de 17 de enero de 2023 en el procedimiento ejecución que acuerda la apertura de expediente disciplinario, dándole publicidad, pese a su prohibición.

El Magistrado Juez argumenta que el motivo de la publicidad es claro, pues el artículo 75 de la LRJS en su apartado 2º otorga la posibilidad a los perjudicados de reclamar los daños y perjuicios que las actuaciones del presunto infractor por mala fe procesal y abuso de derecho les hubiese ocasionado, y en consecuencia, deben tener conocimiento de las actuaciones por las que se abre la pieza, a los efectos de que, en su caso, puedan ejercitar sus derechos una vez devenga firme la posible sanción pecuniaria en vía gubernativa-administrativa.

A ello se añade que la resolución que se recurre (Auto de 17 de enero de 2023 por el que se acuerda la apertura de expediente disciplinario) más que un Auto jurisdiccional es un acuerdo gubernativo-administrativo, un simple trámite informativo, puesto que en este estado procesal administrativo aún no se ha impuesto multa y precisamente la misma se deberá imponer si procede en la pieza separada apertura, resultando imposible abrir pieza separada sin Auto en el procedimiento principal que así lo acuerde.

Asimismo respecto de lo que en manifiesta el Graduado Social don sobre que en dicho Auto (Auto de 17 de enero de 2023) no se concretan que actos son los que se entienden como temerarios y en los que ha actuado con mala fe procesal, en los que ha hecho abuso de derecho, explicando en qué consistió y en donde les ha faltado el respeto. Que nada de esto constan el Auto, que el Magistrado Juez divaga con absoluta mala intención, sin concretar absolutamente nada.

Que SS con mala fe, forma única en la que se puede entender el Auto de 17 de enero realiza acusaciones ambiguas, inconcretas, infundadas, como si se tratase de una crítica, sin ser capaz de concretar, sobre el procedimiento que nos ocupa y sobre la que debió exponer.

Que SSª se toma la libertad desde la impunidad en que cree estar envuelto, acusándole de forma muy grave y sobre las que sin duda accionará legalmente donde proceda.

Frente a lo expuesto el Magistrado Juez pone de manifiesto que en cuanto al fondo del asunto, esto es, la apreciación por parte del juzgador de la mala fe procesal, abuso de derecho, temeridad y falta de respeto, además de que la resolución impugnada resuelve motivadamente la concreta infracción en el párrafo del procedimiento y número del mismo con los antecedentes que



justificarían en su momento la apreciación de reincidencia, será dilucidado en la correspondiente pieza disciplinaria.

Asimismo y dado que el profesional no efectuó un trámite específico de alegaciones, el Magistrado Juez lo tuvo por cumplido con el recurso de reposición inadmitido mediante la Providencia de 23 de enero de 2023.

3) Ante estos hechos por Auto 23 de enero de 2023 se impone al Graduado Social don sanción de 400 euros por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial, con base a los siguientes argumentos:

- Que las actuaciones que efectúa este profesional y que el Magistrado Juez considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; B) pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

- Y todo ello, con la finalidad pretendida de dilatar el procedimiento y así poder acudir el mismo a reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional, así como obtener un mayor rédito con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propios de las ejecuciones de esta jurisdicción, ya que, al prolongarse en el tiempo pueden obtenerse mayores cantidades económicas, beneficiándose de la ley y con un claro fraude de ley y con total impunidad ya que todas estas actuaciones las realiza aprovechándose de la circunstancia de que en el orden social de la jurisdicción nos exige depósito para recurrir a los trabajadores y/o beneficiarios de la Seguridad Social. Por lo expuesto, puede concluirse que el Graduado Social don , se beneficia del desorden creado por el mismo, con actos manifiestamente fraudulentos que ocasionan perjuicios económicos a las partes contrarias y desgaste mental, moral y físico del Juzgado de lo Social.

- Todas estas actuaciones dan lugar a unas dilaciones indebidas y retraso enorme en el juzgado, efectuándose todas ellas con manifiesta mala fe, abuso de derecho y temeridad procesal, con faltas de respeto manifiestas que en ocasiones rayan lo delictivo, lo que ha desembocado en: a) una serie de bajas médicas del personal de la Oficina Judicial por depresión, entre ellas, la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia; b) una excesiva carga de trabajo en el juzgado hasta el punto de que el juzgado ha sido objeto de diversas actuaciones por parte de la Inspección



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

del CGPJ; y c) a que este juzgado sea considerado como un juzgado de "paso" en el que nadie quiere o puede estar más de un determinado tiempo por tener que estar soportando este tipo de actuaciones que ocasionan el trabajo correspondiente a dos órganos judiciales sin causa justificativa alguna como se va a poner a continuación.

- ETJ 72/21: en esta ejecución, que tienen nada menos que 103 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el Auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 20 de junio de 2022 que inadmitía la reposición interpuesta contra una Diligencia de Ordenación que únicamente informaba a la parte ejecutante que se tenían por efectuadas la manifestaciones de la parte ejecutante y se le remitía al contenido del Auto de 14 de julio de 2021, así como, acordaba la notificación por edictos de la parte ejecutada al haber resultado infructuosos los demás actos de comunicación ordinarios, y en el decreto que se recurre en revisión, se manifiesta que se han cumplido con los preceptos legales que determinan la necesidad de notificación por edictos y que se ha procedido al despacho ejecución al haber resultado firme la sentencia del declarativo con efectos desde el día 8 de marzo de 2022, resultando el trámite siguiente el de la celebración del incidente de no readmisión que fue señalado para el día 7 de julio de 2022 que no fue celebrado porque el Graduado Social don _____ manifestó por vía telefónica que no era necesario y debía resolverse por escrito, de lo que queda constancia por los presentes que estuvieron en sala (Auxilio judicial, Letrados y el Magistrado Juez que suscribe el Auto) así como en la posterior Diligencia de Constancia de la LAJ, cuando si era necesaria su celebración y resolución, ocasionando una vez más las dilaciones indebidas de la que el mismo Graduado Social don _____ se queja.

Por todo lo expuesto, es por lo que el Magistrado Juez resuelve imponer al Graduado Social don _____ por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y Autoridad judicial, una multa de 400 € por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante ese Tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio.

4) Contra este Auto se solicitó por el Graduado Social don _____ ser oído en justicia, presentando escrito en el que, en esencia, tras narrar incidentes del procedimiento, reproducir parte del contenido del Auto referido en el apartado anterior y parte de sus escritos anteriores (especialmente el contenido del recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 17 de enero de 2023 que fue inadmitido por el juzgado mediante providencia de 23 de enero de 2023), ha negado la existencia de temeridad, mala fe, falta de respeto y abuso de derecho, estimando que SS^a le está ocultando cosas que debe decidir y que tampoco quiere aclarar, preguntándose si SS^a le revelará, cosa que duda, sobre este extraño proceder. Que a SS^a le dará igual lo que expongan en el recurso, dudando que llegue a leerlo, puesto que su pretensión lo es el sólo cumplir los



trámites, y que reitera lo que solicitó en el recurso de reposición contra el Auto de 17 de enero de 2023 dimanante de la ETJ 72/21, y que como ya ha dicho, no se ha querido resolver y con ello, provocándole a sabiendas la indefensión a la que le tiene SSª acostumbrado.

Añade el Graduado Social don que lejos de ser SSª claro y
conciso, que amparado sin duda en su firme creencia, que la Secretaría de Gobierno del TSJ de Andalucía confirmará todas sus PMU, y que es por ello que oculta la concreción, quizás también, porque tampoco sabe localizarla, y de ahí que no concrete en que consistió la temeridad que le imputa, la mala fe, el abuso de derecho y la falta de respeto a las partes y autoridad judicial; señalando a donde alcanza la mala fe de SSª, que hace relatos en el Auto amparados presuntamente en su impunidad (reproduciendo parte del Auto recurrido) y es que, si no tiene mala fe (se refiere a SSª) no se puede actuar tan temerariamente con las elucubraciones que ha hecho y que si lo que el recurrente ha dicho podría rozar la presunción de delitos, que le resulta bien extraño, que SSª no los haya denunciado ante la Fiscalía.

Que las PMU, contrariamente a como son utilizadas por su señoría, lo están para multar sobre unos hechos concretos donde se concrete la existencia de esa supuesta mala fe, temeridad, abuso de derecho, etc..., Que se pueda haber conservado. No siendo permisible legalmente que el Auto se extralimite comentando cuestiones muy generales y referidas a otros procedimientos. Que esto sólo es posible en una mente insana, con mala fe, con premeditación y alevosía.

Asimismo manifiesta que nos fijemos a donde llega la mala fe de SSª, a fin de alarmar a la sala de gobierno, indicando que la ETJ tiene 103 acontecimientos, cuando SSª conoce y sabe sobradamente que en su gran mayoría se trata de resoluciones y escritos, varias veces repetidos. También a la existencia de las notificaciones y otros que de no contabilizarse se reducirían sustancialmente en su número.

En el mismo sentido, dice sobre el envilecimiento de SSª contra él, y de ahí que aproveche el Graduado Social don para decir que tiene temor constante cuando
actúa en sala, y lo peor, cuando espera sus sentencias. Que es obvio que SSª quiere ocultar la inquina y la persecución hacia él a fin de someterlo, y si fuese necesario, conseguir apartarlo de su profesión con denuncias ante la Fiscalía y avasallamientos con multas, cuando sabe perfectamente que la Secretaría de Gobierno del TSJA, jamás concretó como SSª lo bien haciendo, sobre en que constaba esa mala fe, abuso de derecho, falta de respeto y desobediencia a la Autoridad con que se le acusaba. Seguro a que, por ello, prefiere no solicitar la abstención porque su firme intención debe de ser lo contrario, no quedar apartado, pese a esta nefasta relación profesional y que alcanza a lo personal. Asimismo recoge párrafos textuales del Auto de 23 de enero de 2023:

“Las actuaciones que efectúa este profesional que este juzgador considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) Recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso



alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; B) Pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) Recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) Faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) Utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.”

“Todas estas actuaciones dan lugar unas dilaciones indebidas y retraso enorme en el Juzgado, efectuándose todas ellas con manifiesta mala fe, abuso de derecho y temeridad procesal, con faltas de respeto manifiestas que en ocasiones rayan lo delictivo, lo que ha desembocado en: a) una serie de bajas médicas del personal de la Oficina Judicial por depresión, entre ellas, la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia; b) una excesiva carga de trabajo en el juzgado hasta el punto de que el juzgado ha sido objeto de diversas actuaciones por parte de la Inspección del CGPJ; y c) a que este juzgado sea considerado como un juzgado de “paso” en el que nadie quiere o puede estar más de un determinado tiempo por tener que estar soportando este tipo de actuaciones que ocasionan el trabajo correspondiente a dos órganos judiciales sin causa justificativa alguna como se va a poner a continuación.”

Para luego afirmar el recurrente: “fijese a donde alcanza su desmedida contra mi, que ni tan siquiera repara en que dichos párrafos son los mismos que sus Autos en la PMU 5/22. Esto es, se trata de resoluciones que van dirigidas a mí, cuando se trata de generalidades maléficas a fin de alarmar más si puede, a la Secretaría de Gobierno, cuando si lo que allí se dice es cierto, que debió abrir las piezas separadas de PMU que considerese oportuna, que no referir a modo de denuncia o queja, en esta ETJ 72/21. Y es que como se observa, más que un Auto dirigido a mi, que también lo dirige al TSJA. Como puede suceder esto si no lo es por su envilecimiento.”

5) Por Auto de 6 de febrero de 2023, suscrito por el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número de , don , se ratifica la imposición de la sanción, desestimando las alegaciones efectuada, articulándose contra el mismo recurso de alzada interpuesto por el Graduado Social don , para ante esta Sala de Gobierno que, en esencia, expone el contenido del anterior recurso de audiencia que interpuso contra el Auto de 23 de enero de 2023 y del anterior recurso de reposición en el que pedía la nulidad del Auto de 17 de enero de 2023, que fue inadmitido a trámite mediante providencia de 23 de enero de 2023, añadiendo que viene siendo objeto de persecución por el Juez, con la colaboración de la LAJ, y cuyos motivos y causas conoce sobradamente la Sala de Gobierno. Que desde el 26 de agosto de 2022 y hasta el momento, son 44 las denuncias que ha puesto ante esta Sala de Gobierno y que ninguna de ellas se ha resuelto. Asimismo expone diversas vicisitudes referidas a la PMU 5/22 que no es objeto de este recurso, agregando que ha solicitado cinco Juras de Cuentas en el Juzgado desde hace más de un año y que no se han resuelto, porque de lo que



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

se trata es de retrasarle el cobro de sus minutas y que por eso en estas Juras de Cuentas los tiempos entre resoluciones son enormes, que es más de un año lo que lleva esperando su ejecución y cobro definitivo.

Que el recurrente sin duda a no equivocarse, a que resulta más que evidente a la vista de lo expuesto, la existencia de mala fe y abuso de autoridad emprendidos contra él y que evidencia esa persecución de la que está siendo objeto con mayor fuerza y ferocidad, desde un mes después de tomar posesión el actual Juez, único promotor de las PMU. Asimismo reitera las brutales dilaciones indebidas que sufren sus ejecuciones y sobre las que el Juez nunca quiere resolver, rechazándolas en todos sus recursos en los que recurre por infracción del artículo 24.2 de la constitución.

Y todo ello para decidir: "como se dice coloquialmente, si todo esto no es acreditativo de la persecución a la que vengo sometido, que venga Dios y lo vea."

Asimismo, respecto del relato de hechos relativos a la ETJ 72/21 ha afirmado la mala fe del Juez que le caracteriza para con él, alarmando a la sala sobre los 103 acontecimientos, si bien oculta decir, a cuantos de ellos, son repetidos. O cuantos se trata de acuses y notificaciones de los diferentes escritos y resoluciones.

Abundando en esa mala fe que le imputa al Juez, le dice y le pregunta, para que informe a la sala tras ese recurso de alzada, a en dónde, a cuándo y cómo le requirió como dice, para que césase en ese comportamiento irregular.

Que cuando el Juez le acusa de actuar, provocando dilaciones indebidas que siente vergüenza ajena, ya que no se concretan cuáles son esos actos que han provocado dilaciones indebidas.

Que al Juez no le interesa remitir a la Sala la ETJ completa donde conste si es cierto que el recurrente llamó por teléfono indicando lo que dice que dijo. Y que si el acto de 7 de julio no se celebró, sencillamente, porque el recurrente llamó por teléfono diciendo que no era necesario y que debía resolverse por escrito, que nunca imaginó en él, tal poder. "Vaya descaro".

Que el Juez debe necesariamente remitir esa constancia de presencia que dice del Auxilio, Letrados y de él mismo, pues al recurrente nada de esto le consta.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Antes de entrar en el fondo de la cuestión, la existencia o no de mala fe procesal, temeridad, abuso de derecho y falta de respeto, ha de hacerse una alusión a lo que deja entrever el recurrente en sus escritos, que no es otra cosa que una infracción del derecho a la tutela judicial



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

efectiva, artículo 24 de la Constitución, en su consideración de que la resoluciones recurridas no resuelven lo solicitado en su petición de nulidad del Auto de 17 de enero de 2023, respecto de lo cual no podemos estar de acuerdo en absoluto, ya que el Magistrado Juez en todas sus resoluciones, pero especialmente en la providencia de 23 de enero de 2023, da cumplida respuesta a la petición del Graduado Social don , pues mediante Auto de fecha 17 de enero de 2023, en el proceso ETJ 72/2021, se acuerda la apertura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la LRJS y 247 de la LEC, de la correspondiente pieza de sanción pecuniaria contra el referido Graduado Social, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial, con traslado para alegaciones por plazo de tres días siguientes a la notificación de esta resolución.

El Graduado Social don , en vez de presentar alegaciones en el plazo de tres días, lo que presenta, con fecha 20 de enero de 2023, es un recurso de reposición solicitando la anulación del Auto de 17 de enero de 2023, compartiéndose la decisión del Juzgado de lo Social número de que con fecha 23 de enero de 2023 dictó Providencia, que consideramos ajustada a derecho y cuyos fundamentos compartimos, en la que se acordó la inadmisibilidad de dicho recurso, sobre la base del artículo 75 de la LRJS que establece que el presunto infractor debe de efectuar alegaciones previas a la imposición de sanción disciplinaria, no siendo objeto de recurso de reposición al tratarse de un trámite procesal gubernativo-administrativo que no se rige por las reglas ordinarias de los recursos del orden social, sino que tiene sus propias normas, tal y como sucede con los posteriores recursos de audiencia y de alzada.

En otro orden de cosas, el Graduado Social don pone de manifiesto que lejos de cumplir el mandato de que la sanción que se decida imponer sea reservada para una resolución autónoma independiente se ha incumplido, ya que en vez de proceder el Magistrado Juez a la apertura de una pieza separada, lo que se hace es dictar el Auto de 17 de enero de 2023 en el procedimiento ejecución acordando la apertura de expediente disciplinario, dándole publicidad, pese a su prohibición.

Tampoco podemos compartir este argumento, porque el artículo 75 de la LRJS en su apartado 2º otorga la posibilidad a los perjudicados de reclamar los daños y perjuicios que las actuaciones del presunto infractor por mala fe procesal y abuso de derecho les hubiese ocasionado, y en consecuencia, deben tener conocimiento de las actuaciones por las que se abre la pieza, a los efectos de que, en su caso, puedan ejercitar sus derechos una vez devenga firme la posible sanción pecuniaria en vía gubernativa-administrativa. Por tanto, sobre la base de lo razonado consideramos que el motivo de la publicidad es razonado y fundamentado. Además a lo único que se da publicidad, en el proceso EJ 72/2021, es al Acuerdo de apertura del expediente disciplinario, ya que a partir de ahí se abre la correspondiente pieza donde el Graduado Social don

ha tenido oportunidad ejercitar sus derechos, defenderse y alegar lo que a su derecho haya convenido.



A ello debemos de añadir, que después del Auto de 17 de enero de 2023 en el que se acuerda la apertura de expediente disciplinario y la Providencia de 23 de enero de 2023, por la que se inadmite a trámite el Recurso de Reposición interpuesto, en el que se pedía la nulidad del Auto anterior, se dictan los Autos de 23 de enero de 2023, donde se impone al hoy recurrente la multa de 400 € por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial, y de 7 de febrero de 2023 donde se desestima íntegramente el recurso interpuesto por el Graduado Social don contra el Auto anterior, así como todas las alegaciones que había realizado el recurrente en el trámite de audiencia, y todo ello, de forma motivada, debiendo señalarse que la obligación de motivar las resoluciones judiciales no requiere un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, y los criterios del Magistrado que resuelve sobre las alegaciones efectuadas es claro y fundamentado, ello sin perjuicio de que la parte recurrente esté en desacuerdo con esa resolución, sin perjuicio de la valoración que vía de recurso pueda llevarse a cabo por esta Sala de Gobierno.

SEGUNDO.- Respecto al fondo del recurso, el párrafo 4º del artículo 75 de la LRJS dispone que “Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante Auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio”, cabe decir que en general en relación con el concepto de buena fe, es doctrina comúnmente admitida (STS de 1 de marzo de 2001) que la exigencia de ajustar el ejercicio de los derechos a las pautas de la buena fe según lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil constituye un principio informador de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al comportamiento considerado como honrado y justo, e igualmente, es doctrina constante y reiterada (STS de 12 de julio de 2002) que la buena fe es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo y leal, que supone una exigencia de actuación coherente y de protección de la confianza ajena, y en el ámbito del derecho laboral, interpretando el precepto citado más arriba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) en su Sentencia nº 5715/2020 de 17 diciembre, se señala que para la imposición de una sanción “Debe concurrir mala fe: entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria; y/o temeridad: entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso, sea de modo culposo, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón”.



En primer lugar, el Graduado Social don [redacted] se queja de la inclusión, en los Autos del expediente, de una serie de párrafos que a continuación se expondrán, en los que según su opinión son gratuitos y ejemplo de la persecución de la que está siendo objeto por parte del Juez y de la mala fe de éste, ya que éste en ningún momento le dice donde le ha faltado el respeto o donde le ha acusado de algo de forma irrespetuosa. "[...] para el juez, todo lo que no sea serle sumiso, resulta ser desobediencia, falta de respeto y acusación sobre su persona, investida de Autoridad". Que además se trata de un exceso que ataca su honorabilidad al tratarse de puras creencias del juez. En el último párrafo dice que "es totalmente repugnante e inadmisibile en un juez, solo entendible que no comprensible, desde el odio que me tiene y la persecución que me hace".

Los párrafos a los que se refiere el Graduado Social don [redacted] son los siguientes:

"Las actuaciones que efectúa este profesional que este juzgador considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; B) pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

Y todo ello, con la finalidad pretendida de dilatar el procedimiento y así poder acudir el mismo a reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional, así como obtener un mayor rédito con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propios de las ejecuciones de esta jurisdicción, ya que, al prolongarse en el tiempo pueden obtenerse mayores cantidades económicas, beneficiándose de la ley y con un claro fraude de ley y con total impunidad ya que todas estas actuaciones las realiza aprovechándose de la circunstancia de que en el orden social de la jurisdicción nos exige depósito para recurrir a los trabajadores y/o beneficiarios de la Seguridad Social. Por lo expuesto, puede concluirse que el Graduado Social don [redacted], se beneficia del desorden creado por el mismo, con actos manifiestamente fraudulentos que ocasionan perjuicios económicos a las partes contrarias y desgaste mental, moral y físico del Juzgado de lo Social.

Todas estas actuaciones dan lugar unas dilaciones indebidas y retraso enorme en el juzgado, efectuándose todas ellas con manifiesta mala fe, abuso de derecho y temeridad procesal, con faltas



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

de respeto manifiestas que en ocasiones rayan lo delictivo, lo que ha desembocado en: a) una serie de bajas médicas del personal de la Oficina Judicial por depresión, entre ellas, la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia; b) una excesiva carga de trabajo en el juzgado hasta el punto de que el juzgado ha sido objeto de diversas actuaciones por parte de la Inspección del CGPJ; y c) a que este juzgado sea considerado como un juzgado de "paso" en el que nadie quiere o puede estar más de un determinado tiempo por tener que estar soportando este tipo de actuaciones que ocasionan el trabajo correspondiente a dos órganos judiciales sin causa justificativa alguna como se va a poner a continuación."

De la lectura de los anteriores párrafos tenemos que señalar que no compartimos las valoraciones que realiza el hoy recurrente, ya que entendemos que no son gratuitos ni ejemplo de ninguna persecución por parte del Juez o de la mala fe de éste, ya que esos párrafos no son más que una introducción para exponer la forma de actuar del Graduado Social don

en los procesos judiciales; es más el recurrente reconoce que por parte de ése Juzgado se le han abierto ya múltiples expedientes disciplinarios. Luego, lo que hace el Magistrado Juez que instruye y resuelve el presente expediente no es nada más que traer a colación, a modo de introducción, la forma, que a su juicio, tiene de actuar el Graduado Social en los diferentes procesos, para después exponer cuáles son los hechos concretos que en este expediente integran la responsabilidad disciplinaria y la consiguiente imposición de la correspondiente multa.

No obstante lo anterior, si es cierto que se echa de menos en esos tres párrafos (que constan en los Autos de 17 de enero de 2023, de 23 de enero de 2023 y de 3 de febrero de 2023) una mayor concreción y referencia a expedientes concretos, que si se concretan en el informe suscrito por el Magistrado Juez, el día 16 de marzo de 2023, a los efectos del Art. 556 LOPJ. Aunque reiteramos que son tres párrafos que no dejan de ser una introducción y que sobre la base de ellos no se resuelve el expediente, sino que el expediente se resuelve sobre la base de los hechos acontecidos en la Ejecución de Títulos Judiciales (ETJ) número 72/21 y que a continuación analizaremos.

Luego, visto lo anterior, los hechos concretos que en este expediente pudieran integrar la responsabilidad disciplinaria y la imposición de la correspondiente multa son los siguientes:

Que el Graduado Social don en el proceso ETJ 72/21, que en el momento del dictado del Auto de 17 de enero de 2023 tenía ya 103 acontecimientos, según el Magistrado Juez, fue requerido de que cesara en su comportamiento irregular por Auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 20 de junio de 2022 que inadmitía la reposición interpuesta contra una diligencia de ordenación que únicamente informaba a la parte ejecutante que se tenían por efectuadas la manifestaciones de la parte ejecutante y se le remitía al contenido del Auto de 14 de julio de 2021, así como, acordaba la notificación por edictos de la parte ejecutada al haber resultado infructuosos los demás actos de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

comunicación ordinarios, y en el Decreto que se recurría en revisión, se manifestaba que se habían cumplido con los preceptos legales que determinan la necesidad de notificación por edictos y que se ha procedido al despacho ejecución al haber resultado firme la sentencia del declarativo con efectos desde el día 8 de marzo de 2022, resultando el trámite siguiente el de la celebración del incidente de no readmisión, que fue señalado para el día 7 de julio de 2022 y que no pudo ser celebrado porque el hoy recurrente, Graduado Social don _____ manifestó por vía telefónica que no era necesario y debía resolverse por escrito, de lo que queda constancia por los presentes que estuvieron en sala (Auxilio judicial, Letrados y el Magistrado Juez que suscribe el Auto), así como en la posterior Diligencia de Constancia del LAJ, cuando resulta que si era necesaria su celebración y resolución, ocasionando las dilaciones indebidas de las que el Graduado Social don _____ se queja.

Pues bien, aunque el recurrente niega la mala fe, temeridad, abuso de derecho o falta de respeto a las parte y autoridad judicial e imputa mala fe al Magistrado Juez, tenemos que decir que esos hechos concretos integran temeridad (entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso, sea de modo culposo, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón), mala fe procesal (entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria), abuso de derecho (entendido como cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad de la norma) y falta de respeto a las partes y a la autoridad judicial.

Y ello queda probado de la documental obrante en autos. Así, los hechos concretos que se imputan al hoy recurrente, en la pieza de imposición multas coercitivas número 16/2023, referidos al proceso ETJ 72/2021, son el número de acontecimientos que tiene la causa, y, el presente caso son 103 acontecimientos, debiéndose concluir que los mismos son debidos al actuar el recurrente con mala fe procesal, abuso de derecho y temeridad, ya que el mismo reconoce implícitamente la existencia de ese número de acontecimientos, a lo largo de todo el expediente, y no niega la interposición de recursos y presentación de escritos, siendo evidente que dicho número es excesivo y desmesurado en relación con un proceso de ejecución de título judicial, siendo potencialmente indicativo de las calificaciones efectuadas por el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número de _____.

Además de lo anterior, compartimos lo razonado por el Magistrado Juez, que impone la sanción, en lo que a la valoración de la conducta del Graduado Social recurrente se refiere (de actuar el recurrente con mala fe procesal, abuso de derecho y temeridad), ya que del contenido del expediente se infiere que el Graduado Social don _____ en el proceso ETJ 72/21, fue requerido de que cesara en su comportamiento irregular por auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 20 de junio de 2022 que inadmitía la reposición interpuesta contra una diligencia de ordenación que únicamente



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

informaba a la parte ejecutante que se tenían por efectuadas la manifestaciones de la parte ejecutante y se le remitía al contenido del auto de 14 de julio de 2021, así como, acordaba la notificación por edictos de la parte ejecutada al haber resultado infructuosos los demás actos de comunicación ordinarios, y en el Decreto que se recurría en revisión, se manifestaba que se habían cumplido con los preceptos legales que determinan la necesidad de notificación por edictos y que se ha procedido al despacho ejecución al haber resultado firme la sentencia del declarativo con efectos desde el día 8 de marzo de 2022, resultando el trámite siguiente el de la celebración del incidente de no readmisión, que fue señalado para el día 7 de julio de 2022 y que no pudo ser celebrado porque el hoy recurrente, Graduado Social don _____ manifestó por vía telefónica que no era necesario y debía resolverse por escrito, de lo que queda constancia por los presentes que estuvieron en sala (Auxilio judicial, Letrados y el Magistrado Juez que suscribe el auto), así como en la posterior diligencia de constancia del LAJ, cuando resulta que si era necesaria su celebración y resolución, ocasionando las dilaciones indebidas de las que el Graduado Social don _____ se queja.

Finalmente, tenemos que hacer referencia a lo manifestado por el Graduado Social don _____ sobre que el Magistrado Juez en ningún momento le dice donde le ha faltado el respeto o donde le ha acusado de algo de forma irrespetuosa.

Sobre ello, como ya se ha expuesto en el relato de hechos, el hoy recurrente decidió no acudir a la celebración del incidente de no readmisión, que fue señalado para el día 7 de julio de 2022, que no se pudo celebrar por su inasistencia, manifestando, por vía telefónica que no era necesario y que debía resolverse por escrito, cuando resulta que si era necesaria su asistencia, celebración y resolución, actuando con mala fe procesal, abuso de derecho, y temeridad, ocasionando dilaciones indebidas y faltando al respeto de todos los que habían asistido y que le estaban esperando para la celebración de dicho acto, entre ellos, los Letrados, Auxilio Judicial o el Magistrado.

Además, a mayor abundamiento, basta leer el expediente para darse cuenta de que el recurrente utiliza expresiones y palabras que faltan el respeto del Magistrado. Así, a título de ejemplo, en la tercera página, segundo, tercer y cuarto párrafos, del recurso de reposición interpuesto contra el auto de 17 de enero de 2023 que ordena la formación del expediente disciplinario se dice textualmente:

"[...] A cuáles son en los que he hecho abuso del derecho explicando en qué consistió y en donde le he faltado al respeto, según SSª. Nada de esto constan el auto, que divaga con absoluta mala intención, sin concretar absolutamente nada.

Y es que SSª, con mala fe, forma única en que se puede entender todos los auto emitido el mismo día 17 de enero, [...].



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

SSª se toma la libertad desde la impunidad en que cree estar envuelto, acusándome de forma muy grave y sobre las que sin duda acciona de legalmente donde proceda."

Igualmente, cuando el recurrente se queja de la inclusión, en los Autos del expediente, de los tres párrafos que antes hemos expuesto y que tienen carácter introductorio, como ya hemos dicho, relata, entre otras cosas lo siguiente: que esos párrafos son gratuitos y ejemplo de la persecución de la que está siendo objeto por parte del Juez y de la mala fe de éste, ya que éste en ningún momento le dice donde le ha faltado el respeto o donde le ha acusado de algo de forma irrespetuosa. "[...] para el juez, todo lo que no sea serle sumiso, resulta ser desobediencia, falta de respeto y acusación sobre su persona, investida de Autoridad". Que además se trata de un exceso que ataca su honorabilidad al tratarse de puras creencias del juez. [...] "es totalmente repugnante e inadmisibles en un juez, solo entendible que no comprensible, desde el odio que me tiene y la persecución que me hace".

Finalmente, y sobre la base de todo lo razonado, es por lo que el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número de resuelve imponer al Graduado Social don por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a la autoridad judicial, una multa de 400 € por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante ese Tribunal.

Por tanto, debe desestimarse el recurso de alzada en cuanto al fondo de la cuestión, debiendo considerarse que el auto que impone la sanción es ajustado a derecho, ya que ha resuelto el expediente disciplinario e impuesto la multa de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a los demás intervinientes.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en Pleno, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO por DON , confirmando los autos de 23 de enero de 2023 y de 6 de febrero de 2023, dictados en la pieza separada 16/2023, que dimana de la Ejecución de Títulos Judiciales 72/2021 del Juzgado de lo Social nº de .

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano de los Juzgados de , para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

1.4- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000020/2023 interpuesto por
por no estar de acuerdo con la resolución de fecha 23 de Enero de 2023 dictada en la
Pieza de Imp.Multa Coe.17/2023 dictada por el juzgado de lo Social nº de los de . Ponente:
Joaquín Yust Escobar y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En el seno de la Pieza de Imposición Multas Coercitivas 17/2023 derivada del
Procedimiento Despido/Ceses 139/2019 del Juzgado de lo Social nº de se dictó Auto, en
fecha 8 de febrero de 2023, donde se imponía al Graduado Social Sr. ,
una multa de 400 euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante
este Tribunal. En concreto, temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las
partes y a la autoridad judicial.

Por el Graduado reseñado en fecha 10 de febrero de 2023 se interpuso recurso en audiencia
contra la resolución reseñada en el párrafo anterior.

Por el Juzgado de lo Social nº de en fecha 14 de febrero de 2023 se dictó Auto por el
que se desestimaba el recurso en audiencia interpuesto por el Sr. .

Finalmente, en fecha 19 de febrero de 2023 se interpone recurso de alzada contra las
resoluciones sancionadoras del Graduado Social, Sr. .

En fecha 16 de marzo de 2023 por el Juez Titular del Juzgado de lo Social n ° de se
emite informe en el seno del recurso de alzada reseñado.

Por Acuerdo de la Comisión Permanente del Tribunal Superior de Justicia de fecha 23 de
mayo de 2023 se designa ponente para la resolución de la alzada formulada. Y por Oficio de la
misma fecha se remite el expediente para su resolución.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El objeto de la presente alzada se resume en los siguientes términos dialécticos.

Por el Juzgado de lo Social n ° de en fecha 7 de Febrero, en el seno de la Pieza de
Imposición de multas coercitivas, impone una multa de 400 euros al Graduado Social, Sr.

. La pieza es aperturada en el procedimiento seguido ante el mismo Juzgado
“Despido/Ceses en general 139/2019.

La resolución incorpora normativa aplicable, resumen jurisprudencial.

En el Fundamento Jurídico Segundo, tras incorporar la literalidad del artículo 75 de la LRJS



sobre deberes procesales de las partes, refiere el comportamiento irregular del profesional aludiendo en cinco apartados a los mismos, para en los dos siguientes párrafos concluir en la finalidad pretendida por el mismo y las consecuencias negativas que la misma está provocando.

En relación al procedimiento DSP 139/2019 especifica que el comportamiento ha consistido en generar 182 acontecimientos, y en concreto no atender al cese de su comportamiento irregular en las siguientes resoluciones;

- Providencia de 23 de diciembre de 2021 que deniega aclaración interesada por la parte contra providencia de 1 de septiembre de 2021 que no se pronuncia sobre retención de impuestos realizada por la LAJ sin venir ello contenido en la Sentencia que pone al fin proceso.
- Auto de 24 de enero de 2022 que deniega incidente de nulidad de actuaciones contra la providencia de 23 de diciembre de 2021.

Considera que la actuación del profesional es temeraria, mala fe, abuso del derecho y falta de respeto a las partes y autoridad judicial.

- El Recurso de Audiencia expone el número de expedientes disciplinarios abiertos por el Juzgado y el montante de las multas impuestas hasta el momento. Niega mala fe, temeridad o abuso del derecho y considera. Considera temerarias las finalidades que le atribuye la resolución judicial.

Reconoce el recurso los 182 acontecimientos pero indica que se encuentran repetidos, o resultan notificaciones.

Se queja igualmente la parte de lo genérico de los comportamientos que le atribuyen.

En la parte final del recurso refiere expresiones dirigidas al titular del Juzgado del siguientes tenor; “quiere mantenerse al margen de la legalidad a sabiendas”, “envilecimiento contra mí”, “quiere ocultar la inquina y persecución hacia mi persona”.

- El Auto de fecha 14 de febrero de 2023 que resuelve el recurso se limita a reproducir párrafos del Auto que impone la sanción.
- El recurso de alzada ofrece muestras del enfrentamiento del profesional sancionado con el órgano judicial. Se queja de la ejecutividad de las sanciones impuestas en otros procedimientos y de la ralentización de juras de cuentas formuladas por el mismo.

Reclama que se singularicen en el procedimiento 139/2019 las actuaciones que tendrían encajen en los cinco puntos definidos por el Juzgado para describir la irregular actuación del profesional.

En relación a esta causa en concreto niega temeridad pero sobre los 182 acontecimientos afirma que “se trata de acontecimientos y solo eso”. Algunos repetidos, otros son acuses o notificaciones de escritos o resoluciones.

- El informe emitido por el titular del órgano judicial no es más que una repetición de argumentos más arriba expuestos.

SEGUNDO.- Desde una perspectiva jurídica se encuadra la sanción en la mala fe procesal del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que;

“1.Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

la buena fe.

2.Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

3.Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Secretario judicial se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala.

4.Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

5.Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial."

Se entienden igualmente de aplicación a fin de justificar la mala fe procesal los siguientes preceptos;

Artículo 7 del C.civil; buena fe y el abuso del derecho

"1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso."

Artículo 11 de la LOPJ;

"1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.

2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes."

TERCERO.- Procede en este fundamento pronunciarse sobre el objeto del Recurso de Alzada interpuesto en la Pieza de Imposición de Multas 17/2023 del Juzgado de lo Social n ° de .

Esquemáticamente cabe afirmar que la sanción tiene una doble configuración, aunque en



realidad la primera es muestra del tipo de acontecimientos generados en el procedimiento por el profesional, y la segunda cuantifica los acontecimientos.

En primer lugar, no atender a los requerimientos realizados en dos resoluciones judiciales (providencia de 23 de diciembre de 2021 y Auto de 24 de Enero de 2022) en el sentido de no continuar con la interposición de pretensiones que considera el órgano judicial carecen de justificación. Como expresión del comportamiento irregular, temerario e integrante de la mala fe procesal se describe el siguiente;

- petición de aclaración de providencia de 1 de septiembre de 2021 que guarda silencio sobre retención de impuestos practicada por la LAJ, sin que la retención se contenga en la Sentencia que pone fin al procedimiento. La petición se deniega en la providencia de 23 de diciembre de 2021 al considerarla sin fundamento.

- Petición de nulidad frente a la providencia de 23 de diciembre de 2021. La petición se deniega en virtud de Auto de 24 de enero de 2023.

En segundo lugar, generar 182 acontecimientos en el procedimiento de Despido 139/2019. El órgano judicial considera como razonable la generación de 10 a 50 acontecimientos en un procedimiento. Los aquí reseñados multiplican por tres.

Pues bien, resulta desproporcionado y extraordinario que en un procedimiento de despido, siendo parte el profesional sancionado, se generen 182 acontecimientos. El procedimiento se caracteriza por una sencilla estructura procesal donde tras la presentación de demanda y contestación se finaliza en el acto del Juicio. Tras Sentencia y fase de recurso procede la ejecución. Como indica el órgano judicial 50 acontecimientos constituye una cifra máxima para este tipo de procedimientos. Sin embargo, 182 exige un comportamiento anormal que de modo singularizado se expresa en la petición de aclaración interesada que se despacha por providencia de 23 de diciembre de 2021 y en la petición de nulidad de esta que se despacha con el Auto de 24 de enero de 2022.

El recurrente reconoce y admite la existencia de 182 acontecimientos en el procedimiento pero atribuye tan elevado número a repeticiones, notificaciones.

Con independencia de ello, lo que resulta evidente es que el entorpecimiento procesal provocado por el recurrente es manifiesto, y se advierte en la petición de aclaración y de nulidad que propone, que no resultan más que pretensiones carentes de sentido, que provocan una actuación procesal destinada a ser nuevamente recurrida y con ello a entrar en una especie de bucle exigiendo una tramitación procesal por los profesionales manifiestamente apartada de la gestión normal de asuntos de similar complejidad.

Sin duda, el escenario general que describe el órgano judicial ofrece muestra de un comportamiento reiterado con graves consecuencias para el órgano judicial. Los requerimientos a fin de detener esta abusiva actuación resultan ignorados.

Cabe concluir, por tanto, que la sanción impuesta con fundamento en la mala fe procesal y el uso abusivo del derecho, resulta ajustada a derecho, debiendo desestimar el recurso de alzada contra el mismo interpuesto.

No se incorporan argumentos en torno a la cuantía de la sanción impuesta al no ser objeto del



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

recurso interpuesto por la parte.

La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en supuestos similares al aquí resuelto en Acuerdos de Sala de Gobierno de fecha 24 de abril de 2022 y 19 de diciembre de 2022.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO** por el graduado social

contra los Autos de fecha 7 y 14 de febrero de 2023 del Juzgado de lo Social nº de los cuales se mantienen en su integridad así como la sanción de 400 euros impuesta al Graduado Social reseñado.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano de los Juzgados de , para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.5- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000017/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con la resolución dictada en la Pieza de Impto.Multa Co. 19/2023 Auto de fecha 14 de febrero de 2023 por el Juzgado de lo Social nº de los de . Ponente: Miguel Francisco Sánchez Gasca y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 23 de enero de 2023 el Juzgado de lo Social nº de , acordó abrir pieza separada de responsabilidad disciplinaria por mala fe procesal nº 19/2023 derivada del Procedimiento de Despido 331/2019 seguido ante el Juzgado de lo Social nº de de , se dictó auto de 7 de febrero de 2023, dictado por el Juez D. , en pieza de responsabilidad disciplinaria, en el que se acordaba “imponer al Graduado Social, D.

, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

SEGUNDO.- En fecha de 10 de febrero de 2023 el Graduado Social D.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

interpuso recurso de audiencia frente al referido auto.

TERCERO.- Se dictó auto de 14 de febrero de 2023 en el que se acordaba desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el Graduado Social D. _____ contra el auto de 7 de febrero de 2023.

CUARTO.- En fecha de 19 de febrero de 2023 el Graduado Social D. _____ interpuso recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

QUINTO.- En fecha de 16 de marzo de 2023 el Juez D. _____ dictó informe ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

SEXTO.- Recibidas las actuaciones en la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia se incoó el presente expediente de recurso de alzada nº 17/2023 interpuesto por D. _____

por no estar de acuerdo con la resolución dictada en la Pieza de Imposición de Multa Co. 19/2023 Auto de fecha 14 de febrero de 2023 por el Juzgado de lo Social nº _____ de los de _____ y la Sala de Gobierno, acordando nombrar Ponente al Magistrado D. Miguel Francisco Sánchez Gasca, Titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Jaén

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, señalar que en la pieza de imposición de multa se han respetado los requisitos procesales previstos en la LOPJ, para la interposición de la multa:

- Artículo 554: En este caso se ha interpuesto multa, en cuantía prevista en el Código Penal para las faltas (actualmente delitos leves)
- Artículo 555. La corrección se ha impuesto por la autoridad ante la que se siguen las actuaciones, por el Juez D. _____, en pieza de responsabilidad disciplinaria
- Artículo 556. Se ha interpuesto recurso de audiencia, y posteriormente recurso de alzada ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia del TSJ Andalucía.

Manifiesta el recurrente que en lo que va de año, han sido “hasta el momento” 21 piezas de “PMU”, y que hay una “mala fe y abuso de la autoridad emprendidos contra mí” (contra el recurrente), que hay una “persecución”. Alega el recurrente que hay una grave indefensión al negarse el Juez a concretar los motivos de la multa.

SEGUNDO.- Entrando en el fondo de la cuestión, se recurre en alzada el auto de 7-febrero-2023 de imposición de multa, y el auto confirmatorio de 14-febrero-2023.

En el auto de imposición de multa se acordaba “imponer al Graduado Social, D. _____, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

En tal auto se hace un estudio de los deberes procesales de las partes, conforme la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y conforme el Art. 75 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se señala que los órganos judiciales rechazarán de oficio las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho, y que todos deberán ajustarse a las reglas de buena fe.

Tal auto dice que las actuaciones que efectúa el Sr. _____ en el proceso de que trae causa la pieza y que considera irregulares son:

- recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno.
- pedir aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses.
- recurrir resoluciones que simplemente son traslado para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escritos.
- faltar el respeto con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada Administración de Justicia y al Juzgador.
- utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

No niega que en el procedimiento a que trae causa la presente pieza de responsabilidad disciplinaria, haya enviado el Graduado Social recurrente 243 acontecimientos, lo que alega es que no es cierto que sus escritos tengan tal finalidad. Alega igualmente el recurrente que no es cierto que la finalidad de los acontecimientos que ha presentado en el proceso, sea la de dilatar el procedimiento, y poder pretender en un momento posterior reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional.

Valorando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, debe entenderse que existen datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de la excesiva acumulación de escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, de modo que, amparándose en el derecho a articular los recursos y peticiones que la Ley brinda, opta por una actitud de hostigamiento procesal que verdaderamente excede de ese derecho. Y ello porque que el uso de los recursos y peticiones frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe, como ya ha indicado la Sala de Gobierno en precedentes resoluciones, ya que, como se indica en el auto recurrido, cuenta con 243 acontecimientos el proceso de despido del que deriva la presente pieza.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: “A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la



interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional”.

Esta Sala, al igual que en casos anteriores, aprecia temeridad y ejercicio abusivo de las facultades del Graduado Social en este procedimiento, tal cúmulo de acontecimientos procesales, y entiende que es acorde a derecho la tipificación disciplinaria realizada por el Juez del Juzgado de lo Social nº de , en aplicación régimen jurídico sancionador, de modo que estimamos correcto el importe impuesto, debiendo mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

Por lo anterior, la resolución combatida a través del recurso de alzada debe confirmarse por cuanto no viene a infringir los preceptos aducidos en el escrito de recurso, ni conculca, en definitiva, derecho alguno, procediendo, en su consecuencia, la desestimación del recurso de alzada.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO por el graduado social

y confirmar el auto de 7 de febrero de 2023 de imposición de multa de 400 euros y auto de 14 de febrero de 2023 de resolución de recurso de audiencia confirmatorio del anterior, dictado por el Juez D. , Titular del Juzgado de lo Social nº de , en la Pieza Separada n.º 19/2023 del que dimana el presente procedimiento.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.6- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000018/2023 interpuesto por D.

por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en la Pieza de Imposición de Multas Coercitivas 14/23 dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiendose nombrado Ponente Alberto M. del Águila Alarcón y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 17 de enero de 2023 el Juzgado de lo Social nº de , acordó abrir pieza separada de responsabilidad disciplinaria por mala fe procesal nº 14/2023 derivada del Procedimiento de Ejecución de Título Judicial nº 61/21 seguido ante el Juzgado de lo Social nº de de , dictándose en fecha 23 de enero de 2023 auto en el que se acordaba “imponer al Graduado Social, D. , por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

SEGUNDO.- En fecha de 20 de enero de 2023 el Graduado Social D. interpuso recurso de reposición frente al referido auto, el cual fue desestimado por auto de fecha 6 de febrero de 2023

TERCERO.- En fecha de 15 de febrero de 2023 el Graduado Social D. Ibi interpuso recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

CUARTO.- En fecha de 16 de marzo de 2023 el Juez D. dictó informe ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia se incoó el presente expediente de recurso de alzada nº 18/2023 acordando nombrar Ponente al Magistrado D. Alberto del Aguila Alarcón.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 247.3 LEC que “3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mileuros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.



Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Secretario judicial se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala”, disponiendo el artículo 75.4 LRJS que “Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa.

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas”.

SEGUNDO.- *El auto ahora recurrido y en lo que se refiere al procedimiento de ejecución de título judicial nº 61/21 refiere que “Las actuaciones que efectúa este profesional que este Juzgador considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) Recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses. B) Pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses. C) Recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al Juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito. D) Faltar al respeto con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador. E) Utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad”*

El ahora recurrente recurre la resolución dictada al considerar que lo único que ha hecho ha sido hacer uso de los recursos legalmente previstos contra determinadas resoluciones judiciales.

TERCERO.- *Centrado así el objeto del debate en esta alzada y para su resolución, partiendo de la competencia no discutida de esta Sala para la resolución del recurso interpuesto a virtud de la remisión que el art. 247.5 LEC –introducido por la reforma de operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre-, hace al régimen de recursos establecido concretamente en el art. 556 LOPJ, acabando con no pocas discusiones sobre el carácter de actuación jurisdiccional y gubernativa de este tipo de sanciones intraprocesales, habremos de traer a colación la doctrina emanada de las distintas Salas*



del Tribunal supremo por las que se conceptúa y describe delimitándola en sus distintos supuestos la mala fe procesal.

Así, por citar alguna reciente, el ATS, Sala 3ª, Secc. 4ª de 9-7-19, viene a declarar que "Sobre la mala fe se pronunció el ATS de la Sala especial del art. 61 LOPJ de 18 de septiembre de 2013 (recurso 6/2013), con criterio luego reiterado en el ATS de 28 de junio de 2016 (recurso 3/2016) en el sentido de afirmar que "La mala fe se puede apreciar, precisamente, al ejercitar pretensiones carentes de todo fundamento, como oportunamente cita el Ministerio Fiscal en su informe, en armonía con la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de los conceptos de temeridad o mala fe, que ha seguido una línea continua a partir de multitud de sentencias de esta Sala. Así, lo expuesto en la STS 37/2006, con cita de numerosos precedentes, que nos dice que "aunque no hay un concepto o definición legal de temeridad o mala fe se suele entender por esta Sala, como pauta general, que tales circunstancias han concurrido cuando la pretensión ejercida carezca de toda consistencia y que la injusticia de su reclamación sea tan patente que deba ser conocida por quien la ejercitó"; añadiendo la STS 842/2009 que la temeridad o la mala fe pueden aparecer en cualquier momento de la causa."

En el mismo sentido se pronuncia el ATS, Sala 2ª de 14-2-18, recordando que la mala fe se puede apreciar al ejercitar pretensiones carentes de todo fundamento (ATS., Sala art. 61, de 18 de septiembre de 2013, rec. 6/2013).

Igualmente, la STS de 1-17-13, analiza un supuesto, en el que conforme a los arts. 11 LOPJ y 247 LEC, se califica de persistencia en la mala fe procesal de la parte recurrente y en un abuso del proceso y un fraude de ley procesal que tienen, como manifestación principal pero no única, la interposición de una demanda en Madrid el 31 de julio de 2008, conociendo la inhabilidad del mes de agosto, para entorpecer la demanda de extinción de los arrendamientos que la parte hoy recurrente sabía que necesariamente tendrían que interponer contra ella las hoy recurridas una vez transcurridos tres meses desde el requerimiento de 9 de mayo de 2008, plazo que vencía precisamente en dicho mes inhábil, y así poder alegar la hoy recurrente, en el presente litigio, la pendencia del litigio de Madrid en busca de un sobreseimiento (art. 421.1 LEC) o, al menos, de una suspensión (art. 43 LEC).

Y recuerda por lo que aquí ahora interesa, que como declara la sentencia de esta Sala de 22 de febrero de 2013 (rec. 1352/10), "aunque la astucia pueda ser una de las habilidades legítimamente desplegadas en el proceso, no es institucionalmente admisible reducir el proceso a un simple juego de astucia cuyo único objetivo sea perturbar a la parte contraria".

En la misma línea, contraria a la astucia procesal como un fin en sí misma, se pronuncian también las sentencias de 18 de marzo de 2010 (rec. 2621/05) y 20 de diciembre de 2002 (rec. 4231/99).

La STS de 25-2-92 (RJ 1992/1552) declara que "no responde a la buena fe procesal, el replanteamiento de un asunto que se sabía no había prosperado en primera instancia, y abuso manifiesto de la jurisdicción, en la petición reconvenicional que reproduce el litigio, e incluso fraude procesal al mantener vivos dos procesos sobre la misma cuestión"

Finalmente cabe decir que en general en relación con el concepto de buena fe, es doctrina



comúnmente admitida (STS de 1 de marzo de 2001) que la exigencia de ajustar el ejercicio de los derechos a las pautas de la buena fe según lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil constituye un principio informador de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al comportamiento considerado como honrado y justo, e igualmente, es doctrina constante y reiterada (STS de 12 de julio de 2002) que la buena fe es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo y leal, que supone una exigencia de actuación coherente y de protección de la confianza ajena, y en el ámbito del derecho laboral, interpretando el precepto citado más arriba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) en su Sentencia nº 5715/2020 de 17 diciembre, se señala que para la imposición de una sanción “Debe concurrir mala fe: entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria; y/o temeridad: entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso, sea de modo culposo, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón.

Pues bien, visto el contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, sin perjuicio de que el mismo tenga derecho a articular los recursos que la Ley brinda frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, sin embargo, estamos a juicio de esta Sala ante un uso de esa facultad que excede ese derecho.

No niega el recurrente que en el procedimiento a que trae causa la presente pieza de responsabilidad disciplinaria, consten 147 acontecimientos, lo que alega es que no es cierto que sus escritos tengan finalidad de dilatar el procedimiento, y poder pretender en un momento posterior reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional.

Valorando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, debe entenderse que existen datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de la excesiva acumulación de escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, de modo que, amparándose en el derecho a articular los recursos y peticiones que la Ley brinda, opta por una actitud de hostigamiento procesal que verdaderamente excede de ese derecho. Y ello porque que el uso de los recursos y peticiones frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe, como ya ha indicado la Sala de Gobierno en precedentes resoluciones.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: “A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional”.

Así, en la diligencia de ordenación de fecha 17 de marzo de 2022, la Letrada de la Administración de Justicia hace constar lo siguiente: “Por presentados los anteriores escritos de fecha 12-2-2022 por el Graduado Social D. , únanse a los autos

de su razón, visto su contenido se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en los mismos, haciéndole saber que por sobre carga de trabajo en la ejecución se ha tramitado en la fecha señalada.

Con respecto a la Agencia Tributaria son correctos los datos aportados.

Remítase la presente ejecución a la UPAD del Juzgado de Lo Social a fin de que por la Letrada de la Administración de Justicia de la UPAD se proceda a señalar el incidente de ejecución solicitado por la parte ejecutante”.

Dicha diligencia de ordenación es recurrida por el Graduado Social Sr. mediante un escrito en el que vuelve a redundar en el contenido de escritos anteriores presentados, haciendo alegaciones que exceden en mucho del contenido propio de un recurso de reposición tales como que “ La LAJ está a años luz de reconocer cuanto se viene denunciando en aquel servicio” o que “observese la incoherente e incongruente respuesta a su vez” o que “Pero y sobre el 1º punto, por qué no se nos ha informado. Acaso es que de contestarse resultaría escandaloso”.

En el Decreto de 16 de marzo de 2022, la LAJ resuelve un recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 10 de febrero de 2022 por entender que lo único acordado era trámite del procedimiento. Dicha DIOR señalaba que “En relación con el escrito de fecha 19-8-2021 visto su contenido se le hace saber que una vez anotado el embargo de los vehículos, y recibida la certificación de titularidad y cargas se practicarán la liquidación de los mismos, y para el caso de que carezcan de valor a efectos de subasta se procederán a tramitar la declaración de insolvencia provisional. En cuanto a la petición de liquidación intereses no ha lugar toda vez que constan liquidados por auto de fecha 03-06-2021 conforme a la sentencia nº 360/2019 conteniendo los intereses moratorios sustantivos.

Con respecto al escrito de fecha 12-1-2022 remítase la presente ejecución a la UPAD del Juzgado de Lo Social a fin de que por SSª se resuelva sobre la cuestión planteada”

Frente a dicho decreto se interpone recurso de revisión alegando el recurrente “provocan estos recursos de revisión como el que aquí nos ocupa y todo ello, sencillamente porque no solo le viene en gana a la LAJ” o que “Pero es que además sin reparo ni pudor, que la LAJ dispone en el Decreto, manifestaciones que como en el caso anterior, exceden del ejercicio del derecho de defensa”

En un escrito presentado el 30 de junio de 2022 el recurrente señala “No nos cabe la más mínima duda, a que todo esto que viene sucediendo, se debe a un interés mas que probado, en dilatar en lo posible la ejecución, como viene sucediendo en las otras cinco idénticas a esta”,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

imputaciones de hechos al Juzgador y a la Letrada de la Administración de Justicia, carentes de cualquier justificación.

Al igual ocurre con el escrito presentado el 11 de octubre de 2022 al señalar el recurrente “Que comunicado el Auto de 10 de octubre, que no voy a permitir a que por SSª me impute la falsedad a que con mis actuaciones ocasiono dilaciones indebidas. Y como prueba fehaciente a que no solo es incierto sino que es todo lo contrario, a que es el Juzgado y en concreto las actuaciones de la LAJ la que sí que ocasiona esas dilaciones indebidas de forma persistente, que mire por donde, hoy mismo se ha celebrado un incidente de la ETJ 2/20, y en donde SSª me ha trabado la palabra por hacer manifestaciones sobre los acontecimientos que allí constan, y en donde de forma meridianamente clara, sin hipótesis ni conjeturas que podrá ver y sobre lo que no me ha dejado decir en la vista, esto es, que las dilaciones que consta en la ETJ referida, no solo es que resulten indebidas, sino que evidencia un abandono, dejadez e indiferencia injustificada en las acciones del Juzgado. Y esas son las dilaciones que SSª se niega a observar y sobre las que no quiere saber nunca nada. Peor aún, las consiente y de ahí que insista en decir, que no permitiré más que a través de la mentira, se me impute dilaciones indebidas”.

O en el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 17 de enero de 2023 en el que el recurrente señala “En la PMU 5/22 dimanante de esta ETJ, y en donde SSª acumuló con mala fe...”

Esta Sala, al igual que en casos anteriores, aprecia temeridad y ejercicio abusivo de las facultades del Graduado Social en este procedimiento, tal cúmulo de acontecimientos procesales, y entiende que es acorde a derecho la tipificación disciplinaria realizada por el Juez del Juzgado de lo Social nº de , en aplicación régimen jurídico sancionador, de modo que estimamos correcto el importe impuesto, debiendo mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

Se desestima pues el motivo analizado, procediendo pues por todo lo expuesto y salvo mejor criterio de la Sala elevar la siguiente propuesta:

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Graduado Social D.

contra el auto del Juzgado de lo Social nº de de fecha 6 de febrero de 2023, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el auto de fecha 23 de enero de 2023 por el que se interponía al recurrente una multa de CUATROCIENTOS EUROS.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

1.7- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000022/2023 interpuesto por
por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en la Pieza Imposición Multa
Coercitiva 15/22 dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiéndose nombrado
Ponente Antonio Pastor Sánchez y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta
el siguiente

ACUERDO

En la Ciudad de Granada a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 23 de enero de 2023, en Pieza de Imposición de Multa Coercitiva 15/2023,
dimanante de ETJ 15/2022, D. , Juez titular del Juzgado de lo social nº

de , dictó auto cuya parte dispositiva acuerda: “Imponer al Graduado Social, D.

, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y
autoridad judicial: Una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad
disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de
satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la
vía de apremio.”

El citado auto efectuaba indicación expresa de que contra el mismo, cabía recurso de
audiencia en justicia ante ese juzgado o recurso directo de alzada ante la Sala de Gobierno de
Tribunal Superior de Justicia Andalucía.

SEGUNDO.- D. interpuso recurso de Audiencia, que fue resuelto por auto de 6 de
febrero de 2023, que acordaba desestimar íntegramente el recurso interpuesto.

Acto seguido, D. formuló nuevo recurso de alzada, contra ambas resoluciones, para
ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tras alegar lo que a su
derecho convino, termina solicitando el archivo de la PMU, y se acuerde respecto a lo denunciado
en el recurso.

TERCERO.- Consta unido informe del Magistrado-Juez a los efectos del artículo 556 LOPJ.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones, se formó el oportuno expediente (recurso de alzada
22/2023), y por acuerdo de Sala de Gobierno de 6 de junio de 2023, se acordó designar ponente al
Magistrado D. Antonio Pastor Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Granada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso que ahora se resuelve trae causa de la Pieza de Multa nº 15/2023,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

dimanante de Ejecución de Título Judicial 15/2022, en la que, por auto de 23 de enero de 2023, se acordó imponer al Graduado Social, D. , una multa de cuatrocientos euros (400 euros).

- La resolución recurrida se fundamenta en los artículos 247 de la LEC, sobre respeto a las reglas de la buena fe procesal y multas por su incumplimiento; así como artículo 75 LRJS, referente a deberes procesales de las partes.

Justifica el juez la sanción, en la existencia de temeridad, mala fe, abuso de derecho y falta de respeto a las partes y autoridad judicial por parte del sancionado. En concreto, en la existencia de 78 acontecimientos en la ETJ 15/2022; y en el requerimiento hecho al recurrente por SS^a, en auto de 14 de septiembre de 2022, para que cesara en su comportamiento irregular. Resolución ésta en la que, además de inadmitir un recurso de reposición interpuesto contra una providencia de 6 de julio de 2022, también desestimaba recurso de reposición interpuesto contra el auto de 2 de marzo de 2022, por dos razones: en primer lugar, por recurrir una providencia que daba traslado a las partes para alegaciones sobre posible causa de nulidad de actuaciones; en segundo, porque en el P.O. 456/2021, del que dimana la ETJ 15/2022, se satisfizo la condena solidaria impuesta en sentencia (acontecimiento 227), habiéndose recibido el pago por el Graduado Social recurrente, el día 10 de marzo de 2022 (acontecimiento 250), lo que revela, según se indica, un grave intento de fraude por parte de este profesional.

- En el recurso de alzada, con carácter previo, expone el recurrente que se han abierto contra él, 21 piezas de multa coercitiva, por un montante de 8.400 euros; que es objeto de persecución por el Juez y el LAJ, por lo que ha formulado 44 denuncias ante la Sala de Gobierno. Como muestra de ello, indica que son 5 las juras de cuentas solicitadas y no resueltas con la finalidad de retrasar el cobro de sus minutas; por último, indica que el juez dictó auto de apertura de pieza separada en ETJ 15/22, estando prohibido revelar en el procedimiento principal lo expuesto en el auto. Interpuso recurso de reposición contra ese auto, que inadmitió por providencia, por lo que concluye que la pieza de multa coercitiva no se encuentra reglada conforme al artículo 75 LRJS.

A continuación, entrando ya en los “motivos del recurso”, alega, en primer lugar, su reiteración en un recurso presentado en ETJ 15/2022, que fue resuelto por una providencia ilegal que inadmitió el recurso, con la consiguiente indefensión. En segundo, niega la existencia de falta de respeto y acusaciones que recoge el Juez en su resolución. En tercero, niega la existencia de mala fe, pues discrepa de las causas expuestas por el juez para concluir en ello, esto es, temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial. En cuarto, más que un motivo de recurso, expone lo que considera un exceso hacia su persona, recogido en la resolución recurrida, calificándolo de repugnante e inadmisibile, en un Juez. En quinto y último lugar, por lo que se refiere a la ETJ 15/2022, niega la existencia de mala fe o abuso de derecho por la existencia de 79 acontecimientos, que no son identificados por el Juez, que fuera advertido por el juez en auto de 14 de septiembre de 2022, que por su parte haya existido un grave intento de fraude en el PO 456/2020.

SEGUNDO.- Expuesto lo anterior, con referencia a las alegaciones previas sobre el número de



piezas de multas coercitivas abiertas contra el recurrente o las denuncias formuladas por el mismo ante la Sala de Gobierno, ninguna mención cabe realizar, no sólo por no constituir motivación del recurso que ahora se resuelve, sino también por tratarse de meras afirmaciones sin soporte documental alguno que las justifique. Además, no es la vía del recurso de alzada contra una sanción, el iter procesal adecuado para formular una denuncia contra el juez, tal y como ahora se pretende.

- Afirma, además, que el juez dictó auto de apertura de pieza separada de multa coercitiva en ETJ 15/22, estando prohibido revelar en el procedimiento principal lo expuesto en el auto, por lo que formuló recurso de reposición contra ese auto que fue inadmitido por providencia, proceder éste que, según afirma, da lugar a que la pieza de multa coercitiva no se encuentra reglada conforme al artículo 75 LRJS.

Establece el párrafo 4º del artículo 75 LRJS que: “4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.”

Conforme a este precepto actuó el Juez. Por entender el Sr. no actuaba con buena fe, mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, acordó imponer la sanción que ahora se recurre. Así, por auto dictado el 14 de septiembre de 2022 en ETJ 15/2022, además de inadmitir recurso de reposición contra providencia y desestimar otro recurso, apercibió, en su fundamentación jurídica, al Sr. , de la posibilidad de apertura de expediente disciplinario, pues como ocurrió en sanciones anteriores, eran múltiples los escritos presentados que además de ser abusivos y temerarios, evidenciaban mala fe procesal ya que sólo dilatan el procedimiento de manera injustificada, con manifiestas faltas de respeto, resolución ésta en la que se hacía indicación expresa de ser firme y no caber recurso contra la misma.

Pese a tal apercibimiento, el 21 de septiembre de 2022, presentó nuevo escrito anunciando recurso de suplicación contra el auto.

Fue por ello que, finalmente y tras el acuerdo de pleno de Sala de Gobierno de 19 de diciembre de 2022, por auto de 17 de enero de 2023, acordó SSª abrir expediente disciplinario por



temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial, dictándose auto de 23 de enero de 2023, aquí recurrido, que acordaba imponer una multa de 400 euros.

TERCERO.- Entrando ya en la motivación del recurso, entiende esta Sala que existen datos suficientes para imputar al recurrente la infracción de la buena fe procesal y abuso de derecho, así como la existencia de falta de respeto a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgado, derivados del contenido de las resoluciones recurridas y de los distintos escritos y recursos presentados.

Como hemos indicado en otros recursos interpuestos por el recurrente -en los que ha sido sancionado por conductas parecidas en otros procesos- el derecho a articular los recursos que la ley brinda frente a resoluciones judiciales, no puede subvertir el principio de buena fe procesal. En concreto, en acuerdo de Pleno de esta Sala de Gobierno, de 19 de diciembre de 2022, fundamento tercero, se indicaba “Finalmente cabe decir que en general en relación con el concepto de buena fe, es doctrina comúnmente admitida (STS de 1 de marzo de 2001) que la exigencia de ajustar el ejercicio de los derechos a las pautas de la buena fe según lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil constituye un principio informador de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al comportamiento considerado como honrado y justo, e igualmente, es doctrina constante y reiterada (STS de 12 de julio de 2002) que la buena fe es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo y leal, que supone una exigencia de actuación coherente y de protección de la confianza ajena, y en el ámbito del derecho laboral, interpretando el precepto citado más arriba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) en su Sentencia nº 5715/2020 de 17 diciembre, se señala que para la imposición de una sanción “Debe concurrir mala fe: entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria; y/o temeridad: entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso, sea de modo culposo, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón.”

- Ha sido remitido a este ponente testimonio del expediente completo de la ETJ 15/2022, así como de la pieza de imposición de multa coercitiva 15/2023.

En la ETJ 15/2022 -de la que dimana la pieza de multa coercitiva- que fue incoada por auto de 2 de marzo de 2022, consta que desde entonces y hasta el dictado del auto de 17 de enero de 2023 -que acuerda abrir expediente disciplinario-, ya se habían producido 123 acontecimientos.

Tras solicitar la ejecución de sentencia que condenaba al pago de cantidad, y en la que indicaba que la misma era firme -lo que al parecer no era correcto, pues en su posterior escrito de 5 de marzo de 2022, reconoce haber formulado recurso de suplicación contra la misma- se dictó auto despachando ejecución el día 2 de marzo de 2022. Desde entonces, han sido 12 los escritos presentados por el Sr. . En concreto:

- En escrito de 5 de marzo de 2022 (acontecimiento 26), formula recurso de reposición contra el auto despachando ejecución. En el mismo se utilizan expresiones como “...Y podríamos hablar de un error que podría ser admisible, siempre y cuando la LAJ le hubiese reconocido, cosa que en



absoluto está dispuesta en hacer y de ahí que nos veamos obligados a decir, a que se trata de omisión de actos judiciales a sabiendas...”.

- En escrito de 7 de marzo de 2022 (acontecimiento 24), solicita embargo de establecimiento y sus bienes frente a uno de los ejecutados. Indicando que “...todo dependerá de a como se tramite por el Juzgado”.

- En escrito de 15 de abril de 2022 (acontecimiento 30), tras indicar que “Hoy, casi mes y medio después, no se se ha dispuesto nada”, solicita “... lo propio...”.

- En escrito de 29 de junio de 2022 (acontecimiento 65), tras dictarse Diligencia de Ordenación el día 23 de junio, interesa aclaración de lo acordado en la misma. En el mismo expone: “... Imagino que se trata de un nuevo “error”, aunque esto produzca mayor dilación”.

- En escrito de 6 de julio de 2022 (acontecimiento 68), formula recurso de reposición contra providencia de 6 de julio de 2022, que se limitaba a dar traslado a las partes a efectos de una posible nulidad de actuaciones, por si procedía declarar nula la ejecución y acordar su archivo.

- En escrito de 19 de julio de 2022 (acontecimiento 75), solicita impulso procesal.

- En escrito de 21 de septiembre de 2022 (acontecimiento 81), anuncia recurso de suplicación contra el auto de 14 de septiembre de 2022, por el que el Juez inadmitía a trámite el recurso de reposición de 6 de julio de 2022, contra providencia de 6 de julio de 2022; y desestimaba el recurso de reposición contra el auto despachando ejecución de 2 de marzo de 2022. Igualmente, le apercibía de la posibilidad de expediente disciplinario.

- En escrito de 21 de septiembre de 2022 (acontecimiento 91), solicita suspensión del plazo para recurrir, al no habérsele entregado todos los acontecimientos.

- En escrito del que no consta fecha de presentación (acontecimiento 99), solicita aclaración e información y que se abra un incidente con el ejecutado y su hermana.

- En escrito de 10 de noviembre de 2022 (acontecimiento 105), formula recurso de suplicación contra el auto de 14 de septiembre de 2022.

- En escrito de 17 de noviembre de 2022 (acontecimiento 108), solicita acceso a la cuenta de la ejecución, lo que ya había solicitado 7 días antes.

- En escrito de 2 de diciembre de 2022 (acontecimiento 117), formula recurso de reposición contra diligencia de ordenación de 30 de noviembre de 2022, que se limitaba a tener por formalizado recurso de suplicación y dar traslado a las partes por 5 días.

Este proceder, continua presentación de escritos que han dado lugar a 123 acontecimientos hasta que se dictó auto acordando incoar expediente disciplinario en la ETJ 15/2022; recurrir en reposición una providencia que se limita a dar traslado a las partes para alegaciones por una posible causa de nulidad de actuaciones; o recurrir en reposición una diligencia de ordenación que se limita a admitir a trámite y dar traslado de un recurso presentado por el mismo; lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido suponiendo un entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional. Conducta esta reiterada a la vista del alto número de piezas de multa coercitivas incoadas contra el recurrente, algunas de ellas ya con sanción y otras en tramitación.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

- En cuanto a la falta de respecto a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgado, basta con remitirse al contenido de los escritos ya expuestos y a la lectura del recurso de Audiencia y de Alzada, para convenir en su existencia y realidad. Así, en el de Audiencia, se utilizan expresiones como “falaces acusaciones”, “indefensión, indefensión y más indefensión y lo peor, causadas todas ellas a sabiendas” o “envilecimiento contra mí”; mientras que en el segundo, en el motivo quinto, se indica: “... esto es totalmente repugnante e inadmisibile en un juez, solo entendible que no comprensible, desde el odio que me tiene y la persecución que me hace”; o en el motivo sexto, cuando afirma: “...sin perjuicio de lo dicho decir, a que le juez, envuelto en esa mala fe que le caracteriza para conmigo, sin pudor y con alevosía, que dice a que la ejecución, al tener “solo” 79 acontecimientos, que por ello que, aparentemente, es “normal. Y digo lo de alevoso en el comentario, porque no tiene el atrevimiento y además no existe, ni norma ni recomendación alguna, que indique a que 79 acontecimientos son normales, pero que ya más no lo son. Curioso. Pero lo que no lo es, es la maldad con la que en toda regla se expresa ...”;

Es por ello que, entendiendo acorde a derecho la tipificación disciplinaria que ahora nos ocupa, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción que debe regir en cualquier régimen jurídico sancionador, y vista la reincidencia en el proceder del sancionado, estimamos correcto el importe impuesto y se propone al pleno de esta Sala de Gobierno del TSJA, mantener la sanción impuesta, en cuantía de 400 euros.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en Pleno, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por D.

, contra la resolución del Juzgado de lo Social nº de , de fecha 23 de enero de 2023, por la que se le impone la sanción de 400 euros, en Pieza de Imposición de Multa Coercitiva 15/2023, a salvo mejor criterio y parecer de esa Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.8- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000015/2023, interpuesto por D.

por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en la Pieza Imposición Multa Coercitiva 11/2023 dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiéndose nombrado Ponente Francisca Martínez Molina y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En la Ciudad de Granada, a 18 de Julio de 2.023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - En fecha 17/01/23 se dictó por el Juzgado de lo Social Auto de Apertura de pieza separada por temeridad, mala fe procesal y abuso de derecho frente a el Graduado Social D.

Del referido auto se dio traslado al Graduado Social para alegaciones concediendo un plazo de tres días indicando que contra dicho auto no cabe recurso alguno. En fecha 19/01/23 el Sr. presentó recurso de reposición contra el referido auto por considerar que frente al mismo cabe recurso de reposición y efectúa alegaciones sobre el fondo.

Por providencia de 23/01/23 se inadmite a tramite el recurso de reposición, no obstante resuelve sobre el mismo y teniendo por efectuadas las alegaciones en el recurso, se tiene por evacuado el tramite específico de alegaciones en pieza separada.

SEGUNDO.- En fecha 23/01/23 se dicta auto en pieza multa coercitivas num 11/23 , por el que se resuelve imponer al Graduado Social D. por temeridad, abuso de derecho , mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial, una multa de 400 euros.

TERCERO.- Contra dicho Auto el Sr. formuló recurso de audiencia en justicia ante el Juzgado de lo Social el 4/02/23. Por auto de 6/02/23 el Magistrado del Juzgado de lo Social de resuelve por auto desestimar íntegramente el recurso interpuesto.

Contra dicho auto el Sr. de conformidad con lo dispuesto en el art. 556 LOPJ, interpuso en tiempo y forma recurso de alzada ante la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia al que fue remitido preceptivo informe del Juez emitido con fecha 16 de marzo de 2023.

CUARTO.- La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia adoptó acuerdo de designar ponente a Doña Francisca Martínez Molina y llevar el mismo al conocimiento del Pleno de 18 de julio de 2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sanción impuesta por el Ilmo. Juez D. se basa en el ar. 247 de la LEC que establece las reglas de la buena fe procesal, y artículo 75 LRJS que establece: "1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado



contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones. (...) 4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto.

La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. 5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior”.

SEGUNDO.- Los hechos objeto de sanción indicados en el auto que se impugna y se indican por el Magistrado son : “En esta ejecución, (122/20) que tiene nada menos que 208 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en diversas ocasiones, como con --el auto de 1 de septiembre de 2022 que deniega la aclaración de la providencia de 16 de marzo de 2022 que a su vez denegaba la aclaración de la providencia de 4 de marzo de 2022 al resultar clara en todos sus términos, y con --la ‘providencia de 19 de septiembre de 2022 que inadmite el recurso de revisión interpuesto contra el decreto de 29 de julio de 2022 que declaraba la insolvencia de la ejecutada y el archivo provisional por inexistencia de bienes a embargar, con faltas de respeto a la actuación de la LAJ y con quejas otra vez sobre dilaciones indebidas, cuando cómo se puede comprobar, es este profesional el que ocasiona una carga de trabajo y un retraso en el Juzgado, por lo que se debe poner fin a sus actuaciones abusivas”.

Por su parte el recurrente en primer lugar expone dos cuestiones que no afectan a la resolución del presente recurso, sobre PMU 5/22 y respecto de cinco juras de cuentas y mantiene que está siendo objeto de una persecución por parte del Juez con la colaboración de la LAJ al haber sido abiertas 21 piezas de PMU con un montante total de 8400 € en multas; en cuanto a la presente pieza de multa coercitiva alega que no se encuentra reglada conforme lo dispone el artículo 75 de la LRJS . Y entrando al fondo el recurrente entra a valorar la ilegalidad de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

la providencia al inadmitir recurso de reposición frente al auto de apertura del expediente disciplinario y cuestiona la legalidad de los autos de 23/01/23 y de 7/02/23, insistiendo que esta siendo objeto de persecución por el Juzgador con la ayuda de la LAJ, que se ocultan deliberadamente resoluciones inadecuadas dictándose resoluciones ilegales que revelan faltas de respeto y acusaciones infundadas hacia su persona, con tremenda mala fe y temeridad por el Juzgador.

Pues bien, en primer lugar respecto a los defectos de forma alegados en relación al auto que acuerda la apertura de la pieza y el que impone la sanción, y el que resuelve el recurso de audiencia al interesado se encuentran debidamente fundamentados exponiendo los motivos por los que el Magistrado entiende conculcada la buena fe procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LRJS transcrito.

TERCERO.- En cuanto a la cuestión de fondo existen datos suficientes para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos presentados por el Sr. [redacted], incluidos alegaciones en audiencia y escrito de recurso de alzada.

Analizando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, ejecución 122/20, el profesional ha sido requerido en varias ocasiones por el Juzgador para que cesara en su comportamiento irregular en diversas ocasiones, concretando el Juez que en la ejecución 122/20 que han sido 208 acontecimientos impulsados por el recurrente; y concretamente cuando por el auto de 1/09/2022 se deniega la aclaración de la providencia de 16 de marzo de 2022 que a su vez denegaba la aclaración de la providencia de 4 de marzo de 2022 al resultar clara en todos sus términos, así mismo frente al decreto de 29/07/2022 que declaraba la insolvencia de la ejecutada y acordaba el archivo provisional por inexistencia de bienes a embargar intenta el recurrente recurso de revisión que se inadmite por providencia de 19/09/22.

En el caso de la presente pieza es el propio recurrente no desmiente que se hayan generado 208 acontecimiento y en concreto en relación a las actuaciones identificadas reconoce en escrito de recurso de alzada no solo los recursos de aclaración a los que alude el Juez sino alguno más y frente a una única actuación judicial, e indica que la providencia de 4 de marzo de 2022 inadmite el recurso de revisión frente a un decreto del LAJ de 12/12/2021; que el recurrente pide aclaración de dicha providencia y se origina nueva actuación, providencia de 16/03/2022 por la que se indamite la aclaración y el recurrente vuelve a solicitar aclaración esta vez de la providencia de 16/03/2022 y dice el recurrente en escrito de alzada que también recurrió en reposición aquella providencia que reiteraba la resolución anterior al resultar (la resolución cuya aclaración se solicitaba) clara en todos sus términos, originando finalmente el auto de 1/09/2022 por el que se vuelve a denegar la aclaración y se requiere al recurrente para que cese en su comportamiento, todas estas actuaciones han sido reconocidas expresamente por el Sr. [redacted] y evidencian actuaciones irregulares e improcedentes, siendo el mismo *modus operandi* que hemos podido analizar en diversos recursos de alzada resueltos por esta Sala: pedir aclaraciones de las aclaraciones para conseguir una resolución ajustada a sus intereses, recursos innecesarios,



escritos con faltas de respeto a la LAJ y al Juzgador, etc. Y tal actuación provoca dilaciones en claro fraude de ley, lo que denota evidente mala fe procesal, abuso del derecho y temeridad procesal, y como hemos indicado en otros recursos interpuestos por el mismo recurrente al haber sido sancionado por conductas parecidas en otros procesos, aunque el recurrente tenga derecho a articular los recursos que la Ley establece frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, en este caso estamos ante un uso de esa facultad que excede a ese derecho. Así mismo debe indicarse que el hecho de haber generado 208 actuaciones, (escritos, resoluciones, notificaciones...) genera en sí una dilación y perjuicio para el Juzgado y resto de profesionales y ciudadanos implicados en el procedimiento.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: “A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional”.

Y aunque no hayan sido descritas una por una las 208 actuaciones, las descritas reconocidas por el propio recurrente, el hecho de quedar acreditada la actuación del profesional de forma repetida en diferentes expedientes seguidos en el mismo juzgado que han dado origen a diferentes sanciones y escritos presentados por el mismo, acreditan tal comportamiento repetido e insistente que obstaculiza el normal funcionamiento del Juzgado y de esta forma queda plasmado en resolución de recurso de alzada de esta sala num 11/23 (Pleno 25 de abril de 2023) haciéndose referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2017 respecto de la prueba indiciaria que destruye la presunción de inocencia al afirmar “...La aptitud de la prueba de indicios para contrarrestar la mencionada presunción, a la vista de la necesidad de evitar la impunidad de múltiples delitos, particularmente los cometidos con especial astucia, y la advertencia de que habría de observarse singular cuidado a fin de evitar que cualquier simple sospecha pudiera ser considerada como verdadera prueba de cargo.

A partir de tal fecha con frecuencia se ha venido aplicando y estudiando por los Tribunales de Justicia esta clase de prueba que ha adquirido singular importancia en nuestro Derecho Procesal, porque, como es obvio, son muchos los casos en que no hay prueba directa sobre un determinado hecho, y ello obliga a acudir a la indirecta, circunstancial, o de inferencias, para a través de los hechos plenamente acreditados (indicios), llegar al conocimiento de la realidad de aquel necesitado de justificación, por medio de un juicio de inducción lógica conforme a las reglas que ofrece la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

experiencia sobre la base de la forma en que ordinariamente se desarrollan los acontecimientos (SSTC. 229/88, 107/89, 384/93, 206/94, 45/97 y 13.7.98).

Del mismo modo esta Sala de casación del Tribunal Supremo ha generado una amplia jurisprudencia al respecto, según la cual la realidad del hecho y la participación en el mismo del acusado puede ser establecida por la fórmula de indicios (SSTS. 17.11 y 11.12.2000 , 21.1 y 29.10.2001 , 29.1.2003 , 16.3.2004) siempre que concurren una serie de requisitos: a) Pluralidad de los hechos-base o indicios...b) Precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo y ello para evitar los riesgos inherentes que resultarían de admitirse una concatenación de indicios, con la suma de deducciones resultantes que aumentaría los riesgos en la valoración. c) Necesidad de que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar. d) Interrelación.

Derivadamente, esta misma naturaleza periférica exige que los datos estén no solo relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados; es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas represente sobre las restantes en tanto en cuanto formen parte de él. La fuerza de convicción de esta prueba dimana no sólo de la adición o suma, sino también de esta imbricación. e) Racionalidad de la inferencia. Esta mal llamada prueba de presunciones no es un medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente acreditados. Por ello, entre éstos y el dato precisado de acreditar ha de existir, conforme a lo requerido por el art. 1253 Cc. "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano", enlace que consiste en que los hechos-base o indicios no permitan otras inferencias contrarias igualmente válidas epistemológicamente. f) Expresión en la motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia. Pues solo cuando se contienen en la motivación de la sentencia exigida por el art. 120.3 CE. ... (SSTS. 24.5 y 23.9.96 y 16.2.99)".

CUARTO.- Por lo expuesto, entendiendo acorde a derecho la tipificación disciplinaria que ahora nos ocupa, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción que debe de regir en cualquier régimen jurídico sancionador, y que en reiterados recursos de alzada hemos mantenido, se acuerda correcto el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, **ACUERDA DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA** interpuesto por el Graduado Social Don , confirmando íntegramente la sanción impuesta de **MULTA** de 400 euros en PMU 11/23 del Juzgado de lo Social nº de , en Procedimiento Ejecución num 122/20.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.9- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000016/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en la Pieza de Imposición de Multas coercitivas 6/23 dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiéndose nombrado Ponente Álvaro M. Martín Gómez y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

HECHOS

PRIMERO.- Por don , Graduado Social, se interpuso recurso de alzada contra el Auto de 6 de febrero de 2023, ratificando la sanción impuesta por Auto de 23 de enero de 2023, dictados por el Magistrado Ilmo. Sr. D. , titular del Juzgado de lo Social nº de , en los Autos Pieza Imposición Multas Coercitivas (PMU) 6/23, dimanante del Procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales nº 3/20, por el que se acordaba la imposición de una multa de 400 euros al mismo, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a las partes y Autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC, en adelante), y con el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS, en adelante).

En fecha 16 de marzo de 2023, por el citado Magistrado, se emitió preceptivo Informe a los efectos del Art. 556 LOPJ.

SEGUNDO.- Con carácter previo a la resolución del presente recurso de alzada deben destacarse los siguientes hechos que constan en lo actuado:

1) En el Procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 3/20, que según las resoluciones recurridas tiene 215 acontecimientos, el Graduado Social don ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el Auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 27 de mayo de 2022 que inadmitía recurso de reposición contra Diligencia de Ordenación que daba traslado al juzgador para resolver sobre la admisión a trámite de un recurso presentado por la parte.

Sobre la base de lo anterior, el referido Magistrado Juez dictó Auto de fecha 17 de enero de 2023 que acuerda proceder, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la LRJS y 247



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

de la LEC, a la apertura de la correspondiente pieza de sanción pecuniaria al Graduado Social don _____, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la Autoridad judicial, con traslado para alegaciones por plazo de tres días siguientes a la notificación de esta resolución.

2) Con fecha 20 de enero de 2023 el Graduado Social don _____ en vez de presentar alegaciones lo que presenta es un recurso de reposición solicitando la anulación del Auto de 17 de enero de 2023, dictándose por el Juzgado de lo Social número _____ de Providencia de 23 de enero de 2023 en la que se acordó la inadmisibilidad de dicho recurso, sobre la base del artículo 75 de la LRJS que establece que el presunto infractor debe de efectuar alegaciones previas a la imposición de sanción disciplinaria, no siendo objeto de recurso de reposición al tratarse de un trámite procesal gubernativo-administrativo que no se rige por las reglas ordinarias de los recursos del orden social, sino que tiene sus propias normas tal y como sucede con los posteriores recursos de audiencia y de alzada.

No obstante lo anterior, en aras de no ocasionar una posible indefensión, el Magistrado Juez, en la citada Providencia de 23 de enero de 2023, pasa a resolver lo expuesto por el Graduado Social don _____, y así éste pone de manifiesto que lejos de cumplir el mandato de que la sanción que se decida imponer sea reservada para una resolución autónoma independiente se ha incumplido, ya que en vez de la apertura de una pieza separada lo que se hace es dictar el Auto de 17 de enero de 2023 en el procedimiento ejecución que acuerda la apertura de expediente disciplinario, dándole publicidad, pese a su prohibición.

El Magistrado Juez argumenta que el motivo de la publicidad es claro, pues el artículo 75 de la LRJS en su apartado 2º otorga la posibilidad a los perjudicados de reclamar los daños y perjuicios que las actuaciones del presunto infractor por mala fe procesal y abuso de derecho les hubiese ocasionado, y en consecuencia, deben tener conocimiento de las actuaciones por las que se abre la pieza, a los efectos de que, en su caso, puedan ejercitar sus derechos una vez devenga firme la posible sanción pecuniaria en vía gubernativa-administrativa.

A ello se añade que la resolución que se recurre (Auto de 17 de enero de 2023 por el que se acuerda la apertura de expediente disciplinario) más que un Auto jurisdiccional es un acuerdo gubernativo-administrativo, un simple trámite informativo, puesto que en este estado procesal administrativo aún no se ha impuesto multa y precisamente la misma se deberá imponer si procede en la pieza separada apertura, resultando imposible abrir pieza separada sin Auto en el procedimiento principal que así lo acuerde.

Asimismo respecto de lo que en manifiesta el Graduado Social don _____ sobre que en dicho Auto (Auto de 17 de enero de 2023) no se concretan que actos son los que se entienden como temerarios y en los que ha actuado con mala fe procesal, en los que ha



hecho abuso de derecho, explicando en qué consistió y en donde les ha faltado el respeto. Que nada de esto constan el Auto, que el Magistrado Juez divaga con absoluta mala intención, sin concretar absolutamente nada.

Que SS con mala fe, forma única en la que se puede entender el Auto de 17 de enero realiza acusaciones ambiguas, inconcretas, infundadas, como si se tratase de una crítica, sin ser capaz de concretar, sobre el procedimiento que nos ocupa y sobre la que debió exponer.

Que SSª se toma la libertad desde la impunidad en que cree estar envuelto, acusándole de forma muy grave y sobre las que sin duda accionará legalmente donde proceda.

Frente a lo expuesto el Magistrado Juez pone de manifiesto que en cuanto al fondo del asunto, esto es, la apreciación por parte del juzgador de la mala fe procesal, abuso de derecho, temeridad y falta de respeto, además de que la resolución impugnada resuelve motivadamente la concreta infracción en el párrafo del procedimiento y número del mismo con los antecedentes que justificarían en su momento la apreciación de reincidencia, será dilucidado en la correspondiente pieza disciplinaria.

Asimismo y dado que el profesional no efectuó un trámite específico de alegaciones, el Magistrado Juez lo tuvo por cumplido con el recurso de reposición inadmitido mediante la Providencia de 23 de enero de 2023.

3) Ante estos hechos por Auto 23 de enero de 2023 se impone al Graduado Social don sanción de 400 euros por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial, con base a los siguientes argumentos:

- Que las actuaciones que efectúa este profesional y que el Magistrado Juez considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; B) pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

- Y todo ello, con la finalidad pretendida de dilatar el procedimiento y así poder acudir el mismo a reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional, así como obtener un mayor rédito con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propios de las ejecuciones de esta jurisdicción,



ya que, al prolongarse en el tiempo pueden obtenerse mayores cantidades económicas, beneficiándose de la ley y con un claro fraude de ley y con total impunidad ya que todas estas actuaciones las realiza aprovechándose de la circunstancia de que en el orden social de la jurisdicción nos exige depósito para recurrir a los trabajadores y/o beneficiarios de la Seguridad Social. Por lo expuesto, puede concluirse que el Graduado Social don , se beneficia del desorden creado por el mismo, con actos manifiestamente fraudulentos que ocasionan perjuicios económicos a las partes contrarias y desgaste mental, moral y físico del Juzgado de lo Social.

- Todas estas actuaciones dan lugar unas dilaciones indebidas y retraso enorme en el juzgado, efectuándose todas ellas con manifiesta mala fe, abuso de derecho y temeridad procesal, con faltas de respeto manifiestas que en ocasiones rayan lo delictivo, lo que ha desembocado en: a) una serie de bajas médicas del personal de la Oficina Judicial por depresión, entre ellas, la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia; b) una excesiva carga de trabajo en el juzgado hasta el punto de que el juzgado ha sido objeto de diversas actuaciones por parte de la Inspección del CGPJ; y c) a que este juzgado sea considerado como un juzgado de "paso" en el que nadie quiere o puede estar más de un determinado tiempo por tener que estar soportando este tipo de actuaciones que ocasionan el trabajo correspondiente a dos órganos judiciales sin causa justificativa alguna como se va a poner a continuación.

- ETJ 3/20: en esta ejecución, que tienen nada menos que 215 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el Auto de 1 de septiembre de 2022 que inadmitía la reposición interpuesta contra una diligencia de ordenación que únicamente daba traslado al magistrado para resolver sobre la admisión a trámite de un recurso presentado por la parte ejecutante a la parte ejecutante que se tenían por efectuadas la manifestaciones de la parte ejecutante, y en el Decreto que se recurría en revisión, se manifestaba que se habían cumplido con los preceptos legales y se señalaba que el despacho de la ejecución era firme.

Por todo lo expuesto, es por lo que el Magistrado Juez resuelve imponer al Graduado Social don por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y Autoridad judicial, una multa de 400 € por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante ese Tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio.

4) Contra este Auto se solicitó por el Graduado Social don ser oído en justicia, presentando escrito en el que, en esencia, tras narrar incidentes del procedimiento, reproducir parte del contenido del Auto referido en el apartado anterior y parte de sus escritos anteriores (especialmente el contenido del recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 17



de enero de 2023 que fue inadmitido por el juzgado mediante providencia de 23 de enero de 2023), ha negado la existencia de temeridad, mala fe, falta de respeto y abuso de derecho, estimando que SSª le está ocultando cosas que debe decidir y que tampoco quiere aclarar, preguntándose si SSª le revelará, cosa que duda, sobre este extraño proceder. Que a SSª le dará igual lo que expongan en el recurso, dudando que llegue a leerlo, puesto que su pretensión lo es el sólo cumplir los trámites, y que reitera lo que solicitó en el recurso de reposición contra el Auto de 17 de enero de 2023 dimanante de la ETJ 3/20, y que como ya ha dicho, no se ha querido resolver y con ello, provocándole a sabiendas la indefensión a la que le tiene SSª acostumbrado.

Añade el Graduado Social don que lejos de ser SSª claro y conciso, que amparado sin duda en su firme creencia, que la Secretaría de Gobierno del TSJ de Andalucía confirmará todas sus PMU, y que es por ello que oculta la concreción, quizás también, porque tampoco sabe localizarla, y de ahí que no concrete en que consistió la temeridad que le imputa, la mala fe, el abuso de derecho y la falta de respeto a las partes y autoridad judicial; señalando a donde alcanza la mala fe de SSª, que hace relatos en el Auto amparados presuntamente en su impunida (reproduciendo parte del Auto recurrido) y es que, si no tiene mala fe (se refiere a SSª) no se puede actuar tan temerariamente con las elucubraciones que ha hecho y que si lo que el recurrente ha dicho podría rozar la presunción de delitos, que le resulta bien extraño, que SSª no los haya denunciado ante la Fiscalía.

Que las PMU, contrariamente a como son utilizadas por su señoría, lo están para multar sobre unos hechos concretos donde se concrete la existencia de esa supuesta mala fe, temeridad, abuso de derecho, etc..., Que se pueda haber conservado. No siendo permisible legalmente que el Auto se extralimite comentando cuestiones muy generales y referidas a otros procedimientos. Que esto sólo es posible en una mente insana, con mala fe, con premeditación y alevosía.

Asimismo recoge párrafos textuales del Auto de 23 de enero de 2023:

“Las actuaciones que efectúa este profesional que este juzgador considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) Recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; B) Pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) Recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) Faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) Utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.”

“Todas estas actuaciones dan lugar unas dilaciones indebidas y retraso enorme en el Juzgado, efectuándose todas ellas con manifiesta mala fe, abuso de derecho y temeridad procesal, con faltas de respeto manifiestas que en ocasiones rayan lo delictivo, lo que ha desembocado en:



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

a) una serie de bajas médicas del personal de la Oficina Judicial por depresión, entre ellas, la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia; b) una excesiva carga de trabajo en el juzgado hasta el punto de que el juzgado ha sido objeto de diversas actuaciones por parte de la Inspección del CGPJ; y c) a que este juzgado sea considerado como un juzgado de "paso" en el que nadie quiere o puede estar más de un determinado tiempo por tener que estar soportando este tipo de actuaciones que ocasionan el trabajo correspondiente a dos órganos judiciales sin causa justificativa alguna como se va a poner a continuación."

5) Por Auto de 6 de febrero de 2023, suscrito por el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número de , don , se ratifica la imposición de la sanción, desestimando las alegaciones efectuada, articulándose contra el mismo recurso de alzada interpuesto por el Graduado Social don , para ante esta Sala de Gobierno que, en esencia, expone el contenido del anterior recurso de audiencia que interpuso contra el Auto de 23 de enero de 2023 y del anterior recurso de reposición en el que pedía la nulidad del Auto de 17 de enero de 2023, que fue inadmitido a trámite mediante providencia de 23 de enero de 2023, añadiendo que viene siendo objeto de persecución por el Juez, con la colaboración de la LAJ, y cuyos motivos y causas conoce sobradamente la Sala de Gobierno. Que desde el 26 de agosto de 2022 y hasta el momento, son 44 las denuncias que ha puesto ante esta Sala de Gobierno y que ninguna de ellas se ha resuelto. Asimismo expone diversas vicisitudes referidas a la PMU 5/22 que no es objeto de este recurso, agregando que ha solicitado cinco Juras de Cuentas en el Juzgado desde hace más de un año y que no se han resuelto, porque de lo que se trata es de retrasarle el cobro de sus minutas y que por eso en estas Juras de Cuentas los tiempos entre resoluciones son enormes, que es más de un año lo que lleva esperando su ejecución y cobro definitivo.

Que el recurrente sin duda a no equivocarse, a que resulta más que evidente a la vista de lo expuesto, la existencia de mala fe y abuso de autoridad emprendidos contra él y que evidencia esa persecución de la que está siendo objeto con mayor fuerza y ferocidad, desde un mes después de tomar posesión el actual Juez, único promotor de las PMU. Asimismo reitera las brutales dilaciones indebidas que sufren sus ejecuciones y sobre las que el Juez nunca quiere resolver, rechazándolas en todos sus recursos en los que recurre por infracción del artículo 24.2 de la constitución.

Asimismo, respecto del relato de hechos relativos a la ETJ 3/20 ha afirmado la mala fe del Juez que le caracteriza para con él, alarmando a la sala sobre los 215 acontecimientos, si bien oculta decir, a cuantos de ellos, se deben a actuaciones encaminadas a entorpecer el normal desarrollo del procedimiento.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Antes de entrar en el fondo de la cuestión, la existencia o no de mala fe procesal,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

temeridad, abuso de derecho y falta de respeto, ha de hacerse una alusión a lo que deja entrever el recurrente en sus escritos, que no es otra cosa que una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución, en su consideración de que la resoluciones recurridas no resuelven lo solicitado en su petición de nulidad del Auto de 17 de enero de 2023, respecto de lo cual no podemos estar de acuerdo en absoluto, ya que el Magistrado Juez en todas sus resoluciones, pero especialmente en la providencia de 23 de enero de 2023, da cumplida respuesta a la petición del Graduado Social don , pues mediante Auto de fecha 17 de enero de 2023, en el proceso ETJ 3/2020, se acuerda la apertura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la LRJS y 247 de la LEC, de la correspondiente pieza de sanción pecuniaria contra el referido Graduado Social, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial, con traslado para alegaciones por plazo de tres días siguientes a la notificación de esta resolución.

El Graduado Social don , en vez de presentar alegaciones en el plazo de tres días, lo que presenta, con fecha 20 de enero de 2023, es un recurso de reposición solicitando la anulación del Auto de 17 de enero de 2023, compartiéndose la decisión del Juzgado de lo Social número de que con fecha 23 de enero de 2023 dictó Providencia, que consideramos ajustada a derecho y cuyos fundamentos compartimos, en la que se acordó la inadmisibilidad de dicho recurso, sobre la base del artículo 75 de la LRJS que establece que el presunto infractor debe de efectuar alegaciones previas a la imposición de sanción disciplinaria, no siendo objeto de recurso de reposición al tratarse de un trámite procesal gubernativo-administrativo que no se rige por las reglas ordinarias de los recursos del orden social, sino que tiene sus propias normas, tal y como sucede con los posteriores recursos de audiencia y de alzada.

En otro orden de cosas, el Graduado Social don pone de manifiesto que lejos de cumplir el mandato de que la sanción que se decida imponer sea reservada para una resolución autónoma independiente se ha incumplido, ya que en vez de proceder el Magistrado Juez a la apertura de una pieza separada, lo que se hace es dictar el Auto de 17 de enero de 2023 en el procedimiento ejecución acordando la apertura de expediente disciplinario, dándole publicidad, pese a su prohibición.

Tampoco podemos compartir este argumento, porque el artículo 75 de la LRJS en su apartado 2º otorga la posibilidad a los perjudicados de reclamar los daños y perjuicios que las actuaciones del presunto infractor por mala fe procesal y abuso de derecho les hubiese ocasionado, y en consecuencia, deben tener conocimiento de las actuaciones por las que se abre la pieza, a los efectos de que, en su caso, puedan ejercitar sus derechos una vez devenga firme la posible sanción pecuniaria en vía gubernativa-administrativa. Por tanto, sobre la base de lo razonado consideramos que el motivo de la publicidad es razonado y fundamentado. Además a lo único que se da publicidad, en el proceso EJ 3/20, es al Acuerdo de apertura del expediente disciplinario, ya que a partir de ahí se abre la correspondiente pieza donde el Graduado Social don



ha tenido oportunidad ejercitar sus derechos, defenderse y alegar lo que a su derecho haya convenido.

A ello debemos de añadir, que después del Auto de 17 de enero de 2023 en el que se acuerda la apertura de expediente disciplinario y la Providencia de 23 de enero de 2023, por la que se inadmite a trámite el Recurso de Reposición interpuesto, en el que se pedía la nulidad del Auto anterior, se dictan los Autos de 23 de enero de 2023, donde se impone al hoy recurrente la multa de 400 € por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial, y de 7 de febrero de 2023 donde se desestima íntegramente el recurso interpuesto por el Graduado Social don contra el Auto anterior, así como todas las alegaciones que había realizado el recurrente en el trámite de audiencia, y todo ello, de forma motivada, debiendo señalarse que la obligación de motivar las resoluciones judiciales no requiere un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, y los criterios del Magistrado que resuelve sobre las alegaciones efectuadas es claro y fundamentado, ello sin perjuicio de que la parte recurrente esté en desacuerdo con esa resolución, sin perjuicio de la valoración que vía de recurso pueda llevarse a cabo por esta Sala de Gobierno.

SEGUNDO.- *Respecto al fondo del recurso, el párrafo 4º del artículo 75 de la LRJS dispone que “Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante Auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio”, cabe decir que en general en relación con el concepto de buena fe, es doctrina comúnmente admitida (STS de 1 de marzo de 2001) que la exigencia de ajustar el ejercicio de los derechos a las pautas de la buena fe según lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil constituye un principio informador de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al comportamiento considerado como honrado y justo, e igualmente, es doctrina constante y reiterada (STS de 12 de julio de 2002) que la buena fe es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo y leal, que supone una exigencia de actuación coherente y de protección de la confianza ajena, y en el ámbito del derecho laboral, interpretando el precepto citado más arriba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) en su Sentencia nº 5715/2020 de 17 diciembre, se señala que para la imposición de una sanción “Debe concurrir mala fe: entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria; y/o temeridad: entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso,*



sea de modo culposo, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón”.

En primer lugar, el Graduado Social don _____ se queja de la inclusión, en los Autos del expediente, de una serie de párrafos que a continuación se expondrán, en los que según su opinión son gratuitos y ejemplo de la persecución de la que está siendo objeto por parte del Juez y de la mala fe de éste, ya que éste en ningún momento le dice donde le ha faltado el respeto o donde le ha acusado de algo de forma irrespetuosa. “[...] para el juez, todo lo que no sea serle sumiso, resulta ser desobediencia, falta de respeto y acusación sobre su persona, investida de Autoridad”. Que además se trata de un exceso que ataca su honorabilidad al tratarse de puras creencias del juez. En el último párrafo dice que “es totalmente repugnante e inadmisibile en un juez, solo entendible que no comprensible, desde el odio que me tiene y la persecución que me hace”.

Los párrafos a los que se refiere el Graduado Social don _____ son los siguientes:

“Las actuaciones que efectúa este profesional que este juzgador considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; B) pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

Y todo ello, con la finalidad pretendida de dilatar el procedimiento y así poder acudir el mismo a reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional, así como obtener un mayor rédito con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propios de las ejecuciones de esta jurisdicción, ya que, al prolongarse en el tiempo pueden obtenerse mayores cantidades económicas, beneficiándose de la ley y con un claro fraude de ley y con total impunidad ya que todas estas actuaciones las realiza aprovechándose de la circunstancia de que en el orden social de la jurisdicción nos exige depósito para recurrir a los trabajadores y/o beneficiarios de la Seguridad Social. Por lo expuesto, puede concluirse que el Graduado Social don _____, se beneficia del desorden creado por el mismo, con actos manifiestamente fraudulentos que ocasionan perjuicios económicos a las partes contrarias y desgaste mental, moral y físico del Juzgado de lo Social.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Todas estas actuaciones dan lugar unas dilaciones indebidas y retraso enorme en el juzgado, efectuándose todas ellas con manifiesta mala fe, abuso de derecho y temeridad procesal, con faltas de respeto manifiestas que en ocasiones rayan lo delictivo, lo que ha desembocado en: a) una serie de bajas médicas del personal de la Oficina Judicial por depresión, entre ellas, la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia; b) una excesiva carga de trabajo en el juzgado hasta el punto de que el juzgado ha sido objeto de diversas actuaciones por parte de la Inspección del CGPJ; y c) a que este juzgado sea considerado como un juzgado de "paso" en el que nadie quiere o puede estar más de un determinado tiempo por tener que estar soportando este tipo de actuaciones que ocasionan el trabajo correspondiente a dos órganos judiciales sin causa justificativa alguna como se va a poner a continuación."

De la lectura de los anteriores párrafos tenemos que señalar que no compartimos las valoraciones que realiza el hoy recurrente, ya que entendemos que no son gratuitos ni ejemplo de ninguna persecución por parte del Juez o de la mala fe de éste, ya que esos párrafos no son más que una introducción para exponer la forma de actuar del Graduado Social don

en los procesos judiciales; es más el recurrente reconoce que por parte de ése Juzgado se le han abierto ya múltiples expedientes disciplinarios. Luego, lo que hace el Magistrado Juez que instruye y resuelve el presente expediente no es nada más que traer a colación, a modo de introducción, la forma, que a su juicio, tiene de actuar el Graduado Social en los diferentes procesos, para después exponer cuáles son los hechos concretos que en este expediente integran la responsabilidad disciplinaria y la consiguiente imposición de la correspondiente multa.

No obstante lo anterior, si es cierto que se echa de menos en esos tres párrafos (que constan en los Autos de 17 de enero de 2023, de 23 de enero de 2023 y de 3 de febrero de 2023) una mayor concreción y referencia a expedientes concretos, que si se concretan en el informe suscrito por el Magistrado Juez, el día 16 de marzo de 2023, a los efectos del Art. 556 LOPJ. Aunque reiteramos que son tres párrafos que no dejan de ser una introducción y que sobre la base de ellos no se resuelve el expediente, sino que el expediente se resuelve sobre la base de los hechos acontecidos en la Ejecución de Títulos Judiciales (ETJ) número 72/21 y que a continuación analizaremos.

Luego, visto lo anterior, los hechos concretos que en este expediente pudieran integrar la responsabilidad disciplinaria y la imposición de la correspondiente multa son los siguientes:

Que el Graduado Social don *en el proceso ETJ 3/20, que en el*
momento del dictado del Auto de 17 de enero de 2023 tenía ya 215 acontecimientos, según el
Magistrado Juez, fue requerido de que cesara en su comportamiento irregular por Auto de 1 de
septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 27 de
mayo de 2022 que inadmitía la reposición interpuesta contra una diligencia de ordenación que
únicamente daba traslado al magistrado para resolver sobre la admisión a trámite de un recurso



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

presentado por la parte ejecutante a la parte ejecutante que se tenían por efectuadas la manifestaciones de la parte ejecutante, y en el Decreto que se recurría en revisión, se manifestaba que se habían cumplido con los preceptos legales y se señalaba que el despacho de la ejecución era firme.

Pues bien, aunque el recurrente niega la mala fe, temeridad, abuso de derecho o falta de respeto a las partes y autoridad judicial e imputa mala fe al Magistrado Juez, tenemos que decir que esos hechos concretos integran temeridad (entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso, sea de modo culposos, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón), mala fe procesal (entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria), abuso de derecho (entendido como cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad de la norma) y falta de respeto a las partes y a la autoridad judicial.

Y ello queda probado de la documental obrante en autos. Así, los hechos concretos que se imputan al hoy recurrente, en la pieza de imposición multas coercitivas número 6/23, referidos al proceso ETJ 3/2020, son el número de acontecimientos que tiene la causa, y, el presente caso son 215 acontecimientos, número respecto al cual ya se ha pronunciado esta Sala para señalar que son claro indicio de que los mismos son debidos al actuar el recurrente con mala fe procesal, abuso de derecho y temeridad, ya que el mismo reconoce implícitamente la existencia de ese número de acontecimientos, a lo largo de todo el expediente, y no niega la interposición de recursos y presentación de escritos, siendo evidente que dicho número es excesivo y desmesurado en relación con un proceso de ejecución de título judicial, siendo potencialmente indicativo de las calificaciones efectuadas por el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número de .

Además de lo anterior, compartimos lo razonado por el Magistrado Juez, que impone la sanción, en lo que a la valoración de la conducta del Graduado Social recurrente se refiere (de actuar el recurrente con mala fe procesal, abuso de derecho y temeridad), ya que del contenido del expediente se infiere que el Graduado Social don en el proceso ETJ 3/20, fue requerido de que cesara en su comportamiento irregular por auto de 1 de septiembre de 2022.

Finalmente, tenemos que hacer referencia a lo manifestado por el Graduado Social don sobre que el Magistrado Juez en ningún momento le dice donde le ha faltado el respeto o donde le ha acusado de algo de forma irrespetuosa.

Basta leer el expediente para darse cuenta de que el recurrente utiliza expresiones y palabras que faltan el respeto del Magistrado, con empleo de expresiones que se deslizan hacia la imputación de conductas contrarias a la propia función jurisdiccional o al conocimiento del derecho



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

exigible a todo juez, sin que tales afirmaciones cuenten con el mínimo sustento.

Sobre la base de todo lo razonado, es por lo que el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número de resuelve imponer al Graduado Social don por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a la autoridad judicial, una multa de 400 € por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante ese Tribunal.

Por tanto, debe desestimarse el recurso de alzada en cuanto al fondo de la cuestión, debiendo considerarse que el auto que impone la sanción es ajustado a derecho, ya que ha resuelto el expediente disciplinario e impuesto la multa de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a los demás intervinientes.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en Pleno, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO** por DON , confirmando los autos de 23 de enero de 2023 y de 6 de febrero de 2023, dictados en la pieza separada 6/23, que dimana de la Ejecución de Títulos Judiciales 3/20 del Juzgado de lo Social nº de .

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución y notifíquese al interesado a través del Decano de los Juzgados de , para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.10- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000021/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con la resolución tipo Auto dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de en el PIMCo 12/2023 de fecha 23 de Enero de 2023, habiéndose nombrado Ponente Rocío Marina Coll y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES

PRIMERO: El presente Recurso de Alzada se interpone por el mencionado graduado social D. , contra el Auto de 23 de enero de 2023 que le impone una multa de 400



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

euros por no respetar las reglas de la buena fe procesal y contra el de 6 de febrero de 2023, que desestima el recurso frente al mismo.

Alega el recurrente que le han abierto 21 piezas de imposición de multa y que lleva 8.400 euros de sanciones; asegurando que está siendo objeto de persecución por el juez. Alega mala fe y abuso de autoridad. Alega dilaciones indebida en los procesos de ejecución en los que interviene

También alega el recurrente la infracción de normas y garantías procesales. Manifiesta que el auto dictado no tenía número ni tampoco la pieza separada. pieza separada conforme a lo exigido por el art. 247.3 de la LEC, y que no se le ha dado trámite de alegaciones de acuerdo con dicha norma. Asimismo se opone también por motivos de fondo alegando no haber faltado al respeto al juez ni haberlo tratado de forma irrespetuosa. Además asegura no haber actuado con mala fe procesal, ni temeridad, ni abuso de derecho. Asimismo alega que el juez quiere incumplir la ley a sabiendas y que desobedece la misma.

SEGUNDO: La sanción impuesta por el Ilmo. magistrado D. , se fundamenta en el art. 247 de la LEC. La sanción impuesta se basa en entender que el mencionado Graduado Social, Sr. incurrió en una conducta contraria a la buena fe procesal, al realizar las siguientes actuaciones:

A) Recurrir resoluciones en las que expresamente se ha advertido que no cabe recurso por no estar contemplado en la ley.

B) Pedir aclaraciones de aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses.

C) Recurrir resoluciones consistentes en el mero traslado a la parte contraria o que dejan las actuaciones al juez para que resuelva.

D) Utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas.

Todo ello a fin de dilatar los procedimientos y , a la vez, reclamar por dilaciones indebidas a la administración de justicia; así como para obtener mayor rédito con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propios de la jurisdicción social.

TERCERO: En la resolución y tramitación de este Recurso de Alzada se han observado todas las prevenciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La sanción impuesta por el Ilmo. Magistrado Sr. se basa en el art. 247 de la LEC que establece que “ Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento.

1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe.

2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.



3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Secretario judicial se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala.

4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

5. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

SEGUNDO.- Para resolver la alzada planteada por el recurrente resulta necesario examinar en primer término, si se han cumplido las formalidades procesales.

Pues bien, efectuado este examen, resulta que si se han cumplido. Y ello dado que se acuerda apertura de pieza separada de imposición de multa, en la que se han cumplido todos los trámites.

Asimismo, la resolución del magistrado en la que acuerda la apertura de esta pieza, y la que confirma la imposición de multa tras oír al interesado constan en autos.

Asimismo, la resolución del juez es un acuerdo motivado. En ese sentido el mismo explica que la ejecución concreta a la que se refiere, tiene 226 acontecimientos y se han recurrido en reposición resoluciones frente a las que no cabe recurso (ejemplo, providencia de 1 de septiembre de 2022 dictada en la ETJ 123/20, que inadmite recurso frente a providencia de 29 de junio de 2022; siendo que esta no era susceptible de recurso). Todo ello sobre cuestiones que ya estaban resueltas. Asimismo, se han presentado quejas sobre la actuación del LAJ, del Juez y protestas por dilaciones indebidas. En la documentación que se acompaña constan también resoluciones de inadmisión de recurso frente a resoluciones en las que la ley expresamente priva de recurso (Ejm. Art. 75 LRJS). Así, por ejemplo, la providencia de 23 de enero de 2023, por lo que parece tratarse de un comportamiento repetitivo.

Consta asimismo el trámite de audiencia.

El resto de alegaciones realizadas en el recurso del Sr. _____, no han quedado acreditadas. La existencia de múltiples sanciones no tiene porqué suponer una persecución, máxime cuando muchas de ellas ya han sido confirmadas por esta Sala de Gobierno. Asimismo no consta, ni se ha acreditado, que el juez trate deliberadamente de incumplir ninguna ley. Además, para combatir las resoluciones dictadas por un juzgado, están los recursos ordinarios. Sin embargo,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

solo son admisibles aquellos que la ley permite.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso planteado, confirmando las resoluciones recurridas.

Por lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA** interpuesto por el Recurrente Don

, contra el Auto de 23 de enero de 2023 y el de 6 de febrero de 2023, dictados por el Magistrado-Juez titular Juzgado de lo Social nº de los de , D. , CONFIRMANDO las referidas resoluciones.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.11- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000023/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con el Auto de fecha 23 de Enero de 2023 dictado por el Juzgado de lo Social nº de los de en el PMU 8/2023, habiéndose nombrado Ponente Manuel Martín Hernández-Carrillo y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2.023

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 17/01/2023 por el Juzgado de lo Social de se dictó auto acordando la apertura de expediente disciplinario frente al Graduado Social don por temeridad procesal, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial, dándose traslado para alegaciones.

SEGUNDO. Don presentó escrito de fecha 19/01/2023 mediante el que interponía recurso de reposición contra el anterior auto. El Juzgado de lo Social, mediante providencia de 23/01/2023, tras hacer constar que la resolución impugnada no era susceptible de recurso alguno y que su finalidad era que el interesado efectuara alegaciones, tuvo por efectuado el



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

trámite de audiencia. No obstante ello, don _____ presentó con fecha 04/02/2023 nuevo escrito de recurso de audiencia, formulando alegaciones y oponiéndose a la imposición de sanción alguna.

TERCERO. Mediante auto de 23/01/2023, el Juzgado de lo Social acuerda la imposición de una sanción consistente en multa de 400 euros por temeridad procesal, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial.

CUARTO. Don _____ presentó escrito de fecha 04/02/2023 mediante el que interponía recurso de audiencia contra el anterior auto, el cual fue desestimado por el posterior auto de 06/02/2023 y frente al que interpone el presente recurso de alzada ante la Sala de Gobierno de este T.S.J.

QUINTO. Recibidas las actuaciones, por Acuerdo del Excmo. Sr. Presidente de 06/06/2023 se formó el oportuno expediente y, dada cuenta a la Sala de Gobierno de este TSJ, reunida en Comisión, se designó Ponente al Ilmo. Sr. D. Manuel Martín Hernández-Carrillo, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Tal y como se ha expuesto en los antecedentes, el Graduado Social don _____ se alza frente a la sanción que le ha sido impuesta por el titular del Juzgado de lo Social de _____, consistente en multa de 400 euros, por temeridad procesal, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial.

Razona el Sr. _____, como antecedentes, en muy apretada síntesis, que está siendo objeto de una persecución por parte del Juez con la colaboración de la Letrada de la Administración de Justicia, como lo demuestra el hecho de haber sido abiertas numerosas piezas por temeridad y mala fe procesal, con un montante económico importante en multas. Enfatiza en las dilaciones indebidas en los procedimientos que se tramitan bajo su representación procesal, que alcanzan años, pese a lo cual, el Juzgador es extremadamente diligente en la imposición de sanciones por su actuación procesal. Valora como ilegal la providencia de 23/01/2023 al inadmitir recurso de reposición frente al auto que acordó la apertura de pieza separada, pese a concurrir los requisitos legales. Y en relación al presente expediente, contiene determinadas afirmaciones sobre las intenciones que atribuye al Juez [“... el odio que me tiene y la persecución que me hace” (sic)], las cuales resultan inanes a los efectos de la presente resolución, que debe centrarse, en exclusiva, en el análisis de los argumentos jurídicos que expresa en su recurso.

El Juzgador ha razonado, después de exponer la doctrina judicial oportuna, lo siguiente:

“Las actuaciones que efectúa este profesional que este juzgador considera irregulares o fuera de ley son la siguientes: A) Recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentara conseguir una nueva resolución, ajustada a sus intereses; B) Pedir



aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; C) Recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; D) Faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; E) Utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

Y todo ello, con la finalidad pretendida de dilatar el procedimiento y así poder acudir él mismo a reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional, así como obtener mayor rédito con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propios de las ejecuciones de esta jurisdicción, ya que, al prolongarse en el tiempo, pueden obtenerse mayores cantidades económicas, beneficiándose de la ley con un claro fraude de ley y con total impunidad, ya que todas estas actuaciones las realiza aprovechándose de la circunstancia de que en el orden social de la jurisdicción no se exige depósito para recurrir a los trabajadores y/o beneficiarios de la Seguridad Social. Por lo expuesto, puede concluirse que el Graduado Social, D. , se beneficia del desorden creado por él mismo, con actos manifiestamente fraudulentos que ocasionan perjuicios económicos a las partes contrarias y desgaste mental, moral y físico del Juzgado de lo Social”.

SEGUNDO. El artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento”) establece:

“1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe.

2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Letrado de la Administración de Justicia se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala.

4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

5. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.



De otro lado, el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (“Deberes procesales de las partes” establece que:

“1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones.

(...)

4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa”.

TERCERO. En relación a los conceptos de temeridad o mala fe, la sentencia del Tribunal Supremo 37/2006, de 25 de enero, con cita de numerosos precedentes, nos dice que “... aunque no hay un concepto o definición legal de temeridad o mala fe se suele entender por esta Sala, como pauta general, que tales circunstancias han concurrido cuando la pretensión ejercida carezca de toda consistencia y que la injusticia de su reclamación sea tan patente que deba ser conocida por quien la ejercitó”.

No duda esta Sala de Gobierno que los litigantes, a través de sus representantes, pueden hacer uso de cuantos recursos o medios de impugnación establezca el ordenamiento jurídico, pues lo contrario comportaría una intolerable limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, una cosa es el uso de los resorte legales y otra, bien distinta, un uso exasperante, excesivo o abusivo de solicitudes de aclaración, complemento o recursos de reposición hasta el punto de entorpecer la labor del órgano judicial, que debe dedicar una ingente cantidad de tiempo y esfuerzo en su atención, en detrimento del resto de procedimientos que se tramitan en la oficina judicial. Este es el motivo, a juicio de esta Sala de Gobierno, que llevó al Juzgador a imponer al Sr.

la multa en tanto que en la ejecución de la que dimana la presente pieza separada, se acumulan 164 acontecimientos, habiendo sido ya requerido para que cesara en su actitud



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

mediante auto de fecha 01/09/2022, tras sucesivas peticiones de aclaración de diversas resoluciones.

El planteamiento defensivo del Sr. _____, que de manera reiterada –en una legítima pero afanosa defensa de los intereses de sus clientes– articula peticiones de aclaración, interroga al tribunal sobre el porqué de sus decisiones, o las califica en cada momento, cuando no a replicarlas, contribuye en gran medida a que el proceso se desarrolle tortuosamente, dando lugar a crisis como la que ahora se examina, y que ha terminado con la imposición de la corrección. Y es que la partes deben hacer el esfuerzo de plantear con precisión y claridad sus pretensiones, dando las razones que se fundamenten, y corresponde al tribunal tomar la decisión al respecto, primando la precisión, y sin más margen de disconformidad por parte de los litigantes que el de los recursos legalmente establecidos mediante el uso adecuado de los mismos.

No se olvide, para finalizar, que ya esta Sala de Gobierno en sus acuerdos de 25/04/2023 (Recursos 38/2022, 10/2023, 11/2023) y 26/04/2022 (Recurso 57/2022) desestimó los recursos de alzada articulados por el Sr. _____ por hechos semejantes, si no idénticos, de donde se desprende, de fijo, la actitud rebelde y obstinada del recurrente que justifica la confirmación de la sanción impuesta, la cual en atención a su cuantía, se considera ponderada.

En atención a todo lo razonado;

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA** interpuesto por el Graduado Social don _____, confirmando íntegramente la sanción impuesta de **MULTA DE 400 EUROS** en el expediente referenciado.

Particípese el presente Acuerdo al Juzgado de lo Social de _____ y notifíquese al interesado a través del Decanato de los Juzgados de _____ para su conocimiento y efectos oportunos haciéndosele saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso administrativo a interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación.

1.12- **RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000024/2023** interpuesto por _____ por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en la PMU 21/2023 con fecha 7 de Febrero de 2023 dictada por el Juzgado de lo Social nº _____ de los de _____, habiéndose nombrado Ponente José Manuel González Viñas y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En la Ciudad de Granada a 18 de julio de 2023

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el seno de la pieza de sanción por mala fe procesal 21/2023 derivada del Procedimiento Ordinario 448/19, seguido ante el Juzgado de lo Social número de de , se dictó auto de fecha veintitrés de enero de 2023, acordando la apertura de expediente disciplinario contra dicho G. Social por temeridad, mala fe procesal abuso de "Derecho de conformidad con lo dispuesto en los arts. 75LRJS y 247LEC . Dictándose Auto el 7 de febrero siguiente resolviendo imponer al Graduado Social, D. , por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: Una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio.

SEGUNDO.- Los hechos recogidos en el mismo son los siguientes: PO 448/2019 : En este procedimiento, que tiene nada menos que 476 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el auto de 31 de enero de 2022 se desestimó el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia de 21.12.21 recurso en el que solicitaba se le diera traslado de un escrito que no es competencia del Juzgado, la corrección disciplinaria de la LAJ, vertiendo todo tipo de quejas y acusaciones inaceptables, "en el auto de 2.2.22 en el que solicitaba sin justificación alguna un incidente de nulidad de actuaciones de una providencia de 9.12.21 por la que se inadmitió a trámite un recurso de revisión, finalmente en el auto que resuelve la aclaración de 1.2.22 interpuesta contra el auto de 31.1.22 citado, que fue denegada pues no pedía una aclaración, sino que estaba encubriendo la interposición de un nuevo recurso contra la resolución cuando no cabía recurso alguno, pues volvía a reiterar las peticiones ya efectuadas y nuevamente con altas de respeto y acusaciones inaceptables".

TERCERO.- Contra dicho Auto, el Sr. de conformidad con lo dispuesto en el art. 556 LOPJ, interpuso en tiempo y forma primero recurso de Audiencia, en el que como se reconoce, se reitera con carácter general lo ya denunciado por el mismo en las demás PMU que expresamente da por reproducidas, excepción hecha de los 476 acontecimientos a que hace referencia la resolución recurrida que considera se deben en su mayor parte, a resoluciones y escritos varias veces repetidos así como a notificaciones y "otros" que a su juicio, no habrían de contabilizarse. Desestimado por Auto de 14.2.23

CUARTO.- En fecha, se presentó contra el mismo recurso de alzada por el Sr. por



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

no estar de acuerdo con la imposición de la multa coercitiva de 400 euros, realizando alegaciones similares al recurso de audiencia en justicia, tales que tiene acumulado un montante de 8.400 euros en multas, siendo objeto de persecución por el Juzgador con la ayuda de la LAJ, con alusiones a la PMU 5/22 y a cinco juras de cuentas solicitadas y aún no tramitadas, que revelan a su juicio un auténtico abuso de autoridad del Juzgador y de la LAJ, ocultando deliberadamente resoluciones inadecuadas, dictando Providencias y Autos ilegales, que revelan auténticas faltas de respeto y acusaciones infundadas hacia su persona, con tremenda mala fe y temeridad por el Juzgador, considerando repugnante e inadmisibles las manifestaciones del Juzgador sobre su actuación procesal.

QUINTO.- *Que consta informe a los efectos del artículo 556 de la LOPJ realizado por el Magistrado Don*

SEXTO.- *La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia adoptó acuerdo de designar ponente y llevar el mismo al conocimiento del Pleno de 18.7 de 2023.*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - *La impugnación tiene su origen en el P.O 448/2019 de dicho Juzgado de lo Social Núm. de , donde dicho recurrente ha sido requerido en distintas ocasiones para que cesara en su actitud, a saber: En el Auto de 31.1.22 que desestimaba recurso de revisión interpuesto contra Decreto de 21.12.21 en el que se solicitaba se le diera traslado de un escrito que no era competencia del Juzgado, la corrección disciplinaria de la LAJ vertiendo todo tipo de quejas y acusaciones. En el Auto de 2.2.22 en el instaba incidente de nulidad de actuaciones de una providencia de 9.12.21 por el que se le inadmitió a trámite recurso de revisión. Y finalmente, en el Auto que resolvía la aclaración de 1.2.22 interpuesta contra el referido Auto de 31.1.23, que fue denegada por encubrir la interposición de un nuevo recurso contra la resolución contra la que no había recurso alguno.*

SEGUNDO. - *Las actuaciones realizadas por este Graduado Social pueden considerarse irregulares e improcedentes, siendo siempre el mismo modus operandi: recurrir resoluciones contra las que expresamente no cabe recurso alguno para intentar conseguir una resolución ajustada a sus intereses, pedir aclaraciones de las aclaraciones para conseguir una resolución ajustada a sus intereses, recursos innecesarios como las de mero traslado al Juzgador para resolver, faltas de respeto a la LAJ y al Juzgador, etc. Lo anterior ocasiona como viene estimando esta Sala, un auténtico desorden y provoca multitud de dilaciones en claro fraude de ley, beneficiándose claramente de sus propios actos fraudulentos, lo que denota evidente mala fe procesal, abuso del derecho y temeridad procesal. Las alegaciones realizadas en el recurso de audiencia en justicia como se dijo, son genéricas y comunes a todas las PMU que se siguen contra el recurrente,*



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

hablando de omisiones y de ocultaciones de resoluciones, para terminar, diciendo que lleva un total de 8.400,00 euros en multas impuestas, imputando a la Secretaria de Gobierno del TSJ la autoría de su imposición, hablando de la mala fe del Juzgador ante tan insostenibles acusaciones.

Y en esencia, lo mismo se reitera en el recurso de alzada, si bien que con referencias ya expresas a las imputaciones que en el Auto recurrido se le efectúan, pero que no se desvirtúan, en cuanto que en síntesis, respecto de la providencia de 9.12.21 se aduce que no fue el mismo Juez el que la dictó por lo que en todo caso, debió ser su autor el que lo denunciase, . Del Auto de 31.1.22 que asocia a meritada providencia de 9.12.21 por cuanto se trataba del Acuerdo de esta Sala recaído en la PMU 2/22, que sin embargo previamente se le había notificado ya por el propio Juzgado. Siendo que además, en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: ... Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación ...que lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional". Y en cuanto al Auto que resolvía la aclaración de 1.2.21 por cuanto se omite por el Juzgador que se dictó el 19.9.21 siendo falso además lo en el mismo recogido y contra el que además ha interpuesto recurso de subsanación y complemento.

En consecuencia, la realidad tal y como ha venido a considerar esta Sala de Gobierno en los recursos de alzada ya interpuestos por el mismo recurrente y resueltos en las diferentes PMU en que se ha impuesto la multa de 400,00 euros de conformidad con los artículos 553, 546.3 de la LOPJ este último en relación con el artículo 75.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, siguiendo el Juzgador a quo con el criterio uniforme establecido por esta Sala de Gobierno en Acuerdos anteriores, tales como el 26-4.-2022 desestimatorio del recurso de alzada confirmando el Auto de fecha 20-5-2021 donde se le imponen 400,00 euros de multa por hechos similares, y Acuerdo de fecha 19-12-2022, o el de la Pieza Separada 572022 por mala fe procesal 997/2016. Ahora, al igual que entonces, pese a la afirmada prueba insuficiente para poder imputar responsabilidad que finalmente dio lugar a la sanción, se entiende la existencia de datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos interpuestos por el mismo y como hemos indicado en otros recursos interpuestos por el mismo recurrente al haber sido sancionado por conductas parecidas en otros procesos, que sin perjuicio de que el mismo tenga derecho a articular los recursos que la Ley brinda frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, sin embargo, estamos a juicio de esta Sala ante un uso de esa facultad que excede ese derecho. Y ello puesto que el uso de los recursos frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe . Así por ejemplo, como se ha dejado señalado, en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional...”.

En atención a lo expuesto, entendiendo en consecuencia acorde a derecho la tipificación disciplinaria que ahora nos ocupa, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción que debe de regir en cualquier régimen jurídico sancionador, estimamos correcto el importe impuesto y se propone al Pleno de esta Sala de Gobierno TSJA mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, ACUERDA DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Graduado Social Don , confirmando íntegramente la sanción impuesta de MULTA DE 400,00 euros en el Expediente aludido.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.13- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000025/2023 interpuesto por
por no estar de acuerdo con la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de en Auto de fecha 23 de Enero de 2023 en la PMU 3/2023, habiéndose nombrado Ponente Manuel López Agulló y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

PRIMERO.- En fecha de 17 de enero de 2023 el Juzgado de lo Social nº de , acordó abrir pieza separada de responsabilidad disciplinaria por mala fe procesal nº 3/2023 derivada de Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 119/2019 seguido ante el Juzgado de lo Social Nº de , concluyendo con el dictado de auto de 23 de enero de 2023, en el que se acordaba “imponer al Graduado Social, D. , por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

SEGUNDO.- En fecha de 4 de febrero de 2023 el Graduado Social D. interpuso recurso de audiencia frente al referido auto, que fue desestimado, recurriendo seguidamente en alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia junto al preceptivo informe del titular del Juzgado, se incoó recurso de alzada nº 25/2023, siendo designado Magistrado Ponente D. Manuel López Agulló, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, señalar que en la pieza de imposición de multa se han respetado los requisitos procesales previstos en la LOPJ, para la interposición de la multa:

- Artículo 554: En este caso se ha interpuesto multa, en cuantía prevista en el Código Penal para las faltas (actualmente delitos leves)
- Artículo 555. La corrección se ha impuesto por la autoridad ante la que se siguen las actuaciones, por el Juez D. , en pieza de responsabilidad disciplinaria
- Artículo 556. Se ha interpuesto recurso de audiencia, y posteriormente recurso de alzada ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia del TSJ Andalucía.

Manifiesta el recurrente que en lo que va de año, han sido “hasta el momento” 21 piezas de “PMU”, y que hay una “mala fe y abuso de la autoridad emprendidos contra mí” (contra el recurrente), que hay una “persecución” . Alega el recurrente que hay una grave indefensión al negarse el Juez a concretar los motivos de la multa.

SEGUNDO.- Pues bien, en el auto de imposición de multa se acordaba “imponer al Graduado



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Social, D. _____, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

El juzgador hace un detallado estudio de los deberes procesales de las partes, conforme la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y conforme el Art. 75 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se señala que los órganos judiciales rechazarán de oficio las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho, y que todos deberán ajustarse a las reglas de buena fe.

Y señala que las actuaciones que efectúa el Sr. _____ en el proceso de que trae causa la pieza y que considera irregulares son:

- recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno.
- pedir aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses.
- recurrir resoluciones que simplemente son traslado para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre los escritos.
- faltar el respeto con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada Administración de Justicia y al Juzgador.
- utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

Alega igualmente el recurrente que no es cierto que la finalidad de los acontecimientos que ha presentado en el proceso, sea la de dilatar el procedimiento, y poder pretender en un momento posterior reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional.

Valorando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, debe entenderse que existen datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de la excesiva acumulación de escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, de modo que, amparándose en el derecho a articular los recursos y peticiones que la Ley brinda, opta por una actitud de hostigamiento procesal que verdaderamente excede de ese derecho. Y ello porque el uso de los recursos y peticiones frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe, como ya ha indicado la Sala de Gobierno en precedentes resoluciones.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: “A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional”.

La Sala, al igual que en casos anteriores, aprecia temeridad y ejercicio abusivo de las facultades del Graduado Social en este procedimiento, tal cúmulo de acontecimientos procesales, y entiende que es acorde a derecho la tipificación disciplinaria realizada por el Juez del Juzgado de lo Social nº de , en aplicación régimen jurídico sancionador, de modo que estimamos correcto el importe impuesto, debiendo mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 € .

Por lo anterior, la resolución combatida a través del recurso de alzada debe confirmarse por cuanto no viene a infringir los preceptos aducidos en el escrito de recurso, ni conculca, en definitiva, derecho alguno, procediendo, en su consecuencia, la desestimación del recurso de alzada.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por D. contra el auto reseñado en la fundamentación jurídica de la presente resolución, y en su virtud se confirma la sanción impuesta al referido por el titular del Juzgado de lo Social nº de los de .

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.14- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000026/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de en el auto de fecha 23 de Enero de 2023 en el PMU 9/2023, habiéndose nombrado Ponente María Begoña Rodríguez Álvarez y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de _____ se siguió procedimiento Nº0000013/2020 a instancia de Doña Irene García Martínez, representada por el Graduado Social Don _____, de impugnación de resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que denegaba el reconocimiento de grado incapacitante, dictándose sentencia en fecha a 15 de junio de dos mil veinte que contenía el siguiente fallo: “Estimo parcialmente la demanda objeto de las presentes actuaciones interpuesta por IRENE GARCÍA MARTÍNEZ contra el INSS; TGSS, y previa revocación de la resolución del INSS aquí impugnada de fecha 15-11-19 declaro a la actora en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, con los efectos legales y económicos que le sean inherentes, condenando a los demandados a estar y pasar por los términos de la presente resolución en orden a sus respectivas obligaciones legales”.

La referencia sentencia fue recurrida en Suplicación por la demandante y mientras se tramitaba el recurso, por parte del Graduado Social _____, se solicitó ejecución de la sentencia, dándose lugar a la ejecución 97/20, dictándose auto por el juzgado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, cuya parte dispositiva dice: “Se acuerda despachar ejecución provisional de conformidad a los Razonamientos Jurídicos UNICO”

Con la misma fecha, esto es, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dictó Decreto por la LAJ del Juzgado, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: “En orden a dar efectividad a las medidas concretas, ACUERDO: Requerir a la parte ejecutada para que en el plazo de un MES de cumplimiento al Auto de fecha 24-2-2021 de conformidad con lo dispuesto en el art. 294 1 y 2 de la LRJS”.

Notificado el anterior Decreto, por Don _____, en fecha 24 de febrero de 2021, se presentó recurso de reposición solicitando: “Se anule el Decreto aquí recurrido y en su lugar, uno nuevo en el que se acuerde conforme el Art. 287 de la LRJS”.

No constan en la documentación remitida las actuaciones al respecto de este recurso, pero con fecha 26 de enero de 2022, se dictó Sentencia por la Sala de Málaga, del TSJA, desestimado el recurso de Suplicación interpuesto contra la sentencia del juzgado, confirmando esta íntegramente. No constan que se haya solicitado ejecución definitiva de la meritada sentencia.

SEGUNDO.- Por auto de 17 de enero de 2023, el juzgado dictó auto acordó y acordó mediante el mismo abrir “expediente disciplinario contra el Graduado Social Don _____, por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a la autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en los arts 75 de LRJS y 24 de la LEC, con trasladado para alegaciones por plazo de tres días siguientes a la notificación de la presente resolución”.

TERCERO.- Contra la anteriormente referenciada resolución, el Señor _____, presento recurso de reposición, solicitando la anulación del auto, además de solicitar actuaciones del juzgado en relación con el procedimiento del que dimana las actuaciones disciplinarias.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

El juzgado dictó providencia en fecha 23 de enero de 2023, en la que se daba respuesta a las cuestiones ajenas al expediente disciplinario y se tenía el trámite de alegaciones por cumplido, dictándose auto en la misma fecha, esto es 23 de enero de 2023 Auto por el que se acordó imponer a Don , por temeridad, mala fe procesal, abuso de derecho y falta de respeto a las partes y a la autoridad judicial, multa de 400€ por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante el juzgado.

En dicho auto se hacía constar en su fundamentación jurídico que la EJP 97/20, “tiene nada’ menos que 144 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en diversas ocasiones, como la providencia de. 1 de septiembre de 2022 que inadmitía un recurso de reposición interpuesto contra ja providencia de 16 de marzo de 2022 contra la que no cabía recurso alguno, amen de que lo que solicita está en via penal y en la misma debe resolverse, sin que quepa pronunciarse sobre las quejas presentadas sobre actuación de la LAJ o del juzgado o de las dilaciones indebidas, y en el auto de 1 de septiembre de 2022 que, deniega la aclaración de la providencia de 16 de marzo de 2022 pues no cabía complemento o subsanación alguna toda vez que el órgano judicial, resolvió motivadamente mediante remisión a lo que en la providencia de 3 de marzo de 2022 se disponía, pretendiendo una vez más obtener la resolución que le interesa con un claro fraude de ley”

Contra el meritado auto, interpuso el Señor , escrito que denominaba recurso de audiencia en que que terminaba diciendo : “Quedo en espera, de la resolución que se acuerde a este recurso de audiencia”.

Con fecha 6 de febrero de 2023 el juzgado dictó nuevo auto, cuya parte dispositiva dice: Desestimar integralmente el recurso interpuesto por el Graduado Social de conformidad con lo expuesto en el razonamiento jurídico único de la presente.

Se informaba en el auto de referencia que podía interponerse, en el plazo de cinco días, recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, e interpuesto el mismo, previa emisión del preceptivo informe por lltmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social de , D. , en el que por lo que hace a la EJP 97/20, en volvía a incidir en lo que ya se ha transcrito en el antecedente tercero de esta resolución, por DIOR de 15 de marzo de 2023, se ordenó la remisión de lo actuado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Por acuerdo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se ordenó formar el correspondiente expediente y dar cuenta la la Sala de Gobierno reunida en Comisión que adoptó el acuerdo de designar ponente.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: El auto que se recurre, con cita jurisprudencial, hace un estudio de los deberes procesales de las partes, conforme la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y especialmente conforme el Art. 75 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, norma esta específica de esta especializada jurisdicción, que en su apartado 1 dice: Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución



fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones y en su apartado 4: Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

En el caso que nos ocupa, la actuación del recurrente, habiendo comenzado solicitando una ejecución provisional que se numeró 97/ 20, recurrió el Decreto de la LAJ que se dictó para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social diera cumplimiento al Auto de fecha 24-2-2021 por el que se despacha ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 294 1 y 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y su pretensión era que se procediera a aplicar lo dispuesto en el artículo artículo 287 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Si la expuesta hubiera sido su única actuación, pese a lo erróneo de la petición, porque noma invocada, solo resulta aplicable respecto de sentencias firmes y el tramite en el que se pretendía su aplicación, era tramite de ejecución provisional, no podría imputarse, ni mala fe, ni temeridad, ni abuso de derecho que no se derivan simplemente de una petición errada que resulta inatendible. Pero habiendo continuado con peticiones extrañas que han provocado en la pieza de ejecución provisional 97/20, como se recoge en el auto de 23 de enero de 2023 y en el informe del Magistrado Titular del Juzgado de lo Social nº de , hasta 144 acontecimientos, lo que no se niega por el recurrente, habiendo sido el señor requerido de que cesara en su comportamiento irregular en diversas ocasiones que se especifican, continuando con su actuación obcecada y contumaz, recurriendo resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno, solicitando aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses y solicitando pronunciamientos extraños a las actuaciones, en términos que no se avienen a respeto y consideración debidos al juzgador y a la LAJ del juzgado, aunque el recurrente niegue que con su actuación persiga finalidad dilatoria ni, en general espuria, valorando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como ha resuelto por el Magistrado que dictó la resolución que se impugna, debe entenderse que existen datos suficientes para imputar al recurrente, cuando menos, la actuación infractora del deber de buena fe, pues la excesiva acumulación de escritos y recursos interpuestos por el Sr. , que se revelan innecesarios y que producen obstaculización de la marcha ordinaria del procedimiento, revela una actitud apócrifa, que no se acomoda ni a las reglas de la buena fe, ni se acomoda al deber de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional y excede del derecho a obtener tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución como ya ha indicado la Sala de Gobierno en precedentes resoluciones, como la de fecha 19 de diciembre de 2022 y



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

otras posteriores.

Por lo expuesto la resolución combatida a través del recurso de alzada que se analiza, ha de ser confirmada íntegramente resultando conforme a derecho la tipificación disciplinaria y proporcionada y ponderada la sanción impuesta en cuantía de 400 €, procediendo, en su consecuencia, la desestimación del recurso de alzada que se estudia y confirmada la sanción impuesta.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA** interpuesto por Don _____, contra el Auto de 23 de enero de 2023, por el que se acordó imponer a Don _____, multa de 400 euros, auto confirmado por el posterior de 6 de febrero de 2023, ambos dictados por el Ilmo. Sr Magistrado-Juez D. _____, Titular del Juzgado de lo Social nº de _____, en la Pieza Separada n.º 9/2023 del que dimana la presente resolución.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.15- **RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000027/2023** interpuesto por _____ por no estar de acuerdo con la resolución adoptada por el Juzgado de lo Social nº de _____ de los _____ en el PMU 10/2023 Auto de 23 de Enero de 2023, habiéndose nombrado Ponente María Luisa Alejandre Duran y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 17 de enero de 2023 el Juzgado de lo Social nº de _____, acordó abrir pieza separada de responsabilidad disciplinaria por mala fe procesal nº 10/2023 derivada de la Pieza de ejecución 116/2020 de Despido ante el Juzgado de lo Social nº de _____ de _____, se dictó auto de 23 de enero de 2023, en pieza de responsabilidad disciplinaria, en el que se acordaba “imponer al Graduado Social, D. _____, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

SEGUNDO.- D. _____ interpuso recurso de audiencia frente al referido auto.

TERCERO.- Se dictó auto de 6 febrero de 2023 en el que se acordaba desestimar íntegramente el recurso interpuesto.

CUARTO.- En fecha de 17 de febrero de 2023 el Graduado Social D. _____ interpuso recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

QUINTO.- En fecha de 16 de marzo de 2023 el Juez D. _____ emitió informe ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

SEXTO.- Recibidas las actuaciones en la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia se incoó el presente expediente de recurso de alzada nº 27/2023 interpuesto por D. _____

contra la resolución dictada en la Pieza de Imposición de multa 10/2023, nombrando ponente a la Magistrado D^a. María Luisa Alejandre Durán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, señalar que en la pieza de imposición de multa se han respetado los requisitos procesales previstos en la LOPJ, para la interposición de la multa:

- Artículo 554: En este caso se ha interpuesto multa, en cuantía prevista en el Código Penal para las faltas (actualmente delitos leves)

- Artículo 555. La corrección se ha impuesto por la autoridad ante la que se siguen las actuaciones, por el Juez D. _____, en pieza de responsabilidad disciplinaria

- Artículo 556. Se ha interpuesto recurso de audiencia, y posteriormente recurso de alzada ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia del TSJ Andalucía.

Manifiesta el recurrente que en lo que va de año, han sido “hasta el momento” 21 piezas de “PMU”, y que hay una “mala fe y abuso de la autoridad emprendidos contra mi” y que hay una “persecución”. Alega el recurrente que hay una grave indefensión al negarse el Juez a concretar los motivos de la multa.

SEGUNDO.- Entrando en el fondo de la cuestión, se recurre en alzada el autos de 23 de enero 2023 de imposición de multa, y el auto confirmatorio de 6-febrero-2023.

En el auto de imposición de multa se acordaba “imponer al Graduado Social, D. _____



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

, por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

En tal auto se hace un estudio de los deberes procesales de las partes, conforme la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y conforme el Art. 75 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se señala que los órganos judiciales rechazarán de oficio las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho, y que todos deberán ajustarse a las reglas de buena fe.

Tal auto dice que las actuaciones que efectúa el Sr. _____ en el proceso de que trae causa la pieza y que considera irregulares son:

- recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno.
- pedir aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses.
- recurrir resoluciones que simplemente son traslado para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre los escritos.
- faltar el respeto con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada Administración de Justicia y al Juzgador.
- utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

No niega que en el procedimiento a que trae causa la presente pieza de responsabilidad disciplinaria, haya enviado el Graduado Social recurrente 220 acontecimientos, lo que alega es que no es cierto que sus escritos tengan tal finalidad. Alega igualmente que no es cierto que la finalidad de los acontecimientos que ha presentado en el proceso, sea la de dilatar el procedimiento, y poder pretender en un momento posterior reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional.

Valorando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, debe entenderse que existen datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de la excesiva acumulación de escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, de modo que, amparándose en el derecho a articular los recursos y peticiones que la Ley brinda, opta por una actitud de hostigamiento procesal que verdaderamente excede de ese derecho. Y ello porque que el uso de los recursos y peticiones frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe, como ya ha indicado la Sala de Gobierno en precedentes resoluciones, ya que, como se indica en el auto recurrido, cuenta con 220 acontecimientos el proceso de despido y su ejecución del que deriva la presente pieza.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: “A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional”.

Esta Sala, al igual que en casos anteriores, aprecia temeridad y ejercicio abusivo de las facultades del Graduado Social en este procedimiento, por tal cúmulo de acontecimientos procesales, y entiende que es ajustado a derecho la imposición de la sanción disciplinaria, siendo correcto y proporcionado el importe de la multa en cuantía de 400 €.

Por lo anterior, la resolución combatida a través del recurso de alzada debe confirmarse por cuanto no se han desvirtuados los acertados fundamentos del Auto del Juez, y no apreciamos infracción de los preceptos alegados en el escrito de impugnación del recurso, ni vulneración de derechos o indefensión, en su consecuencia, procede la desestimación del recurso de alzada y dada la reiteración de la conducta del Sr. y el perjuicio a la Administración de Justicia, procedería ponerla en conocimiento del Colegio de Graduados Sociales de y para que en el ejercicio de sus competencias disciplinarias y aplicación del código deontológico considere la conducta de su colegiado a los efectos oportunos.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA** interpuesto por Don , contra el auto de 23 de enero de 2023 de imposición de multa de 400 euros y auto de 6-febrero-2023 de resolución de recurso de audiencia confirmatorio del anterior, dictado por el Juez D. -

, Titular del Juzgado de lo Social nº de , en la Pieza Separada nº 10/2023 del que dimana el presente procedimiento. Y dada la reiteración de la conducta del Sr. y el perjuicio a la Administración de Justicia, procedería ponerla en conocimiento del Colegio de Graduados Sociales de y para que en el ejercicio de sus competencias disciplinarias y aplicación del código deontológico considere la conducta de su colegiado a los efectos oportunos.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

1.16- *RECURSO DE ALZADA* NÚM. 00000028/2023 interpuesto por
por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en el PMU 5/2023 Auto de fecha 23 de
Noviembre de 2023 dictado por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiéndose
nombrado Ponente Manuel Estrella Ruiz y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad,
adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Con fecha 23 de noviembre de 2023, se dictó resolución por el Juzgado de lo Social nº de , habiéndose interpuesto recurso de alzada, siendo designado ponente en el expediente 28/2023, el Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, MANUEL MARIA ESTRELLA RUIZ, que da cuenta al Pleno de la Sala de Gobierno.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO.- Recurre en recurso de alzada ante ésta Sala, el Graduado Social
contra el auto de 23 de enero de 2023, dictado por el limo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Social nº de , en el seno de una pieza separada por temeridad, mala fe procesal y abuso de derecho, basando la sanción el Magistrado básicamente en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en el régimen de recursos introducido en el 247.5 LEC por la Ley 13/2009, que a su vez se remite a los artículos 556 y 557 LOPJ, y todo ello en congruencia con el artículo 75 LRJS que es del siguiente tenor:

"1- Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones (...)

(...) 4.- Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes a a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que



cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.

5.- El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales, en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior.

Según refiere el auto en cuestión las actuaciones que motivan la sanción al profesional son las siguientes: recurrir resoluciones contra las que se exprese que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses; pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución; recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al juzgador para resolver un recurso, o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito; faltar al respeto, con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador; utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas abusando de los recursos y aclaraciones.

Según refiere el auto, y efectivamente todo apunta a que es cierto, el fin que se pretende por el profesional, no es otro que dilatar el procedimiento y poder reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando se da la paradoja de que es el propio profesional quien las ocasiona. Se pretende igualmente obtener beneficio con los intereses, costas y plazos de indemnizaciones propias de las ejecuciones de la jurisdicción social, logrando así importantes réditos económicos que obviamente constituyen un claro fraude de ley, abusando del dato de que en la jurisdicción social no se exige depósito para recurrir a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, beneficiándose del caos procesal que el mismo genera con claro perjuicio a las partes contrarias, y como gráficamente recoge la resolución, desgaste mental, moral y físico del personal del juzgado, ocasionando bajas médicas del personal de la oficina judicial por depresión, destacando la de la anterior Letrada de la Administración de Justicia, generando un exceso de carga de trabajo en el Juzgado hasta el punto de ser objeto de actuaciones por parte de la inspección del Consejo y ocasionando como bien refleja el juzgador, que el Juzgado, se haya convertido en la práctica, en un Juzgado en el que nadie quiera estar más tiempo del mínimo imprescindible. La ejecución de la que nace la pieza separada cuenta con 276 acontecimientos, habiéndose requerido al profesional para que cese en su comportamiento en varias ocasiones.

Este ponente considera que todo lo descrito constituye sin duda una clara infracción disciplinaria por temeridad, mala fe, abuso de derecho y falta de respeto a las partes, autoridad judicial, y personal del juzgado, y así las cosas, siendo proporcional la sanción que se impone y que no es otra que la de 400 euros, el recurso debe ser íntegramente desestimado.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto confirmando la resolución debatida, dictada por el limo. Sr. D Angel Moreira Pérez, titular del Juzgado de lo Social nº de , en la pieza separada 5/2023, del que dimana la presente resolución, sanción que se confirma íntegramente.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

*1.17- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000029/2023 interpuesto por
por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en el PMU 4/2023 Auto de fecha 23 de Enero de 2023 dictado por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiendo sido nombrado Ponente Francisco José Guerrero Suárez y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente*

ACUERDO

En la Ciudad de Granada, a 18 de Julio de 2.023.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO. - *En fecha 17/01/23 se dictó por el Juzgado de lo Social Auto de Apertura de pieza separada por temeridad, mala fe procesal y abuso de derecho frente al Graduado Social D.*

Del referido auto se dio traslado al Graduado Social para alegaciones concediendo un plazo de tres días indicando que contra dicho auto no cabe recurso alguno. En fecha 20/01/23 el Sr. presentó recurso de reposición contra el referido auto por considerar que frente al mismo cabe recurso de reposición y efectúa alegaciones sobre el fondo.

Por providencia de 23/01/23 se inadmite a trámite el recurso de reposición, no obstante resuelve sobre el mismo y teniendo por efectuadas las alegaciones en el recurso, se tiene por evacuado el trámite específico de alegaciones en pieza separada.

SEGUNDO.- *En fecha 23/01/23 se dicta auto en pieza multa coercitivas num 4/23 , por el que se resuelve imponer al Graduado Social D. por temeridad, abuso de derecho , mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial, una multa de 400 euros.*

TERCERO.- *Contra dicho Auto el Sr. formuló recurso de audiencia en justicia ante*



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

el Juzgado de lo Social el 4/02/23. Por auto de 6/02/23 el Magistrado del Juzgado de lo Social de resuelve desestimar íntegramente el recurso interpuesto. En los razonamientos jurídicos se hace referencia a que las alegaciones contenidas en el mismo son buena muestra de la forma de proceder de este profesional en cuanto a las faltas de respecto y acusaciones que vierte de manera constante, no desvirtuándose lo acordado en la resolución recurrida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 LRJS.

Contra dicho auto el Sr. de conformidad con lo dispuesto en el art. 556 LOPJ, interpuso en tiempo y forma recurso de alzada ante la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia al que fue remitido con testimonio de la documentación oportuna y el preceptivo informe del Juez emitido con fecha 16 de marzo de 2023.

CUARTO.- La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia adoptó acuerdo de designar ponente a D. Francisco José Guerrero Suárez y llevar el mismo al conocimiento del Pleno de 18 de julio de 2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sanción impuesta por el limo. Juez D. se basa en el ar. 247 de la LEC que establece las reglas de la buena fe procesal, y artículo 75 LRJS que establece: “1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones. (...) 4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto.

La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. 5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la



aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior”.

SEGUNDO.- Los hechos objeto de sanción indicados en el auto que se impugna y se indican por el Magistrado son : “En esta ejecución, (ETJ nº 1/20) que tiene nada menos que 251 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en diversas ocasiones, como con el auto de 1 de septiembre de 2022 que deniega la aclaración de la providencia de 10 de marzo de 2022 que así mismo denegaba una aclaración de la providencia de 12 de julio de 2021 al no haber lugar por resultar clara por sus propios términos, y además el complemento de providencias no permitirlo legalmente, tratando de conseguir por activa y pasiva nueva resolución, sin respetar ninguna norma legal; en el auto de 1 de septiembre de 2022 que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de 13 de marzo de 2022 en cuanto a la petición 2o con remisión íntegra a la argumentación contenida en el Auto recurrido, y respecto de las peticiones 1o y 3o debe reseñarse que el recurso de reposición no es el cauce procesal para informar de una resolución de mera puesta en conocimiento de los autos ni para ventilar quejas sobre dilaciones indebida o infracciones del órgano judicial; La reposición interesada, la cual ha sido fraudulentamente utilizada por el Graduado Social D. , tal

y como viene siendo una constante por este profesional, pretende modificar dos resoluciones que se pronuncian en el mismo sentido sin aceptar lo resuelto (petición 2o), manifestando constantes quejas y solicitudes que nada tienen que ver con la resolución recurrida (como las peticiones 1o y 3o) dilatando indebidamente el procedimiento de ejecución, al estar liquidados y aprobados el principal y los intereses, tal y como corrobora el decreto de 29 de julio de 2022, por lo que entiende este juzgador que no queda ninguna actuación que practicar, ni esta es vía adecuada para continuar con las quejas sobre dilaciones indebidas o actuaciones de la LAJ; como en la providencia de 1 de septiembre de 2022 que inadmite el recurso de revisión de 2 de abril del 2022 presentado por la parte ejecutante contra el Decreto de 31 de marzo de 2022 dictado por la LAJ al estar impugnando una resolución que aprueba legalmente una tasación de costas que no fue impugnada, sin que proceda entrar en el fondo del asunto de las restantes cuestiones, en cuanto a la ejecución de la sentencia conforme a sus disposiciones en relación con el MET, dicha cuestión fue igualmente objeto del recurso de reposición contra el auto que resolvía la impugnación de intereses y que ha sido resuelto por el auto de 1 de septiembre del 2022 recaído en este mismo procedimiento, las restantes cuestiones sobre dilaciones indebidas o acusaciones y provocaciones sobre las actuaciones de la 1AJ y del juzgador , no merecen pronunciamiento alguno en esta vía más, y finalmente, tras las múltiples advertencias, mediante providencia de 19 de septiembre de 2022 se le vuelve a inadmitir un recurso de revisión interpuesto contra un decreto que inadmitía una reposición de una DO al ser esta una resolución que solo daba cuenta al juzgador para resolver.

Por su parte el recurrente en primer lugar expone dos cuestiones que no afectan a la resolución del presente recurso, sobre PMU 5/22 y respecto de cinco juras de cuentas y mantiene que está siendo objeto de una persecución por parte del Juez con la colaboración de la LAJ al



haber sido abiertas 21 piezas de PMU con un montante total de 8400 € en multas; en cuanto a la presente pieza de multa coercitiva alega que no se encuentra reglada . Y entrando al fondo el recurrente entra a valorar la ilegalidad de la providencia al inadmitir recurso de reposición frente al auto de apertura del expediente disciplinario y cuestiona la legalidad de los autos de 23/01/23 y de 6/02/23, insistiendo que esta siendo objeto de persecución por el Juzgador con la ayuda de la LAJ, que se ocultan deliberadamente resoluciones inadecuadas dictándose resoluciones ilegales que revelan faltas de respeto y acusaciones infundadas hacia su persona, con tremenda mala fe y temeridad por el Juzgador.

Pues bien, en primer lugar respecto a los defectos de forma alegados en relación al auto que acuerda la apertura de la pieza y el que impone la sanción , y el que resuelve el recurso de audiencia al interesado se encuentran debidamente fundamentados exponiendo los motivos por los que el Magistrado entiende conculcada la buena fe procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LRJS transcrito.

TERCERO.- En cuanto a la cuestión de fondo existen datos suficientes para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos presentados por el Sr. , incluidos alegaciones en audiencia y escrito de recurso de alzada.

Analizando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, ejecución 1/20, el profesional ha sido requerido en varias ocasiones por el Juzgador para que cesara en su comportamiento irregular . Concretando el Juez que en la ejecución 1/20 que han sido 251 acontecimientos impulsados por el recurrente; y concretamente cuando por el auto de 1/09/2022 se deniega la aclaración de la providencia de 10 de marzo de 2022 que a su vez denegaba la aclaración de la providencia de 12 de julio de 2021 al resultar clara en todos sus términos; así mismo frente al auto de 1/09/2022 que desestimaba el recurso de reposición de 13 de marzo de 2022, siendo que dicho recurso no es el cauce procesal para informar de una resolución de mera puesta de conocimiento, ni para ventilar quejas. La reposición interesada solo pretende modificar dos resoluciones con dilación indebida al estar liquidados y aprobados el principal e intereses; como la providencia de 1 de septiembre del 2022 que inadmite el recurso de revisión al estar impugnando una resolución que aprueba una tasación de costas que no fue impugnada... finalmente, tras advertencias se inadmite un recurso de revisión respecto el decreto que se limita a dar traslado dando cuenta al juez.

No procede sino remitimos a la relación de hechos del fundamento jurídico segundo.

En el caso de la presente pieza es el propio recurrente el que reconoce en escrito de recurso de alzada no solo los recursos de aclaración a los que alude el Juez sino alguno más y frente a una única actuación judicial, todas estas actuaciones han sido reconocidas expresamente por el Sr.

y evidencian actuaciones irregulares e improcedentes, siendo el mismo modus operandi que hemos podido analizar en diversos recursos de alzada resueltos por esta Sala: pedir aclaraciones de las aclaraciones para conseguir una resolución ajustada a sus intereses, recursos innecesarios, escritos con faltas de respeto a la LAJ y al Juzgador, etc. Y tal actuación provoca



dilaciones en claro fraude de ley, lo que denota evidente mala fe procesal, abuso del derecho y temeridad procesal, y como hemos indicado en otros recursos interpuestos por el mismo recurrente al haber sido sancionado por conductas parecidas en otros procesos, aunque el recurrente tenga derecho a articular los recursos que la Ley establece frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, en este caso estamos ante un uso de esa facultad que excede a ese derecho.

Las actuaciones que el magistrado-juez de lo social n° de considera irregulares o fuera de la Ley son: A) Recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno, para intentar conseguir nueva resolución ajustada a sus intereses; B) pedir aclaraciones de las aclaraciones con el mismo fin anterior; C) recurrir resoluciones de mero trámite que solo dan traslado al Juzgador; D) faltas de respeto con acusaciones y provocaciones continuas a la LAJ y al Juez; E) utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad.

En respuesta a los distintos motivos de impugnación mediante la alzada, procede inadmitirlos. Respecto del primero, el Magistrado Juez de lo Social en fecha 27 de enero de 2023 dicta en forma de Auto acuerdo por el que apertura expediente disciplinario al referido profesional, y en dicho acuerdo, de alcance gubernativo, da traslado para alegaciones por tres días, disponiéndose que dicha resolución es firme; acuerdo contra el que se interpone recurso de reposición pese a su firmeza. A dicha cuestión resuelve el juez por providencia de 23 de enero de 2023 en aplicación razonada del artículo 75 LRJS, a la que no procede sino remitirnos. De forma que por Auto de igual fecha resuelve imponer en pieza separada (PMU 4-23) al ahora recurrente una multa de 400 euros, por temeridad, abuso del derecho, mala fe procesal y faltas de respeto a las partes y a la autoridad judicial, informando de los recursos que pueden ser interpuestos de audiencia en justicia y/o de alzada. Interponiéndose recurso de audiencia que es resuelto por Auto de 6 de febrero de 2023, pudiéndose interponer contra dicha resolución desestimatoria recurso de alzada. Desde el inicio se relacionan los hechos objeto del procedimiento y se da traslado para alegaciones y de los recursos que caben, por lo que no se precisa indefensión alguna.

Respecto del segundo motivo, basta una mera lectura de los escritos presentados por el recurrente, como de los proveídos de la LAJ y del Juez, para advertir las provocaciones a estos de forma continua.

Llama la atención las evidentes faltas de respeto hacia el Magistrado Juez y LAJ en las distintas alegaciones del procedimiento de ejecución y el disciplinario, al dirigirse en términos como "extraño proceder", "mala fe de Ssa", "le dará igual lo que exponga en este recurso", o premeditación y alevosía", quiere ocultar la inquina y persecución hacia mi persona, generalidades maléficas, etc.

En sus escritos anteriores: "nos parece inconcebible que toda una LAJ...desconozca a que no le corresponde...", "ni tan siquiera ha sido capaz esa Secretaria, de exigirle a la administración condenada...", "algo importante debe existir para que la letrada continúe resistiéndose..." acto de soberbia de la letrada...", "Ssa es quien ha debido interesarse de oficio, cosa extraña..."

Se tienen a la vista la documental referida a los procedimientos indicados.

En cuanto al motivo de recurso tercero, decir que los hechos del procedimiento sancionador



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

están delimitados. Y respecto del cuarto motivo, decir que claramente la actuación del profesional entorpece la buena marcha de la Administración de justicia, cuando de las distintas cuestiones se la ha dado respuesta sobre lo pretendido, intentando aclaraciones respecto de lo que no es necesario aclarar o recurrir lo que ya es firme. Y exactamente lo mismo cabe argumentar respecto de los motivos de alzada quinto y sexto, pues los hechos están delimitados

En cuanto al séptimo motivo, decir que no procede los requerimientos interesados a esta Sala, que tiene a la vista el expediente íntegro ETJ 1 /20 para la resolución del recurso.

En el motivo octavo del recurso de alzada, se insiste por la parte en la reiteración de las mismas pretensiones que ya fueron denegadas. Y en el noveno, el recurrente reconoce el hecho, resolviendo el Juez con arreglo a Derecho.

CUARTO.- Por lo expuesto, entendiendo acorde a derecho la tipificación disciplinaria que ahora nos ocupa, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción que debe de regir en cualquier régimen jurídico sancionador, y que en reiterados recursos de alzada hemos mantenido, se acuerda correcto el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda **DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA** interpuesto por el Graduado Social Don _____, confirmando íntegramente la sanción impuesta de **MULTA** de 400 euros en PMU 4/23 del Juzgado de lo Social nº _____ de _____ en Procedimiento Ejecución num 1/20.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.18- **RECURSO DE ALZADA NÚM.** 00000030/2023 interpuesto por

por no estar de acuerdo con la resolución adoptada en el PMU 7/2023 Auto de fecha 23 de Enero de 2023 dictado por el Juzgado de lo Social nº _____ de los de _____, siendo Ponente de la presente causa José Luis López Fuentes y la Sala de Gobierno, oído el Ponente y por unanimidad, adopta el siguiente

ACUERDO

En la ciudad de Granada, a 18 de julio de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

PRIMERO.- En fecha de 17 de enero de 2023 el Juzgado de lo Social nº de , acordó abrir pieza separada de responsabilidad disciplinaria por mala fe procesal nº 14/2023 derivada del Procedimiento de Ejecución de Título Judicial nº 61/21 seguido ante el Juzgado de lo Social nº de de , dictándose en fecha 23 de enero de 2023 auto en el que se acordaba “imponer al Graduado Social, D. , por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio”.

SEGUNDO.- En fecha de 20 de enero de 2023 el Graduado Social D. interpuso recurso de reposición frente al referido auto, el cual fue desestimado por auto de fecha 6 de febrero de 2023

TERCERO.- En fecha de 15 de febrero de 2023 el Graduado Social D. interpuso recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

CUARTO.- En fecha de 16 de marzo de 2023 el Juez D. dictó informe ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia se incoó el presente expediente de recurso de alzada nº 18/2023 acordando nombrar Ponente al Magistrado D. Alberto del Aguila Alarcón.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 247.3 LEC que “3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Secretario judicial se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala”, disponiendo el artículo 75.4 LRJS que “Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones



temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa.

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas”.

SEGUNDO.- *El auto ahora recurrido y en lo que se refiere al procedimiento de ejecución de título judicial nº 61/21 refiere que “Las actuaciones que efectúa este profesional que este Juzgador considera irregulares o fuera de la ley son las siguientes: A) Recurrir resoluciones contra las que se expresa que no cabe recurso alguno para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses. B) Pedir aclaraciones de las aclaraciones para intentar conseguir una nueva resolución ajustada a sus intereses. C) Recurrir resoluciones que simplemente dan traslado al Juzgador para resolver un recurso o a la parte contraria para que se pronuncie sobre un escrito. D) Faltar al respeto con acusaciones y provocaciones continuadas a la Letrada de la Administración de Justicia y al Juzgador. E) Utilizar los cauces procesales para plantear infinidad de quejas utilizando los recursos y aclaraciones con esta finalidad”.*

El ahora recurrente recurre la resolución dictada al considerar que lo único que ha hecho ha sido hacer uso de los recursos legalmente previstos contra determinadas resoluciones judiciales.

TERCERO.- *Centrado así el objeto del debate en esta alzada y para su resolución, partiendo de la competencia no discutida de esta Sala para la resolución del recurso interpuesto a virtud de la remisión que el art. 247.5 LEC –introducido por la reforma de operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre-, hace al régimen de recursos establecido concretamente en el art. 556 LOPJ, acabando con no pocas discusiones sobre el carácter de actuación jurisdiccional y gubernativa de este tipo de sanciones intraprocesales, habremos de traer a colación la doctrina emanada de las distintas Salas del Tribunal supremo por las que se conceptúa y describe delimitándola en sus distintos supuestos la mala fe procesal.*

Así, por citar alguna reciente, el ATS, Sala 3ª, Secc. 4ª de 9-7-19, viene a declarar que “Sobre la mala fe se pronunció el ATS de la Sala especial del art. 61 LOPJ de 18 de septiembre de 2013 (recurso 6/2013), con criterio luego reiterado en el ATS de 28 de junio de 2016 (recurso 3/2016) en el sentido de afirmar que “La mala fe se puede apreciar, precisamente, al ejercitar pretensiones carentes de todo fundamento, como oportunamente cita el Ministerio Fiscal en su informe, en armonía con la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de los conceptos de temeridad o mala fe,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

que ha seguido una línea continua a partir de multitud de sentencias de esta Sala. Así, lo expuesto en la STS 37/2006, con cita de numerosos precedentes, que nos dice que "aunque no hay un concepto o definición legal de temeridad o mala fe se suele entender por esta Sala, como pauta general, que tales circunstancias han concurrido cuando la pretensión ejercida carezca de toda consistencia y que la injusticia de su reclamación sea tan patente que deba ser conocida por quien la ejercitó"; añadiendo la STS 842/2009 que la temeridad o la mala fe pueden aparecer en cualquier momento de la causa."

En el mismo sentido se pronuncia el ATS, Sala 2ª de 14-2-18, recordando que la mala fe se puede apreciar al ejercitar pretensiones carentes de todo fundamento (ATS., Sala art. 61, de 18 de septiembre de 2013, rec. 6/2013).

Igualmente, la STS de 1-17-13, analiza un supuesto, en el que conforme a los arts. 11 LOPJ y 247 LEC, se califica de persistencia en la mala fe procesal de la parte recurrente y en un abuso del proceso y un fraude de ley procesal que tienen, como manifestación principal pero no única, la interposición de una demanda en Madrid el 31 de julio de 2008, conociendo la inhabilidad del mes de agosto, para entorpecer la demanda de extinción de los arrendamientos que la parte hoy recurrente sabía que necesariamente tendrían que interponer contra ella las hoy recurridas una vez transcurridos tres meses desde el requerimiento de 9 de mayo de 2008, plazo que vencía precisamente en dicho mes inhábil, y así poder alegar la hoy recurrente, en el presente litigio, la pendencia del litigio de Madrid en busca de un sobreseimiento (art. 421.1 LEC) o, al menos, de una suspensión (art. 43 LEC).

Y recuerda por lo que aquí ahora interesa, que como declara la sentencia de esta Sala de 22 de febrero de 2013 (rec. 1352/10), "aunque la astucia pueda ser una de las habilidades legítimamente desplegadas en el proceso, no es institucionalmente admisible reducir el proceso a un simple juego de astucia cuyo único objetivo sea perturbar a la parte contraria".

En la misma línea, contraria a la astucia procesal como un fin en sí misma, se pronuncian también las sentencias de 18 de marzo de 2010 (rec. 2621/05) y 20 de diciembre de 2002 (rec. 4231/99).

La STS de 25-2-92 (RJ 1992/1552) declara que "no responde a la buena fe procesal, el replanteamiento de un asunto que se sabía no había prosperado en primera instancia, y abuso manifiesto de la jurisdicción, en la petición reconvencional que reproduce el litigio, e incluso fraude procesal al mantener vivos dos procesos sobre la misma cuestión"

Finalmente cabe decir que en general en relación con el concepto de buena fe, es doctrina comúnmente admitida (STS de 1 de marzo de 2001) que la exigencia de ajustar el ejercicio de los derechos a las pautas de la buena fe según lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil constituye un principio informador de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al comportamiento considerado como honrado y justo, e igualmente, es doctrina constante y reiterada (STS de 12 de julio de 2002) que la buena fe es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo y leal, que supone una exigencia de actuación coherente y de protección de la confianza ajena, y en el ámbito del derecho laboral, interpretando el precepto citado más arriba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) en su



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Sentencia nº 5715/2020 de 17 diciembre, se señala que para la imposición de una sanción “Debe concurrir mala fe: entendida como la conducta dirigida a causar un perjuicio a la parte procesal contraria; y/o temeridad: entendida como el ejercicio de una pretensión, o de una oposición, carente de toda consistencia, sea de modo consciente o doloso, sea de modo culposo, en la medida que la parte que la sostiene cuenta con elementos con los que no puede dejar de tener conocimiento de que no lleva razón.

Pues bien, visto el contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, sin perjuicio de que el mismo tenga derecho a articular los recursos que la Ley brinda frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, sin embargo, estamos a juicio de esta Sala ante un uso de esa facultad que excede ese derecho.

No niega el recurrente que en el procedimiento a que trae causa la presente pieza de responsabilidad disciplinaria, consten 147 acontecimientos, lo que alega es que no es cierto que sus escritos tengan finalidad de dilatar el procedimiento, y poder pretender en un momento posterior reclamar por dilaciones indebidas a la Administración de Justicia por responsabilidad patrimonial, cuando son causadas por el mismo profesional.

Valorando lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, debe entenderse que existen datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de la excesiva acumulación de escritos y recursos interpuestos por el Sr. _____, de modo que, amparándose en el derecho a articular los recursos y peticiones que la Ley brinda, opta por una actitud de hostigamiento procesal que verdaderamente excede de ese derecho. Y ello porque que el uso de los recursos y peticiones frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe, como ya ha indicado la Sala de Gobierno en precedentes resoluciones.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: “A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional”.

Así, en la diligencia de ordenación de fecha 17 de marzo de 2022, la Letrada de la Administración de Justicia hace constar lo siguiente: “Por presentados los anteriores escritos de fecha 12-2-2022 por el Graduado Social D. _____, únanse a los autos



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

de su razón, visto su contenido se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en los mismos, haciéndole saber que por sobre carga de trabajo en la ejecución se ha tramitado en la fecha señalada.

Con respecto a la Agencia Tributaria son correctos los datos aportados.

Remítase la presente ejecución a la UPAD del Juzgado de Lo Social a fin de que por la Letrada de la Administración de Justicia de la UPAD se proceda a señalar el incidente de ejecución solicitado por la parte ejecutante”.

Dicha diligencia de ordenación es recurrida por el Graduado Social Sr. mediante un escrito en el que vuelve a redundar en el contenido de escritos anteriores presentados, haciendo alegaciones que exceden en mucho del contenido propio de un recurso de reposición tales como que “ La LAJ está a años luz de reconocer cuanto se viene denunciando en aquel servicio” o que “observese la incoherente e incongruente respuesta a su vez” o que “Pero y sobre el 1º punto, por qué no se nos ha informado. Acaso es que de contestarse resultaría escandaloso”.

En el Decreto de 16 de marzo de 2022, la LAJ resuelve un recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 10 de febrero de 2022 por entender que lo único acordado era trámite del procedimiento. Dicha DIOR señalaba que “En relación con el escrito de fecha 19-8-2021 visto su contenido se le hace saber que una vez anotado el embargo de los vehículos, y recibida la certificación de titularidad y cargas se practicarán la liquidación de los mismos, y para el caso de que carezcan de valor a efectos de subasta se procederán a tramitar la declaración de insolvencia provisional. En cuanto a la petición de liquidación intereses no ha lugar toda vez que constan liquidados por auto de fecha 03-06-2021 conforme a la sentencia nº 360/2019 conteniendo los intereses moratorios sustantivos.

Con respecto al escrito de fecha 12-1-2022 remítase la presente ejecución a la UPAD del Juzgado de lo Social a fin de que por SSª se resuelva sobre la cuestión planteada”.

Frente a dicho decreto se interpone recurso de revisión alegando el recurrente “provocan estos recursos de revisión como el que aquí nos ocupa y todo ello, sencillamente porque no solo le viene en gana a la LAJ” o que “Pero es que además sin reparo ni pudor, que la LAJ dispone en el Decreto, manifestaciones que como en el caso anterior, exceden del ejercicio del derecho de defensa”.

En un escrito presentado el 30 de junio de 2022 el recurrente señala “No nos cabe la más mínima duda, a que todo esto que viene sucediendo, se debe a un interés mas que probado, en dilatar en lo posible la ejecución, como viene sucediendo en las otras cinco idénticas a esta”, imputaciones de hechos al Juzgador y a la Letrada de la Administración de Justicia, carentes de cualquier justificación.

Al igual ocurre con el escrito presentado el 11 de octubre de 2022 al señalar el recurrente “Que comunicado el Auto de 10 de octubre, que no voy a permitir a que por SSª me impute la falsedad a que con mis actuaciones ocasiono dilaciones indebidas. Y como prueba fehaciente a que no solo es incierto sino que es todo lo contrario, a que es el Juzgado y en concreto las actuaciones de la LAJ la que sí que ocasiona esas dilaciones indebidas de forma persistente, que mire por donde, hoy mismo se ha celebrado un incidente de la ETJ 2/20, y en donde SSª me ha



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

trabado la palabra por hacer manifestaciones sobre los acontecimientos que allí constan, y en donde de forma meridianamente clara, sin hipótesis ni conjeturas que podrá ver y sobre lo que no me ha dejado decir en la vista, esto es, que las dilaciones que consta en la ETJ referida, no solo es que resulten indebidas, sino que evidencia un abandono, dejadez e indiferencia injustificada en las acciones del Juzgado. Y esas son las dilaciones que SSª se niega a observar y sobre las que no quiere saber nunca nada. Peor aún, las consiente y de ahí que insista en decir, que no permitiré más que a través de la mentira, se me impute dilaciones indebidas”.

O en el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 17 de enero de 2023 en el que el recurrente señala “En la PMU 5/22 dimanante de esta ETJ, y en donde SSª acumuló con mala fe...”

Esta Sala, al igual que en casos anteriores, aprecia temeridad y ejercicio abusivo de las facultades del Graduado Social en este procedimiento, tal cúmulo de acontecimientos procesales, y entiende que es acorde a derecho la tipificación disciplinaria realizada por el Juez del Juzgado de lo Social nº de , en aplicación régimen jurídico sancionador, de modo que estimamos correcto el importe impuesto, debiendo mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

Se desestima pues el motivo analizado, procediendo pues por todo lo expuesto y salvo mejor criterio de la Sala elevar la siguiente propuesta:

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Graduado Social D.

contra el auto del Juzgado de lo Social nº de de fecha 6 de febrero de 2023, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el auto de fecha 23 de enero de 2023 por el que se interponía al recurrente una multa de CUATROCIENTOS EUROS.

Particípese el presente Acuerdo al Órgano citado para su ejecución y notifíquese a la interesada a través del Decanato de los Juzgados de para su conocimiento y efectos procedentes, haciéndole saber que el presente acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

2.- MEDIDAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO

2.1- ALARDE nº 00000064/2023 confeccionado por D./Dª. MARIA DOLORES MARTIN SARMIENTO de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE MARCHENA, con motivo de su Cese y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, Don Luis Miguel Columna Herrera, y por unanimidad acuerda APROBAR EL ALARDE



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

CONFECIONADO al ajustarse a lo previsto en los artículos 317,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 124 y siguientes del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.

El anterior alarde es de 11 de julio de 2016, y se prestó conformidad. El periodo al que se hace referencia está comprendido entre el 10 de octubre de 2016 y 9 de junio de 2023. No hay asuntos pendientes exclusivamente de dictar sentencia o auto definitivo.

No se ha hecho constar el número de presos preventivos.

El resumen de asuntos refleja los siguientes datos:

En el ámbito civil hay 331 procedimientos pendientes, lo que se no considera un número elevado, estando todos en trámite, y todos excepto 18 asuntos anteriores al año 2021, siendo el más antiguo del año 2014. Están todos en tramitación, y los retrasos son por causas ajenas al Juzgado.

En materia de derecho de familia ocurre algo similar pues hay 35 procedimientos pendientes, todos están en trámite.

Relativos a la capacidad de las personas hay 65 procedimientos en tramitación, la gran mayoría por revisión de medidas incoadas recientemente. Son pocos los pendientes por rendición de cuentas.

Así mismo hay también 60 procedimientos de Jurisdicción Voluntaria en trámite.

En lo que se refiere a procedimientos en ejecución, el número de pendientes es de 605, que se considera ajustada a la carga de trabajo del Juzgado.

Por todo ello, podemos afirmar que el Juzgado funciona correctamente en el ámbito civil.

En el ámbito penal el número de diligencias previas vivas es de 69 y el de procedimientos abreviados de 28, número muy aceptable, y en todas ellas se ve constante movimiento de las mismas. Respecto de los Procedimientos Abreviados, debemos reseñar que los que están pendientes del escrito de acusación del Ministerio Fiscal son muchísimos más de los deseados, en concreto hay aún pendientes del año 2019 y 2020.

El número de juicios por delitos leves pendientes es de 34, si bien sólo lo están pendientes de enjuiciar 25, lo que es adecuado, más cuando el señalamiento más lejano es en septiembre de éste año.

El número de ejecutorias pendientes de 24, lo que supone que dicha materia está absolutamente controlada.

No existe procedimiento de la ley del Jurado, ni sumarios en tramitación.

El resumen general es que se ha hecho un buen trabajo por la cesante, quien reconoce la estimable ayuda de la LAJ y de los seis funcionarios del Juzgado, pues los números de procesos pendientes son relativamente bajos, si tenemos en consideración el número de asuntos que registra ese Juzgado, que según la memoria del año 2022 recientemente aprobada son 677 asuntos civiles y 638 asuntos penales.

Particípese el presente Acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando copia del alarde (art. 127 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial), y al órgano afectado para su conocimiento y efectos procedentes.

2.2- ALARDE nº 00000061/2023 confeccionado por D./Dª. ISABEL NAVA LOZANO de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE UBEDA, con motivo de su Cese y la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente Don Esteban Brito López, y por unanimidad, acuerda APROBAR EL ALARDE CONFECCIONADO al ajustarse a lo prevenido en los artículos 317.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 124 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial. El periodo al que se refiere está comprendido entre el 26 de septiembre de 2015 y el 8 de junio de 2023. El resumen globalizado de asuntos recoge una pendencia en el orden jurisdiccional civil de 159 procedimientos en fase de tramitación, 42 procedimientos de derecho de familia, 1 procedimiento sobre la capacidad de las personas, 11 asuntos de jurisdicción voluntaria y 4 procedimientos en fase de ejecución. En el orden jurisdiccional penal existen 101 diligencias previas pendientes, 47 procedimientos abreviados, 23 procesos por delitos leves y 2 asuntos pendientes exclusivamente de dictar sentencia.

En el ámbito civil se observa una pendencia muy moderada tanto en los procedimientos en fase declarativa como en ejecución, muy escasos estos últimos, con proveídos en su mayor parte actualizados, existiendo 28 sin incoar correspondientes al año 2023 debido, según se expone, a las incidencias de la huelga de funcionarios y uno pendiente de dictar sentencia (el 507/2022, pendiente de la recepción de una prueba documental).

En lo referido a los procedimientos de familia, la pendencia es igualmente baja, con proveídos en su mayoría al día, habiendo uno de ellos pendientes de dictar sentencia (245/2023), si bien el último proveído es del día anterior al cese de la titular, siendo de esperar que la sentencia será dictada en breve, sin que se recojan en la relación ejecutorias pendientes

En el ámbito penal, tiene igualmente una pendencia más que razonable, siendo la Diligencia Previa más antigua de año 2020 y el resto de los años 2022 (25) y 2023 (75) y en cuanto a los Procedimientos Abreviados hay 1 de 2022 y el resto de 2023 (46), hay además 23 Juicios de delito leve, todos de 2023, de los que 21 están pendientes de celebración con fecha de juicio más lejana el 3/10/2023, sin que aparezcan en la relación ejecutorias penales pendientes.

El Juzgado, a la vista del alarde, se encuentra en una muy buena situación.

Particípese el presente Acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando copia del alarde (art. 127 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial), y al órgano afectado para su conocimiento y efectos procedentes.

2.3- ALARDE nº 00000065/2023 confeccionado por D./D^a. JUAN LUIS JIMENEZ REY de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE PUERTO REAL, con motivo de su Cese y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, don Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y por unanimidad, acuerda APROBAR EL ALARDE CONFECCIONADO al ajustarse a lo previsto en los artículos 317.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 124 y siguientes del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.

El periodo a que se contrae el alarde está comprendido entre el 11 de julio de 2012 y el día 8 de junio de 2023. El anterior Alarde fue confeccionado en 21 de mayo de 2012, al que el Juez ahora cesante prestó en su día conformidad.

A tenor del informe que emite el propio juez que confecciona el alarde, hay 9 procedimientos pendientes del dictado de sentencia dentro de los 19 consignados en la casilla del Alarde.



El resumen de asuntos refleja los siguientes datos:

- 1) No hay procedimientos anteriores a Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de Jurisdicción contenciosa, sin incluir Derecho de Familia.*
- 2) 950 procedimientos posteriores a la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de Jurisdicción contenciosa sin incluir Derecho de Familia, de entre ellos 867 en trámite previo a sentencia o resolución de fondo; 81 terminados en la instancia en trámite de notificación; y 2 terminados en la instancia en trámite de recurso pendiente de elevar.*
- 3) 137 Procesos relativos al Derecho de Familia, de entre ellos 109 en trámite previo a sentencia o resolución de fondo; 27 terminados en la instancia en trámite de notificación; y 1 terminado en la instancia en trámite de recurso pendiente de elevar.*
- 4) 58 asuntos relativos a Capacidad de las Personas.*
- 5) 6 procedimiento de Jurisdicción Voluntaria.*
- 6) 1049 Procedimientos Civiles de Ejecución sin incluir Derecho de Familia.*
- 7) 83 Procedimientos Civiles de Ejecución de Derecho de Familia.*
- 8) 1 sumario pendiente.*
- 9) 98 Diligencias Previas en tramitación.*
- 10) 42 Procedimientos Abreviados en trámite.*
- 11) 91 Juicios por Delitos Leves y Delitos, de entre ellos 64 en trámite previo a sentencia o resolución de fondo; 26 terminados en la instancia en trámite de notificación; y 1 terminado en la instancia en trámite de recurso pendiente de elevar..*
- 12) Ningún proceso de Habeas Corpus.*
- 13) Ningún Proceso de la Ley del Jurado.*
- 14) 73 Ejecutorias penales.*

El juzgado tiene un funcionamiento muy desigual en los dos órdenes. Así mientras que en el penal los datos que en general presenta son bajos, como después de dirá, en el ámbito civil la situación no es tan buena, destacando los 950 procedimientos de Jurisdicción contenciosa sin incluir Derecho de Familia y, sobre todo, los 1049 Procedimientos Civiles de Ejecución sin incluir Derecho de Familia. A ello ha contribuido sin duda el elevado número de ingresos que en Civil experimenta el Juzgado, como el otro de Puerto Real, que excede en más del doble de la carga referencial de trabajo para este tipo de órganos, que como es sabido se encuentra fijada (Orden JUS/1455/2018) en los 680 asuntos civiles incluida jurisdicción voluntaria y ejecuciones, siendo el caso que el número de asuntos registrados en dicho orden por el Juzgado objeto de examen en 2022, según última Memoria del TSJA, se halla aproximadamente en los 1433 asuntos. A esta pendencias, sin duda hay contribuido la incidencia de la huelga de los LAJ y del funcionariado, según se hace constar en el informe de Juez cesante.

En el ámbito penal los números, como dijimos son bastante mejores. Se diría que muy aceptables. A ello no es ajena el ingreso de asuntos en este orden, sólo ligeramente superior la carga referencial fijada para los órganos mixtos, que se sitúa en los 1.000 asuntos penales excluida ejecución (Orden JUS/1455/2018), siendo el caso que, según datos de la última Memoria, este



órgano incoó aproximadamente 1181 asuntos. De ahí que las 98 Diligencias Previas en tramitación es cifra muy razonable. Igualmente es muy aceptable el número de Procedimientos Abreviados pendientes (42). Es, sin embargo, algo elevada la cifra de Delitos Leves pendientes (91), siendo normal la de las ejecutorias penales (73).

En consecuencia, no obstante las indicaciones anteriores, se puede afirmar que si bien el juzgado tiene un funcionamiento manifiestamente mejorable en el ámbito civil, no se aprecia que deba arbitrarse por ahora ninguna medida de seguimiento o control de su actividad.

Particípese el presente Acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando copia del alarde (art. 127 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial), y al órgano afectado para su conocimiento y efectos procedentes.

2.4- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000016/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÓRDOBA el día 20/04/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por la Unidad Inspectora correspondiente a la Presidencia de la Audiencia Provincial, el 23 de octubre de 2018 actuando por delegación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La plantilla del Juzgado está compuesta por 1 Jueza, 1 Letrada de la Administración de Justicia, 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 2 funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, así como 1 funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. La distribución de cometidos entre el personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el órgano, la realiza la Letrada de la Administración de Justicia en uso de sus facultades, habiendo dictado instrucciones verbales al respecto, que se estiman adecuadas. Es de resaltar que el 20 de octubre de 2022 por la LAJ se adoptó el Acuerdo Gubernativo 1/2022 a fin de dar instrucciones a los funcionarios como consecuencia del inicio del periodo de auto refuerzo y con la finalidad de paliar la gran pendencia existente en la tramitación de los procedimientos monitorios, incoación del resto de asuntos civiles y escritos pendientes de proveer. Ello ha contribuido a la bajada de procedimientos en periodo de auto refuerzo. La distribución de trabajo, sin perjuicio de la separación de la sección civil y penal, se estima correcta y adecuado que no exista compartimientos estancos que permitan el conocimiento de las materias en especial, registro civil y penal, para no paralizar el funcionamiento del juzgado. Por la Letrada de la Administración de Justicia se manifiesta que la plantilla compuesta por cinco funcionarios es insuficiente. Teniendo en cuenta que además de las funciones jurisdiccionales este órgano judicial asume la llevanza de Registro Civil, con la carga administrativa que ello conlleva, así como la continua asistencia de ciudadanos particulares a los que hay que informar y atender. Actualmente aunque hay funcionarios con funciones expresas de registro civil, el auxilio judicial y la gestora de penal, en la atención al público a menudo es necesaria la intervención de otros miembros de la plantilla para atender a los ciudadanos en el Registro Civil.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En relación al reparto este Juzgado recibe, para compensar respecto al otro juzgado del partido que tiene competencias en violencia de género, más asuntos civiles (los civiles en materia de tráfico se reparten dos tercios para el núm. 2 y un tercio para el núm. 1) y más asuntos penales (todos los exhortos penales se reparten en su integridad a este juzgado, salvo los de violencia de género). Como consecuencia de ello el juzgado debería de contar con un funcionario más, preferentemente de tramitación, para poder atender correctamente todas las funciones que tiene encomendado este órgano judicial.

El Juzgado está ubicado en edificio donde se halla la sede judicial de la localidad, sito en C/ Romero Robledo, s/n, en un edificio de nueva construcción, inaugurado el 20 de enero de 2005, con amplias instalaciones. En el mismo están situados los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 y 2, Registro Civil, Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y Decanato. El Juzgado objeto de la visita se encuentra en la planta segunda de dicho edificio, y además dispone de un Archivo propio. El estado de las instalaciones es correcto, aunque con frecuentes averías en el sistema de calefacción y aire acondicionado. La Sala de Vistas se encuentra situada en la planta baja del edificio judicial y se utiliza de forma compartida con el Juzgado número uno de la localidad, celebrándose juicios de forma alternativa, una de cada dos semanas, coincidiendo con las alternancias en las guardias. Los funcionarios se encuentran todos juntos en una sala, que en ocasiones lleva a quedarse pequeña, debido al mobiliario (armarios, sillas, mesas, etc.) que se precisan. Las medidas de seguridad se prestan por efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran en situación de reserva, y en la actualidad se cuenta con tres Agentes, que realizan sus funciones conforme al turno establecido. En las dependencias del Servicio Común se ubica el sistema de videoconferencia utilizando dicho servicio para la cumplimentación de exhortos, practicando cada órgano las propias en las Sala de vistas que también cuenta con equipo.

El estado general del estado de las instalaciones es bueno, si bien al contar el edificio con algunos años van surgiendo averías en baños, calefacción, etc. Hay que destacar como incidencia los múltiples problemas que genera tanto la alarma de incendios como la alarma de acceso, las cuales a día de hoy, pese a que se ha requerido intervención en numerosas ocasiones, siguen sin funcionar correctamente.

La utilización y acceso a través de las distintas aplicaciones telemáticas a los servicios ofertados desde el punto neutro judicial son correctos, así como la observancia y cumplimiento por parte del personal del Código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia (Instrucción 2/2003 del CGPJ, de 26 de febrero de 2003) y el cumplimiento de las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia 4/2009 y 5/2010 y del Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010 (en este caso, en todos aquellos registros que son compatibles o están previstos en la aplicación informática Adriano). Cuentan con el uso de la aplicación informática Lexnet, que se lleva a cabo por la oficina judicial siempre que sea posible realizarlas a través de profesionales incluidos en la aplicación.

Se indica que los equipos informáticos se bloquean con frecuencia, ya que no cuentan con capacidad necesaria para tratar el gran número de datos que se utilizan a diario. Por la Letrada de la Administración de Justicia se informa que el sistema de firma digital da numerosos problemas,



siendo lento el acceso al mismo y fallando el reconocimiento de certificado digital frecuentemente. Las instrucciones dadas por la LAJ es que se digitalice toda la documentación que entre en el juzgado, a excepción de los acuses de recibo y los atestados que no son presentados telemáticamente por la Guardia Civil. No obstante lo manifestado por la LAJ, sería necesario una mejor cobertura de plazas vacantes y ausencias para que, en juzgados como este con una carga de trabajo asumible y una pendencia no excesiva, no se produzcan una acumulación de asuntos ante cualquier incidencia en el personal dada la poca dotación de la plantilla.

Los libros se llevan informáticamente al registrare en la aplicación Adriano todos los procedimientos tanto civiles como penales, actualizarse fases y estados y crear el acontecimiento necesario. Como libros físicos se llevan el Libro de presos, el Libro de piezas de convicción y el de tomas de posesión y ceses.

El movimiento de la cuenta de depósitos y su control se estiman adecuados. Asimismo, consta que se ha procedido a disponer de muchos ingresos correspondientes a los asientos que se encontraban pendientes, dándoles el destino legal.

La escasez de plantilla (endémica en buena parte de los juzgados de la provincia de Córdoba), existiendo periodos de tiempo sin cubrir las bajas, la asunción de competencias en Registro Civil, la recepción de un mayor número de asuntos civiles de tráfico en compensación con el otro juzgado que asume las competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, y la falta de estabilidad de la indicada plantilla en los últimos años, no ha impedido que en general el Juzgado mantenga una pendencia razonable tanto en los ámbitos Penal como Civil. Así se desprende de los números que arroja el primero: Diligencias Previas (78), Procedimientos Abreviados (48), Delitos Leves (28) y Ejecutorias (19); siendo también razonables los números de asuntos civiles, computándose 326 de jurisdicción contenciosa pendientes hasta sentencia, más 507 en ejecución, cifras que podían ser algo menores si la plantilla fuese la aconsejable. Se ha de puntualizar que existen bastantes Monitorios pendientes de requerimiento, la inmensa mayoría con libramiento de exhorto al Juzgado de Paz de Bélmez, el cual demora su cumplimiento por su mal funcionamiento. En cuanto a los procesos civiles en ejecución hay muchos pendientes de que “inste la parte”. En el informe de la inspección se ponen de manifiesto 507 ejecuciones civiles pendientes frente a 446 que había al finalizar el año 2022, siendo la pendencia desde esta perspectiva elevada en comparación con las ejecuciones incoadas. En relación con los escritos pendientes de proveer las cifras son algo elevadas, de tal manera que hay un total de 435, de los que 414 son civiles, y 21 penales, siendo el escrito más antiguo pendiente de proveer en civil de abril de 2021.

La jueza titular tomó posesión del órgano el 10 de noviembre de 2020, apreciando en ella muy buena disposición, siendo la misma consciente de que a poco que se logre una estabilidad funcional, la pendencia civil puede mejorarse y la falta de impulso procesal detectado en algunos procedimientos corregirse, pues en relación con otros juzgados de la provincia, los de Peñarroya-Pueblonuevo se hallan en un nivel de ingreso de asuntos inferior a módulos.

Puede afirmarse que el Juzgado inspeccionado presenta un funcionamiento razonable tanto en el ámbito Civil como en el Penal, mucho mejor en este segundo. No es necesario adoptar ninguna medida especial de seguimiento.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.5- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000017/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE LINARES por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de JAÉN el día 13/04/2023, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La composición de la plantilla actual del órgano judicial es la siguiente: Juez, Letrado de la Administración de Justicia, dos funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal, cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. La plantilla resulta insuficiente ante el aumento del nivel de litigiosidad en asuntos civiles en estos últimos años, ya que se ha advertido que en el año 2021 las demandas registradas aumentaron en un 16% con respecto al año anterior, que en el año 2022 las demandas registradas aumentaron en un 14% con respecto al año anterior, y de la comprobación del número de demandas registradas en estos primeros meses de 2023 se pronostica que la tendencia seguirá siendo alcista, así mismo la implantación constante de nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas que afectan al sistema procesal informático con numerosas funciones de anotación y consulta que exigen un tiempo para ello, por lo cual se considera que las necesidades actuales de la plantilla son un funcionario más de Gestión Procesal y otro más de Tramitación Procesal.

Las razones de la actual distribución del trabajo se deben al objetivo de alcanzar un reparto equitativo de los asuntos civiles si bien la mayor complejidad de los procedimientos hipotecarios determina que estén a cargo de la funcionaria de Gestión. Por otro lado, la tramitación de los exhortos se realiza por la funcionaria de Auxilio para así descargar de trabajo al resto de la oficina.

Actualmente se encuentran en tramitación un total de 233 procedimientos contenciosos y de familia descontados los procedimientos de jurisdicción voluntaria, conciliaciones, medidas judiciales de apoyo al discapacitado y revisiones de dichas medidas judiciales e internamientos, así mismo debe hacerse constar que de los 233 procedimientos en tramitación sin sentencia ni resolución definitiva hay 84 procedimientos monitorios. El reparto de asuntos penales se debe a criterios de distribución equitativa que permita una tramitación eficiente de los procedimientos. En general en ambas secciones podemos decir que la aptitud de los funcionarios es positiva en relación con las instrucciones recibidas, hasta el punto de que normalmente las mismas son cumplidas bastando la mera orden oral, sin que sea necesario la elaboración de instrucciones de oficina o protocolos de funcionamiento. En los casos de baja por enfermedad o situaciones análogas existe predisposición por parte de los restantes compañeros de la sección a asumir las tareas en tanto se nombra sustituto, en todo caso atender los asuntos calificables de urgentes.

Se debe destacar lo reducido de las dependencias del juzgado, siendo el ratio de metros cuadrados por funcionario claramente insuficiente. El mobiliario es en principio adecuado, disponiendo cada funcionario de mesa propia y ordenador exclusivo. Existe una impresora en cada sección y varias líneas de teléfono en cada una de las secciones. La maquina fotocopidora es al mismo tiempo fax y escáner (si bien este último en la actualidad no se encuentra configurado ni



conectado a los ordenadores para permitir la importación de los archivos escaneados). No existen dependencias de archivo provisional, debiendo remitirse los expedientes directamente al archivo definitivo cuando “no caben encima de los armarios”, con el inconveniente que ello genera en cuanto a la reapertura de los mismos o simple consulta de los mismos. El archivo definitivo (ubicado en la zona de buhardilla del edificio), se encuentra al máximo de su capacidad, no solo por espacio, sino por peso de la documentación acumulada con el riesgo que ello conlleva (y ello a pesar del expurgo de piezas que se realizó en el año 2010). Esta circunstancia es sobradamente conocida por los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma sin que hasta el momento se haya facilitado solución alguna. No existe caja fuerte. En cuanto a la Sala de Vistas esta se encuentra compartida con el juzgado nº 1 de Linares, correspondiendo la Sala el martes y jueves de todas las semanas para la celebración de vistas civiles y un lunes al mes para la celebración de juicios delitos leves, disponiendo igualmente de la misma el lunes saliente de la guardia, para la celebración de juicios inmediatos delitos leves. Dispone de mobiliario del siglo pasado -excepto algunas sillas- pero funcional.

El grado de actualización de fases y estados de los procedimientos en la aplicación de gestión procesal alto o muy alto en los procedimientos recientes, especialmente desde la introducción de los libros en soporte informático (año 2010). La fiabilidad de los datos ofrecidos por la aplicación de gestión procesal es alta. Los funcionarios de la oficina tramitan empleando en todo caso la aplicación de Gestión Procesal (PNJ, APODERA, CDCJ, SIRAJ 2, TEJU, ARCONTE, EXPEDIENTE JUDICIAL, RPC, ETC) y accediendo a las distintas aplicaciones por medio de sus propias contraseñas.

En materia civil, se tramita en papel cero desde 2017, aquellos expedientes que se llevaban en papel, a partir de dicha fecha se lleva todo en papel cero, pero se incorpora todo al sistema estando actualizada fases y estados, la consolidación y formación del expediente electrónico se realiza con cierta frecuencia, no solo cuando se remiten los autos a la Audiencia Provincial. Se recomienda en materia penal se abandone el papel y se tramite todo en papel cero, sin perjuicio de que por el Ministerio Fiscal se fotocopie o imprima aquello que se considere necesario para emitir sus informes.

Todos los libros se llevan informáticamente.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones presenta una buena llevanza por parte del Letrado, aunque el Letrado maneja la cuenta, no existen movimientos antiguos pendientes de aplicar, no necesita de una revisión y si, se recomienda que siga como hasta ahora dándole repaso a la cuenta, para que no se queden asientos pendientes de darle el destino legal.

En el orden civil se constata que el Juzgado genera un ingreso de asuntos en los últimos años por encima del recomendable de 680 asuntos civiles, en materia civil, en 2022, se registraron 930, como consecuencia de la finalización de la atribución en exclusiva al Juzgado de la Instancia nº 2 de Jaén, de los asuntos relativos a condiciones generales de contratación en supuestos de préstamos con garantía hipotecaria, también a los desistimientos en estos procedimientos que tras dicha finalización se han venido produciendo, al señalarse por aquel Juzgado en tiempos muy lejanos, interesando a la parte presentarlo en el Juzgado de su localidad.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En el orden penal se esta cercano a lo recomendable del C.G.P.J. aún con la salvedad de duplicidad a causa de las normas de reparto. Debe repasarse la revisión periódica de las ejecutorias penales, con el fin de evitar la prescripciones.

No obstante, la pendencia de asuntos es muy aceptable y se puede considerar que el funcionamiento del Juzgado es óptimo, debiendo destacar esta unidad la labor que realiza el Juez titular, resaltando su eficacia resolutive en ambos órdenes, civil y penal, que es extensible al Letrado de la Administración de Justicia y a los funcionarios del juzgado.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.6- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000018/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 5 DE LINARES por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de JAÉN el día 13/04/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La composición de la plantilla actual del órgano judicial es la siguiente: Juez, Letrado de la Administración de Justicia, dos funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal, cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. Debido al elevado numero de asuntos en materia civil que cada año entra en el órgano judicial, ello incluido las demandas relativas a materia de contratación hipotecaria donde ya son competentes al haber cesado la competencia exclusiva de los Juzgados especializados, el trabajo se incrementa cada año, siendo necesario y bueno para la agilización y tramitación de asuntos civiles un funcionario mas dentro de la plantilla, pues esta ya se queda corta. Actualmente los dos gestores se encuentran en la sección civil debido a la mayor carga de trabajo existente en dicha materia y la mayor especialización de ambos en materia civil. La sección penal consta de tres tramitadores procesales. El ambiente laboral y relación de la Letrada con los funcionarios es buena. El reparto de demandas se realiza por el Servicio Común de Partido Judicial. Son itineradas a través del NAUTIUS. Las demandas e escritos iniciadores se presentan por Lexnet. Los escritos se presentan telemáticamente a través de la aplicación Adriano, quedando incorporados a cada procedimiento, excepto los presentados sin representación procesal que son presentados ante el Servicio Común, si bien al no estar conectado con Adriano no quedan incorporados directamente al procedimiento. El reparto de atestados, denuncias y partes médicos y escritos de trámite se realizan telemáticamente a través de lexnet atestados. Si bien en algunas ocasiones se presentan en papel porque manifiestan que el sistema lexnet no funciona. Los escritos con Abogado y Procurador, los informes del IML quedan incorporados al procedimiento. Las escritos son controlados por la Sra. Letrada, distribuidos para su reparto en la oficina, e itinera y minuta las demandas con numeración automática, consiguiendo que la distribución del trabajo en la sección sea equitativa. Las guardias son semanales de lunes a lunes siendo lunes saliente de guardia.

El Juzgado se encuentra en un edificio destinado únicamente para albergar la sede de este órgano judicial. Dispone de tres plantas, en la planta baja se encuentra la sala de vistas, el calabozo, sala de rueda de reconocimiento y dos archivos. Se dispone de una sala de vistas



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

exclusiva para este juzgado, estando disponible toda la semana. En la planta primera se encuentra la oficina penal y los despachos del Magistrado, Letrado de la Administración de Justicia y Ministerio Fiscal. En la planta segunda se encuentra la oficina civil, la Sala Gesell y SAVA. Se dispone de un ascensor actualmente en uso y tres cuartos de baño repartidos en cada una de las plantas. En cuanto al estado de las instalaciones, hacer constar que se encuentran con carácter general en buen estado. Respecto del mobiliario, sería conveniente reemplazar los actuales armarios debido a que algunos no disponen de llave y otros no tienen puertas. En materia de espacio, existe un inconveniente que a largo plazo daría problemas, es el debido al destinado para archivo judicial, existen dos habitaciones para el mismo, siendo que una de ellas ya se encuentra llena y el segundo archivo se encuentra casi a la mitad de su capacidad, en unos años dichos archivos estarán sin capacidad para albergar más expedientes, no existiendo en el edificio más espacio para poder ocupar como archivo judicial.

Los Funcionarios de esta oficina disponen todos ellos de equipo informático individual, además de dos impresoras y fotocopidora multifunción, videoconferencia y equipo de grabación en la sala de vistas. Todos los funcionarios de la Sección civil, y penal tienen clave de acceso a las aplicaciones del Punto Neutro Judicial y al sistema de grabación. No consta incumplimiento del Código de Conducta (Instrucción 2/03), y respetando por las mismas las Instrucciones 4/09 y 5/10 del Secretario General de la Administración de Justicia. Igualmente en el registro de asuntos se da cumplimiento al Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/10. Se cumplen las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010, así como el Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos. Se respeta la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración en el sistema procesal.

En materia civil, se tramita en papel cero, se incorpora todo al sistema procesal, estando actualizado fases y estados, la consolidación y formación del expediente electrónico se realiza con cierta frecuencia, no solo cuando se remiten los autos a la Audiencia Provincial. En materia penal, se recomienda y es necesario tramitar en papel cero y no continuar en papel. Para ello se hace preciso una actualización de las fases y estados en el sistema procesal, incluir todos los acontecimientos al sistema y escanear, informes, declaraciones, periciales de tal modo que todo este incorporado al sistema gestión procediendo a la consolidación del expediente, Todo ello sin perjuicio de que algunas partes Juez, Fiscal, quiera imprimir todo o parte expediente al evacuar algún trámite o traslado.

En la Secretaría de este Juzgado solo se mantiene manualmente el libro de presos. El resto de libros se lleva informatizado.

El número de cuenta es la 5180, presenta un saldo el día que se realiza la inspección de 358.905,78 euros, siendo 122 los asientos abiertos, operativas 159. Se comprueba que el Letrado mueve la cuenta y realiza mandamiento de pagos, sin embargo es preciso una revisión de todos los asientos pendientes de cancelar anteriores a 2019, dándole el destino que le correspondan, pues algunos ingresos datan de mucho tiempo, (ingresos para recurrir, sin dar destino legal, mandamientos de pago entregados y no cobrados, ingresos erróneos, realizando las



correspondientes transferencias a la cuenta 9999 o 5555). Se recomienda que se compruebe, antes de proceder al archivo de los autos, que el procedimiento no tenga dinero pendiente de aplicar. El Juzgado ofrece un buen rendimiento en las dos áreas de competencia asignada. Como datos, la pendencia en Civil, no figuran cifras significativas con 382 asuntos se distribuyen 84 J. Ordinarios; 5 J. Verbales arrendaticios; 4 juicios verbales posesorios; 89 resto juicios verbales; 2 juicios cambiarios; 173 Juicios Monitorios, 4 asuntos de división patrimonial; 13 concursos persona física, otros contenciosos, y; 3 expedientes jurisdicción voluntaria. La pendencia indicada es mejorable, sobre todo en el numero de Juicios Monitorios que ascienden a 173, si bien se nos informa al equipo inspector que en muchas ocasiones se debe a la tardanza del Servicio Común de Linares en realizar el requerimiento del pago.

Los cometidos de registro e incoación a tenor de los procedimientos examinados en materia civil, se realizan en términos uniformes generales de plazos, que pueden ser mejores dependiendo del tipo de procedimiento y del funcionario encargado de tramitación, el proveído de escritos se realiza en fechas muy próximas a su entrada, salvo excepciones. Se observa como consecuencia de la inspección que se han actualizado los procedimientos, siendo la última resolución muy reciente. A fecha cierre datos hay pendientes de proveer. Los señalamientos no van más allá de los 3 meses. Se estima razonable a la vista de la entrada –superior a la aconsejable- y pendencia de asuntos. El tiempo empleado por la Sra. Juez en dictar Sentencia o Auto es razonable teniendo en cuenta los demás cometidos. En la visita inspección se comprueba que no existen sentencias pendientes de dictar. Y en cuanto a los Decretos o Diligencias de Ordenación del Letrado de la AJ., se dictan en plazos razonables.

Por otro lado es preciso referirse a las ejecuciones, que se mantienen cifras no elevadas de 513, pero mejorables, las más numerosas son las de título judicial con 391; de títulos no judicial 57; hipotecarias 41; y relativas al derecho familia 24. Consta que muchos procedimientos están a la espera del “instar actora”. Se recomienda que se realicen revisiones periódicas de todas las ejecuciones, procediendo al archivo provisional de aquellas que llevaban cierto tiempo inactivas, (se aconseja seis meses las de título judicial y un año las de familia), sin perjuicio de reapertura en el caso de que lo soliciten las partes, con el objeto de reducir datos pendencia a los efectos estadísticos. En esta parcela se observa un impulso adecuado de la Letrada, funcionarios y capacidad resolutive de la Jueza. Como escritos pendientes de proveer tiene 55 en tramite y 174 en ejecución, pendencia que puede mejorarse, si bien la entrada de escritos al año suponen 4464.

Respecto al derecho de familia, la pendencia total es de 41 asuntos, con 2 divorcios consensuados, 1 separación contenciosa, 1 medidas coetáneas posteriores a la demanda, 9 modificaciones medidas no consensuadas, 5 liquidaciones régimen matrimonial, 3 guardas y custodias y alimentos no matrimoniales consensuados, y 4 contenciosas, 3 internamientos involuntarios, 4 escritos pendientes de proveer de tramite y 3 de ejecución revelan un impulso procesal adecuado y buena capacidad resolutive de la Juzgadora.

Presenta una cifra elevada de registro de asuntos penales para este tipo de órganos, concretamente en el año 2022 se registraron 1110 asuntos, viniendo a alcanzar en los últimos años un aumento al alza, no obstante lo cual mantiene cifras bastante aceptables de pendencia, estando



totalmente al día, con solo 8 escritos y sin asuntos pendientes de registrar, o de proveer, siendo el total pendientes de 125 asuntos, 41 D. Previas; 20 PA.; 18 delitos leves; 42 ejecutorias.

No obstante se observa duplicidad de Diligencias Previas provocada por las normas de reparto de asuntos penales, en las que todos los asuntos que entran en el Juzgado de Guardia se remiten al Decanato para reparto, en lugar de asumirlos por la fecha de guardia con las excepciones oportunas –querellas, denuncias con personación, atestados con solicitud inicial de escuchas telefónicas, asuntos de especial complejidad, etc.-.

Los cuadros estadísticos presentan cifras que revelan un impulso procesal y control periódico de los distintos expedientes bastante adecuado, así como una muy buena capacidad instructora y resolutive del juzgador. Como resultado de lo expuesto resalta la inexistencia de expedientes antiguos, siendo todos de 2.021 y 2.022, a excepción de 1 D. Previas de 2020 y tres de 2021; de ejecutorias una de 2020 y 11 ejecutorias de 2021, resto de 2022 y 2023, por estar pagándose la mayoría responsabilidad civil y multa de forma aplazada.

Se observa una buena y ágil tramitación de las causas penales, con incoación directa de cada tipo de procedimiento. Dicha incoación es inmediata y en el Auto correspondiente se suelen acordar de principio todas las diligencias posibles a practicar, cumplimentándose en tiempos razonables, lo que sin duda contribuye en gran medida a su pronta terminación, salvando los imponderables del normal retraso provocado por la cumplimentación de diligencias o informes externos, que no obstante son recordados con una periodicidad adecuada. Se abren las pertinentes piezas separadas. El tiempo de tramitación de los Procedimientos Abreviados es razonablemente corto, solo prolongado en los supuestos de necesidad de exhortos. Se recomienda un repaso periódico de las ejecutorias penales, con el fin de que no transcurra el plazo de prescripción de la pena, así como se debe dejar constancia de las citaciones y requerimientos que se efectúan de manera telefónica, con el fin de seguir el tramite legal que corresponda.

No se acuerda seguimiento alguno, si bien el Juzgado deberá comunicar al recibir el informe para alegaciones si ha puesto al día las demandas pendientes de incoar. Igualmente se recomienda a la Letrada revisar aquellos procedimientos con dinero anteriores 2019, con el objeto de actualizar la cuenta.

Con fecha de 5 de Mayo de 2023 se da cuenta de haberse actualizado los Juicios Monitorios pendientes a fecha inspección con indicación de ultimo proveído y situación en que se encuentra. Se han puesto al día las demandas pendientes de incoar y registrar en numero de 79 a fecha de la inspección, así como una revisión de las cuentas expedientes mas atrasadas, procediendo a darle el destino legal a las cantidades pendientes. Por lo tanto no se acuerdan seguimientos.

Se puede concluir que en el orden civil se constata que el Juzgado genera un ingreso de asuntos en los últimos años por encima del referencial aconsejable de 680 asuntos civiles, que se vienen superando registrándose en 2022, 1055 asuntos. Lo mismo ocurre en el orden penal, en el que se supera ligeramente el referencia de 1000 asuntos penales, habiéndose registrado concretamente 1110 asuntos.

No obstante, la pendencia es muy aceptable y se puede considerar que el funcionamiento del Juzgado es óptimo, salvo las disfunciones puntuales observadas de una leve acumulación en



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

demandas pendientes de incoar, fácilmente solucionable y el numero elevado de juicios monitorios teniendo en cuenta la entrada de asuntos de dicha materia, estas disfunciones han sido solucionadas, ya que en materias, debiendo destacar esta unidad la labor que realiza la Juez Titular, capacidad resolutive en ambos ordenes, civil y penal, implicación y compromiso profesional que es extensible a la Letrada de la Administración de Justicia y a los funcionarios del juzgado.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.7- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000019/2023 realizada al JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 7 DE CÓRDOBA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÓRDOBA el día 04/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

Este órgano judicial ha sido objeto de la última visita de inspección por la Unidad Inspectora del Consejo General del Poder Judicial, los días 20 y 21 de junio de 2018 compuesta por Inspectora delegada: Ana Avendaño Muñoz Inspector delegado: Carlos Prat Westerlindh Letrada: Carolina Cubero Flores.

La plantilla del Juzgado está compuesta por 1 Magistrada-Juez, 1 Letrado de la Administración de Justicia, 2 Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 4 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, así como 2 Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

El Letrado de la Administración de Justicia ha permanecido de licencia por enfermedad desde el 09 de enero a 08 de febrero de 2023 por intervención quirúrgica. Durante la baja el Juzgado estuvo cubierto por Letrados de la Administración de Justicia de otros juzgados de Instrucción de manera rotatoria por periodos de 11 días. Durante este tiempo de baja, aunque se ha atendido el juzgado, salvo los días que los compañeros han secundado la huelga, el control diario del juzgado, la cuenta de consignaciones y la revisión de las grabaciones ha quedado relegada a los asuntos urgentes que se ha retomado tras la finalización de la huelga. Desde el 08/02/2023, el Letrado titular secundó la huelga.

El Juzgado se estructura en dos secciones, A y B. La sección A lleva la tramitación de los asuntos del 1 al 5 y tiene reservadas las semanas pares para sus declaraciones y la B del 6 al 0, teniendo las semanas impares para declaraciones. Cada sección está bajo la supervisión del gestor procesal y hay 2 tramitadores por sección. Los gestores además de la supervisión de su sección asumen directamente la tramitación de las causas con preso, de violencia doméstica, los Procedimientos Abreviados y aquellas causas que se estimen complejas por el Letrado de A.J., desde el punto de vista de la tramitación o por la Magistrada desde un punto de vista sustantivo. Los gestores son los que se encargan de realizar el reparto de los asuntos turnados al juzgado. Los tramitadores asumen la tramitación del resto de las causas, siendo ellos quienes, en todo caso, realizan ante la Magistrada las declaraciones. La unión de escritos, oficios y acuses de recibo las realizan los tramitadores. Estos criterios atendiendo al volumen de asuntos que tienen, se está barajando su modificación, informa el LAJ, sobre todo, en cuanto al número de escritos y de



documentos pendientes de incorporar; sin embargo, la situación de conflicto funcional hace difícil llegar a un acuerdo que no suponga una imposición directiva y que no garantice por ello su efectividad. El archivo de los procedimientos se realiza por los funcionarios de Auxilio Judicial. Todos los procedimientos se asignan individualmente a cajas numeradas, siguiendo el sistema tradicional de archivo. En el sótano del edificio se encuentra el Archivo de procedimientos que gestiona una empresa y que se controla a través del programa JARA, siendo los funcionarios de Auxilio los encargados del mismo en el juzgado.

Es relevante la labor que realizan la Magistrada y el Letrado de la Administración de Justicia en la formación del expediente digital; y en consecuencia, es de significar el loable esfuerzo por parte de todo el personal de este órgano judicial dirigido a consecución de los buenos resultados obtenidos en el avance del expediente digital penal.

Las instalaciones del Juzgado están ubicadas en la sede de la Ciudad de la Justicia, que sirve también de sede a todos los juzgados del partido judicial de Córdoba. El edificio es nuevo, inaugurándose en octubre de 2017. El Juzgado de Instrucción nº 7 se encuentra en el módulo A segunda planta. Cada uno de estos juzgados dispone de seis dependencias distribuidas de la siguiente manera; despacho del Magistrado, despacho de la Letrada A.J, en otra de las dependencias dos gestores, en otras dos se comparten por dos tramitadores y en una sexta los dos funcionarios de auxilio. El mobiliario es nuevo y se encuentra en perfecto estado de conservación. El archivo de expedientes anteriores al año 2022 se encuentra en el sótano del edificio.

Existe un servicio común de notificaciones y embargos, si bien, conforme a las normas aprobadas sobre su funcionamiento, los juzgados de instrucción únicamente pueden realizar a través del mismo las notificaciones y diligencias que hayan de practicarse en el Centro Penitenciario de Córdoba y entregadas antes de las 12 de la mañana. El resto de diligencias se realizan por los propios funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial del juzgado de instrucción, teniendo asignado un día para ello, en el cual disponen de un taxi, en caso de ser necesario. Respecto de la notificación a los procuradores y abogados, se realiza a través del programa LEXNET. La función de registro y reparto corresponde a la oficina del Decanato, una vez que el juzgado que presta servicio de guardia ha recibido y registrado todos los asuntos, remitiendo todos aquellos que conforme a las normas de reparto no le corresponden directamente.

Existe también un Servicio Común de Piezas de Convicción, si bien no recoge ni joyas, ni documentación.

La dotación de la Oficina Judicial comprende nueve ordenadores, disponiendo toda la plantilla de uno con doble pantalla, y siete impresoras (cuatro en red para la Oficina y otras dos individuales, una para la Magistrada y otra para el Letrado de la Administración de Justicia). Asimismo tienen a su disposición un ordenador portátil tanto la Magistrada como el LAJ.

El grado de actualización de fases y estados de los procedimientos en la aplicación de gestión procesal en general es elevado; periódicamente se revisa la fase y estado de los procedimientos para así facilitar su control y poder realizar la estadística trimestral. La fiabilidad de los datos ofrecidos por la aplicación de gestión procesal sobre el número de asuntos pendientes y posibilidad de utilización, al menos como soporte de ayuda, de la misma en la confección de alardes y



estadística, se considera adecuada. En lo referente a las dificultades, en su caso, para la conexión con las bases de datos y registros públicos accesibles a través del Punto Neutro Judicial, se puede decir que generalmente no suele haber problemas.

No se llevan Libros de Registro manuales. Todos los libros se llevan informáticamente. No se imprimen salvo petición expresa. Se lleva el libro de sentencias y autos, así como el de Piezas.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones está abierta en Banco Santander con el número 1451. El saldo, al día previo de la visita, 3 de Mayo del presente año, presenta un saldo de 341,912,60 euros. El importe de las operaciones pendientes de cobro son 27, por la suma total de 2.450,2 euros. El control de la misma lo obtiene a través de la aplicación del Banco de Santander, en donde puede comprobar fácilmente la situación de cada uno de los asientos activos o vivos que en cada momento se mantienen en dicha cuenta. La gestión de los movimientos se realiza con normalidad y son razonables los tiempos de demora entre el ingreso en la cuenta y su entrega a quien corresponda, teniendo en cuenta las vicisitudes de las Diligencias, las ejecutorias y otros procedimientos en los que dichos ingresos se producen. La Cuenta de Depósitos y Consignaciones, puede decirse que presenta un saldo y número de operaciones en su conjunto adecuado, como puede comprobarse de los datos emanados de la aplicación informática de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, donde sólo constan como asientos o expedientes activos o pendientes un total de 101 al día previo visita de inspección. Siendo la gestión por parte del Letrado de la Administración de Justicia ágil, no obstante procede revisar y dar el destino legal a las cuentas activas de pequeña cuantía con claves sin determinar o asientos erróneos.

Tras el examen aleatorio de los expedientes realizado, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Lo primero que se ha de indicar para hacer una valoración del estado de este Juzgado, de la pendencia que hay en el mismo y, por ende, de su funcionamiento, es que el Órgano soporta un nivel de ingreso de asuntos que se halla dentro de los módulos referenciales que el Consejo General del Poder Judicial tiene establecidos con carácter orientativo para este tipo de órganos, que como es sabido se encuentra fijado en 3.300 asuntos, siendo el caso que el juzgado ha tenido un ingreso de media anual, según última Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de 3450 asuntos penales.

El Órgano Judicial cuenta con una plantilla estable, si bien se ha de puntualizar que el Letrado de la Administración de Justicia permaneció de baja por enfermedad desde el 09 de enero a 08 de febrero de 2023. Igualmente un gestor procesal estuvo de baja durante mes y medio. Ello, unido a la reciente huelga de los LAJ, ha provocado cierto retraso en la tramitación de los asuntos y en la marcha general del Órgano, respecto de la cual la actual huelga de funcionarios está incidiendo aun más.

En cualquier caso el Juzgado mantiene una pendencia aceptable, si bien resulta ligeramente elevada la cifra de Procedimientos Abreviados. Y así se ha de entender del número de Diligencias Previas en tramitación (374), Sumarios (4), Procedimientos Abreviados (126); Delitos Leves (84); Delitos Leves Inmediatos (45); y Ejecutorias (65).

En relación con los escritos pendientes de proveer, hay que decir que el más antiguo es de



diciembre de 2022, existiendo a la fecha 179.

Por lo que se refiere a los señalamientos, los mismos no pasan del mes de octubre de 2023, estando, pues, en plazos asumibles.

Teniendo en cuenta el nivel de ingreso de asuntos y la tasa de pendencia, puede afirmarse que el Juzgado inspeccionado presenta en general un funcionamiento razonable. En base a lo anteriormente expuesto se entiende que no es necesario adoptar ninguna medida de seguimiento.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.8- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000020/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE CÁDIZ por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 02/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de inspección fue realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2016.

Hay una estructura organizativa de trabajo compuesta por 4 jueces, la Magistrada-Juez titular, 2 JAT y un Juez sustituto, un Letrado de la Administración de Justicia titular, otro LAJ de refuerzo en comisión de servicio con relevación de funciones, así como otros dos LAJs en refuerzo parcial en jornada de tarde.

La plantilla funcionarial actual está formada por 3 Funcionarios del Cuerpo de Gestión, 4 Tramitadores y 1 Auxilio Judicial; cuenta además con 2 Tramitadoras y otra Gestora, asignadas como apoyo.

Es absolutamente imprescindible dotar al órgano judicial con un mayor número de Funcionarios de refuerzo, siendo claramente contraproducente la eliminación de los refuerzos que se produjo a finales del pasado año, sin comunicación ni antelación suficiente por parte de la Delegación Provincial de Justicia, y que ha impedido, aparte de otras razones, reducir la enorme pendencia existente.

El Juzgado fue especializado por Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de mayo de 2017 en el conocimiento, de manera exclusiva y no excluyente, de las demandas relativas a acciones individuales sobre condiciones generales en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias en que el prestatario sea una persona física, especialización que fue objeto de sucesivas prórrogas hasta el día presente. Debido al ingente volumen de asuntos se creó como órgano de apoyo el denominado Juzgado 2 bis, autónomo e independiente, que asumió las demandas del año de 2017. Sin embargo, posteriormente se decidió a partir de 2018 que ambos órganos se fusionaran en una estructura organizativa judicial única.

Los refuerzos de funcionarios se fueron incrementando por la Junta de Andalucía hasta duplicar la plantilla original. De este modo, en la práctica el mismo Juzgado operaba con dos estructuras independientes: el original contaba con la Magistrada titular, una JAT de apoyo, el LAJ titular, 3 gestores, 4 tramitadores y un auxilio judicial; el denominado bis contaba con dos JATs, dos LAJS como refuerzo sin relevación de funciones e idéntico número de funcionarios. Las demandas



se repartían al 50% entre las dos unidades.

Los Funcionarios del Juzgado matriz se organizaban en negociados identificados por las letras de la A a la G, mientras que los del bis se identificaban por los números 1 al 7, añadiéndose una letra al número en previsión de que cuando en su día se suprimieran los refuerzos, fueran asumidos por el negociado correspondiente a la letra. Así el negociado 1 identificaba sus procedimientos como A1, B1, C1, etcétera.

El reparto de asuntos entre los funcionarios se hace por partes iguales, con la excepción de los gestores del Juzgado original que se ocupan de los procedimientos de familia, ejecuciones hipotecarias y de familia. Corresponde además a dichos funcionarios todos los procedimientos anteriores a la especialización y que a día de hoy continúan en trámite.

Durante el último año, la situación del Juzgado ha empeorado notablemente, a lo que ha contribuido, sin duda alguna, las supresiones de los funcionarios de refuerzo. En la actualidad cada funcionario soporta una carga de trabajo de más de mil asuntos en trámite, añadiéndose los correspondientes a los refuerzos suprimidos y que han de repartirse entre todos. También se ha producido como consecuencia un sobredimensionamiento del número de jueces en relación al número de negociados, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de un único auxilio judicial.

Hay que destacar igualmente la dificultad de organizar y repartir el trabajo ya que cada pocos meses es necesario hacer una reasignación de los efectivos para los jueces y letrados, a fin de conseguir que la carga sea equitativa. Es imposible hacer una planificación a medio plazo en tanto no exista una certeza en cuanto a los medios personales de los que se disponen. Habida cuenta de la elevadísima pendencia que soporta el Juzgado y el número de jueces adscritos, se prioriza el señalamiento y el dictado y notificación de sentencias, a costa de desatender otros aspectos como la provisión de escritos o la incoación, de forma que se van incoando los procedimientos a medida que va siendo necesario señalar.

Tampoco cabe olvidar que cuando se asumió la especialización en cláusulas suelo el Juzgado no partía de cero, sino que mantenía la pendencia que tenía en ese momento, incluyendo asuntos de familia e incapacidades que se encuentran en proceso de revisión motivado por la aprobación de la ley 8/21 y que requieren de una tramitación preferente, amén de las ejecuciones derivadas de juicios monitorios, verbales e hipotecarios.

Desde el punto de vista judicial, tal y como ya se expuso por el propio Consejo General del Poder Judicial, se requería una estabilidad en la plantilla de funcionarios, singularmente de refuerzo, circunstancia que no ha acontecido, tal y como se ha referido con anterioridad, lo que incide de forma directa en la buena marcha del Juzgado, produciéndose continuamente ceses que conllevan una redistribución de los diferentes negociados.

La situación del órgano se ha visto así mismo agravada por el cierre del Edificio Los Balbo, donde se ubica el Juzgado nº 2; una vez reabierta dicha sede, se produjo sin solución de continuidad la huelga de los Letrados de Administración de Justicia y una vez terminada ésta se inició la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia seguida masivamente en este órgano, todo ello ha venido a producir una situación cercana al colapso en este órgano, que exige soluciones inmediatas.



El Juzgado se halla dividido en dos sedes. Una situada en el edificio de la calle Los Balbo, donde se encuentra el Juzgado matriz y otra en la Avenida Ana de Viya, edificio "Proserpina", donde se ubican los refuerzos. Cada una de las subsedes cuenta con una sala de vistas propia, que en el caso del edificio Los Balbo es compartida con el Juzgado de Primera Instancia número 4. Ambos edificios cuentan con una antigüedad superior a 40 años, si bien más acusada en el edificio de Los Balbo que, como se ha mencionado, permaneció cerrado durante dos meses para realizar obras de consolidación en el sótano y los cimientos, que amenazaban ruina.

El problema principal viene dado por la falta de espacio ya que, aunque la tramitación se realiza por el expediente electrónico, el ingente número de asuntos hace que la simple acumulación de carpetillas haya terminado por colmar el destinado a los archivos. La oficina judicial es bastante reducida para el número de funcionarios, y está llena de cajas de archivo.

La situación es algo mejor en la sede del Juzgado de refuerzo, mejor mantenida y que posee una oficina más amplia.

Las demandas son registradas diariamente y se trasladan posteriormente a los letrados de la Administración de Justicia para que las minuten. Los escritos se imprimen y sólo se examinan personalmente aquellos que son urgentes o reiterativos. Tienen entrada anual de 12000 escritos. La dación de cuenta a los magistrados se lleva a cabo por parte de los funcionarios, siendo de forma presencial y telemática a través del escritorio judicial.

El Juzgado está plenamente informatizado, se trabaja con el expediente digital y los funcionarios hacen uso continuado de los sistemas de gestión procesal y de las bases de datos del PNJ así como acceso a la aplicación de la Cuenta de Consignaciones. Cada uno posee sus propias claves y hacen una adecuada utilización de las bases de datos, con observación del Código de Conducta contenido en la instrucción 2/03 del CGPJ, sin que se haya reportado ninguna incidencia de acceso indebido o uso inadecuado.

El Juzgado tramita de forma completa el expediente digital. En todos los procedimientos examinados constan los acontecimientos debidamente descritos y catalogados, salvo excepciones muy puntuales en que se puede comprobar una resolución de "texto libre", referidas siempre a diligencias de unión o de constancia. El orden cronológico de los mismos es el correcto salvo en algunos procedimientos en que se ha comprobado que la unión de los despachos recibidos se realiza con posterioridad a la resolución de la que trae causa.

Todas las resoluciones están firmadas digitalmente y están integradas en el expediente. En los procedimientos examinados la fase y estado es la correcta y la documentación que se recibe, que no llega por Lexnet, como por ejemplo diligencias de comunicación practicadas por el Servicio Común, informes, comparecencia de un perito, el apoderamiento apud acta y otros documentos originales, se catalogan y se incorporan al expediente. El sistema de gestión procesal guarda relación con la realidad del Juzgado.

En conclusión, existe un elevado grado de consolidación del expediente digital que ha permitido una homogeneización de las actuaciones y un reflejo del sistema de gestión procesal con la realidad del Juzgado. Se han asumido buenas prácticas en la tramitación digital de los expedientes.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Con independencia de lo expuesto, se detecta la necesidad de que los funcionarios de ambos Juzgados, nº 2 y bis, que constituyen una única estructura organizativa de trabajo, usen indistintamente los sistemas de gestión procesal de ambos órganos, ya que en la actualidad son un solo órgano.

El total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta el 4 de abril de 2023 de 46.319. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2023 hasta el 4 de abril de 2023 es de 353 asuntos. Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 846.843 acontecimientos civiles, de los cuales 25.326 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2023 hasta la fecha de referencia. En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 29.488 resoluciones, de las cuales 13.761 son sentencias, 7.624 son autos definitivos y 8.103 son decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2023 hasta la fecha de referencia, figuran un total de 651 sentencias, 122 autos definitivos civiles y 86 decretos definitivos. El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 33.246 actualizaciones manuales de fases y estados, de las que 381 corresponden al periodo de referencia. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 14.082 procedimientos pendientes y 9.629 procedimientos inactivos.

No se lleva en la oficina judicial ningún libro en soporte físico, haciendo uso, en su caso, de los listados suministrados por la aplicación de gestión procesal ADRIANO.

Existen dos cuentas, la 1236 correspondiente al Juzgado matriz y la 5287 correspondiente al denominado impropriamente Juzgado bis. A fecha de la inspección el saldo existente en las cuentas es de 5.444.695,96 € y de 1.094.832,557 €, respectivamente. Vamos a realizar su examen distinguiendo la labor en ambas cuentas.

A) Respecto a la cuenta del Juzgado número 2, con número 1236, es muy llamativo el abultado número de ingresos que tiene mensualmente, en concreto 479 en el último mes, y solo en 5 días ha habido 114 ingresos. El saldo de la cuenta es elevadísimo, día de hoy es de 5.443.316,92 €. En relación con los también abultados ingresos mensuales y diario, hay que destacar que examinadas las cuentas activas que son 4262, a día de hoy no se aprecia mucho retraso en las mismas.

Existe un suficiente flujo de salida en relación a los ingresos mensuales así en el último mes, de 479 ingresos se han efectuado 447 mandamientos de pago, 14 transferencias y dos traspasos, lo que equilibra los ingresos y la salidas en la cuenta.

Hay que destacar también que tan solo existen 17 mandamientos pendientes de cobro, lo que indica que hay seguimiento de los mandamientos expedido hasta que son cobrados.

Se utilizan los embargos telemáticos y las subastas.

En la cuenta son tres los pertenecientes y 10 los autorizados, se advierte que la cuenta



siendo como es gigantesca está bien trabajada, aunque necesita muchísimo tiempo de dedicación lo que está ocurriendo en la actualidad.

Esta cuenta está debidamente tratada, a pesar de la ingente cantidad de ingresos que posee, existiendo una gran cantidad de depósitos y cantidades pendientes de resolución de recurso indicando por parte del órgano que existen en la actualidad unos 1.200 recursos pendientes de resolver cuyas cantidades están depositadas en esta cuenta, lo que agrava su importe. Podemos concluir que es una cuenta con muchos ingresos mensuales superiores a la media de este tipo de órganos, apreciando mucha actividad en la misma.

B) En relación a la segunda cuenta del Juzgado, con número 5287, posee un saldo de 1.107.438,44 € y una cantidad de ingresos escasa en comparación con la anterior cuenta, en concreto 55, por importe de 93.699,09 € euros y un número de traspasos recibidos, uno en concreto por 3071,57 € y dos transferencias recibidas por importe de 233,62 € además transferidos a modo de emisión, 12 transferencias por importe de 683,62 € y emitidos unos 80 mandamientos de devolución por importe de 134.734,85 en este últimos 30 días, posee también pendiente de cobro 11 mandamientos devolución por importe de 14.227,04 euros todo ello, nos indica que esta cuenta está en vías de eliminación y que los parámetros en menor grado que la anterior, son los mismos, se ha realizado una excelente labor del eliminación, que ha sido realizada de modo paralelo en una y otra cuenta.

Igualmente tiene operativa 693 cuentas y abiertas 800 31 habiéndose concluida una en total de 1956 cuentas y canceladas 914.

Los Funcionarios están habilitados en modo "funcionario". Ellos llevan a cabo los embargos telemáticos de cuentas, así como la preparación de las subastas electrónicas a través de esta herramienta, que posteriormente los letrados de la Administración de Justicia validan. En esta cuenta aparecen como perteneciente seis letrados y tres autorizados, debiéndose proceder a actualizar estos datos a través de la Secretaría de coordinación para fijar y concretar sus usuarios actuales.

En cuanto a la actividad efectuada, se observa que de los 2 Titulares con un programa de actuación por las tardes, el LAJ ha realizado 3661 mandamientos de devolución desde febrero de 2022, fecha en la que empezó su refuerzo en el órgano, y en el primer semestre del año 2023 únicamente la cuenta del juzgado número dos un total de 66 mandamientos. Por su parte, el LAJ ha realizado 660 mandamientos de devolución desde agosto de 2022, fecha en la que empezó su refuerzo en el órgano, y en el primer semestre del año 2023 tanto la cuenta del número dos como en la bis un total de 209 mandamientos de pago.

A la vista del escaso número de mandamientos efectuados por el Sr. y, en menor medida, del Sr. , procede establecer seguimiento para ambos a efectos de realización de los mandamientos de devolución que tuviera pendientes de efectuar, que se fija con carácter quincenal.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 9.069 procedimientos en fase de tramitación, 560 exhortos, 1.802 asuntos de jurisdicción voluntaria, 22 procedimientos de derecho de familia, 1.219 procedimientos en fase de ejecución 199 escritos de trámite y 160 escritos de ejecución pendientes de proveer.



De todo lo anterior se puede concluir:

1. El Juzgado inspeccionado soporta una carga de trabajo elevada, que supera el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 1.200 asuntos como carga de trabajo anual en este tipo de Juzgados, lo que justifica mantener medidas de apoyo judicial, máxime ante el nivel de pendencia existente por la sobrecarga de asuntos de años precedentes, si bien todo supeditado al refuerzo de funcionarios y una correcta llevanza de la agenda de señalamientos que permita rentabilizar la actual estructura judicial de jueces de apoyo a la titular.

2. El estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección revela que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado no se puede considerar correcta ni, por tanto, normalizada, valorando el ingente número de asuntos pendientes de resolver, así como el tiempo que transcurre entre el registro de entrada y la fecha posible de señalamiento. Todo ello, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo desplegado y conscientes de sus características y carga competencial durante el período de especialización en condiciones generales de contratación bancaria.

También hay que valorar dos acontecimientos recientes con grave incidencia en el desarrollo normal de la actividad judicial: el cierre obligado de la sede y paralización de actividad durante dos meses, así como la posterior huelga de LAJs.

3. Desde un punto cualitativo, se detecta una llamativa cantidad de demandas con simple registro y numeración informática, pero no incoadas materialmente. Por ello, se hace imprescindible reactivar de forma urgente esta actividad y realizar los emplazamientos y señalamientos de audiencias previas y posteriores juicios. Se encuentran 6563 demandas pendientes de admisión (s.e.u.o.), y, por ello, de incoar, emplazar y posterior señalamiento. En concreto, 300 correspondientes al año 2020, 3763 del año 2021, 2202 del año 22 y 298 del año 2023.

Los últimos señalamientos están referidos a finales de junio de 2023, si bien los jueces también están repasando, con motivo de la inactividad por la huelga de letrados, los allanamientos y desistimientos.

Es absolutamente imprescindible gestionar mejor la agenda de señalamientos y proceder de inmediato a nuevos señalamientos de audiencias previas y/o juicios en un porcentaje de dos sesiones semanales para cada juez, con un promedio de 12 asuntos por sesión.

Por consiguiente, respecto a la incoación de demandas debe implantarse un seguimiento sobre las mismas, ya que han quedado paralizadas desde hace tiempo y es necesario reactivarlo y continuar en la labor y fijación de fecha de vista.

4. La tramitación de los expedientes es relativamente fluida y se invierte un tiempo razonable en tramitar escritos, pese que la entrada anual de estos asciende a 12.000. Se constata que existen pendientes de proveer unos 200 en trámite y 160 en ejecución, existiendo un correcto control del trámite.

Se observa retraso en la tramitación de los asuntos por ciertas dificultades en la práctica de actos de comunicación, motivados también por el retraso en su impulso y remisión al órgano instrumental encargado de ello, como es el servicio común del partido judicial.

Se detectan dilaciones cuando se tardan en efectuar los requerimientos a la parte para



subsanan determinados extremos, lo cual retrasa las demandas en su tramitación, admisión y registro inicialmente unos 4/5 meses.

Consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, se dilata de forma muy excesiva la fecha de los señalamientos, especialmente en los procedimientos ordinarios, si bien este dato se encuentra relacionado con la paralización en la admisión de demandas, creando una falsa sensación de funcionamiento normalizado y relativa cercanía de los señalamientos, dado que la incoación, admisión y señalamiento queda fijada en el ritmo de trabajo que han establecido en la oficina y no en el flujo temporal ordinario de entrada de asuntos.

Se hace necesario, con carácter general, realizar revisiones periódicas de los procedimientos y puesta al día de todos los procedimientos que aparecen en los listados aportados a la inspección, dándoles el trámite e impulso que corresponda. Por tanto, los LAJ's deben adoptar las medidas necesarias para realizar un control más efectivo del trabajo, tanto el que se realiza presencialmente como por medio de teletrabajo, y dar las pautas organizativas precisas, que conlleven a una tramitación más ágil, evitando dilaciones innecesarias que han sido detectadas y, en especial, la relativa a la admisión de las demandas.

Una circunstancia que afecta especialmente a los Letrados de la Administración de Justicia es el elevado porcentaje de tasaciones de costas que se impugnan (343 piezas abiertas sólo el año 2022), que conlleva además un notable retraso adicional ya que el informe del Colegio de Abogados se demora una media de 5 meses, y además muchas se recurren posteriormente en revisión. A modo de ejemplo a fecha de hoy se están resolviendo impugnaciones de tasaciones de costas realizadas en mayo y junio del año 2022.

Igualmente se detecta retraso en el listado de resoluciones de los letrados de la administración de justicia, en especial en tasaciones de costas, impugnaciones, Tasaciones de costas, decretos resolviendo recursos observan dilaciones en torno a los 4/5 meses igualmente existen retrasos en la admisión a trámite de las demandas y en las notificaciones de resoluciones, este juzgado tiene un seguimiento por el retraso muy generalizado en la tramitación de los escritos y bien en esta materia se está mejorando paulatinamente.

5. Se acuerda establecer SEGUIMIENTO relativo a la admisión de demandas, a la vista de las 6563 pendientes de trámite y, por ello, de incoar, emplazar, señalar y celebrar audiencia previa y posterior juicio. Se deberá emitir un informe sobre la medida organizativa que se establezca por el equipo rector, en especial por los LAJ's, para fijar un número aproximado de admisiones de demandas mensuales al objeto de proceder a la corrección de este desfase, debiéndose informar mensualmente de su evolución.

Asimismo, se informará a la mayor brevedad sobre los nuevos señalamientos de audiencias previas y/o juicios a partir de julio de 2023, así como si se gestiona en un porcentaje de dos sesiones semanales para cada juez, con un promedio de 12 asuntos por sesión.

6. La plantilla de funcionarios es insuficiente, singularmente en lo que respecta a los refuerzos necesarios para toda la estructura organizativa, no sólo el Juzgado matriz, por lo que debe oficiarse a la Consejería de Justicia al objeto de que se reponga lo antes posible la plaza de auxilio judicial y dos tramitadores, que son imprescindibles para reducir el volumen de pendencia y normalizar el



trabajo judicial.

Se detectan, en general, relaciones correctas entre los integrantes de la oficina.

7. *Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos, siendo imprescindible la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal, así como velar que se proceda a la grabación de las marcas en las grabaciones de vistas y juicios.*

8. *Deberá actuarse lo necesario, en base a las indicaciones del Secretario de Gobierno en relación con los saldos de la CUENTA DE CONSIGNACIONES, normalizando los mismos. En este sentido, se aconseja por el mismo: a) seguimiento quincenal sobre la actividad resolutoria en el marco de sus competencias del LAJ al objeto de que se regularice el desfase resolutorio con respecto a sus compañeros, que en la actualidad es de aproximadamente 200 resoluciones, entre decretos, diligencias y otros. Igualmente seguimiento sobre regularización de mandamientos de devolución al constatar que en el primer semestre de este año se han efectuado únicamente 66 mandamientos, cifra muy escasa, en comparación con sus compañeros, c) seguimiento quincenal sobre regularización de mandamientos de devolución sobre el LAJ al objeto de que se efectúan los mandamientos de devolución que tuviera pendientes.*

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incócese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

2.9- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000021/2023 realizada al JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 12 DE MÁLAGA por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 10/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El Juzgado ha sido objeto de visita de inspección por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2016.

La plantilla se compone de una Magistrada-Juez titular, Doña Paloma Martín Jiménez, una Letrada de la Administración de Justicia, dos Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cuatro Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y 2 Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

La LAJ M^a Amparo Gómez Maté tomó posesión en este Juzgado el 4 de febrero de 2019 y ha realizado una correcta labor, reorganizando la carga de trabajo existente en cada uno de los negociados, con la intención de que el trabajo que se realizara en la oficina fuera constante y uniforme. Debe tenerse en cuenta que desde su toma de posesión ha podido apreciar la pendencia alta existente en la sección de señalamientos del órgano judicial, en concreto 698 procedimientos entre abreviados y juicios rápidos, como se comprueba en el informe de inspección.

Se debe señalar el cese de la Juez de Adscripción Territorial desde el mes de julio de 2020 y, en segundo lugar, la movilidad de la plantilla y, por último, la pérdida de dos plazas de refuerzo. Por ello, una óptima llevanza del Juzgado requeriría que se le dotara de medidas de refuerzo como las que tuvo en su momento.



La ausencia de la JAT así como de un Letrado de refuerzo ha tenido sus consecuencias, dando lugar a que la fecha de los señalamientos se dilate en el tiempo y a que haya aumentado la pendencia, tanto de los juicios rápidos como de los procedimientos abreviados. La tramitación de los asuntos también se ha visto perjudicada por la movilidad y, especialmente, por la referida pérdida y eliminación de las dos plazas de funcionarias tramitadoras de refuerzo a lo largo del año 2021 y 2022. En cualquier caso, la plantilla se ha ido adaptando a las circunstancias que se iban presentando de tal manera que los negociados no quedaran paralizados y se siguieran tramitando los asuntos con la mayor normalidad posible, utilizándose como criterio general el reparto de los asuntos por número, atendiendo al penúltimo dígito de la numeración.

La distribución del trabajo se hace en dos Secciones, la Sección de Ejecutorias, con dos Gestores y una Tramitadora, y la Sección de Trámite, que incluye la tramitación de los Juicios Rápidos y de los Procedimientos Abreviados, con tres funcionarios de Tramitación Procesal.

La Sección de Ejecutorias se distribuye entre los dos gestores y una tramitadora. -Negociado 2, el Funcionario de Gestión Procesal se encarga de la incoación y tramitación de las ejecutorias que terminan en 2,7,9 y 1 (con la anterior cifra par). Negociado 6, la Funcionaria de Gestión Procesal se encarga de la incoación y tramitación de las ejecutorias que terminan en 0,4,5 y 1 (con la anterior cifra impar). Negociado 3, la Funcionaria de Tramitación Procesal Susana Durán Raimundo se encarga de la incoación y tramitación de las ejecutorias que terminan en 3,6 y 8. También se encargan de la notificación personal de las sentencias absolutorias firmes dictadas in voce, según número de su negociado.

La Sección de Trámite se distribuye entre tres funcionarios de tramitación procesal. Negociado 1, el Funcionario de Tramitación Procesal José Miguel Rivas Aparicio se encarga desde la incoación a la firmeza de los procedimientos (juicios rápidos y procedimientos abreviados) que terminan en 2,3 y 4. Negociado 4 la Funcionaria de Tramitación Procesal se encarga desde la incoación a la firmeza de los procedimientos (juicios rápidos y procedimientos abreviados) que terminan en 5, 8 y 9. Negociado 5 el funcionario de Tramitación Procesal se encarga desde la incoación a la firmeza de los procedimientos (juicios rápidos y procedimientos abreviados) que terminan en 1, 6 y 7. El 0 se reparte por el número anterior entre los mismos sin hacer distinción.

El reparto en la Sección de Ejecutorias es el mismo que existía cuando la LAJ tomó posesión en este juzgado y dado que los tres negociados encargados han permanecido de manera estable y realizan su trabajo de manera eficiente no se ha visto la necesidad de hacer cambios. La especialidad radicaría en que se cuenta el 0 como un número a repartir y el nº 1 se distribuye entre los dos gestores, quedando la tramitadora con medio número menos. Lo que se les ha atribuido más recientemente, tras la pérdida de las plazas de refuerzo, según informa la letrada, ha sido la notificación de las sentencias in voce firme para descargar de trabajo a los Funcionarios encargados del trámite de señalamientos.

El reparto en la Sección de Trámite, nos informa la letrada, ha ido cambiando por la movilidad de los negociados. El criterio rector que ha sido utilizado en todo momento, siempre ha sido el reparto por números que se iban asignando a uno u otro negociado en función de las necesidades



del servicio y con el objetivo de que, a pesar de las vacantes, ningún procedimiento quedara paralizado sino que siempre tuviera un tramitador de referencia que se hiciese cargo del mismo. En esta labor siempre se ha tratado de ser lo más equitativo posible y así hay un turno de reparto para presos preventivos y para procedimientos con dispositivos de control telemático.

Cada día un Funcionario realiza las labores de registro e imprime los escritos de la aplicación Lexnet al objeto de ser revisados, minutados e incorporados, en su caso, por la que suscribe. Además también atienden a los correos del juzgado tanto al general como el de atención al público.

Cuando hay una baja o vacante en el juzgado, los asuntos se reparten por números atendiendo al penúltimo dígito de la numeración, como ya se ha aclarado anteriormente. En caso de vacaciones o días de asuntos propios se turnan los funcionarios de manera que, al menos, se encuentre presente en el juzgado, como mínimo, un funcionario de cada sección.

Mención aparte merecen los exhortos de los que se encargan los Funcionarios de Auxilio Judicial, que vienen desempeñando esta función desde antes de la toma de posesión de la Letrada inspeccionada y que, por ahora, se mantiene. Recientemente se ha dividido esta tarea entre números pares e impares y así se distribuyen entre los dos funcionarios. Los Funcionarios de Auxilio además desempeñan el resto de las funciones propias de su cargo como las labores de preparación, asistencia de la Sala y grabación de los juicios, correo, remisión y recepción de procedimientos a Decanato, Fiscalía y a la Audiencia, así como labores de archivo entre otras. Los Funcionarios de Auxilio se sustituyen entre sí.

El ambiente laboral, tanto entre los Funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar, según afirma el Letrado de la Administración de Justicia, que la actividad desplegada es constante y en fase de mejora continua. La actitud de los funcionarios, según indica la señora letrada es positiva, como puede apreciarse en la evolución de estadística, reduciéndose de forma considerable el número de suspensiones de juicio, de asuntos pendientes de firmeza, elevaciones de recurso a la Audiencia, así como en la provisión de escritos.

Por otro lado el control en el impulso y la presentación de los escritos la realiza personalmente la letrada a diario, de forma correcta. A nivel de archivos, el órgano no tiene necesidades de liberación de espacios.

El Juzgado de lo Penal nº 12 de Málaga se haya situado en la cuarta planta de la Ciudad de la Justicia de Málaga, en C/ Luis Portero García nº 3, ubicación donde fue trasladado en el mes de enero de 2022, estando con anterioridad a esa fecha y desde su creación en la planta menos uno del mismo edificio.

Consta de una sala principal donde se ubica la oficina dotada de mobiliario suficiente y en buen estado, una fotocopidora con fax y dos impresoras. Así mismo existe una sala de archivo y una sala multiusos o de servicios múltiples, así como los despachos de la Magistrado y la Letrada dotados éstos con equipo informático e impresora. El espacio destinado al archivo de los expedientes no es suficiente, dado que la remisión al Archivo Territorial se dificulta por la saturación de sus instalaciones.

En general las instalaciones disponen de las condiciones adecuadas para su uso. La Sala de vistas asignada es la nº 40 cuyo uso se comparte con el Juzgado nº 13 de lo Penal, en función de



los días de señalamiento. Está dotada de sistema de videoconferencia y utilizándose igualmente el sistema Cisco Webex, que es cada vez más demandado, permitiendo que se celebren los juicios sin necesidad de la presencia física de las partes que, con causa justificada, no pueden acudir a las dependencias judiciales.

Dada la especialidad de la materia objeto de este Juzgado en las dependencias judiciales existen salas de víctimas para garantizar los derechos de las mismas, si bien no cuentan con entrada directa a la Sala de Vistas. También se está provisto de biombo en orden a dar cumplimiento al mencionado fin.

Está dotado de los medios informáticos necesarios, contando con un sistema de videoconferencia en la Sala 40. Se cuenta en la oficina judicial con 8 terminales informáticos, con doble pantalla, 2 impresoras, y 1 fotocopidora. La Magistrado y la LAJ disponen además, cada una de ellas, de un terminal informático con dos pantallas, una impresora y un ordenador portátil.

El material y equipamiento informático es propiedad de la Junta de Andalucía y se le da el uso correspondiente a la normativa en vigor, con observancia por parte del personal del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia (Instrucción 2/2003 del CGPJ de 26 de febrero de 2003), siendo cada funcionario consciente de las normas que debe cumplir, utilizándolos conforme a su destino y respetando el deber de preservar la confidencialidad de la información que maneja a través de los sistemas informáticos.

Los terminales están equipados con el Sistema de Gestión Procesal Adriano del que son usuarios todos los funcionarios del juzgado, utilizándose los modelos que ofrece la aplicación excepto los que no están actualizados en cuyo caso se usa el modelo texto libre aunque se renombra para facilitar su control. Se realizan habitualmente actualización de fases y estados y se integran las resoluciones finales en la aplicación de gestión procesal. Se lleva a cabo el registro de asuntos informáticos y el envío de los mismos de forma telemática. Se da el uso correspondiente a la aplicación de itineración Nautius. Está implantado el sistema de recepción de escritos y notificación por Lexnet siendo su funcionamiento satisfactorio aunque se producen fallos en su uso.

Se utiliza la firma digital a través de la aplicación del Portafirmas, la cual también da lugar a repetidas incidencias en su funcionamiento. Se utiliza la aplicación Áurea registrándose por la LAJ los procedimientos conforme se produce su entrada en el Juzgado tras ser repartidos por Decanato y comprobándose la correcta itineración de las declaraciones y otros actos celebrados ante el Juzgado Instructor. Utilizándose, igualmente, para la grabación de los juicios y otros actos que lo requieren.

Todos los Funcionarios de la plantilla tienen acceso al Punto Neutro Judicial y utilizan los servicios del mismo con observancia y cumplimiento de las Instrucciones 2/2003 del C.G.P.J, 4/2009 Y 5/2010 del Secretario General de la Administración de Justicia.

Del mismo modo, todos los Funcionarios tienen acceso al Siraj realizando el registro de los procedimientos y la actualización de los mismos, siendo realizadas las anotaciones de las notas de condena personalmente por la LAJ.

La adecuación de las aplicaciones de gestión procesal a lo establecido en el Reglamento del



CGPJ 2/2010 es correcta en cuanto a alguno de sus aspectos tales como que permite registrar los datos que se definen como obligatorios en el mismo, procediéndose a ello por los funcionarios, se le asigna automáticamente un NIG a los procedimientos el cual se vincula a todos los que dimanen del asunto principal, si bien, por ejemplo, no actualiza automáticamente el estado de los procedimientos.

En relación al estado de funcionamiento y uso de las aplicaciones informáticas de gestión procesal, el total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta el 04/04/2023 de 14.990. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2023 es de 290 asuntos.

Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 461.323 acontecimientos, de los cuales 9.865 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2023 hasta la fecha de la petición.

En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 8.737 resoluciones, de las cuales 7.457 son sentencias, 1.077 son autos definitivos y 203 son decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2023 hasta la fecha, figuran un total de 123 sentencias, 94 autos definitivos y 7 decretos definitivos.

El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 23.769 actualizaciones manuales de fases y estados, de las cuales 394 corresponden desde comienzos de 2023 hasta la fecha. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 2.107 procedimientos pendientes y 1.080 procedimientos inactivos.

Por el Secretario de Gobierno se añaden las siguientes consideraciones: La LAJ vela por la tramitación digital de los procedimientos y sigue las pautas establecidas al efecto en el entorno digital con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de Justicia y este Secretario de Gobierno, pero no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse, de órgano de enjuiciamiento penal, lo que le sirve, por un lado para poder corregir en determinados supuestos deficiencias procedentes de esos expedientes, pero desgraciadamente, en el ámbito jurisdiccional penal todos los asuntos llegan en formato papel.

Tiene esta cuestión su explicación en que aunque los órganos unipersonales itineran informáticamente todos los asuntos por Nautius, y el contenido de las resoluciones judiciales dictadas pueden comprobarse a través del modo consulta en la propia aplicación de gestión procesal Adriano, hay que afirmar que en esta jurisdicción de ámbito penal, no se reciben los expedientes judiciales de forma digital ni en formato de expediente judicial electrónico y ello por los siguientes motivos:

En el ámbito jurisdiccional penal, en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza se



remiten los procedimientos en papel, especialmente motivado por la exigencia del Ministerio Fiscal de que se les remitan los expedientes en papel, lo que motiva que los órganos unipersonales penales, pese a que la gran mayoría de ellos tramitan de manera digital el procedimiento, reproducen en papel todo el expediente para poderlo tramitar con la fiscalía; haciéndose necesario recordar a los órganos judiciales penales la obligación de la tramitación digital íntegra de los expedientes, y la colaboración en este sentido por parte de la Fiscalía. A ello se añade que la fiscalía no forma parte de LEXNET, pese a estar legalmente previsto al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, lo que dificulta el tránsito en estos órganos judiciales al expediente digital.

Igualmente se le ha recomendado la señora letrada que utilice de tablas Excel para controlar de una manera efectiva e instantánea todos los datos importantes en el control de la ejecución penal.

Por lo demás, en el trabajo de los Funcionarios, se informa la ayuda que realiza en su labor por la Letrada de la Administración de Justicia, de que se cuida el cumplimiento de las necesidades de anotaciones telemáticas de todo tipo que son exigibles, debido a la carga de trabajo que soportan por volumen de procedimientos en esta fase, la Letrada se ocupa de efectuar todas la anotaciones y actualizaciones en el Registro de Medidas Cautelares y Registro de Penados de las medidas de requisitorias, de violencia de género, así como de la anotación y registro de todas las Sentencias dictada por este órgano.

Debe insistirse especialmente en la actualización de fases y estados, y en el registro de cuantos acontecimientos procesales se producen y la identificación suficiente de los mismos, extremos éstos en los que la atención y dedicación ha de ser especialmente minuciosa para el futuro funcionamiento adecuado del expediente digital.

Se realiza un correcto uso de las distintas aplicaciones que se realizan en uso conjunto con el sistema de gestión Adriano como el punto neutro judicial o el registro de medidas cautelares de penados, violencia de género, etc.

Tienen libros manuales e informáticos. Por el Secretario de Gobierno se hacen las siguientes consideraciones: se detecta la existencia de una cantidad excesiva de libros físicos por lo que se recomienda su paulatina eliminación al existir un control telemático suficiente a través de los libros que en la aplicación Adriano tiene a disposición del órgano judicial. En definitiva, se recomienda a la LAJ la introducción de criterios de ordenación y control de los procedimientos y las ejecutorias de modo informático para realizar una explotación más completa de los datos que aportan los distintos campos en el sistema de gestión procesal.

Por el Secretario de Gobierno se hacen las siguientes consideraciones: “posee un saldo de 53.003,95 € se trata de una cuenta con escasos ingresos mensuales del orden de 19 en los cinco últimos días y 43 en el último mes. A pesar de ser los ingresos escasos, si se aprecia que se está trabajando en esta cuenta, pues en los últimos cinco días se han expedido 42 mandamientos de devolución, si de transferencias y en el último mes se han expedido 42 mandamientos e igual número lo que puesto en relación a las entradas, significa que hay una dedicación en la misma, podría ser por la finalización de la huelga de los letrados o por el propio aviso de la inspección. Es



de destacar que sólo existen siete mandamientos pendientes de entrega lo que sin duda hace pensar que hay actividades seguimiento de los mandamientos expedidos, para que lleguen a su destino. Tiene 137 cuentas activas de las que 63 encuentran en fase operativa y 68 como abiertas. En los operativos aprecia movimientos de expedientes actualizados, siendo el más antiguo su movimiento el que corresponde a una cuenta cuyo número finales 21 14, con saldo de cero 77 €, la fechas de los últimos movimientos, en cada uno de los expedientes operativos abiertos no alcanzan en su gran mayoría los cinco años de antigüedad, por lo que se puede concluir que la cuenta se encuentra regularizada y trabajada con aceptable dedicación, si bien se puede sugerir que se realice un control sobre los expediente más antiguos y que presentan cantidades insignificantes, dándoles el destino legalmente oportuno en función del estado procesal que presenten los procedimientos a los que hace referencia. Tiene un perteneciente la cuenta y tres autorizados, lo que indica que son suficientes para controlar la cuenta en este juzgado. Se practican embargos telemáticos de forma eficaz y no se ha detectado que se realicen subastas electrónicas”.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia 934 procedimientos y 1.277 ejecutorias. Hay 76 escritos pendientes de proveer, 49 en asuntos en trámite y 27 de ejecutorias.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. El Juzgado inspeccionado soporta una carga de trabajo elevada, que supera el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 400 procedimientos abreviados por órgano y año.
2. Del estudio detallado de los anteriores datos de la presente inspección puede concluirse que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado no puede considerarse satisfactoria ni normalizada, sin perjuicio de ser conscientes de sus características y especialización, carga competencial y problemática de plantilla, por lo que debemos reconocer el esfuerzo y trabajo que se viene impulsando y realizando con el objetivo de gestionar la agenda de señalamientos, evitar suspensiones y procurar plazos razonables de resolución.
3. La actual titular dedica dos días de la semana para celebración de vistas o juicios (martes y jueves), sumándose otro día al mes para posibles suspensiones (un miércoles). Por lo general, hay 12 señalamientos por sesión de juicios rápidos y 8-10 señalamientos por sesión de procedimientos ordinarios, lo que se estima razonable a la vista del volumen de ingreso.

Se observa un número importante de procedimientos pendientes de fijar fecha de juicio oral, en concreto 698, aparte de los 204 asuntos ya señalados; por tanto, un calendario apretado de posibles señalamientos: 82 del año 2020, 208 del año 2021, y 214 del año 2022, cifra total preocupante.

El último señalamiento viene referido al mes de octubre de 2023 para los juicios rápidos y el mes de febrero de 2024 para los procedimientos ordinarios, sin perjuicio de huecos en la agenda para asuntos urgentes o con presos.

Se detecta que los asuntos penales turnados por los Juzgados de Instrucción vienen señalados en torno al año siguiente a su incoación y los procedimientos ordinarios se señalan en torno a los dos años desde la fecha de ingreso en el Juzgado, salvo asuntos urgentes o con presos.



En definitiva, plazos que exceden de lo razonable.

Se intenta que los asuntos señalados estén bien comprobados y se aseguran de la correcta citación de las partes para evitar que los niveles de suspensión sean elevados, si bien el resultado final no es el deseable, debido a menudo por la nacionalidad extranjera de muchas víctimas cuya presencia se considera necesaria por la acusación, lo que impide que sea más eficiente la labor que se está realizando, sin que exista prueba preconstituida, extremo que deberían valorar los Juzgados de Instrucción.

También hay que tener en cuenta en el momento presente acontecimientos con incidencia en el desarrollo normal de la actividad judicial, en concreto, la huelga de LAJs. y/o de funcionarios, que ha obligado a suspensiones de juicios, reseñados en gran parte a partir de febrero de 2024.

Sólo tienen fecha de señalamiento los asuntos ordinarios ingresados hasta la anualidad 2020, quedando pendientes de tal trámite los procedimientos ordinarios de los años 2021, 2022 y el actual. En este sentido, se detecta que sólo existe la anotación telemática con el número de procedimiento, pero sin actuación procesal alguna respecto a los 698 procedimientos pendientes de fijar fecha de juicio oral, ni siquiera auto de incoación y derivadas.

Todo lo expuesto aconseja, en la medida de lo posible, una óptima gestión de los señalamientos, singularmente en los suspendidos para evitar que vuelvan a re-situarse en el último lugar de la agenda, valorando, incluso, la posibilidad de añadir un segundo día (miércoles) mensual.

Es necesario materializar y dictar las resoluciones procesales pertinentes en los 698 procedimientos pendientes de fijar fecha de juicio oral (auto de incoación y derivadas), de forma que se fije y conozca con mayor anticipación las fechas de señalamiento de tales asuntos registrados sólo informáticamente en la oficina, con su correspondiente notificación a las partes interesadas.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa en general un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. Por ello, la titular del órgano judicial, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán actuando lo necesario para mayor seguimiento, impulso y revisión periódica de los asuntos.

5. Sería necesario ampliar o reforzar la plantilla funcional del Juzgado inspeccionado con otro funcionario de tramitación procesal, para implementar medidas para la mejora de los señalamientos, controlar las posibles suspensiones que puedan ocasionarse y, en su caso, aumentar el número de estos conforme al ritmo y cadencia que en la agenda de señalamientos se pueda establecer por el equipo rector. Todo lo anterior, sin perjuicio de la conveniencia de una medida de refuerzo judicial -JAT para apoyo transversal y un LAJ en prolongación de jornada- con objeto de aumentar la cadencia de señalamientos en los juicios rápidos y mejorar la agenda de aquellos procedimientos abreviados que no están señalados.

Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. Se aprecia una buena dirección y control. La oficina judicial funciona bien a pesar de la carga de trabajo existente, mérito imputable a todos los que forman parte de la misma y a quienes constituyen el equipo rector.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la correcta



implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Visto el inconveniente de que muchos órganos judiciales no confeccionan correctamente el expediente digital, ni vienen bien identificados los acontecimientos ni indexado correctamente el procedimiento, sin olvidar que los Juzgados instructores todavía remiten en papel los procedimientos, es imprescindible que por el Secretario de Gobierno y los respectivos Secretarios Coordinadores se impartan las oportunas instrucciones, circulares y, en su caso, apertura de seguimientos, recordando a los Letrados/as de la Administración de Justicia de los órganos unipersonales la necesidad de que impartan las instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, así como vigilen su cumplimiento.

Es imprescindible que la Fiscalía se integre en LEXNET, lo que está legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, única forma de completar el tránsito de los órganos judiciales al expediente digital.

7. Deberá actuarse lo necesario, en base a las indicaciones del Secretario de Gobierno, en relación con la llevanza de libros informáticos y la Cuenta de Consignaciones.

Participese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.10- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000022/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 8 DE HUELVA por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 16/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

Este órgano entró en funcionamiento el 30 de junio 2018, constituyéndose en fecha 2 de julio de 2018 con competencia exclusiva y excluyente en materia relativa a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contrato de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es persona física. En virtud del Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 28 de noviembre de 2018, se atribuye al Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Huelva la dirección y coordinación de la estructura organizativa denominada “Juzgado bis”.

Además de la Magistrada-Juez titular del nº 8, el órgano cuenta con dos JAT de refuerzo. El Juzgado cuenta actualmente con un LAJ, 4 gestores, cinco tramitadores y un auxilio, así como 2 funcionarios de refuerzo, 2 tramitadores, dado que en fecha 31 de abril cesaron a un gestor, un tramitador y auxilio.

La LAJ tomó posesión en su fecha de constitución y desde el día 16 de octubre 2019 se le encomienda en su totalidad la dirección del órgano bis, antes dependiente del Instancia 6 de Huelva, y del Instancia 8 del que entonces ella era titular. En fecha 9 de marzo de este año ha tomado posesión en su nuevo destino, Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Huelva, y asumido en sustitución voluntaria la llevanza del Instancia 8.

La situación actual de la plantilla es insuficiente tras perder los tres funcionarios de refuerzo, y



no puede atender correctamente, no sólo la entrada de asuntos, sino la pendencia del Juzgado como órgano que fue exclusivo de la materia de cláusulas suelo hasta principios del pasado año.

Desde un punto de vista organizativo, nos informa la LAJ que desde septiembre de 2022 se ha procedido a reestructurar la agenda del Instancia 8, que se señaló para el año 2026, y se ha conseguido adelantar los señalamientos del año 2026 con un doble señalamiento para los tres magistrados desde septiembre a diciembre y doble señalamiento semanal para los dos JAT hasta julio de 2023.

Actualmente, se va señalando por diciembre de 2023 con un doble señalamiento semanal para la titular del órgano, a la espera que se decida sobre la prórroga de los dos JAT de refuerzo.

En cuanto a las últimas medidas adoptadas, se procedió por la LAJ a reorganizar la carga de trabajo de la oficina para compensar la entrada de los nuevos asuntos civiles. Hasta entonces, los funcionarios del Instancia 8 llevaban, además, demandas del Bis. Los cuatro Funcionarios de refuerzo (3 tramitadores y un gestor) no podían asumir solos toda la carga de trabajo que supuso el 6 Bis. Sin contar con las ejecuciones, se recibieron 5730 demandas.

La medida para evitar el colapso en la incoación de las mismas, según informa la LAJ, fue que tanto los funcionarios del Bis como del 8 conocieran de las mismas. Cuando se produce la pérdida de exclusividad y se termina la exención de reparto, la letrada procedió a asignar a los 4 Funcionarios del bis todos los asuntos vivos, para compensar así a los Funcionarios del Instancia 8, la entrada de la nueva materia civil, que tanto por el volumen como por su complejidad en la tramitación para ellos, suponía un excesiva carga de trabajo añadida. Sin embargo, a finales de marzo, se suprimió por la Consejería de justicia a 1 Gestor y 2 Tramitadores, con lo que la única solución que encontró la Letrada fue revertir de nuevo a los funcionarios del Instancia 8 los asuntos del Bis que llevaban. Esta decisión ha supuesto un duro revés para la oficina, que ha provocado, según informa la letrada, desánimo y desconcierto ante una ingente cantidad de trabajo que es inasumible, a pesar del esfuerzo y dedicación que emplean.

Actualmente la situación, tras la pérdida de los refuerzos, bajas, plazas sin cubrir durante semanas, ha motivado que, como la letrada expone, se dispare el número de escritos e incoaciones pendientes, dado que en modo alguno es posible asumir por la oficina la carga de trabajo que soportaban de los tres funcionarios de refuerzo que cesaron, lo que inevitablemente se va a traducir en un retraso en la tramitación de los expedientes.

Según lo observado y de acuerdo con la entrevista realizada con el equipo rector, se considera necesario reponer el personal en un funcionario de tramitación y otro de Auxilio, siendo este último de forma más imperiosa para poder celebrar de forma simultánea algunos días en que existen dobles señalamientos como los lunes y jueves, en que están celebrando ambos jueces en dos sala de vistas diferentes. Igualmente esta Funcionaria del cuerpo de auxilio es muy necesaria para la tramitación del correo ordinario que en la actualidad se está generando con más intensidad, desde que tramita procedimientos de todo tipo del ámbito jurisdiccional civil.

En cuanto a las medidas adoptadas para mantener la cadencia de señalamientos se nos informa y así constatamos que, durante cuatro días a la semana, celebran juicios y manifiestan los inspeccionados que los lunes y jueves tienen señalamientos simultáneos en dos salas por dos



jueces distintos, que en definitiva realizan seis sesiones de juicio a la semana para tres jueces, y sobre todo, que tienen el último señalamiento completamente actualizado hasta el mes de diciembre del presente año.

Desde el 1 de noviembre de 2022 este órgano ha perdido la exención de reparto civil de la que gozaba (salvo asuntos en cláusula suelo que si se repartían ente todos los Juzgados de Instancia). En la primera estadística de este año se recibieron 345 procesos declarativos, se incoaron 55 piezas incidentales y entraron 67 ejecuciones. Desde ese día, 1 de noviembre del año 2022, han tenido entrada de todo tipo de asuntos de ámbito civil, con un montante total de 725 asuntos, los cuales se encuentran todos debidamente minutadas, de los cuales existen en trámite 272 monitorios, todos ellos, encontrándose en fase inicial, admitidos a trámite y se han podido archivar solo algunos y ejecuciones de títulos no judiciales a través de resoluciones definitivas o con el dictado de auto, declarando SSª determinadas cláusulas abusivas. Durante el mes de abril pasado, se han recibido 55 demandas. Se han señalado en el trimestre 603 vistas, habiéndose celebrado 412 y de las suspendidas ya se ha proveído nueva fecha de señalamiento.

Las instalaciones actuales son correctas y no se observan deficiencias llamativas.

El Juzgado tramita de forma completa el expediente digital. En todos los procedimientos examinados constan los acontecimientos debidamente descritos y catalogados, salvo excepciones muy puntuales en que se puede comprobar una resolución de “texto libre”, referidas siempre a diligencias de unión o de constancia.

El orden cronológico de los mismos es el correcto salvo en algunos procedimientos en que se ha comprobado que la unión de los despachos recibidos se realiza con posterioridad a la resolución de la que trae causa.

Todas las resoluciones están firmadas digitalmente y están perfectamente integradas en el expediente. En todos los procedimientos examinados la fase y estado es la correcta y la documentación que se recibe, que no llega por Lexnet, como por ejemplo diligencias de comunicación practicadas por el Servicio Común, informes, comparecencia de un perito, el apoderamiento apud acta y otros documentos originales se catalogan y se incorporan al expediente. El sistema de gestión procesal si guarda relación con la realidad del Juzgado.

Se detecta la necesidad de que los Funcionarios del Juzgado nº 8 y del denominado 6 bis puedan usar indistintamente los sistemas de gestión procesal de ambos órganos, ya que en la actualidad se trata de una única estructura organizativa judicial.

Las demandas son registradas diariamente y se trasladan posteriormente a la Letrada para que la minute. Los escritos se imprimen y sólo se examinan personalmente aquellos que son urgentes o reiterativos. La dación de cuenta a los Magistrados se lleva a cabo por parte de los Funcionarios, siendo de forma presencial y telemática a través del escritorio judicial.

Las aplicaciones telemáticas son utilizadas por el personal con total normalidad. Los procedimientos en la aplicación de gestión procesal Adriano, en términos generales se encuentran actualizados en fase y estado. La plantilla es colaboradora con el uso de las nuevas tecnologías, así que disponen de las correspondientes claves de acceso del PNJ y de la Tesorería General de la Seguridad Social.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Los actos de comunicación a Procuradores se realizan a través del Lexnet. También se realiza el envío de exhortos telemáticos a los demás Juzgados a través de Adriano y PNJ, según sean fuera o no de Andalucía, y se incorporan los escritos desde Lexnet al sistema de gestión procesal Adriano.

En conclusión, en este Juzgado existe un elevado grado de consolidación del expediente digital que ha permitido una homogeneización de las actuaciones y un fiel reflejo del sistema de gestión procesal con la realidad del Juzgado. Se han asumido muy buenas prácticas en la tramitación digital de los expedientes.

El total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta el 4 de abril de 2023 de 7.852. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2023 hasta el 4 de abril de 2023 es de 430 asuntos. Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 169.062 acontecimientos civiles, de los cuales 12.419 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2023 hasta la fecha de referencia. En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 6.185 resoluciones, de las cuales 3.883 son sentencias, 1.376 son autos definitivos y 926 son decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2023 hasta la fecha de referencia, figuran un total de 358 sentencias, 96 autos definitivos civiles y 93 decretos definitivos. El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 4.178 actualizaciones manuales de fases y estados, de las que 215 corresponden al periodo de referencia. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 3.341 procedimientos pendientes y 994 procedimientos inactivos.

En cuanto a los libros en secretaría, no se lleva ninguno en soporte físico, haciendo uso de lo suministrado por la aplicación de gestión procesal.

Este Juzgado tiene asignada la cuenta número 5364 que tiene un saldo al día de la fecha de 1.545.090,94 €, se observa una media alta de ingresos que recibe en los últimos cinco días, 55 y en el último mes han recibido 194.

Se aprecia que se está trabajando de forma efectiva en la cuenta, pues en los últimos cinco días se expiden 68 mandamientos de devolución y ocho transferencias y en el último mes se han expedido 274 mandamientos de devolución, 115 transferencias y dos traspasos, lo que puesto en relación a las entradas, indican que hay una dedicación evidente en ella.

No hay que ignorar que también influye la finalización de la huelga de los letrados y el hecho de esta inspección. Hay que destacar que existen 209 mandamientos pendientes de entrega, lo que hace pensar que no hay mucha actividad en el seguimiento de los mandamientos expedidos para que lleguen a su destino, por lo que se han de adoptar las medidas oportunas para que estos mandamientos pendientes de entrega lleguen a su destinatario lo antes posible.



Por la LAJ se informa que la causa de esta anomalía es debida a la huelga de los Funcionarios, ya que muchos de estos mandamientos se encuentran pendientes de entregar a los profesionales, siendo este el motivo fundamental y habiéndose mantenido la huelga de funcionarios en estas tres últimas semanas, ese volumen responde a esta circunstancia.

La cuenta tiene 988 cuentas expedientes activas de las que 329 encuentran en fase operativa y 520 están abiertas, en las operativas aprecia movimientos actualizados en los expedientes, siendo todo relativamente reciente, con lo que sin duda está relacionado con la entrada en funcionamiento del órgano y la fecha de lo último movimiento en cada uno de los expedientes operativos y abiertos, no alcanzan más de tres años de antigüedad, por lo que se puede concluir que esta cuenta se encuentra regularizada y trabajada con aceptable dedicación, si bien se puede sugerir que se realice un control sobre los expedientes más antiguos y que presentan cantidades insignificantes, dándoles el destino oportuno, en función del estado procesal que presente los procedimientos a que hace referencia.

En cuanto a los depósitos para recurrir, existen en la actualidad 569 procedimientos pendientes en la audiencia Provincial, constatándose un número importante de cantidades consignadas como depósitos para recurrir lo que da a entender que muchos expedientes deben ser examinados y que por su relativa antigüedad proceder de igual manera, a lo anteriormente dicho.

Se observa que la cuenta tiene un perteneciente y nueve autorizados, lo que indica que son suficientes para controlar la cuenta de depósitos, haciéndose constar que todos los mandamientos son efectuados por la letrada, sin perjuicio de que tiene autorizados a los funcionarios para consulta y aviso a la letrada de la expedición de los mandamientos, así como también están habilitados los profesionales para poder visualizar las cuentas. Se practican embargos, telemáticos de forma eficaz y no se ha detectado Subastas electrónicas en esta cuenta.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia 1.401 procedimientos en fase de tramitación, 2 exhortos y 1.847 procedimientos en fase de ejecución.

De todo lo anterior se puede concluir:

- 1. El Juzgado inspeccionado soporta una carga de trabajo elevada, que supera el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 1.200 asuntos como carga de trabajo anual en este tipo de Juzgados, lo que justifica mantener las medidas de apoyo judicial, máxime ante el nivel de pendencia existente por la sobrecarga de asuntos de años precedentes, si bien con el necesario refuerzo de LAJ y funcionarios y una correcta llevanza de la agenda de señalamientos que permita rentabilizar la actual estructura judicial de dos jueces de apoyo a la titular.*
- 2. El estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección revela que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado se puede considerar correcta, aunque todavía no del todo normalizada, valorando el número de asuntos pendientes de resolver, así como el tiempo que transcurre entre el registro de entrada y la fecha de señalamiento. Todo ello, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo y laboriosidad desplegada y conscientes de sus características y carga competencial durante el período de especialización en condiciones generales de contratación*



bancaria.

Todo el trabajo realizado por Magistrados y Letrada de AJ es digno de felicitación, al tiempo que ha supuesto un gran esfuerzo para todos los funcionarios que integran este Juzgado, a los que igualmente hay que felicitar.

Hay que valorar dos acontecimientos con incidencia en el desarrollo normal de la actividad judicial, la reciente huelga de LAJs. y la actual huelga de funcionarios judiciales, lo cual esperamos no deteriore sensiblemente la situación del órgano descrita por el momento.

3. Desde un punto de vista cualitativo, se hace necesario continuar en las revisiones periódicas de los procedimientos, llevar un control de los plazos y evitar traslados innecesarios que dilatan la tramitación.

Es conveniente la puesta al día de todos los procedimientos que aparecen en los listados aportados a la inspección, dándoles el trámite e impulso que corresponda, a la vista de las paralizaciones observadas en varios de ellos, en especial liquidar los escritos pendientes de proveer que se acercan a los 1000.

4. La plantilla de funcionarios es insuficiente, singularmente en lo que respecta a los refuerzos necesarios para toda la estructura organizativa, no sólo el Juzgado matriz, por lo que debe oficiarse a la Consejería de Justicia al objeto de que se reponga lo antes posible la plaza de auxilio judicial y un tramitador, imprescindibles para reducir el volumen de pendencia y normalizar el trabajo judicial.

Se detectan, en general, relaciones correctas entre los integrantes de la oficina.

5. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos, siendo imprescindible la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal, así como velar que se proceda a la grabación de las marcas en las grabaciones de vistas y juicios, dando instrucciones precisas al funcionario de auxilio judicial.

6. Deberá actuarse lo necesario, en base a las indicaciones del Secretario de Gobierno, en relación con los saldos de la Cuenta de Consignaciones, normalizando los mismos.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.11- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000023/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE LINARES por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de JAEN el día 04/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El Juzgado fue objeto de visita de inspección por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2019.

La plantilla la integran el Juez, Letrada de la Administración de Justicia, dos Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. La plantilla resulta insuficiente ante el aumento del nivel de litigiosidad en asuntos civiles en estos últimos años, asimismo la implantación constante de nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas que afectan al sistema procesal informático con numerosas funciones de anotación y consulta que exigen un tiempo para ello, por lo



cual se considera que las necesidades actuales de plantilla son de un funcionario de Gestión Procesal y otro funcionario de Tramitación Procesal.

Las relaciones entre el personal integrante del Juzgado y L.A.J. son buenas, existiendo una buena coordinación y colaboración entre sus miembros, especialmente las relaciones entre Juez y Letrado de la Administración de Justicia. Existe un adecuado reparto de funciones entre los gestores, tramitadores y auxilio. Las buenas relaciones mencionadas son extensibles al resto de operadores jurídicos y también con el resto de los Juzgados de Instrucción y miembros del Mº Fiscal.

En los casos de baja por enfermedad o situaciones análogas existe predisposición por parte de los restantes compañeros de la sección a asumir las tareas en tanto se nombra sustituto, y en todo caso atender los asuntos calificables de urgentes.

En general en ambas secciones podemos decir que la aptitud de los funcionarios es positiva en relación con las instrucciones recibidas, hasta el punto de que normalmente las mismas son cumplidas bastando la mera orden oral, sin que sea necesario la elaboración de instrucciones de oficina o protocolos de funcionamiento.

El reparto de demandas se realiza por el Servicio Común de Partido Judicial. Son itineradas a través del NAUTIUS. Las demandas e escritos iniciadores se presentan por Lexnet. Los escritos se presentan telemáticamente a través de la aplicación Adriano, quedando incorporados a cada procedimiento, excepto los presentados sin representación procesal que son presentados ante el Servicio Común, si bien al no estar conectado con Adriano no quedan incorporados directamente al procedimiento. El reparto de atestados, denuncias y partes médicos y escritos de trámite se realizan telemáticamente a través de lexnet atestados. Si bien en algunas ocasiones se presentan en papel porque manifiestan que el sistema lexnet no funciona. Los escritos con Abogado y Procurador, los informes del IML quedan incorporados al procedimiento. Las escritos son controlados por el Letrado, distribuidos para su reparto en la oficina, e itenera y minuta las demandas con numeración automática, consiguiendo que la distribución del trabajo en la sección sea equitativa. Se digitalizan, graban y consolidan todos los expedientes.

Examinada la agenda de señalamientos, los mismos se encuentran bien dimensionados y próximos en el tiempo, señalándose los procedimientos civiles en una media de 3-4 meses salvo familia y otros preferentes, dando una respuesta razonable en el tiempo, aunque algo ralentizada por la movilidad de Jueces desde octubre del año anterior. Es el Juez el que señala y controla dichos señalamientos. En el orden penal, los Juicios por Delitos Leves se señalan como máximo a 3-4 meses, llevándose a cabo la práctica de declaraciones y demás diligencias en 2-3 semanas. Las resoluciones de ordinario se ponen en plazo, proveyéndose los escritos con fluidez y agilidad, siendo el número de los pendientes insignificante.

La utilización y funcionamiento de Lexnet es adecuada, también en la recepción de atestados y ampliatorias de estos vía telemática, partes médico-hospitalarios o de otros Centros del SAS, a excepción de puntuales presentaciones por escrito.

Por el Letrado y Funcionarios se utilizan las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia. Los poderes, se realizan ante la Secretaria personalmente, también



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

telemáticamente, registrándose en el sistema informático APODERA. Todos los funcionarios están dados de alta, disponen de claves de acceso para todas las aplicaciones informáticas, en las que el Letrado ha delegado. Las aplicaciones de SIRAJ, se utilizan y están plenamente operativas, donde se visan por el Letrado y se realizan las correspondientes anotaciones, control de las vigencias de las órdenes de busca, anotaciones de ordenes de alejamientos y prohibiciones, al ser el Juzgado competencia en Violencia de Género, teniendo una exención de reparto civil. De una exención del 30 por ciento de monitorios y en penal las dos primeras guardias del año y no se reparte el conocimiento de querellas.

Los distintos procedimientos examinados que aun están en papel en penal, están correctamente formados con encuadernadores tipo fástener, estando unidos los correspondientes acuses de recibo, debidamente cumplimentados. Se tramita papel cero en civil, en penal no se lleva papel cero, aunque indica que se integra todo en el sistema procesal. Se consolidan los procedimientos formando expediente digital, no de forma diaria. A la Audiencia los expedientes van consolidados y las grabaciones se integran.

La Sala cuenta con el sistema de grabación, se utiliza WEBEX para videoconferencias, vistas telemáticas y declaraciones. El Letrado firma telemáticamente las vistas, siendo el sistema lento. El Letrado y el Juez utilizan la firma digital en sus resoluciones, siendo el sistema en muchas ocasiones lento y da fallos.

El Juzgado Mixto nº 4 de Linares se encuentra en un edificio destinado para albergar la sede de los Juzgados, 1, 2, 3, 4 y en edificio aparte el Juzgado número 5. Cabe destacar lo reducido de las dependencias del juzgado, siendo el ratio de metros cuadrados por funcionario claramente insuficiente. El mobiliario es en principio adecuado, disponiendo cada funcionario de mesa propia y ordenador exclusivo. Existe una impresora en cada sección y varias líneas de teléfono en cada una de las secciones. En cuanto a la SALA DE VISTAS esta se encuentra compartida con el juzgado nº 2 de Linares, correspondiendo la Sala el lunes y miércoles de todas las semanas para la celebración de vistas civiles, disponiendo igualmente de la misma el lunes saliente de la guardia, para la celebración de juicios inmediatos delitos leves.

Sería necesario un nuevo edificio judicial o la remodelación del existente de manera que se garantice la existencia de suficiente espacio para el desempeño adecuado de la función jurisdiccional, con estancias destinadas a ser empleadas como Sala de Vistas de uso exclusivo, sala multiusos, aseos individuales para cada género, y sala de espera, como mínimo. La falta de sitio y el hecho de tener que compartir determinadas instalaciones con otros órganos judiciales dificulta en ocasiones el desarrollo del servicio. Carece de Sala para Víctimas de Violencia de Género generando un problema tanto para las víctimas como para el propio Juzgado, debiendo llevarse a las víctimas a otras dependencias que no se encuentran acondicionadas, así mismo la Sala Gesell se encuentra en las dependencias del Juzgado Mixto nº 5 de Linares que se encuentran ubicadas en otro edificio al cual hay que desplazarse a fin de llevar a cabo las pruebas objeto de las mismas con los inconvenientes que dicha práctica supone al encontrarse fuera de dependencias judiciales tanto para la víctima, menores como personal del órgano judicial.

Los Funcionarios de esta oficina disponen todos ellos de equipo informático individual,



además de dos impresoras y fotocopidora multifunción, videoconferencia y equipo de grabación en la sala de vistas. Todos los funcionarios de la Sección civil, y penal tienen clave de acceso a las aplicaciones del Punto Neutro Judicial y al sistema de grabación.

No consta incumplimiento del Código de Conducta (Instrucción 2/03), y respetando por las mismas las Instrucciones 4/09 y 5/10 del Secretario General de la Administración de Justicia. Igualmente en el registro de asuntos se da cumplimiento al Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/10. Se respeta la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración en el sistema procesal, pues dadas las plataformas existentes son escasos los escritos que se reciben en papel y que responden a la respuesta a Oficios remitidos y que son digitalizados e incorporados al propio expediente. El cumplimiento de la normativa sobre comunicaciones vía Lexnet a profesionales y recepción por dicho aplicativo de todos los escritos iniciadores y de trámite es óptimo. La tramitación de Exhortos telemáticos es llevada a cabo tanto a través del Punto Neutro Judicial (comunicaciones seguras), como a través del sistema de gestión procesal de Adriano en el caso de remisión dentro de Andalucía. El uso del sistema de conexión Cisco-Weber ha permitido la eliminación de gran número de peritos, con lo que se hace uso un uso adecuado y eficiente de los sistemas de comunicación telemáticos.

Todos los libros se llevan en formato digital.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones presenta una buena llevanza por parte del Letrado, aunque existen movimientos antiguos pendientes de aplicar, necesitando de una revisión y destino legal que corresponda, se recomienda un repaso total, sobre todo aquellos asientos pendientes de aplicar anteriores a 2019.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia en el orden jurisdiccional civil de 276 asuntos, que se distribuyen 90 juicios ordinarios, 3 juicios verbales arrendaticios, 5 juicios verbales posesorios, 5 resto juicios verbales 85 juicios monitorios 85 asuntos de división patrimonial, 4 concursos persona física, otros contenciosos 33.

La pendencia indicada es mejorable, si bien se comprueba en los expedientes examinados, que en muchas ocasiones se debe a la tardanza del Servicio Común de Linares en realizar el requerimiento del pago y otras diligencias.

Es preciso referirse a las ejecuciones, que se mantienen cifras no elevadas de 372, las más numerosas son las de título judicial con 243, de títulos no judicial 74, hipotecarias 21 y relativas al derecho familia 34.

Consta que muchos procedimientos están a la espera del “instar actora”. Respecto al derecho de familia, la pendencia total es de 68 asuntos.

Presenta una cifra elevada de registro de asuntos penales para este tipo de órganos, concretamente en el año 2022 se registraron 1155 asuntos, viniendo a alcanzar en los últimos años un aumento al alza, no obstante lo cual mantiene cifras bastante aceptables de pendencia, con solo 24 escritos de trámite y ninguno de ejecución, sin asuntos pendientes de registrar, o de proveer, siendo el total pendientes de 190 asuntos: 103 diligencias previas, 39 procedimientos abreviados, 20 delitos leves, 3 de señalamiento inmediato y 22 ejecutorias. Se observa duplicidad de diligencias



previas provocada por las normas de reparto de asuntos penales.

Se ha observado en los asuntos examinados disfunciones a la hora de proveer escritos, saltos en el tiempo, sin un control adecuado y con la suficiente periodicidad y poca ordenación en las diligencias a practicar. Se recomienda un repaso periódico de las diligencias previas y especialmente de las ejecutorias penales, con el fin de que no transcurra el plazo de prescripción de la pena, debiéndose dejar constancia de las citaciones y requerimientos que se efectúan de manera telefónica, con el fin de seguir el trámite legal que corresponda. El S.C.N.E., contribuye en gran manera a la ralentización de la tramitación penal.

En conclusión se puede afirmar que en el orden civil se constata que el Juzgado genera un ingreso de asuntos en los últimos años por encima del referencial aconsejable de 680 asuntos civiles, que se vienen superando, registrándose en 2022, 779 asuntos. Lo mismo ocurre en el orden penal, en el que se supera ligeramente el referencia de 1000 asuntos penales, habiéndose registrado concretamente 1155 asuntos en 2022, aunque debido por unas normas de reparto que provocan claramente duplicidad en el registro.

No obstante, la pendencia es aceptable y se puede considerar que el funcionamiento del Juzgado es bueno, salvo las disfunciones puntuales observadas de ralentización en la tramitación en los procedimientos penales, debido a que en el año anterior han prestado servicio hasta cuatro Jueces, habiendo tomado posesión el Juez titular en fechas muy recientes hace escasamente tres meses y disfrutado además de su licencia por matrimonio, resaltando desde su toma posesión su capacidad resolutive en ambos ordenes, civil y penal, implicación y compromiso profesional que es extensible al Letrado de la Administración de Justicia y a los funcionarios del juzgado.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.12- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000024/2023 realizada al JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 15 DE MÁLAGA por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 22/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El Juzgado ha sido objeto de visita de inspección por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2016.

La LAJ titular de la plaza hasta el 31/3/2023 fue doña Ana Isabel Castro Morientes, quien cesó por concurso de traslado siendo desde el día 1 de abril de los corrientes la plaza cubierta por sustitución por la Letrada del Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga, doña Elena Franch Álvarez de Cienfuegos; tanto la titular cesante como la actual han realizado una correcta labor, especialmente, equilibrando la carga de trabajo existente en cada uno de los negociados, con la intención de que el trabajo que se realizara en la oficina fuera constante y uniforme, regularizar la llevanza de los distintos procedimientos y controlar la carga de trabajo de este órgano judicial.

En la distribución del trabajo se distingue un sistema en el que existen cuatro tramitadores y dos gestores, encargados de todos los trámites, desde la recepción del procedimiento abreviado, juicio rápido o auxilio judicial, tanto nacional como de la Unión Europea o país extranjero, hasta la



conclusión del expediente por archivo definitivo. Este sistema estaba implantado con anterioridad, considerándose como el más adecuado ya que la división de trabajo se hace de manera igualitaria entre todos los funcionarios, aunque los del cuerpo de gestión procesal tienen asignado un número más; por su parte de la funcionario de auxilio judicial realiza sus competencias y además la cumplimentación de los exhortos.

No existe un plan concreto de sustitución en la plantilla, por lo que es toda ella se hace cargo de realizar las actuaciones urgentes por falta de asistencia de los compañeros, si bien en los supuestos de vacaciones, siempre se encuentra en el Juzgado un funcionario del cuerpo de gestión y otro de tramitación, así como uno de los auxilios judiciales.

Se comprueba que la plantilla es relativamente joven al tratarse de funcionarios que han obtenido su primer destino en la capital, alguno de ellos provenientes de otras comunidades autónomas, sólo de la plantilla originaria quedan dos funcionarios, que actúan en cierto modo como “mentores” del resto y sirven como guías y colaboradores para la mejora en el rendimiento de la oficina; se observa buena predisposición y actitud por parte de los funcionarios actuales.

Cada día un funcionario realiza las labores de comprobación del registro e imprime los escritos de la aplicación Lexnet al objeto de ser revisados, minutados e incorporados, en su caso, por la letrada. Además, también atienden a los correos del juzgado, tanto al general como el de atención al público.

Por la LAJ se informa que procuran ser escrupulosos en el control de las citaciones para los juicios, al objeto de evitar el mayor número de suspensiones, no obstante reconocen que en algunos casos hay suspensiones inevitables por bajas laborales no sólo de los justiciables, sino también de los propios abogados y que en esos supuestos se hace difícil evitar la posible suspensión.

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrada, es bueno y se puede considerar, según afirma la LAJ, constante y en fase de mejora.

Por otro lado, el control en el impulso y la presentación de los escritos la realiza personalmente la LAJ a diario, de forma correcta.

Las instalaciones son correctas, singularmente tras haberse solucionado los problemas de ventilación externa con posible apertura de ventanas; por otro lado, se nos indica que está prevista la reubicación del Juzgado en planta superior.

A nivel de archivos, el órgano no tiene necesidades de liberación de espacios.

La LAJ vela por la tramitación digital de los procedimientos y sigue las pautas establecidas al efecto en el entorno digital con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de Justicia y este Secretario de gobierno, pero no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse, de órgano de enjuiciamiento penal, y, desgraciadamente, en el ámbito jurisdiccional penal todos los asuntos llegan en formato papel. Tiene esta cuestión su explicación en que aunque los órganos unipersonales itineran informáticamente todos los asuntos por Nautius, y el contenido de las resoluciones judiciales dictadas pueden comprobarse a través del modo consulta en la propia aplicación de gestión procesal Adriano, hay que afirmar que en esta jurisdicción de ámbito penal, no se reciben los



expedientes judiciales de forma digital ni en formato de expediente judicial electrónico y ello por los siguientes motivos:

Como es notorio, en el ámbito jurisdiccional penal de esta comunidad autónoma se remiten los procedimientos en papel, especialmente motivado por la exigencia del Ministerio Fiscal de que se les remitan los expedientes en papel, lo que motiva que los órganos unipersonales penales, pese a que tramiten de manera digital el procedimiento, reproducen en papel todo el expediente para poderlo tramitar con la fiscalía. A ello se añade que la fiscalía no forma parte de Lexnet, pese a estar legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, lo que dificulta el tránsito en estos órganos judiciales al expediente digital.

Se recomienda la introducción de criterios de ordenación y control de los procedimientos y las ejecutorias de modo informático para realizar una explotación más completa de los datos que aportan los distintos campos en el sistema de gestión procesal; con esta implementación se consigue hacer una ostensible mejora para controlar de una manera efectiva e instantánea todos los datos importantes en el control de la ejecución penal.

Por lo demás, en el trabajo de los funcionarios, se informa por la Letrada de la Administración de Justicia que se cuida que estos efectúan el cumplimiento de las necesidades de anotaciones telemáticas de todo tipo que son exigibles, todas la anotaciones y actualizaciones en el Registro de Medidas Cautelares y Registro de Penados de las medidas de requisitorias, de violencia de género, así como de la anotación y registro de todas las Sentencias dictada por este órgano. Se realiza un correcto uso de las distintas aplicaciones que se realizan en uso conjunto con el sistema de gestión Adriano como el punto neutro judicial o el registro de medidas cautelares de penados, violencia de género, etc.

Debe insistirse especialmente en la actualización de fases y estados, y en el registro de cuantos acontecimientos procesales se producen y la identificación suficiente de los mismos, extremos éstos en los que la atención y dedicación ha de ser especialmente minuciosa para el futuro funcionamiento adecuado del expediente digital.

En relación al estado de funcionamiento y uso de las aplicaciones informáticas de gestión procesal, el total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta el 19/04/2023 de 2.690. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2023 es de 276 asuntos.

Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 58.165 acontecimientos, de los cuales 7.685 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2023 hasta la fecha de la petición.

En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 1.163 resoluciones, de las cuales 840 son sentencias, 63 son autos definitivos y 260 son decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2023 hasta la fecha, figuran un total de 68 sentencias, 12 autos definitivos y 36 decretos definitivos.



El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 462 actualizaciones manuales de fases y estados, de las cuales 59 corresponden desde comienzos de 2023 hasta la fecha. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 2.174 procedimientos pendientes y 779 procedimientos inactivos.

Relación de libros manuales que se llevan en Secretaría, aunque ADRIANO cuenta con Libros de Decretos, Autos y Sentencia:

- 1. Libro de señalamientos. La última anotación practicada es en el folio 53 siendo señalados como últimos días de juicios el 6/5/2024.*
- 2. Libro de sentencias. La última anotación practicada es de fecha 8 de mayo de 2023 sentencia número 95, folio 54.*
- 3. Libro de Fiscalía. La última anotación practicada es de fecha 8 de mayo de 2023, folio 5.*
- 4. Libro de ejecutorias. La última anotación practicada es de fecha 8 de mayo de 2023, ejecutoria número 207/2023, folio 45.*

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones posee un saldo de 134.735,56 €. Se observa una media normal de ingresos, para el tipo del órgano que recibe en los últimos cinco días 34 y que en el último mes ha recibido 200 ingresos.

Se aprecia que se está trabajando en la cuenta, pues en los últimos cinco días se han expedido 19 mandamientos de devolución, y 136 transferencias, y 26 traspasos y en el último mes se han expedido 60 mandamiento de devolución y 266 transferencias y 32 traspasos, lo que puesto en relación a las entradas, significa que hay dedicación en la cuenta y puede ser también por la finalización de la huelga de los letrados o por el aviso de inspección, siendo lo aconsejable que se mantenga este ritmo.

Es destacar que existen 85 mandamientos pendientes de entrega, lo que sin duda hace pensar que no hay mucha actividad en el seguimiento de los mandamientos expedidos para que lleguen a su destino, por lo que se han de adoptar las medidas oportunas para que estos mandamientos pendientes de entrega lleguen a su destinatario lo antes posible. Quizá la huelga de funcionarios sea el motivo de que este particular esté en estos números.

Hay 155 cuentas expedientes activas, de las que 23 se encuentran en fase operativa y 70 como abiertas, 62 están ejecutadas. En las operativas se aprecian movimientos de expedientes actualizados, siendo todos relativamente recientes, la fecha de los últimos movimientos en cada uno de los expedientes operativos y abiertos, son recientes en el tiempo, por lo que se puede concluir que la cuenta de depósitos y consignaciones, se encuentra regularizada y trabajada con dedicación.

Hay un perteneciente en la cuenta y seis autorizados, lo que indica que son suficientes para controlar la cuenta de depósitos en este Juzgado. Igualmente se practican embargos telemáticos de forma eficaz. Por lo tanto, se puede deducir que esta cuenta de consignaciones está siendo trabajada de manera constante por la Letrada y no existen discrepancias en su llevanza, debiendo continuar en esta progresiva labor de depuración y control cercano de la misma.



Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 650 procedimientos abreviados, 848 ejecuciones y 6 exhortos pendientes de cumplimentar. Hay 113 escritos pendientes de proveer, 69 en asuntos en trámite y 44 de ejecutorias.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. El Juzgado inspeccionado soporta una carga de trabajo elevada, que supera el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 400 procedimientos abreviados por órgano y año.
2. Del estudio detallado de los anteriores datos de la presente inspección puede concluirse que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado no está del todo normalizada, sin perjuicio de reconocer el trabajo que se viene impulsando con el objetivo de gestionar la agenda de señalamientos, evitar suspensiones y procurar plazos razonables de resolución.
3. La actual titular dedica dos días de la semana para celebración de vistas o juicios (lunes y miércoles), sumándose un día o dos más al mes para posibles suspensiones (un jueves); dos días del mes son dedicados a juicios rápidos, previamente señalados desde la agenda de los Juzgados de guardia. Por lo general, hay 8-10 señalamientos por sesión.

El último señalamiento previsto está fijado para el mes de mayo del año 2024. Se detecta que los asuntos penales se señalan en torno al año desde la fecha de ingreso en el Juzgado, salvo asuntos urgentes o con presos, cuando anteriormente la distancia era de 7/8 meses en los señalamientos. En definitiva, plazos que se van alargando y pueden ya exceder de lo razonable.

Se intenta que los asuntos señalados estén bien comprobados y la correcta citación de las partes para evitar que los niveles de suspensión sean elevados, si bien el resultado final no es el deseable, ya que en la actualidad lo encontramos en un nivel de un 50% con respecto a los celebrados.

También hay que tener en cuenta en el momento presente acontecimientos con incidencia en el desarrollo normal de la actividad judicial, en concreto, la huelga de LAJs. y/o de funcionarios, que ha obligado a suspensiones de juicios, reseñados en gran parte a partir de febrero de 2024.

Por la titular se informa que los jueves lo dedican también a las conformidades, aunque ya se han marchado a la distancia del año. A tal efecto, se observa que se dicta una resolución con citación a primera sesión y posible conformidad, si bien si el acusado y/o defensa manifiestan que no desean ese trámite, se deja sin efecto automáticamente el señalamiento, acordando nueva citación para juicio completo, en cuyo caso pasan al año habitual de celebración. Por esta Presidencia se entiende poco razonable y operativa esta forma de proceder, que no hace sino depender de las partes el curso temporal del señalamiento y poca utilidad muestra, siendo aconsejable acudir directamente a la citación obligatoria de las partes y, en su caso, practicar cuestiones previas y/o conformidad.

Todo lo expuesto aconseja, en la medida de lo posible, una óptima gestión de la agenda de señalamientos, mejorando su cadencia, singularmente en los suspendidos para evitar que vuelvan a re-situarse en el último lugar de la agenda, así como insistir en las medidas para reducir el número de suspensiones al objeto de evitar en todo momento un alargamiento en los plazos y que



se pueda aumentar el número de sentencias dictadas.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa en general un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. Por ello, la titular del órgano judicial, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán actuando lo necesario para mayor seguimiento, impulso y revisión periódica de los asuntos.

5. La plantilla se considera ajustada para el volumen de ingreso, pero es necesario que se cubran con rapidez las bajas y vacantes de los funcionarios.

Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. Se aprecia una buena dirección y control.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la correcta implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Visto el inconveniente de que muchos órganos judiciales no confeccionan correctamente el expediente digital, ni vienen bien identificados los acontecimientos ni indexado correctamente el procedimiento, sin olvidar que los Juzgados instructores todavía remiten en papel los procedimientos, es imprescindible que por el Secretario de Gobierno y los respectivos Secretarios Coordinadores se impartan las oportunas instrucciones, circulares y, en su caso, apertura de seguimientos, recordando a los Letrados/as de la Administración de Justicia de los órganos unipersonales la necesidad de que impartan las instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, así como vigilen su cumplimiento.

Es imprescindible que la Fiscalía se integre en Lexnet, lo que está legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, única forma de completar el tránsito de los órganos judiciales al expediente digital.

7. Deberá actuarse lo necesario, en base a las indicaciones del Secretario de Gobierno, en relación con la llevanza de libros informáticos, la Cuenta de Consignaciones y, en su caso, las ejecutorias.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.13- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000025/2023 realizada al JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 2 DE HUELVA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de HUELVA el día 22/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de inspección al órgano fue realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2017, dictándose acuerdo por la Comisión Permanente del mismo el 08/06/2017 con el siguiente contenido: “Felicitar al magistrado José Manuel Balerdi Múgica, titular del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Huelva, haciéndola extensiva a la letrada de la Administración de Justicia titular, María Rosario Benítez Marín, y a los miembros de la oficina judicial por la dedicación a sus respectivas funciones.”



La plantilla está compuesta por dos Gestores, cuatro Tramitadores y dos Auxilios. El equipo rector es titular. Solo hay dos funcionarios titulares, los restantes son interinos. Aún cuando ha habido movilidad, las ausencias se han cubierto en un plazo razonable de tiempo y el órgano no se ha resentido, haciendo frente, de forma muy satisfactoria, a los cambios. En los casos de vacantes o bajas por enfermedad se ha intentado controlar el negociado que se encuentra en esa situación ordenando, en lo posible, el trabajo que entra y controlando los asuntos urgentes, por los demás funcionarios. No existen expedientes disciplinarios ni de inidoneidad en el órgano. No se refieren problemas de absentismo ni de cumplimiento del horario.

Todos los Funcionarios tramitan ejecutorias, debido al volumen de las mismas. Se tomó esta decisión cuando se creó la figura de las Diligencias Urgentes en los Juzgados de Instrucción, ya que estas ejecutorias (la mayoría derivadas de delitos contra la seguridad vial) son las más frecuentes, entrando una media de 10 a la semana.

El Juzgado no ha tenido ningún plan de auto refuerzo. Después de la situación de crisis sanitaria padecida en 2020, la Consejería de Justicia implantó planes de auto refuerzo en los órganos judiciales con mayor pendencia, de los que no disfrutó el Juzgado inspeccionado, ya que, ni en esas circunstancias, se vio resentido su ritmo constante de trabajo. Los funcionarios manejan con soltura el sistema de gestión procesal Adriano. Si trabajan con un modelo de texto libre, describen su contenido. Suelen actualizar fases y estados. Se recogen las medidas del SIRAJ. Están señalando para junio, es decir, a un mes vista.

El Juzgado inspeccionado está ubicado en la cuarta planta del edificio sito en Alameda Sundheim, 28 de Huelva que es el Palacio de Justicia. En él se ubican, en distintas plantas, los cuatros Juzgados de lo Penal, los cinco Juzgados de Instrucción, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las tres Secciones de la Audiencia Provincial y los Servicios Comunes de Registro y Reparto y de Notificaciones y Embargos. También están en esa sede la Fiscalía Provincial, la Secretaría de Coordinación, el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), el Punto de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) y una dependencia del Colegio de Procuradores. Se trata de un edificio inaugurado en febrero de 1971 que, evidentemente, se ha quedado pequeño y obliga a la dispersión de los distintos órdenes jurisdiccionales. Las instalaciones del órgano fueron reformadas a finales del año 2020. La sala de vistas es compartida entre los Juzgados de lo penal n.º 1 y 2, sin que genere ninguna incidencia. La mayor necesidad del órgano en materia de instalaciones es disponer de mayor espacio para archivo.

El órgano utiliza el Servicio Común de Notificaciones y Embargos para la práctica de actos de comunicación, conforme al protocolo existente para ello.

En materia de informatización, todos los funcionarios disponen de ordenador con doble pantalla y manejan el sistema de gestión procesal Adriano. No hay expediente digital, ya que los procedimientos se reciben en papel de los Juzgados instructores. Manejan las aplicaciones informáticas SIRAJ, Nautius, PNJ y demás disponibles. Todos están autorizados y disponen de contraseña. La sala de vistas está dotada de los medios de grabación y reproducción del sonido y la imagen a través de la aplicación Arconte-Áurea, disponiendo también de sistema WebEx para realizar videoconferencias que se graban en el acta. Las resoluciones finales se incorporan al



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

sistema de gestión procesal Adriano.

Se cumple lo dispuesto en la Instrucción 2/2003 del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de febrero, referente a la observancia y cumplimiento por parte del personal del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos de la Administración de Justicia. También se cumple la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración al sistema de gestión procesal, comunicaciones vía LexNET con profesionales y recepción por dicha aplicación de escritos de trámite y exhortos telemáticos. También se emplea la plataforma LexNET para comunicaciones con el Centro Penitenciario de Huelva y el Centro de Inserción Social.

Los libros de registro de la Secretaría se llevan en parte en formato papel y en parte digitalmente.

Respecto a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, es la 1927, con un saldo a fecha de cierre de datos de 80.577,81 €. Las cuentas expedientes activas son 271. Hay 2 mandamientos de devolución caducados por no haber sido presentados al cobro. Los mandamientos de devolución expedidos y pendientes de cobro son 23. La Sra. Letrada lleva un control exhaustivo de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. Respecto a los mandamientos caducados, la Letrada los reexpide dos o tres veces, incluso llama por teléfono a los beneficiarios. Si no se cobran, lo transfiere a la cuenta de depósitos provisionalmente abandonados, ya que así se lo indicó la inspección en la visita de 2017.

El Juzgado inspeccionado tramita y resuelve en unos plazos dignos de elogio, lo que se demuestra en el hecho de tener solo 72 Procedimientos Abreviados pendientes. Los que se reciben, se resuelven, proveen y señalan a un mes vista. Las sentencias se dictan en el mismo día de la celebración del Juicio Oral o al siguiente. El órgano no tiene ningún escrito pendiente de proveer. Respecto a las ejecutorias, su pendencia es muy aceptable. Se han revisado para la inspección y, apreciado un descuadre que ha sido mandado al Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Las ejecutorias en trámite son 902, número que denota el buen reparto de las mismas.

El órgano trabaja bien y con detalle. Se lleva un control de las anotaciones en SIRAJ, se recogen y anotan las medidas adoptadas, se acusa recibo al instructor de la recepción del procedimiento y se le comunica el número asignado en el Juzgado de lo Penal.

Sí es necesario que el órgano inspeccionado se inicie en la implantación del expediente digital. Aunque el procedimiento de origen no se reciba en ese formato, el Juzgado puede digitalizar su expediente desde la primera resolución que dicte.

El Juzgado de lo Penal n.º 2 de Huelva se encuentra absolutamente normalizado en materia de recepción, incoación, señalamientos, resoluciones y ejecutorias. Los tiempos de respuesta son encomiables.

Solo queda señalar, tal y como se hizo en la anterior visita de inspección girada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en 2017, que se felicite al Magistrado-Juez, a la Letrada de la Administración de Justicia y a los miembros de la oficina judicial por la dedicación, implicación y trabajo en sus respectivas funciones.

Participese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.14- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000026/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE JEREZ DE LA FRONTERA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÁDIZ el día 01/06/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El Juzgado se ubica en la Primera Planta del Edificio Indico, separado del resto de Juzgados de Primera Instancia de dicha localidad. Cuenta con seis dependencias fundamentales, que se corresponden, una con el despacho de la Magistrada-Juez, otra con la de la Letrada, dos dependencias ocupadas cada una por dos funcionarios, una dependencia de mayor amplitud donde están ubicados el resto de funcionarios y finalmente la dependencia destinada a archivo del Juzgado, que actualmente se comparte con el Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Familia.

En cuanto al estado de las instalaciones, al tratarse de un edificio moderno puede decirse que es correcto, si bien el mobiliario es escaso. A ello, hay que añadir que a la fecha actual, el Juzgado sigue sin rotular lo que origina el inconveniente de que los ciudadanos estén continuamente preguntando por éste y otros Juzgados del edificio.

Por lo que se refiere a la Sala de Vistas ubicada en la planta de este Juzgado, la misma no es de uso exclusivo de este Juzgado, sino que se comparte con el de 1ª Instancia núm. 6 de Familia y con el nuevo 1ª Instancia núm. 8 de Familia.

La plaza de Magistrada-Juez está ocupada por su titular Doña Mª CASTILLO MENDARO DORANTES desde el 1 de diciembre de 2018 en que tomó posesión. La plaza de Letrada de la Administración de Justicia está cubierta por su titular Doña CRISTINA CANDELA BARAJAS desde el 28 de enero de 2019.

La plantilla legal de este Juzgado está formada por 3 Gestores, 4 Tramitadores y 1 Auxilio Judicial, todos ellos titulares excepto un tramitador y un Auxilio, ambos Interinos. Las funciones de Médico Forense se coordinan a través del Instituto de Medicina Legal, con sede en Cádiz.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 1738 asuntos civiles en actividad; de ellos 798 son asuntos contenciosos y 940 son de ejecución. Hay 20 Expedientes de Jurisdicción Voluntaria pendientes y no hay ningún exhorto pendiente. En Jurisdicción Contenciosa, hay 36 escritos pendientes de proveer, de los cuales 8 son de procedimientos en trámite y 28 en ejecución. Hay 50 procedimientos pendientes de dictar sentencia o resolución de fondo y ninguno con trámite suspendido por Diligencia para Mejor Proveer.

El órgano objeto de inspección soporta como los restantes del Partido Judicial de Jerez de la Frontera, una carga de trabajo muy elevada y un registro de entrada excesivo, muy superior al máximo de lo recomendado por los módulos del Consejo General del Poder Judicial, pues registra el 150% del numero de asuntos que dicho instrumento aconseja, constatándose igualmente un volumen de incoación sostenible desde el año 2009, no existiendo en el juzgado en la actualidad ningún procedimiento que revista una especial complejidad en la tramitación ni en su decisión, por lo que se hace innecesaria cualquier medida especial de refuerzo, aunque desde ya se advierte que



a juicio de este inspector, el partido judicial precisa de la creación de un nuevo Juzgado de 1ª Instancia.

En lo atinente a los medios materiales y personales, hay que destacar que el juzgado cuenta con el apoyo de un servicio común que funciona correctamente a juicio de los titulares del órgano, cuya plantilla está compuesta por 18 funcionarios, siendo deseable que se incremente al menos en uno más habida cuenta que se trata de un partido con casi 250.000 habitantes y que sufre la dificultad de contar con un importante número de diseminados y núcleos de población donde no resulta fácil la práctica de cualquier gestión.

El sistema informático, que es correctamente utilizado, al igual que el Punto Neutro Judicial, permite un control eficaz de la situación de los asuntos y se traduce en la práctica en la ausencia de la llevanza de libros físicos. Los procedimientos están digitalizados.

Los señalamientos se practican con una periodicidad razonable en atención al volumen de entrada, si bien deben acelerarse, y se llevan a cabo en Sala de Vistas que es compartida con el número 8, y también por la JAT que en la actualidad se encuentra apoyando al Juzgado de Familia.

El Juzgado se ubica en un edificio, denominado Indico, de oficinas cercano al grueso de los Juzgados del partido, las instalaciones son correctas pero impropias de una sede judicial y en el mismo se encuentra el Juzgado de Familia, el de 1ª Instancia núm. 8 y el de lo Contencioso Administrativo, llama la atención la ausencia de un arco de seguridad en la puerta principal.

El registro y minutación de los asuntos, que a la vista del volumen de ingresos penden en una cifra razonable y proporcionada, se hace por la Letrada de la Administración de Justicia de manera exclusiva en función de las amplias competencias que le confiere la actual legislación, dando cuenta a la Magistrada de cualquier tipo incidencia y siendo correcta la frecuencia de señalamientos. El instructor examinó a conciencia alguno de los procesos mas antiguos, en los que se denota cierta falta de diligencia en el impulso procesal, y sobre todo se aconsejó la posibilidad de archivar provisionalmente cuantos asuntos estén vivos durante un tiempo razonable sin que las partes insten nada a tal efecto, de manera muy especial en materia de ejecución, competencia que en la actualidad es exclusiva de la Letrada de la Administración de Justicia, a quien se aconseja que intente reducir el número de ejecuciones pendientes. El trabajo se reparte de forma numérica y por igual entre los funcionarios con criterios a mi juicio correctos, destacando que se trata de una plantilla estable desde hace años, que goza de prestigio entre los profesionales, componiendo así un buen equipo de trabajo.

Analizados todos los datos de forma global y que de manera minuciosa se aportan en la documentación anexa a este informe, cabe concluir que la pendencia es normal aunque susceptible de mejorar, en atención al elevado volumen de ingreso al que venimos haciendo referencia desde el inicio de este informe, en la actualidad no existen apenas, asuntos pendientes de sentencia, el tiempo de respuesta es perfectamente razonable y en definitiva la situación del órgano es correcta, si bien sería deseable que se disminuyera la pendencia de procesos de ejecución.

Debido al elevado volumen de ingreso asuntos y la pendencia que se constata, deben intentar los responsables del juzgado continuar con el ritmo adecuado de trabajo que hasta la fecha se viene desarrollando en aras de evitar cualquier retraso y aminorar el tiempo de respuesta.



Por cuanto queda señalado entiendo que no es preciso ningún tipo de control externo de la situación del juzgado, si bien la Magistrada y la Letrada de la Administración de Justicia, deben proceder a una revisión periódica y cercana de los procedimientos como vienen materializando hasta la fecha, sin que sea precisa ninguna medida de seguimiento por parte del órgano de gobierno.

Valorando en su conjunto el volumen de asuntos que se incoan en el juzgado, la tasa de pendencia que existe y el tiempo que se tarda en dar respuesta, se considera que el actuar de los profesionales titulares del órgano y de la plantilla de funcionarios de la plantilla es correcto, y que el esfuerzo que realizan es loable, aunque debe incrementarse el empeño para aminorar el tiempo de respuesta.

La constatación desde hace al menos 7 años de un volumen de ingreso de asuntos que supera con creces el 150% de los los módulos aconsejados por el Consejo General del Poder Judicial, hace entender necesaria la creación de un nuevo Juzgado de 1ª Instancia para el Partido Judicial, ya que la reciente creación del Juzgado núm. 8 en enero de 2023, sigue siendo insuficiente.

El órgano está completamente digitalizado desde enero de 2016 con pleno éxito y sin ninguna disfunción.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.15- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000027/2023 realizada al JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 4 DE HUELVA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de HUELVA el día 12/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El órgano inspeccionado entró en funcionamiento en el año 2000.

La plantilla está compuesta por dos Gestores, cuatro Tramitadores y dos Auxilios Judiciales.

El equipo rector está compuesto por titulares. En la plantilla solo hay una Tramitadora titular, el resto son funcionarios interinos. En los últimos tres años, se han producido dos ceses de Jueces. Han existido bajas por incapacidad temporal de larga duración que, sin duda, han afectado al funcionamiento del órgano. No existen expedientes disciplinarios ni de inidoneidad en el órgano. No se refieren problemas de absentismo ni de cumplimiento del horario.

Al órgano se le concedieron dos planes de auto refuerzo para los funcionarios en 2021 (de septiembre a noviembre) y en 2022 (desde septiembre a diciembre). La Sra. Letrada dispuso de una prolongación de jornada de septiembre a diciembre de 2021. Ha dispuesto de una funcionaria del Servicio de Apoyo de Extensión Territorial Variable desde marzo de 2022 hasta marzo de 2023.

El Juzgado inspeccionado está ubicado en la sexta planta del edificio sito en Alameda Sundheim, 28 de Huelva que es el Palacio de Justicia. En él se ubican, en distintas plantas, los cuatros Juzgados de lo Penal, los cinco Juzgados de Instrucción, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las tres Secciones de la Audiencia Provincial y los Servicios Comunes de Registro y Reparto y de Notificaciones y Embargos. También están en esa sede la Fiscalía Provincial, la Secretaría de



Coordinación, el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) y el Punto de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA). Se trata de un edificio inaugurado en febrero de 1971 que, evidentemente, se ha quedado pequeño y obliga a la dispersión de los distintos órdenes jurisdiccionales.

Las instalaciones y dependencias del órgano inspeccionado adolecen de un reducido tamaño. Igual ocurre con la sala de vistas, que utilizan de forma exclusiva. Se ha habilitado una pequeña sala, compartida con los restantes Juzgados de lo Penal y de Instrucción del edificio, que se emplea para la realización de videoconferencias sin presencia judicial (exhortos), lo que alivia esta materia y evita suspensiones de las mismas. Se accede al órgano directamente a la oficina, que es única, sin compartimentos, disponiendo en un lateral de un pequeño habitáculo que es archivo de gestión. Al final de la sección hay un pasillo que da acceso a los despachos de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y de la Magistrada-Juez (situado al fondo). Todas las dependencias son pequeñas. Los archivos los gestionan los dos Auxilios y sus dependencias están en varios habitáculos (en el sótano, en la 5ª planta de la sede, en la empresa de custodia externa y en la sede de calle Arquitecto Pérez Carasa). Esta dispersión no es conveniente.

El órgano utiliza el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, para la práctica de actos de comunicación, conforme al protocolo existente para ello. Igualmente, le llegan los asuntos oportunamente registrados y repartidos del Servicio Común de Registro y Reparto, así como los Juicios Rápidos, a través de la agenda de señalamientos. Se utiliza el Servicio de Mediación y el Instituto de Medicina Legal. Sí existe en la sede Servicio de Orientación Jurídica. Hay en la ciudad casa de acogida y punto de encuentro.

En materia de informatización, todos los funcionarios disponen de ordenador con doble pantalla y manejan el sistema de gestión procesal Adriano, si bien, la actualización de fases y estados no está al día, de ahí que los resultados que se obtienen no sean totalmente fiables. Utilizan el texto libre con demasiada frecuencia y, algunos describen el acontecimiento realizado, mientras que otros funcionarios, no lo hacen. Los modelos que tienen en "texto libre" son muy buenos y son con los que funcionan. Los fueron haciendo los distintos Magistrados-Jueces que han pasado por el órgano. La Magistrada-Juez y la Letrada de la Administración de Justicia tienen en sus despachos ordenadores con doble pantalla e impresora. Disponen, además, de ordenador portátil con conexión en remoto. Hay dos impresoras en la oficina del órgano que dan muchos problemas en su funcionamiento. Además, al tener que hacer copias de los procedimientos los profesionales, las ocupan y eso distorsiona la marcha del órgano. Sería necesario disponer de una máquina más en la dependencia. El órgano no trabaja con expediente digital. Al no recibir en ese formato los procedimientos de los órganos instructores, trabajan en papel. La sala de vistas está dotada de los medios de grabación y reproducción del sonido y la imagen a través de la aplicación Arconte-Áurea, disponiendo también de sistema WebEx para realizar videoconferencias que se graban en el acta. El manejo de dichos sistemas corresponde a los Auxilios Judiciales, sin que plantee incidencias. Las resoluciones finales se incorporan al sistema de gestión procesal Adriano. Sí existe colaboración por parte de los funcionarios para hacer las anotaciones en los registros públicos.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Se cumple lo dispuesto en la Instrucción 2/2003 del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de febrero, referente a la observancia y cumplimiento por parte del personal del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos de la Administración de Justicia. También se cumple la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración al sistema de gestión procesal, comunicaciones vía LexNET con profesionales y recepción por dicha aplicación de escritos de trámite y exhortos telemáticos. También se emplea la plataforma LexNET para comunicaciones con el Centro Penitenciario de Huelva y el Centro de Inserción Social.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 237 procedimientos sin incoar, de los que 142 son de 2022 y 95 de 2023. Se trata de un número bastante elevado. La Magistrada-Juez ha resuelto sobre la prueba y ha dado fecha de señalamiento, pero esto ha sido a principios de la semana fijada para la visita de la inspección, por lo que, lógicamente, a las dos funcionarias encargadas de señalamientos, no les ha sido posible la incoación. La media de entrada de Procedimientos Abreviados, según el indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial es de 400 asuntos por órgano y año, por lo que el órgano inspeccionado se encuentra dentro de la media. Hay 28 Procedimientos Abreviados en busca y captura. Son 36 los procedimientos abreviados que se encuentran pendientes de juicio y 77 los que se encuentran señalados y pendientes de la celebración. Hay 18 procedimientos pendientes exclusivamente de dictar sentencia. En todos ellos, el Juicio se celebró en el presente año. Hay 12 causas con preso, de las que 5 han sido elevadas a la Audiencia Provincial para sustanciar el oportuno recurso de apelación. Las restantes están señaladas para abril y, una de ellas, para junio del presente año. Hay 15 Juicios Rápidos pendientes a la fecha de cierre de datos. Hay 5 Juicios Rápidos pendientes exclusivamente de sentencia. En la fecha de la visita hay 9 exhortos pendientes. Hay 3.281 ejecutorias pendientes y 20 ejecutorias en busca y captura. En el año 2022, el órgano recibió un total de 690 escritos, de los que 247 lo fueron en trámite y 443 en ejecución. A la fecha de cierre de datos, el órgano tenía 50 escritos pendientes de proveer.

Los libros de registro se llevan en formato papel unos y digitalmente el resto.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones está abierta en la entidad Banco de Santander, bajo el número 0394. A fecha de cierre de datos (31/03/2023) el saldo era de 392.480,50 €, más 3.000 Dirham marroquíes. Se ha aportado la relación de mandamientos de devolución y órdenes de transferencia que no han sido cargadas en cuenta, con un total de 43 expedientes en este estado. Los mandamientos de devolución que han sido cancelados por no haberse presentado al cobro son 232. Las cuentas expedientes con saldo activo son 720. El saldo se considera elevado, por lo que sería conveniente proceder a una nueva depuración. Sobre todo hay muchos mandamientos de devolución caducados por no haber sido presentados al cobro.

El Juzgado de lo Penal n.º 4 se encuentra en vías de normalización, para lo cual deberá continuar en la línea ahora marcada, debiendo mantener el ritmo de incoación y señalamiento en Procedimientos Abreviados. Dado el elevado número de Procedimientos Abreviados que se encuentran pendientes de incoar, se considera necesario imponer un SEGUIMIENTO sobre esta materia, debiendo la Sra. Letrada de la Administración de Justicia remitir mensualmente un listado con el número de expedientes incoados, de los 237 que se encontraban en esta situación a



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

31/03/2023, hasta reducirla a cero.

Ha de iniciar el uso del expediente digital, solicitando, caso de ser necesaria, la formación precisa, tanto del equipo rector, como de los funcionarios.

Es necesario repasar las ejecutorias para reducir su excesiva pendencia, teniendo que hacer también una revisión de las que se encuentran en archivo provisional.

La Sra. Letrada de la Administración de Justicia deberá realizar una revisión en profundidad de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, con la finalidad de reducir el número de cuentas expedientes abiertas y disminuir el saldo de la misma.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incócese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

2.16- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000029/2023 realizada al SECCION Nº 1 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ por el Excmo. Sr. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 16/06/202 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, el 29 de enero de 2016, sirviendo el órgano judicial como Presidente Don Manuel María Estrella Ruiz.

La plantilla actual del órgano está compuesta por cuatro Magistrados, un Letrado de la administración de justicia, dos funcionarios del cuerpo de Gestión Procesal, cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y dos del Cuerpo de Auxilio.

La Letrada de la Administración de Justicia D^a Carmen Cabrera Tribaldo cesó por jubilación en Agosto de 2022, habiendo sido su sustituida por los LAJ de las Secciones 3^a y 4^a de la Audiencia Provincial hasta la toma de posesión de la actual LAJ titular el 13/03/2023, que es doña Covadonga Herrero Udaondo, quien tomo posesión por concurso de traslado en la reseñada fecha. Tanto la titular cesante, como la actual, han realizado una correcta labor, equilibrando la carga de trabajo existente en cada uno de los negociados, con la intención de que el trabajo que se realizara en la oficina fuera constante y uniforme, y trabajando en conseguir regularizar la llevanza de los distintos procedimientos y controlar el impulso de oficio en la ejecución penal de este órgano judicial.

Se comprueba que la plantilla es relativamente estable y posee antigüedad en sus destinos, en especial los gestores y los tramitadores, así como los magistrados.

Los Funcionarios realizan las labores de comprobación del registro e imprimir los escritos de la aplicación Lexnet al objeto de ser revisados, minutados e incorporados, en su caso, por la letrada. Además, también atienden a los correos del juzgado, tanto al general como el de atención al público.

Por la Letrada se informa que procuran ser escrupulosos en el control de las citaciones para los juicios, al objeto de evitar el mayor número de suspensiones, no obstante, reconocen que en algunos casos hay suspensiones inevitables por bajas o ausencias no sólo de los justiciables, sino también de los propios abogados, y que en esos supuestos se hace difícil evitar la posible



suspensión.

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar, según afirma la Letrada de la Administración de Justicia, que la actividad desplegada es constante y en fase de mejora continua.

Por otro lado, el control en el impulso y la presentación de los escritos la realiza personalmente la letrada a diario, de forma correcta. A nivel de archivos, el órgano no tiene necesidades de liberación de espacios.

En cuanto a necesidades de personal, no se hace necesario ampliar la plantilla.

En la distribución del trabajo en la Oficina en este juzgado se distingue un sistema de trabajo que se distribuye en dos áreas:

a) Área de tramitación: los procedimientos penales de primera instancia (Procedimientos Abreviados, Sumarios y Procesos de la Ley del Jurado), cuestiones de competencia, quejas y abstenciones y la tramitación de los recursos interpuestos ante la Audiencia está asignada a los cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación procesal, según un reparto equitativo por terminación del número del asunto.

b) Área de Ejecutorias: para la ejecución de los Procedimientos Abreviados, Sumarios y Procesos de la Ley del Jurado. Las ejecutorias son tramitadas por dos funcionarios del Cuerpo de Gestión procesal distribuyéndose los procedimientos en atención a la numeración final de los asuntos tramitados en primera instancia.

c) Los dos Funcionarios del Cuerpo de Auxilio judicial realizan las tareas propias del mismo, como actos de comunicación, llevanza del archivo de procedimientos y de piezas de convicción, auxilio en juicios y vistas con control de los medios técnicos de grabación y reproducción, y correo.

En caso de vacantes o bajas el criterio de sustitución, como plan de actuación de la plantilla, que se ha establecido para los funcionarios es el siguiente:

- en caso de que la baja o vacante sea de un Funcionario del Cuerpo de Tramitación, se distribuirá el trabajo entre los otros tres funcionarios del Cuerpo de Tramitación, equitativamente. Si la actuación fuera puntual, la tramitación de cada procedimiento será atribuida al que tramite el número siguiente a su terminación.

- si la baja o vacante afecta a uno de los funcionarios del Cuerpo de Gestión, ambos se sustituyen entre sí y caso de que la baja o vacante o ausencia sea prolongada la ejecutoria será tramitada por el funcionario que tramitó el procedimiento en instancia, con la asistencia del otro funcionario de Gestión y del LAJ .

- los Funcionarios de Auxilio se sustituyen entre sí.

La Sección 1ª de la Audiencia se ubica en la planta primera del edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz. Cada uno de los cuatro Magistrados dispone de despacho individual. La Letrada de la Administración de Justicia ocupa un despacho anexo a la Oficina judicial.

La oficina judicial integrada por ocho funcionarios ocupa un único espacio que se estima demasiado justo. Las mesas de los funcionarios están muy próximas y los Funcionarios que tramitan ejecutorias disponen de poco espacio, utilizando un espacio anejo al despacho de la LAJ para sus expedientes. También la LAJ custodia en su despacho expedientes de ejecutorias, los que



están con alta periódica de indemnizaciones o únicamente pendientes de abono de indemnización.

El espacio de la oficina, por reducido, se estima poco adecuado para recibir a particulares y profesionales para la práctica de diligencias, y apenas permite la colocación de sillas si éstos las necesitaran para ser atendidos debidamente o para consulta de un expediente en la oficina, no disponiendo para ello tampoco de una mesa auxiliar.

El mobiliario de la oficina se aprecia antiguo, algunas de las puertas de los armarios de la oficina no cierran, las cortinas no corren bien y se estima conveniente pintar las paredes .

En el sótano del edificio se encuentra el archivo de piezas de convicción y de expedientes archivados definitivamente, que se encuentra en un estado de humedad que con el tiempo acaba afectando al estado de los expedientes archivados y de las piezas de convicción. Es habitual la presencia de insectos tipo cucarachas en la planta del sótano, pese a las fumigaciones periódicas.

En el archivo de piezas de convicción la caja fuerte no está operativa y todos los objetos de valor se encuentran en la Caja de Depósitos de Seguridad del Banco Santander.

No hay trituradora de papel en la oficina, aunque sí en el edificio, encargándose los funcionarios de Auxilio de triturar el papel sobrante en la misma.

En cuanto al cumplimiento de la Instrucción 4/2009 del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa al uso integral de las aplicaciones informáticas en las Oficinas Judiciales y a la 5/2010 relativa al sistema de registro de apoyo a la administración de justicia, todas las aplicaciones informáticas se utilizan y observan por todo el personal de la oficina.

Respecto del Reglamento de Homogeneización 2/2010 del CGPJ, relativa a la transferencia y registro de procedimientos, se observa. Se han dado instrucciones para la apertura de PIC (piezas separadas individuales del condenado, que se llevan manual pero no informáticamente, aunque se mantiene abierta una incidencia respecto del encabezamiento de las resoluciones que se emiten que no ha sido aún solucionada.

Se ha dado además la instrucción del Registro informático de las Solicitudes de Auxilio Judicial Penal, no obstante se ha observado que no existen modelos de recepción y devolución en Adriano, por lo que ha sido solicitada su inserción, (incidencia número 2009001 de 30/05/23)

La Letrada vela por la tramitación digital de todos los procedimientos y sigue las pautas establecidas al efecto en el entorno digital con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de justicia y este Secretario de gobierno, pero no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse de órgano de enjuiciamiento penal, lo que le sirve, por un lado, para poder corregir en determinados supuestos deficiencias procedentes de esos expedientes, pero desgraciadamente, en el ámbito jurisdiccional penal todos los asuntos llegan en formato papel.

Tiene esta cuestión su explicación, en que aunque los órganos unipersonales itineran informáticamente todos los asuntos por Nautius, y el contenido de las resoluciones judiciales dictadas pueden comprobarse a través del modo consulta en la propia aplicación de gestión procesal Adriano, hay que afirmar que en esta jurisdicción penal no se reciben los expedientes judiciales de forma digital ni en formato de expediente judicial electrónico y ello por los siguientes motivos:



En el ámbito jurisdiccional penal, en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza se remiten los procedimientos en papel, especialmente motivado por la exigencia del Ministerio Fiscal de que se les remitan los expedientes en papel, lo que motiva que los órganos unipersonales penales, pese a que la gran mayoría de ellos tramitan de manera digital el procedimiento, reproducen en papel todo el expediente para poderlo tramitar con la fiscalía. A ello se añade que la fiscalía no forma parte de LEXNET, pese a estar legalmente previsto al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, lo que dificulta el tránsito en estos órganos judiciales al expediente digital.

Se recomienda la letrada la introducción de criterios de ordenación y control de los procedimientos y la ejecutoria de modo informático para realizar una explotación más completa de los datos que aportan los distintos campos en el sistema de gestión procesal, con esta implementación se consigue hacer una ostensible mejora, para controlar de una manera efectiva e instantánea todos los datos importantes en el control de la ejecución penal.

Por lo demás, en el trabajo de los funcionarios, se informa por la Letrada de la Administración de Justicia, de que se cuida que estos efectúan el cumplimiento de las necesidades de anotaciones telemáticas de todo tipo que son exigibles, todas la anotaciones y actualizaciones en el Registro de Medidas Cautelares y Registro de Penados de las medidas de requisitorias, de violencia de género, así como de la anotación y registro de todas las Sentencias dictada por este órgano. Se realiza un correcto uso de las distintas aplicaciones que se realizan en uso conjunto con el sistema de gestión Adriano como el punto neutro judicial o el registro de medidas cautelares de penados, violencia de género, etc.

Debe insistirse especialmente en la actualización de fases y estados, y en el registro de cuantos acontecimientos procesales se producen y la identificación suficiente de los mismos, extremos éstos en los que la atención y dedicación ha de ser especialmente minuciosa para el futuro funcionamiento adecuado del expediente digital.

No obstante, la LAJ nos informa que se ha detectado cierto "abandono" por el Servicio de Informática respecto de las necesarias actualizaciones del sistema informático Adriano. Por ejemplo: el programa no numera automáticamente los Decretos definitivos (si los Autos y Sentencias) habiéndose interesado el numerador de Decretos.

Se ha reclamado también el numerador automático para Auxilio Judicial Penal y para los expedientes del Tribunal del jurado, habiendo ello sido instalado a finales de abril y mayo respectivamente. Continúa abierta la incidencia relativa al numerador automático de Ejecutorias. Y de igual manera se ha observado y es así manifestado por los funcionarios de Gestión que tramitan Ejecutorias, la necesaria utilización de modelos de "texto libre" por carecer o por no estar actualizados muchos de los modelos de estos procedimientos. La letrada de la AJ informa que se irá solicitando al respecto remitiendo al CAU Cejuris los modelos que se estimen necesarios.

Hay además otras incidencias abiertas, que se han reiterado por la Letrada de la AJ, ya que no existen modelos del tipo de procedimiento Jura de Cuentas, la pieza separada de Ejecutoria no captura el dato de procedimiento de origen al emitir los documentos, y no existen resoluciones para el Auxilio Judicial penal.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En la oficina se llevan únicamente los siguientes libros, pudiendo los demás listados de registro ser obtenidos de la aplicación informática Adriano:

- Libro de conocimientos: libro que consta de 299 folios, la última anotación consta al asiento nº 27 del año 2023, el 15/05/2023*
- Libro de indultos: se compone de 200 folios, siendo la última anotación la 5/2023*
- Libro de piezas de convicción: la última anotación practicada es el 2/2023 el día 29/01/2023. El libro se compone de hojas sueltas que no están numeradas.*
- Libro de ejecutorias, se lleva un legajo, la última anotación es la de la ejecutoria 34/2023 el día 29/05/2023. Se está a la espera de la resolución de la incidencia 1980961 (en la que se interesa que salte el numerador de Ejecutorias) para poder cerrar el libro manual de ejecutorias.*

Ha dejado de llevarse el libro de exhortos desde el 31/03/2023, fecha en la que se instala el numerador automático para todas las Secciones de la Audiencia de exhortos o solicitudes de Cooperación judicial, permitiendo un control de los mismos a través de la aplicación Adriano.

La cuenta de consignaciones de esta sección es la número 1221 y tiene un saldo total al día de la fecha de 394.708,26 €. Se hace las siguientes observaciones literales por el Secretario de Gobierno:

Se observa una media de ingresos que está en relación al tipo del órgano que se trata, se han producido en los últimos cinco días 24 ingresos y en el último mes 67 ingresos. Se aprecia que se está trabajando en la cuenta, pues en los últimos cinco días se han expedido un mandamiento de devolución y 70 transferencias y en el último mes, se han expedido 18 mandamientos de devolución y cinco transferencias y un traspaso, lo que puesto en relación a las entradas significa que hay dedicación en ella. Puede ser por la finalización de la huelga de los letrados o por el aviso de la inspección, siendo aconsejable que se mantenga este ritmo, una vez finalizada la misma. He de destacar que existen 17 mandamientos pendientes de entrega, lo que sin duda hace pensar que hay actividad en el seguimiento de los mandamientos expedidos, para que llegue a su destino, por lo que se ha de continuar con las medidas oportunas para que estos mandamientos pendientes de entrega lleguen a su destinatario lo antes posible.

Hay 113 cuentas, expedientes activos, de las que 55 se encuentran en fase de operativos y 41 como abiertos, 17 están ejecutados.

En los operativos se aprecian movimientos de expediente actualizados, ninguno de más de cinco años de antigüedad, excepto un expediente, un saldo de 68,50 €, igualmente ocurre con las cuentas abiertas en la que se aprecia actualización reciente. Hay un perteneciente a la cuenta y ningún autorizado, se practican los embargos, telemáticos de forma eficaz e igualmente ocurre con la subasta electrónica. Por lo tanto, se puede deducir que esta cuenta de consignaciones está siendo trabajada de manera constante por la Letrada y no existen discrepancias en su llevanza, debiendo continuar en esta progresiva labor de depuración y control cercano de la misma.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 42 procedimientos en primera o única instancia, 56 recursos, 150 ejecutorias y un exhorto por cumplimentar.

De todo lo anterior se puede concluir:



1. La Sección Primera la Audiencia Provincial de Cádiz soporta, en términos generales, una carga de trabajo elevada y supera ligeramente el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado se puede considerar correcta para un órgano de sus características y con la carga competencial que soporta, a la vista del número de asuntos pendientes de celebrar juicio o deliberación, el tiempo transcurrido entre el registro de entrada y la fecha de celebración del plenario, deliberación o fallo, así como en resolver los distintos recursos de apelación o incidentes interlocutorios.

3. Se detecta una buena labor resolutive consistente en el dictado de ponencias semanales por Magistrado. En segunda instancia, se está prácticamente al día en materia de recursos. Así, los procedimientos que no necesitan vista o juicio oral están en fechas de resolución razonables y cercanas en el tiempo al registro en la Sección (dos o tres meses), salvo retrasos puntuales, en algunos casos debidos a dificultad en visualizar el expediente digital, o necesidad de subsanar defectos procesales.

Se dedican, como regla general, tres días de agenda de la semana para celebración de juicios (lunes a miércoles), con posible extensión y añadido en otro día de esa misma semana. Los señalamientos de juicios orales se fijan aproximadamente en torno a seis/ocho meses desde su entrada, salvo algunas disfunciones o retrasos, singularmente en asuntos más complejos por el número de afectados e interesados.

El último señalamiento está fijado para noviembre de 2023, si bien quedan huecos intermedios para señalamientos urgentes o de alguna causa compleja pendiente de dicho trámite. El número de suspensiones se encuentra en un porcentaje del 30%, cuestión que debe siempre ser objeto de especial atención para aliviar la carga de trabajo y que sea eficiente la labor que está realizando todo el equipo.

Las resoluciones dictadas por los Magistrados están correctamente fundamentadas y, en general, dentro del plazo. En la actualidad, no existen asuntos enjuiciados pendientes del dictado de la oportuna resolución.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa en general un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. Por ello, el Presidente de la Sección, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán actuando lo necesario para seguimiento, impulso y revisión periódica de los asuntos, en especial los de mayor antigüedad.

Las causas con preso se señalan dentro de plazos razonables desde la fecha de entrada en Secretaría. Buen control sobre procedimientos en los que se han dictado órdenes de busca y captura o existen presos preventivos.

Los partes de adelanto de los sumarios deben recordarse a los Juzgados de Instrucción correspondientes con periodicidad, aspecto que aparece descuidado en la oficina.

En cuanto a la situación organizativa de la oficina se hace una puntual reflexión por el



Secretario de Gobierno: *“si bien no podemos olvidar que con independencia de que las ejecutorias son tramitadas de una manera ordenada y eficiente, se hace necesaria se proceda en lo sucesivo, a la incoación de pieza separada informática en cada ejecutoria, por cada ejecutado, al objeto de optimizar el control de la ejecución y poder contabilizar de un forma más acorde a la realidad, el número de ejecuciones en tramitación, haciéndola concordar con el dato estadístico que se solicita por el CGPJ, ello deberá ser valorado, en vistas a un cercano futuro, por el equipo rector del órgano.*

No obstante, analizada toda la labor organizativa y de tramitación efectuada por el equipo rector y en especial, por lo que a mí me compete a la señora letrada, podemos constatar que al frente de la misma y dentro del equipo rector, que está muy involucrada, debiendo ser animada para continuar en su labor de mejora en esta labor”.

5. La plantilla, compuesta por funcionarios titulares e interinos, se considera adecuada para el nivel de ingreso de asuntos.

La cualificación y rendimiento de gran parte de los funcionarios resultan adecuados, al tiempo que el clima laboral, cumplimiento de horario y predisposición al trabajo parecen correctos. Se detectan relaciones correctas entre sus integrantes y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. La oficina judicial funciona en general con eficiencia, mérito imputable a todos los que forman parte de la misma y a quienes constituyen el equipo rector.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la plena implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 18 del ROCSJ, aprobado por RD 1608/2005, es conveniente que el Secretario de Gobierno imparta las instrucciones oportunas para que los Juzgados, antes de remitir los asuntos a la Sección de la Audiencia Provincial, comprueben que las actuaciones están completas, así como el envío de las grabaciones audiovisuales, en su caso, junto a la necesidad de que los funcionarios cuiden la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, vigilando por su cumplimiento los Letrados/as de cada Juzgado de origen.

En efecto, visto el inconveniente de que la mayoría de los órganos judiciales no confeccionan correctamente el expediente digital, ni vienen bien identificados los acontecimientos ni bien indexado el procedimiento, sin olvidar que los Juzgados instructores todavía remiten en papel los procedimientos, es imprescindible que por el Secretario de Gobierno y los respectivos Secretarios Coordinadores se impartan las oportunas instrucciones, circulares y, en su caso, apertura de seguimientos, recordando a los Letrados/as de la Administración de Justicia de los órganos unipersonales la necesidad de que impartan las instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, así como vigilen su cumplimiento.

Es imprescindible que la Fiscalía se integre en LEXNET, lo que está legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, única forma de completar el tránsito de los órganos judiciales al expediente digital.



7. El control y gestión de las cuentas-expedientes de consignaciones es correcto.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.17- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000030/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 6 DE CHICLANA DE LA FRONTERA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÁDIZ el día 27/06/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El Juzgado ha sido instalado en un nuevo edificio, propiedad de la entidad mercantil "Parque del Retortillo, S.L." y arrendado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, con opción a compra; está situado en la Plaza del Retortillo s/n de esa ciudad.

En dicho edificio están instalados los 6 Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción existentes en este Partido Judicial y el Registro Civil. En la planta 1ª se ubica el Juzgado objeto de inspección que consta de las siguientes dependencias: Despacho del Juez. Despacho del Secretario Judicial. Secretaría del negociado de lo penal. Secretaría del negociado de lo civil. Un archivo en las propias dependencias del Juzgado. En la planta sótano se encuentra un archivo, conjunto para todos los Juzgados existentes en ese Partido Judicial, y debido a que hay mucha humedad e incluso muchas veces están mojados los suelos, está ocasionando que se moje el papel de los asuntos archivados y también los funcionarios que lo usan tienen que soportar el olor a humedad e incluso hongos. Servicio para funcionarios.

Las impresoras son escasas y de muy poca capacidad por lo que sería necesario aumentar el número o calidad de las mismas. Las instalaciones son adecuadas a las necesidades del Juzgado, si bien de pequeño tamaño.

Es necesaria una sala específica para videoconferencias y toma de declaraciones, así como un escáner.

La plaza de Juez está ocupada por su titular D. CARLOS GIRÓN LOZANO desde el día 26 de febrero de 2021 en que tomó posesión. La plaza de LAJ está cubierta por Dª DOLORES GARCÍA GIL, que tomó posesión con fecha 29 de enero de 2021.

La plantilla legal de este Juzgado está formada por 3 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal, 4 del Cuerpo de Tramitación Procesal y 1 del de Auxilio Judicial. Las tomas de posesión de los mismos datan desde el año 2021 hasta el presente año para un Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal.

Las funciones de Médico Forense se coordinan a través del Instituto de Medicina Legal, con sede en Cádiz.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 964 asuntos civiles en actividad; de ellos, 558 son Contenciosos, 56 de familia y 350 de ejecución. Hay 3 exhortos pendientes y 37 Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria. Las sentencias dictadas en los cinco últimos años ascienden a 507 y los autos finales a 833. Existe un total de 239 asuntos penales pendientes, de ellos 202 de trámite y 37 ejecutorias. Hay 2 exhortos



pendientes. No tienen pendiente ningún procedimiento de Diligencias Indeterminadas, Tribunal del Jurado, Sumarios, Juicios de Faltas, Juicios de Faltas Inmediatos, Delitos Leves Inmediatos, ni Habeas Corpus. Asimismo tienen 6 causas con preso pendiente, con 8 presos.

Los procedimientos se registran en función de los diversos tipos de causa de forma correcta, siendo generalmente minutados de forma personal por el Juez, señalando el tipo de procedimiento por el que deberá tramitarse y diligencias a practicar en el orden penal, siendo destacable la minuciosidad con que desarrolla el seguimiento de las causas, alguna ha sido examinada por el Inspector, sin que se aprecie irregularidad procesal relevante ni desde luego abuso en el empleo del secreto sumarial. Otro tanto cabe decir de las cuatro causas con preso que penden en el Juzgado, que son llevadas bajo un exhaustivo control personal del Juez, y en ninguna de las cuales se ha detectado ningún problema en relación a los plazos legales de dicha medida cautelar.

En la jurisdicción civil la minutación suele correr a cargo de la L.A.J. en función de las amplias competencias que le confiere la legislación procesal vigente, quién también materializa los señalamientos de juicio siguiendo las instrucciones del Juez, practicando igualmente la investigación patrimonial así como el registro en el SIRAJ y Registro Central de Penados y Rebeldes.

En función de la naturaleza de los asuntos se distribuye la carga competencial entre los distintos funcionarios del Órgano, cuya plantilla está cubierta por funcionarios que gozan de bastante estabilidad y buen predicamento por parte de la L.A.J. y el Juez, integrando un buen equipo de trabajo.

La L.A.J. ordena el registro de los asuntos en el momento de su entrada, dando cuenta periódica al Juez titular de cualquier tipo de incidencia procesal. Los señalamientos civiles y penales se producen con una periodicidad razonable; actualmente un asunto civil suele ser señalado para audiencia o juicio en un periodo de tres meses, mientras que los señalamientos penales se dilatan hasta cinco meses, tiempos acordes al alto volumen de ingreso y pendencia que al igual que sucede con el resto de los Órganos del Partido pesa sobre este Juzgado.

El sistema informático permite un control eficaz lo que se traduce en la ausencia de la llevanza de libros físicos, salvo notas personales a través de las cuales el Juez titular controla las cuatro causas con preso que en este momento tiene abiertas, llevándolo de forma personal, siendo destacable para este Inspector que su tramitación sea rápida y ágil, y que el volumen de los existentes es razonable y asumible.

El Servicio Común que depende del Juez Decano mientras que cuenta como directora con la figura de la L.A.J. de un Órgano distinto (Juzgado nº 2), cuenta con 3 funcionarios gestores, 2 tramitadores y 4 de auxilio judicial. Llama la atención y es un hecho notorio la existencia en este Partido Judicial de numerosos diseminados y muy graves problemas de localización, por lo que a pesar de que funciona bien al parecer de los responsables de los demás Órganos Judiciales, y siendo esto francamente elogiable, parece necesario que se cuente con al menos un funcionario más de auxilio judicial.

El Órgano inspeccionado soporta como los demás de Chiclana de la Frontera una elevadísima carga de trabajo y un registro de entrada a todas luces excesivo, muy superior al de los



módulos aconsejables por el Consejo General del Poder Judicial, siendo además preocupante el notable incremento que se viene observando de asuntos civiles, que además en este Partido Judicial son especialmente complejos. A la fecha de la inspección de este Órgano el Juzgado registra un 180% de asuntos civiles con respecto al módulo, y un 80% de asuntos penales en relación al mismo.

Analizados los datos globalmente y que de forma minuciosa se aportan en los anexos de este informe, hay que concluir que la pendencia a la vista del número de asuntos entrantes es correcta.

Hemos de concluir por tanto en que la cifra pormenorizada más arriba revela un altísimo volumen de ingresos civiles, habiéndose notado una clara disminución en las penales tras la creación del sexto Juzgado.

En definitiva, gracias a la labor conjunta del Juez, L.A.J. y plantilla de funcionarios, la situación del Juzgado es de normalidad pese al elevado volumen de ingreso de asuntos civiles.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.18- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000031/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 3 DE ALMERIA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de ALMERIA el día 10/03/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La plantilla la integran una magistrada juez, un letrado de la Administración de Justicia, seis gestores procesales, diez tramitadores procesales y dos funcionarios de auxilio judicial, actualmente todos son titulares. Desde el pasado 14 de febrero de 2023 y a consecuencia de la situación de baja laboral de la magistrada juez titular Doña , ha ocupado el referido cargo Doña María Rosenda Román Tendero, jueza sustituta, quien ha estado en este puesto hasta el momento de la visita de inspección. La plantilla actual del juzgado es adecuada para la carga de trabajo que soporta, si bien sería necesario una medida de refuerzo para hacer la revisión de las incapacidades impuesta por la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021.

Desde su creación este juzgado tiene atribuidas competencias exclusivas en materia de Registro Civil. Sin duda se trata de uno de los Registros Civiles más colapsados de Andalucía.

El juzgado se encuentra ubicado en la Ciudad de la Justicia de Almería, sus dependencias se encuentran en la planta -1. La oficina no cuenta con luz natural. Los despachos de magistrada juez y LAJ no tienen ventanas, por lo que la ventilación es nula. Hay una sala compartida para 7 puestos de trabajo, junto a otro despacho para otros dos funcionarios. El Registro Civil cuenta con una "pecera" de cristal donde trabajan un total de 7 funcionarios y otros dos despachos aparte, con cabida total para 4 funcionarios más. Tiene asignada la sala de vistas número 10 y también utiliza la sala de bodas para la celebración de matrimonios.

Todos los puestos de trabajo cuentan con y doble pantalla, a excepción de los funcionarios del Registro Civil. Hay aire acondicionado en todas las dependencias. Serían necesarias más impresoras, al menos dos más.

Todos los puestos de trabajo tienen acceso a la aplicación de gestión Adriano y al sistema de

gestión de horarios e incidencias Hermes. La aplicación Nautius está instalada en dos ordenadores, el del letrado y el del auxilio judicial. Todos tienen acceso al Punto Neutro Judicial y a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Se da cumplimiento a las Instrucciones y Reglamentos del Secretario General de la Administración de Justicia, así como al Código de Conducta de usuarios de aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia.

La práctica totalidad de libros que se llevan están informatizados.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones están abierta en el Bano de Santander. Actualmente se ha conseguido reducido el saldo en más de dos tercios, que a fecha 1 de julio de 2022 ascendía a más de tres millones de euros.

Los datos que presenta este órgano se encuentran en la media de un juzgado de capital, con la excepción del número de asuntos incoados en el año 2019, aunque tal vez sea un error. La media de asunto registrados rondan los 2.000 al año, fundamentalmente monitorios (más de 700 al año) y verbales, unos 300 al año. Ello se refleja en la pendencia, donde monitorios y verbales suponen la mayor parte de la misma, de los 998 pendientes, 366 son monitorios y 232 verbales en sus diferentes utilidades.

De la simple lectura del listado de los últimos trámites realizados en los diferentes procedimientos que han sido objeto de evaluación, se comprueba que la inmensa mayoría tienen una fecha reciente, no superior a seis meses. Es evidente que se ha llevado a cabo recientemente una puesta al día de todos ellos mediante un significativo esfuerzo.

Se comprueba una tramitación, en general, razonable. Es cierto que podrían evitarse algunas paralizaciones y, en casos puntuales, retrasos significativos explicados en la anormal movilidad que presenta la plantilla adscrita al juzgado, cuyo tiempo medio de antigüedad en el destino no supera los dos años. Especialmente revelador ha sido el movimiento de letrados, pues desde el año 2021 han pasado tres letrados, hasta el actual, cuarto, en comisión de servicio.

En cuanto a la labor de gestión y control de los trámites debería tenerse especial cuidado en el tiempo preciso para el emplazamiento de los demandados, revisión de los procedimientos de incapacidad y elevación de los recursos de apelación a la Audiencia Provincial.

Por todo lo anterior, es más que aconsejable dotar al juzgado de un letrado de la Administración de Justicia, al menos en comisión hasta la creación de la plaza correspondiente, que pudiera hacerse cargo de la llevanza específica del Registro Civil, facilitándose con ello que el otro pudiera hacer esa labor de gestión de calidad de la que actualmente adolece este juzgado.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.19- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000032/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 8 DE SEVILLA por el Excmo. Sr. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 12/06/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA. □□□□□

La última visita de inspección fue realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2016.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

La plantilla, que se considera correcta, se encuentra dotada de cinco funcionarios del cuerpo de gestión procesal, cinco del cuerpo de tramitación y un auxilio judicial. En el caso de los gestores una funcionaria tomó posesión en el año 2000, 2 de ellas en el año 2022 y los funcionarios del cuerpo de tramitación la gran mayoría de ellos tienen una antigüedad relativa de 5 años excepto uno de ellos que tomó posesión en el año 2009, respecto al funcionario de auxilio su antigüedad es reciente, del año 2019. Actualmente existe vacante una plaza de gestión procesal como consecuencia del traslado por concurso de la anterior titular, hallándose la plaza vacante desde el pasado 30 de marzo de 2.023 (64 días computados hasta el 2 de junio de 2.023).

El trabajo se encuentra diferenciado entre procedimientos declarativos y procedimientos de ejecución. Los cinco tramitadores se encargan de la tramitación de los procedimientos declarativos hasta resolución firme que ponga fin al mismo. Asimismo, se encargan de la tramitación de los procedimientos de jurisdicción voluntaria y exhortos. La ejecución se ha encomendado a las tres funcionarias del cuerpo de gestión procesal. Los tramitadores se sustituyen entre ellos al igual que los gestores. En el supuesto de que un negociado se encuentre vacante se acude al sistema de reparto entre los funcionarios del cuerpo que corresponda si bien atendiendo a asuntos de mayor urgencia y sujetos a plazos. El público y profesionales son atendidos por el resto del personal del juzgado.

Atendiendo al elevado número de asuntos que han tenido entrada en este juzgado, registrándose solo en el pasado año 2.022 un total de 2426 demandas, se observa necesario un plan de refuerzo derivado tanto del número de asuntos que han tenido entrada como de la necesidad de examen de numerosos expedientes de incapacidad y tutelas como consecuencia de las últimas reformas legislativas operadas.

Así, teniendo en cuenta que se trata de un juzgado creado en el año 1985, se informa por la Letrada que se ha desarrollado la labor de examen de expedientes desde la fecha indicada, con la dificultad que ello supone al no constar registro de muchos de ellos en la aplicación de gestión procesal, hallarse un elevado número de ellos físicamente en las dependencias del archivo y teniendo en cuenta la falta de datos de identificación que en mucho de estos expedientes consta para poder llevar a cabo la localización de la persona cuya capacidad se revisa y, en su caso, se modifica.

Se informa por la señora letrada que ha sido encomiable la labor desarrollada respecto de cada uno de ellos, resaltando que este trabajo ha sido desarrollado en su mayoría por una funcionaria del cuerpo de gestión procesal al margen del trabajo ordinario asignado a la misma, funcionaria que de forma voluntaria ha llevado a cabo esta labor desde el momento en que por la que suscribe se indicaron las pautas a seguir para iniciar la revisión de estos procedimientos, hallándose pendiente de revisar los expedientes correspondientes a las anualidades 2.002 y siguientes debido, como ha quedado expuesto, a la excesiva carga de trabajo.

Es de destacar cierta inestabilidad en la figura del juez ya que en un periodo de dos años y medio han actuado cinco jueces distintos.

Las demandas son registradas diariamente y se trasladan posteriormente a la letrada de la Administración de Justicia para que las minute. Sólo se examinan personalmente aquellos que son



urgentes o reiterativos.

La dación de cuenta a la magistrada se lleva a cabo por parte de los funcionarios, siendo de forma presencial. El reparto de tareas entre la magistrada y la letrada de la administración de justicia está adaptado a la ley, salvo en lo referente a los señalamientos, que son realizados directamente por la magistrada. Existe coordinación y entendimiento entre la responsable del órgano lo relativo a la dirección y control de la oficina judicial, que es ejercida por la letrada de la administración de justicia con corrección y eficacia en términos generales. En cuanto a la dirección técnica del proceso y de la ejecución se ejerce fundamentalmente por la letrada de la administración de justicia, quien minuta demandas y escritos civiles y controla el impulso en la ejecución, utilizándose minutas escritas por el escritorio judicial por parte de la letrada. El control de los plazos, caducidades, suspensiones, archivos provisionales exhortos remitidos, se realiza por cada funcionario, normalmente con su propia agenda manual o informática aunque la letrada del órgano también realiza controles periódicos aprovechando la confección de la estadística judicial.

La pendencia de escritos no resulta excesivamente elevada respecto a la media del partido judicial y la jurisdicción. Se detecta pendencia en el dictado de sentencias, singularmente en el listado de señalamientos, que supera el centenar, que quedaron pendientes de dicho trámite, dada la vinculación subjetiva, tras la baja de gran duración de la titular actualmente incorporada al Juzgado.

El estado de las instalaciones destinadas al juzgado es deficiente. No existen zonas de espera adecuada para profesionales ni público en general, ni punto de atención e información a los mismos, debiendo el profesional acceder al espacio común donde se encuentran los once funcionarios adscritos al Juzgado para poder obtener información y examen de la consulta al no existir punto de información previa ni posibilidad de acceso por parte de estos profesionales al expediente digital para su consulta, acceso necesario al no hallarse impreso el procedimiento.

El Juzgado comparte la sala de vista número 7 (Sala de Bodas), estando la misma disponible para la celebración de vistas por este Juzgado los lunes y martes, así como los viernes previo aviso.

Las aplicaciones telemáticas son utilizadas por el personal con total normalidad. Los procedimientos en la aplicación de gestión procesal Adriano, en términos generales se encuentran actualizados en fase y estado. La plantilla es colaboradora con el uso de las nuevas tecnologías, así que disponen de las correspondientes claves de acceso del PNJ y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los actos de comunicación a Procuradores se realizan a través del Lexnet. También se realiza el envío de exhortos telemáticos a los demás Juzgados a través de Adriano y PNJ, según sean fuera o no de Andalucía, y se incorporan los escritos desde Lexnet al sistema de gestión procesal Adriano.

El total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta la fecha de 53.041. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2023 hasta el 19 de abril de 2023 es de 858 asuntos. Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la



aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 1.103.634 acontecimientos, de los cuales 15.644 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2023 hasta la fecha.

En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 24.283 resoluciones, de las cuales 4.955 son sentencias, 10.685 son autos definitivos y 8.643 son decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2023 hasta la fecha, figuran un total de 80 sentencias, 348 autos definitivos y 240 decretos definitivos. El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 85.915 actualizaciones manuales de fases y estados, de las cuales 705 corresponden al año en curso. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 5.205 procedimientos pendientes y 2.392 procedimientos inactivos.

El Juzgado examinado tramita de forma completa el expediente digital. No se imprimen resoluciones ni escritos de la parte, a excepción de escritos presentados por particular o comparecencias realizadas en la oficina que quedan incorporadas físicamente a los autos y asimismo digitalizadas e incorporadas al expediente digital.

En todos los procedimientos examinados, constan los acontecimientos debidamente descritos y catalogados, salvo excepciones muy puntuales en que se puede comprobar una resolución de "texto libre", referidas siempre a diligencias de unión o de constancia.

El orden cronológico de los mismos es el correcto salvo en algunos procedimientos en que se ha comprobado que la unión de los despachos recibidos se realiza con posterioridad a la resolución de la que trae causa.

Todas las resoluciones están firmadas digitalmente y están perfectamente integradas en el expediente. En todos los procedimientos examinados la fase y estado es la correcta y la documentación que se recibe, que no llega por Lexnet, como por ejemplo diligencias de comunicación practicadas por el Servicio Común, informes, comparecencia de un perito, el apoderamiento apud acta y otros documentos originales se catalogan y se incorporan al expediente. El sistema de gestión procesal guarda relación con la realidad del Juzgado.

En conclusión en este Juzgado existe un elevado grado de consolidación del expediente digital que ha permitido una homogeneización de las actuaciones y un fiel reflejo del sistema de gestión procesal con la realidad del Juzgado. Se han asumido muy buenas prácticas en la tramitación digital de los expedientes.

En cuanto a los libros en secretaría, no se lleva ninguno en soporte físico, haciendo uso de lo suministrado por la aplicación de gestión procesal.

Este Juzgado posee la cuenta con número 4004 y tiene un saldo total al día de la fecha de la inspección de 2.480.169,29 €.

Se observa una media normal de ingresos, en relación al tipo de órganos de que se trata, que ha recibido en los últimos cinco días 52 y en el último mes 172 ingresos, se aprecia que se está



trabajando en la cuenta pues los últimos cinco días se han expedido 47 mandamientos de devolución y dos transferencias, y en el último mes han sido 177 mandamientos de devolución y seis transferencias y seis trasposos, lo que puesto en relación a las entradas y significa que hay dedicación en la cuenta, puede ser esta dedicación por la finalización de la huelga de los letrados o por el aviso de la inspección, siendo aconsejable que se mantenga este ritmo una vez finalizada la misma.

Es de destacar que hay 42 mandamientos pendientes de su entrega, lo que sin duda hace pensar que hay actividades seguimiento de los mandamientos expedidos para que lleguen a su destino, por lo que se ha de continuar con la medida oportuna para que estos mandamientos pendientes de entrega, lleguen a su destinatario lo antes posible.

Existen 1533 cuentas expedientes activos, lo que son demasiados y de los que 753 se encuentran en fase de operativos y 780 como abiertos, 33 están ejecutados. En los operativos apreciamos movimientos de expedientes actualizados, pero también existe muchos no actualizados y con cantidades residuales; a modo de ejemplo, existe una cuenta con una cantidad de 0,04 €, todo esto de expedientes antiguos y con cantidades residuales, que deberán ser examinadas y dependiendo del Estado procesal del expediente judicial, dale el destino que corresponda a con están aconsejándose que se remitan al tesoro público mediante transferencia a la cuenta provisional, como cantidades renunciadas o abandonadas. Igual ocurre con las cuentas abiertas, en las que se detecta además gran cantidad de depósitos para recurrir, que deberán ser examinados para darles el destino oportuno en función del estado procesal del expediente judicial a que cada uno hace referencia.

Hay un perteneciente la cuenta y nueve autorizados, lo que indica que son suficientes para controlar la cuenta de depósitos de este juzgado. Se practican embargos telemáticos de forma eficaz e igualmente ocurre con las subastas electrónicas.

Podemos concluir que la llevanza de la cuenta se realiza de forma eficaz, constante y correcta.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 3.817 procedimientos en fase de tramitación, 3 exhortos, 98 asuntos de jurisdicción voluntaria y 1.912 procedimientos en fase de ejecución.

En términos generales la situación del Juzgado atendiendo a su circunstancias y características es mejorable en los procedimientos que se encuentran en tramite, pudiéndose comprobar que del total 752 son monitorios, y una cifra bastante alta 506 en total procedimientos ordinarios, pendientes especialmente del año 2022, lo que indica que la tramitación es acompañada pero lenta a las vicisitudes procesales de los distintos procedimientos.

En los procedimientos monitorios se detecta que la aplicación del principio de impulso de oficio puede mejorarse especialmente en aquellos procedimientos que se encuentran pendientes de emplazamiento con comunicaciones con resultado negativo o del cumplimiento de algún plazo los cuales resultarían mejorables.

Se observa que ha habido diferencias de criterios en la tramitación de los monitorios con una media de entrada en este órgano de unos 900 anuales, encontrándose en la actualidad 752



pendientes, comentándose por la señora letrada que los pendientes del año 2021 y 2022 fueron revocados y corregidos por varias sentencias de la Audiencia Provincial al existir diferentes criterios jurisdiccionales, habiéndose dado lugar a un seguimiento por el Consejo General del Poder Judicial que ha sido levantado recientemente, quedando algunos de ellos en la actualidad pendientes de traslado para análisis por la juez de la abusividad de la contratación, con un análisis del contrato en concreto que da lugar a ese título ejecutivo, y que se hace necesaria su resolución de forma unificada como forma de acelerar su tramitación y posterior archivo o pase a ejecución.

El nivel de resolución ha sufrido ligeras variaciones, tanto respecto del dictado de autos finales como respecto al dictado de sentencias.

Se encuentran en la actualidad 89 sentencias por dictar por actual titular, que penden desde el 9 de abril del año 2019 hasta la baja que se produjo el día 4 de diciembre de 2020, habiéndose reincorporado la señora juez el día 5 de junio del presente año.

En lo referente a la ejecución, materia analizada por el secretario de gobierno, se observa que el ritmo de incoación anual asciende a 320 ejecuciones anuales. La pendencia de ejecuciones en la actualidad asciende a 1912, cifra elevada, especialmente aquellas ejecuciones anteriores al año 2019, ya que del montante global ascienden estas a 1207. Si bien que es constatable, que con cinco funcionarios del cuerpo de gestión se arroja una media de tramitación en cada negociado, de 350 ejecuciones aproximadamente, lo que permite un control cercano de las mismas.

En la tramitación de las ejecuciones se recomienda dar cumplimiento a los artículos 179.1, 156.1 y 156.3 de la LEC y cuando no pueda efectuarse la comunicación o emplazamiento en el domicilio designado, acordar de oficio la averiguación de domicilio y, ante resultado positivo en diligencias telemática averiguación de domicilio, acordar de oficio la práctica del acto de comunicación en el nuevo domicilio, sin perjuicio de dar traslado al actor de forma simultánea y proceder a la comunicación evitar cuando se reúna los requisitos para ello. Ello se observa de forma correcta en la ejecución con nº 151/2023 que se ha presentado el 20 de enero, incoada 10 días después realizado averiguación patrimonial tres días después con auto despachando, ejecución y decreto en misma fecha incorporando la averiguación patrimonial el 6 de marzo de 2023. Y también en la ejecución nº 495/2023, Procedimiento iniciado el 7 de marzo de 2023. realizándose consulta patrimonial siete días después con auto despachando ejecución y requerimiento el 14 de marzo notificado por servicio común a la espera de respuesta el 22 de marzo de 2023. De igual forma en la ejecución nº 556/2023 demanda presentada el 14 de marzo auto despachando ejecución 23 de marzo. Se incorpora documentación de averiguación patrimonial 27 de marzo. Igual diligencia se observa en el nº 623/2016, monitorio, en el que se están realizando averiguaciones patrimoniales y reactivaciones de embargos de sueldos, siendo el último realizado el 12 de mayo de 2023, a petición de la parte actora.

Los procedimientos de ejecución de títulos judicial y no judicial más antiguos examinados son asuntos en los que se ha instado la sucesión procesal o por cesión de crédito, o bien se producen embargos y averiguaciones de bienes de modo periódico o asuntos en lo que siendo la cantidad a ejecutar elevada, se producen pagos también periódico de pequeñas cantidades, motivo por el que



su tramitación se dilata en el tiempo, pero no se han observado paralizaciones relevantes, aplicándose de modo correcto las normas procesales y sin que se destacable ninguna difusión en este tipo, se detectan que el los proveídos se dictan con regularidad de fechas relativamente recientes. Esta dinámica se ha observado en la inspección realizada en varios expedientes como el nº 950/2017, en el que se están procediendo a realizar mandamientos de devolución una vez constan transferencias efectuadas, siendo la última realizada el 26 de julio de 2022 en que se transfiere de la cuenta de consignaciones 109,56 € de principal al ejecutante 1031/2018 se dictó decreto aprobando tasación de costas, liquidación de intereses el 29 de julio de 2022 procediéndose a entregar el importe de los intereses y parte de costas el 19 de septiembre de 2022, y están realizándose consignaciones y haciéndose las entregas de manera regular a lo largo de todo el año 2022.

Hay buena cadencia de respuesta a los escritos presentados en general, como en la Ejecución 108/2023, cuyo inicio fue el 24 de enero de 2023 con diligencia de ordenación requiriendo copia de la demanda y aportación un mes después en abril del 2023. O en la ejecución nº 286/2023 demanda de ejecución reclamando 12.000 €, incoación con diligencia de requerimiento para aportación de copia de escrito evacuado 15 días después el 29 de marzo de 2023. En la Ejecución nº 60/2014, con una tramitación acompasada con proveído de escritos en menos de una semana, incluido los archivos provisionales con posterior reapertura transcurridos tres meses por la parte ejecutante en concreto, 5 de agosto de 2022 y escrito de la parte de 17 de noviembre de 2022.

También es cierto que hay que valorar que el momento en el que el órgano ha sido inspeccionado, tras la situación de huelga legal en la que se encontraban los letrados de la administración de justicia de este juzgado, lo cual debe ser tenido en cuenta como atenuante de la valoración.

Podemos valorar de forma positiva la labor de la Sra. Letrada en este órgano con el control e impulso de la ejecución, acompañada de un buen equipo de funcionarios expertos en esta materia.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. El Juzgado inspeccionado soporta una carga de trabajo bastante elevada, que supera ampliamente el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 1.200 asuntos como carga de trabajo anual en este tipo de Juzgados.
2. El estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección revela que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado no se puede considerar correcta ni, por tanto, normalizada, valorando el nivel de ingreso y número de asuntos pendientes de resolver, así como el tiempo que transcurre entre el registro de entrada y la fecha de señalamiento de vista y dictado de la correspondiente resolución.

Atendiendo a los niveles de registro, resolución y pendencia, así como a los recursos humanos y materiales con los que cuenta en la actualidad el Juzgado, se concluye que su situación es mejorable, debido a la elevada pendencia. Todo ello, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo desplegado y conscientes de sus características y carga competencial, esto es la elevada carga de trabajo que recibe el órgano y que ha venido soportando en años anteriores, que hasta la fecha le



ha impedido disminuir de forma considerable la pendencia del órgano.

3. La actual titular dedica dos días de la semana para celebración de vistas o juicios (lunes y martes). Por lo general, hay 8 señalamientos por sesión: dos audiencias previas, un juicio ordinario, 4 verbales y un desahucio.

El último señalamiento previsto de audiencias previas está fijado para el mes de septiembre de 2024, indicándose que hay aproximadamente todavía unos 200 asuntos por admitir a trámite, lo que, sin duda, alargará este primer acto procesal de señalamiento.

Por otro lado, se observa que el 11 de julio es el último día de señalamientos del primer semestre, que comienzan de nuevo el 11 de septiembre del tercer trimestre de este año.

Se detecta que las audiencias previas se señalan en torno a los dos años desde la fecha de ingreso en el Juzgado, salvo asuntos urgentes o preferentes, así como que entre la audiencia previa celebrada y el posterior juicio transcurre un año. En definitiva, plazos que se van alargando y que exceden de lo razonable.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se detectan retrasos y paralizaciones, lo que obliga al equipo rector a insistir en la línea de seguimiento y revisión periódica de los asuntos, aparte de la responsabilidad propia de cada funcionario en la revisión de los procedimientos asignados, máxime los de mayor antigüedad, recordando las diligencias pendientes en cada procedimiento con mayor cercanía temporal.

En este sentido, se recuerda la necesidad de impulso de oficio de los procedimientos, por lo que se aconseja no dar traslado innecesario a las partes sobre trámites o secuencias procedimentales que devienen en la propia ley.

Es imprescindible que la actual titular proceda al dictado, a la mayor brevedad, de las sentencias que se encuentran pendientes de dictar durante su largo período de baja, muchas del año 2019, para lo cual no debe tener impedimento alguno, ya que en la actualidad cuenta con el refuerzo de una juez que le permite centrarse en dicha tarea.

Por otro lado, el tiempo entre la resolución acordando la celebración de actos procesales como vistas audiencias previas o acto de juicio y la fecha prevista para su celebración resulta elevada, aún conscientes de la carga de trabajo que soporta el órgano. Todo lo expuesto aconseja una óptima gestión de la agenda de señalamientos, mejorando su cadencia, así como insistir en las medidas para evitar en todo momento un alargamiento en los plazos y conseguir una tutela judicial en plazos más razonables.

Se hace necesario que por la letrada de la administración de justicia se adopten las medidas necesarias para realizar un control del trabajo, tanto el que se realiza presencialmente, como por medio de teletrabajo, y dar las pautas organizativas precisas, que conlleven a una tramitación acorde evitando dilaciones innecesarias.

En especial, se debe establecer un seguimiento relativo a la admisión de demandas pendientes de trámite y, por ello, de incoar, emplazar, señalar y celebrar audiencia previa.

Igualmente, la titular, junto con la LAJ, deberán fijar un criterio uniforme y constante en la tramitación de los procedimientos monitorios, al objeto de resolver el mayor número posible para su reducción efectiva.



5. La plantilla se considera ajustada para el volumen de ingreso, pero es necesario que se cubran con rapidez las bajas y vacantes de los funcionarios.

Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. Se aprecia una buena dirección y control.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos, siendo imprescindible la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Se deberá velar para que se proceda a la grabación de las marcas en las grabaciones de vistas y juicios, dando las instrucciones precisas al funcionario de Auxilio Judicial.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.20- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000028/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO 1 DE BAENA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CORDOBA el día 23/06/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por el Presidente de la Audiencia Provincial, así como el Secretario Coordinador Provincial el 9 de julio de 2021.

Ha estado sometido a un seguimiento acordado tras la inspección del TSJ (Nº 22/2021) relativo al número de pendencia, Procedimientos Abreviados, Delitos leves y Ejecuciones Penales.

El seguimiento fue archivado por Acuerdo de la sala de Gobierno del TSJ de 17 de enero de 2023.

La plantilla del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena (Córdoba) está compuesta por: 1 Jueza, 1 Letrado de la Administración de Justicia, 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 3 funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, así como 2 funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Todas las instrucciones y criterios de trabajo dirigidos a los funcionarios componentes de la Oficina Judicial se dictan verbalmente. El control de trabajo se realiza, según informa el Letrado de La Administración de Justicia, a través de la aplicación Adriano realizando una labor de comprobación mediante listados de la veracidad que los datos que refleja Adriano se corresponde con la realidad, por otro lado con la puesta al día de la cuenta de consignaciones se efectúa una revisión indirecta de los procedimientos. La confección de datos para la inspección está dando lugar a la actualización de muchos procedimientos a fin de concordar la realidad procesal (archivo) con el sistema de gestión procesal donde aparecen en trámite.

Este órgano ha soportado una gran movilidad judicial, que se traduce en que en los últimos años hayan actuado varios jueces y Letrados de la Administración de Justicia con lo que conlleva de cambios de criterio, dirección y funcionamiento de la oficina judicial. La plantilla en la actualidad se ha estabilizado.

El Letrado de la Administración ejerce de manera adecuada sus competencias de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales. Las relaciones entre la plantilla son buenas y hay buen ambiente de trabajo.

Aunque el Letrado de la Administración ha estado de servicios mínimos durante la huelga de LAJS, se ha podido comprobar por la unidad inspectora la paralización y ralentización de procedimientos por esta causa y por la huelga de los Cuerpos Generales. En la estadística de primer trimestre de 2023 se puede constatar la pendencia de demandas pendientes de incoar y escritos pendientes. No obstante, el Letrado de la Administración ha puesto de manifiesto el trabajo y dedicación de toda la plantilla para la preparación de la inspección consiguiendo disminuir la pendencia de escritos pendientes y de demandas pendientes de incoar.

El Juzgado, único en la población, está ubicado en un edificio antiguo pero reformado en los últimos años, sito en la C/ Juan Ocaña, nº 32. Se divide en tres plantas, encontrándose en la planta baja las dependencias del Registro Civil, Sala de Vistas, obviamente en exclusiva, y los calabozos, Sala de Abogados en la primera, el despacho del Sr. Jueza y el Letrado de la Administración de Justicia, dependencias de la Oficina Judicial, Sala de Procuradores, y servicios-aseos y en la última planta, se hallan los despachos del Sr. Fiscal, el cual se ha reutilizado para el uso de una pantalla para la realización de videoconferencias para exhortos y el IML que dispone de despacho para visitas del Sr. Médico Forense. Desde la última inspección en que se puso de relieve problemas en el aire acondicionado y eléctricos se han solucionado. El control de aforo lo realiza la Guardia Civil en la sala de espera. Hay Guardia Civil que custodia el edificio y arco de seguridad.

Actualmente este Juzgado dispone de un ordenador para cada integrante de su plantilla, 6 impresoras, así como fotocopidora con función de escáner, e igualmente destructora de papel. En cuanto a las impresoras, existen instaladas una para la Jueza y otra para el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, así como otras dos en la oficina judicial, 1 en el Registro Civil y otra en la sala de vistas, que está siendo utilizada por el funcionario de auxilio judicial en la planta baja, encargado de las notificaciones. La destructora de papel es de pequeño tamaño y escasa potencia para el volumen de documentos a destruir. Se reitera la petición de fotocopidora en el Registro Civil para no estar subiendo a la primera planta a realizar fotocopias. Por otro lado, dispone de equipo de grabación y videoconferencia, que funcionan con normalidad, no obstante existe lentitud en la firma electrónica.

En lo que se refiere al acceso a las distintas aplicaciones telemáticas del Punto Neutro Judicial, en su día se solicitó por el Letrado de la Administración de Justicia, y se autorizó por el órgano competente en cada caso, otorgándose las correspondientes claves, el acceso a aquellas aplicaciones necesarias para la tramitación de los asuntos competencia de este Juzgado, (consultas integrales patrimonial o domiciliaria, AEAT, DGT, INE, Tesorería General de la Seguridad Social), respecto al SIRAJ las realiza en exclusiva la LAJ, los embargos telemáticos los realiza el LAJ, y el Gestor Procesal que tramita ejecuciones. La utilización de los servicios contenidos en dichas aplicaciones, viene siendo la adecuada, sin que conste la utilización de los mismos para fines distintos o ajenos a las propias necesidades que la tramitación de los asuntos atribuidos a la competencia de este Juzgado requiere.

En relación a las medidas y medios de control para la protección de datos personales,



conforme Acuerdo Comisión permanente del Consejo General del Poder judicial de 19 Abril de 2018, se informa por el Letrado de la Administración de Justicia que existe un protocolo. Que cada funcionario dispone de su contraseña individual para las aplicaciones a las que tiene acceso. Son contraseñas individuales siendo las mismas confidencial y de uso privativo de cada uno, sin que se comparta con los compañeros, y siendo cambiada periódicamente, el intercambio de contraseñas entre el personal es prácticamente nulo (salvo situaciones excepcionales).

Se han dado instrucciones por la Juez y el LAJ a los funcionarios en lo referente a la información que se debe dispensar al público y profesionales para garantizar la confidencialidad de los datos. La atención al público se realiza en el mostrador que se encuentra a la entrada de las oficinas a las que solo tienen acceso, el personal y los profesionales. Cuando finaliza el horario de trabajo, los armarios quedan cerrados con llave.

Existe medidas de control para el acceso al espacio donde se encuentran los expedientes en trámite durante el horario de audiencia al público y/o una vez finalizado dicho horario.

En relación con las garantías y medidas que se adoptan en los actos de comunicación, acceso al PNJ y demás registros al dar traslado a las partes de las denuncias o datos obtenidos en el procedimiento, y en su caso si la causa es secreta o existen testigos protegidos, se pone de manifiesto por la Letrada de la Administración de Justicia que solo se da traslado a las partes personadas y siempre en la resolución que lo acuerda se hace constar la advertencia de confidencialidad de los datos y que están bajo la salvaguarda de la normativa de LOPD y normas que la desarrollan; en las citaciones al investigado se han dado instrucciones para que se supriman los datos personales.

No se entregan expedientes a las partes sólo se envían a Fiscalía quedando registrados por el funcionario de Auxilio Judicial, tanto el envío como la recepción.

La estancia donde se encuentra el archivo definitivo de expedientes está en orden y permite un adecuado control y localización de los expedientes.

Se han producido mejoras en la implantación del expediente digital que deben continuarse a fin de tener un sistema de gestión procesal lo más ajustado a la realidad procesal del órgano. Es absolutamente necesario que los funcionarios actualicen fases y estado de los procedimientos. Se ha de mantener la práctica de revisión de los escritos que tienen pendientes los funcionarios a fin de tener efectivo control de cada uno de los negociados. Ha de incorporarse al expediente digital escaneados todos los documentos: actos de comunicación, acuse de recibos etc y formar expediente digital. En cuanto a la remisión digital de los expedientes a la Ilma. Audiencia Provincial se insiste a la LAJ para que se remita con índices e hipervínculos. conforme a la Instrucción 1/2015 dictada en su día por el Secretario de Gobierno, tendente a garantizar que la grabación digital de los actos procesales se realice con la máxima diligencia y aplicación, en orden a obtener una documentación electrónica manejable.

Todos los libros se llevan informáticamente, a través de la aplicación de Adriano. No obstante se lleva uno de piezas manual e informático, y también tienen en Secretaría el Libro de Posesiones y Ceses. Asimismo se lleva manualmente el libro de presos. Además, se llevan manualmente legajo de sentencias civiles y penales, decretos y autos. El Letrado de la Administración de Justicia lleva



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

personalmente el libro de piezas de convicción, de tomas de posesión y ceses.

La gestión de los movimientos de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado se realiza con agilidad, siendo razonables los tiempos de espera entre el ingreso en la cuenta y su entrega a quien corresponda, aunque se tenga en cuenta las vicisitudes de las ejecutorias y otros procedimientos en los que dichos ingresos se producen. El movimiento de la cuenta y su control se estima excelente. Asimismo consta se ha procedido a disponer de muchos ingresos correspondientes a los asientos que se encontraban pendientes, dándoles el destino legal. Respecto con otros órganos, en número de operaciones por organismo y tipo emanada de la aplicación informática de la cuenta, se desprende que el Letrado la Administración de Justicia ha obtenido un número de movimientos muy superior otros órganos. En la comparativa en la posición global, en concreto respecto al estado de las cuentas expedientes ostenta el liderazgo en cuanto es el órgano que menos cuentas activas de toda la provincia, 83 incluso con Juzgados que tienen menos pendencia y por tanto menos asuntos en trámite, lo que resalta más la labor en la llevanza de la cuenta de consignaciones, hay pues que felicitar al Letrado de la Administración de Justicia por su labor.

En primer lugar se ha de indicar para hacer una valoración del estado de este juzgado, de la pendencia que hay en el mismo y, por ende, de su funcionamiento, que soporta un nivel de ingreso de asuntos sensiblemente superior, tanto en materia civil (especialmente en ésta) como en penal, a los módulos referenciales que el Consejo General del Poder Judicial aprobó con carácter orientativo (Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por el que se publica el Acuerdo suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia), que como es sabido se encuentran fijados para este tipo de órganos mixtos en 680 asuntos civiles (incluida jurisdicción voluntaria y ejecuciones) y 1.000 asuntos penales (excluida ejecución). El pasado año 2022, en materia civil se computó, según Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, la cifra de 953 asuntos, incluida jurisdicción voluntaria y ejecución, y 1136 asuntos en materia penal.

Y en segundo lugar, se ha de notar que la plantilla si no escasa, al tener un Tramitador de refuerzo para los casos de Violencia sobre la Mujer, plaza que quedó consolidada, sí muy ajustada para el gran volumen de asuntos que soporta en relación con órganos similares de la Comunidad Andaluza, lo que ha quedado agravado por cierta tardanza en la provisión de las bajas. En concreto, el puesto de un funcionario de tramitación tuvo 45 días sin cubrir. Añádase a lo anterior que al ser juzgado único y llevar el Registro Civil, hay un auxilio judicial destinado exclusivamente a estos menesteres. La huelga, por otro lado del LAJ y últimamente de los funcionarios ha contribuido también en la generación de parte de la pendencia.

Se ha de hacer notar que en los últimos ocho años el juzgado ha estado servido por gran número de jueces, algunos titulares que por una u otra razón han estado escasos meses, siendo principalmente atendido por jueces sustitutos.

Lo anterior queda paliado por el esfuerzo que vienen acreditando la jueza titular y el LAJ, los cuales han creado un buen clima de trabajo y gran dedicación en un funcionariado que tiene ya cierta estabilidad. Ello provoca que el nivel de pendencia del órgano, salvada cierta deficiencia



detectada en el impulso procesal y hechas las precisiones precedentes, sea razonable para la gran nivel de ingreso de asuntos que viene registrando el juzgado en los últimos años.

En el ámbito penal la pendencia es aceptable tanto en el número de Diligencias Previas pendientes, que son 139, como en el de Procedimientos Abreviados, que asciende a 40, muy lejos de los 115 detectados en la inspección anterior. No hay ningún sumario; Igualmente son muy razonables el número de Delitos Leves (40), y el de Ejecutorias (35).

En el ámbito civil la cifra de pendencia es en general aceptable, si bien algo elevada en cuanto a asuntos de jurisdicción contenciosa pendientes hasta sentencia, pues hay 826. Se detecta en cuanto a los Procedimientos Monitorios que existe un importante número de ellos pendiente del requerimiento previsto en los mismos, lo cual supone un evidente retraso. En trámite de ejecución aparecen 569 asuntos, cifra asumible si tenemos en cuenta que hay un número importante de ellos que se encuentran pendientes de que “inste la parte”, como aparece en los listados que se han presentado con ocasión de esta visita de inspección, y, por lo tanto, se trata de asuntos que están a la espera de que las partes soliciten su continuación, o de que transcurra el plazo correspondiente para que puedan pasar al archivo, y que no consten así en los datos estadísticos.

En relación con los escritos pendientes de proveer la cifra no es exagerada, existiendo 384 en Civil y 76 en Penal.

Hecha exclusión de las deficiencias detectadas en el impulso procesal, principalmente en la gestión de las Diligencias Previas y algunos procedimiento civiles, la llevanza general de asuntos puede considerarse asumible.

Con las salvedades y precisiones antes indicadas, el Juzgado presenta un aceptable funcionamiento, máxime teniendo en cuenta la incidencia de la huelga de LAJ y funcionarios, por lo que no se considera por ahora necesario proponer ninguna medida de control y seguimiento, por más que las que se adoptaron a raíz de la anterior inspección, hoy ya levantadas, surtieron el efecto deseado, bajándose la pendencia existente en el ámbito penal.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.21- ALARDE nº 00000046/2023 confeccionado por D./D^a. GEMA MARIA SOLAR BELTRAN de JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NUMERO 7 DE ANDALUCÍA, CON SEDE EN ALMERÍA, con motivo de su Cese y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oída la Ponente Doña Lara Inmaculada Blanco Coronil, y por unanimidad, acuerda APROBAR EL ALARDE CONFECCIONADO al ajustarse a lo prevenido en los artículos 317.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 124 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial. El periodo al que se refiere está comprendido entre el 13 de julio de 2.007 y el 2 de marzo de 2.023. El resumen globalizado de asuntos recoge una pendencia de 38 permisos de salida, 35 recursos contra sanciones disciplinarias, 35 recursos contra clasificación de grado, 39 libertades condicionales, 27 acumulaciones de condena, 2 limitaciones de régimen, 37 medidas coercitivas, 53 quejas por denegación de permiso, 32 quejas y peticiones y 2 genéricos. No hay asuntos pendientes exclusivamente de auto definitivo.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Con carácter previo, procede indicar, tal y como indica la Magistrada cesante en su Informe, que el índice de materias de que se compone el alarde es el siguiente:

- permisos de salida.
- recursos contra sanciones disciplinarias.
- recursos contra clasificación en grado.
- libertad condicional anticipada.
- libertad condicional general.
- revocación condicional.
- libertades postpenitenciarias.
- quejas contra la intervención de las comunicaciones.
- acumulaciones de condena.
- limitaciones de régimen.
- medidas coercitivas.
- abono de preventiva.
- quejas y peticiones.
- medidas coercitivas.
- quejas denegación de permiso.
- trabajos en beneficio de la comunidad
- genéricos.

Dividiendo cada una de las materias anteriores a su vez en :

a) relación de asuntos pendientes de resolución, expresándose número de registro, fecha de incoación, tramite en que se encuentran a fecha del último proveído, indicando que no existen asuntos pendientes de dictado de auto resolutorio.

b) relación de asuntos pendientes de recibir notificación, sobre los que se ha dictado resolución y en los que ya se ha remitido oficio de notificación a las partes y de los que aún no consta recepción por los mismos.

c) relación de asuntos pendientes de recurso, en los que se incluyen aquellos en los que actualmente se esta tramitando recurso de reforme o de apelación.

Relación de permisos de salida pendientes: El procedimiento más antiguo data del año 2022, estando la mayoría en trámite de "tramitación de recurso", informe de Fiscal y notificación a la parte; la fecha de último proveído en su mayoría es reciente y cercana a la fecha del alarde. Consta un total de 38.

Relación de recursos contra sanciones disciplinarias pendientes: El número total de asuntos en trámite asciende a 35. Del mismo modo, la mayoría se encuentran pendientes de trámites con intervención no imputable al Juzgado, tal como informe del Fiscal, o tramitación de recurso. La fecha de último proveído es reciente. Pudiéndose apreciar un control excelente de los procedimientos.

Relación de recursos sobre clasificación en grado pendientes: Puede observarse un control óptimo de los procedimientos, siendo reciente la fecha de último proveído.

Relación de expedientes de libertad condicional anticipada: El procedimiento más antiguo es del



año 2020, siendo la mayoría del año 2022 y 2023. El número total de procedimientos en esta materia pendientes asciende a 15, estando su mayoría en trámite de cumplimiento o de informe del Ministerio Fiscal.

Relación de expedientes de libertad condicional general: El número de asuntos pendientes asciende a 19; encontrándose en situación similar a las anteriores. Puede observarse un tramitación temporal adecuada.

Relación de revocación de libertad condicional pendientes: La mayoría se encuentran en cumplimiento de requisitoria, siendo el número total 5, por lo que no hay nada que objetar al respecto.

Relación de expedientes sobre libertades postpenitenciarias: El procedimiento más antiguo corresponde al año 2020, si bien el mismo se encuentra en trámite de cumplimiento. Siendo el resto de proveído reciente.

Relación de expedientes sobre intervención de las comunicaciones: Existen un total de 8 asuntos. Todos se encuentran pendientes de informe de fiscal, siendo de fecha reciente, enero y febrero de 2023.

Relación de expedientes sobre acumulaciones de condena pendientes: Existe un total de 27 procedimientos en trámite. Si bien, igual que los anteriores puede observarse un control adecuado de los mismos, siendo reciente la fecha del último proveído.

Relación de expedientes de limitaciones de régimen pendientes.

Relación de expedientes sobre medidas coercitivas (art. 72 r.p.) pendientes.

Relación de abono de preventiva

Relación de expedientes de genéricos

Relación de expedientes de quejas y peticiones

Relación de expedientes de quejas por denegación de permiso.

Respecto a los anteriores, se observa que la mayoría son de los años 2022 y 2023. Siendo reciente el último proveído, percibiéndose un control excelente de los mismos.

Relación de expedientes de trabajos en beneficio de la comunidad: Existen un total de 239 asuntos en trámite, la mayoría del año 2022 y 2023, estando su mayoría en trámite de cumplimiento. Por lo que nada se puede añadir al respecto.

No existen asuntos pendientes de resolución final.

Por todo lo expuesto, se entiende que la situación del órgano judicial a la fecha de cierre del alarde es adecuada, existiendo un control adecuado de los asuntos en trámite.

Particípese el presente Acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando copia del alarde (art. 127 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial), y al órgano afectado para su conocimiento y efectos procedentes.

2.22- ALARDE nº 00000053/2023 confeccionado por D./Dª. LUIS RABASA AGUILAR-TABLADA de JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE CORDOBA, con motivo de su Cese y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oída la Ponente Doña Lara Inmaculada Blanco Coronil, y por unanimidad, acuerda APROBAR EL ALARDE CONFECCIONADO al ajustarse a lo prevenido en los



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

artículos 317.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 124 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial. El periodo al que se refiere está comprendido entre el 17 de Agosto de 2020 y el 20 de marzo de 2023. El resumen globalizado de asuntos recoge una pendencia de Sumarios 4, Diligencias Previas 383, Procedimientos Abreviados 62, Juicios sobre Delitos Leves 54, Juicios de Faltas 0, Hábeas Corpus 0, Procesos de la Ley del Jurado 0 y Ejecutorias Penales 78. Número total de asuntos pendientes exclusivamente de sentencia o auto definitivo, dejados al cese 0.

Con carácter general puede observarse un adecuado control de los procedimientos, teniendo en cuenta las fechas del último proveido, bastante reciente a la fecha de cese.

Existen un total de 4 sumarios ordinarios, estando pendiente de diligencias no imputables al Juzgado, siendo su proveido de fecha cercana al cese.

Respecto a diligencias previas, los procedimientos más antiguos y correspondiente a los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, siendo su mayoría del año 2022, si bien como ya se ha indicado el último proveido es de fecha reciente.

A fecha del alarde el número de diligencias previas en trámite asciende a 383, número bastante razonable teniendo en cuenta la carga de trabajo que asume el Juzgado.

El número de procedimientos abreviados en trámite se eleva a 62, siendo del mismo modo razonable su número, debiendo indicar que si bien en la mayoría de ellos se encuentran en trámite de escrito de defensa, habiéndose incluido en el alarde los que se encuentran pendiente de trámite procesal emitiendo las correspondientes requisitorias.

En cuanto a los delitos leves y ejecutorias penales, no se aprecian desviaciones significativas.

No consta diligencias urgentes pendientes en el Juzgado.

Por todo lo expuesto, se entiende que la situación del órgano judicial a la fecha de cierre del alarde es en general adecuada, en relación con la carga competencial que ha venido soportando.

Particípese el presente Acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando copia del alarde (art. 127 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial), y al órgano afectado para su conocimiento y efectos procedentes.

2.23- ALARDE nº 00000067/2023 confeccionado por D./D^a. SALVADOR RAMÓN SÁNCHEZ-GEY GONZÁLEZ de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 5 DE SANLÚCAR LA MAYOR, con motivo de su Cese y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente Ponente Don Esteban Brito López, y por unanimidad, acuerda APROBAR EL ALARDE CONFECCIONADO al ajustarse a lo prevenido en los artículos 317.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 124 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial. El periodo al que se refiere está comprendido entre el 8 de enero de 2019 y el 9 de junio de 2023. El resumen globalizado de asuntos recoge una pendencia en el orden jurisdiccional civil de 295 procedimientos en fase de tramitación, 32 procedimientos de derecho de familia, 10 procedimientos relativos a la capacidad de las personas, 7 asuntos de jurisdicción voluntaria, 490 procedimientos en fase de ejecución y 12 ejecuciones de procedimientos de derecho de familia. En el orden jurisdiccional penal existen 31 diligencias previas pendientes, 18 procedimientos abreviados, 27 procesos por



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

delitos leves y 19 ejecutorias. No hay asuntos pendientes exclusivamente de dictar sentencia dejados al cese.

El Juzgado entró en funcionamiento el 30/11/2018, habiendo tenido doble reparto durante un tiempo que no se especifica, destacándose en el informe por el Juez cesante la cualificación e implicación de la plantilla de funcionarios y Letrado de la Administración de Justicia así como poniendo de manifiesto las deficiencias de instalaciones y medios tanto en el Juzgado como en el resto de órganos del partido judicial.

En el ámbito civil se observa una pendencia moderada en los procedimientos en fase declarativa (2 de 2020, 6 de 2021, 56 de 2022 y 231 de 2023), existiendo 7 sin incoar con entrada en junio de 2023, siendo igualmente moderado el número de procedimientos en ejecución, con proveídos en su mayor parte actualizados y en gran número pendientes de instancia de parte.

En lo referido a los procedimientos de familia y capacidad, la pendencia es baja, con proveídos en su mayoría al día, tanto en fase declarativa como en ejecución.

En el ámbito penal, tiene igualmente una pendencia muy baja, con 10 Diligencias Previas de 2022 y 21 de 2023, con tan solo 18 Procedimiento Abreviados (5 de 2022 y 13 de 2023), y en cuanto a los Juicios de delito leve, hay 2 de 2022 y 16 de 2023 pendientes de celebrar juicio, de los que 15 se encuentran señalados, con la fecha de juicio más lejana el 5/09/2023, habiendo 19 ejecutorias penales (4 de 2021, 6 de 2022 y 9 de 2023) todas con proveídos actualizados a la fecha del alarde.

El Juzgado, a la vista del alarde, se encuentra en una muy buena situación, debiendo destacarse el trabajo de la plantilla del Juzgado (Juez titular, funcionarios y Letrado de la Administración de Justicia, en conjunción con el Ministerio Fiscal en el ámbito penal), a pesar de la carga de trabajo y problemática del Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor.

Particípese el presente Acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando copia del alarde (art. 127 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de la Carrera Judicial), y al órgano afectado para su conocimiento y efectos procedentes.

2.24- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000033/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE VILLACARRILLO por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de JAÉN el día 29/05/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La composición de la plantilla actual del órgano judicial es la siguiente: Juez, Letrada de la Administración de Justicia, 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión, 3 funcionarios del Cuerpo de Tramitación y dos funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. En relación a las necesidades de plantilla, la actual es insuficiente y mas aún teniendo en cuenta las bajas sufridas por este órgano en los últimos meses. Asimismo, en la sección penal, sería necesario otro funcionario, dado que dicha sección se encuentra atendida únicamente por un tramitador procesal y un auxilio judicial, que compagina sus funciones propias del cuerpo con la tramitación de delitos leves y ejecutorias penales. De igual manera, para una mejor marcha del Juzgado, sería necesaria la instauración de un servicio común procesal que agilizaría el trabajo de la oficina.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Como en cualquier Juzgado Mixto el trabajo se distribuye en dos secciones, la civil, para la tramitación de los procedimientos de tal índole, compuesta por dos gestores y un tramitador, y la sección penal, compuesta por un tramitador y un auxilio judicial. De igual manera este Juzgado tiene atribuidas funciones de Registro Civil, que son desempeñadas con un tramitador procesal con apoyo de uno de los dos auxilios, con los que cuenta este Juzgado. En relación a los funcionarios de Auxilio Judicial, uno de ellos, se encarga de atención en sala vistas, correo, material, archivo y demás funciones auxiliares y ocasionalmente, cuando sus funciones así se lo permiten, apoya a la sección pena! con la incoación y archivos por sobreseimiento. Dicha funcionaría actualmente se encuentra de baja desde 20 de enero de 2023, sin que a día de fecha, conste cubierta por funcionario interino. La otra funcionaría del cuerpo de Auxilio Judicial, se encarga de la tramitación de los delitos leves, ejecutorias penales y auxilio judicial. Asimismo, actualmente, se encarga de la atención de la sala de vistas, al encontrarse actualmente de baja, la funcionaría de auxilio judicial que se encarga de la misma.

En cuanto al sistemas de guardias de este Juzgado, indicar que participan en el mismo por turnos rotatorios establecidos por propios funcionarios de común acuerdo, el tramitador y la auxilio judicial de la sección penal, así como la tramitadora encargada del Registro Civil.

Los señalamientos, tanto civiles como penales, suelen señalarse para los días de saliente de guardia (los lunes), día en que se cuenta con la presencia en la sede de un miembro del Ministerio Fiscal, señalándose también el resto de días de la semana en que por turno semanal corresponde a este juzgado la Sala de Justicia que se comparte con el Juzgado número.

En materia civil, se tramita en papel cero, se incorpora todo al sistema procesal, estando actualizados fases y estados, la consolidación y formación del expediente electrónico se realiza con cierta frecuencia, no solo cuando se remiten los autos a la Audiencia Provincial. En materia penal, se recomienda tramitar en papel cero y no continuar en papel. Para ello se hace preciso una actualización de las fases y estados en el sistema procesal, incluir todos los acontecimientos al sistema y escanear, los informes, declaraciones, periciales de tal modo que todo este incorporado al sistema gestión procediendo a la consolidación del expediente. Todo ello sin perjuicio de que algunas partes Juez, Fiscal, quiera imprimir todo o parte expediente al evacuar algún trámite o traslado.

Los libros se llevan informatizados, son los que proporciona el sistema de gestión procesal.

El numero de cuenta es la 2085, presenta un saldo el día que se realiza la inspección de 301,140,36 euros, siendo 112 los asientos abiertos, operativas 253, creados 516, total activos 396. Se comprueba que el Letrado mueve la cuenta y realiza mandamientos de pagos, sin embargo es preciso una revisión de todos los asientos pendientes de cancelar anteriores a 2020 dándole el destino que le correspondan, pues algunos ingresos datan de mucho tiempo, ingresos para recurrir, sin dar destino legal, mandamientos de pago entregados y no cobrados, ingresos erróneos, realizando las correspondientes transferencias a la cuenta 9999 o 5555, etc...Se recomienda debe de comprobarse antes de proceder al archivo de los autos, que el procedimiento no tenga dinero pendiente de aplicar.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una



pendencia en el orden jurisdiccional civil de 434 procedimientos en fase de tramitación, 112 procedimientos relativos al derecho de familia, 519 procedimientos en fase de ejecución, 98 escritos de trámite y 253 de ejecución pendientes de proveer. En el orden jurisdiccional penal existen 70 diligencias previas pendientes, 2 sumarios, 27 procedimientos abreviados, 61 juicios por delitos leves, 1 juicio por delito leve inmediato, 33 ejecutorias y 7 exhortos telemáticos pendientes de cumplimentar.

En el orden civil se constata que el Juzgado genera un ingreso de asuntos en los últimos años por encima del referencial aconsejable de 680 asuntos civiles, que se vienen superando registrándose en 2022, 1045 asuntos. Lo mismo ocurre en el orden penal, en el que se supera el referencial de 1000 asuntos penales, habiéndose registrado concretamente 1447 asuntos.

De momento no se acuerda seguimiento alguno, si bien el Juzgado deberá comunicar al recibir el informe para alegaciones si ha puesto al día las demandas pendientes de incoar que son 85. Se recomienda a la Letrada revisar aquellos procedimientos con dinero anteriores 2019, con el objeto de actualizar la cuenta, así como la revisión escritos posteriores y su proveído.

Es preciso resaltar la falta de planta judicial de funcionarios, solo 2 Gestores, 3 tramitadores y un funcionario de Auxilio, ya que el otro Auxilio está de baja pendiente de nombrar interino desde hace varios meses. El Auxilio además tiene que realizar sus propias funciones, tramita ejecutorias y delitos leves. Es preciso la realización urgente de un nuevo edificio judicial, ya que el actual está encima del mercado de abastos, siendo continuos los malos olores de alimentos.

Es preciso la creación urgente del Servicio Común de Partido Judicial, al tratarse de del partido judicial mas extenso de la provincia, que se acerca a la provincia de Albacete, teniendo que desplazarse los propios funcionarios del Juzgado a realizar diligencias, notificaciones y requerimientos.

Es preciso el nombramiento de un funcionario de Tramitación de refuerzo e incremento de la RPT.

No obstante, la pendencia es aceptable y previsiblemente mejorara después de unos meses con la toma de posesión reciente de la nueva Jueza. Se puede considerar que el funcionamiento del Juzgado es bueno, salvo las disfunciones puntuales observadas en la tramitación de asuntos penales, diligencias previas, con un cierto desorden y de una leve acumulación en demandas pendientes de incoar, debiendo destacar esta unidad la labor que empieza a realizar la Jueza titular, resolutive en ambos órdenes, civil y penal, pese al poco tiempo que lleva en el cargo, implicación y compromiso profesional que es extensible a la Letrada de la Administración de Justicia y a los funcionarios del juzgado.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.25- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000034/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 5 DE ALMERIA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de ALMERÍA el día 24/03/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

La plantilla del Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Almería se compone de un Magistrado (JAT) , una Letrada de la Administración de Justicia, cuatro funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cinco funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. Actualmente, la misma se compone por siete funcionarios titulares (tres gestores y tres tramitadores) y tres funcionarios interinos (un auxilio, un tramitador y un gestor). El Magistrado D. Urko Liendo Álvarez es Juez de Adscripción Territorial designado en fecha 22 de septiembre de 2022 hasta la incorporación de la titular, Doña Irene Navarrete Cánovas. La Letrado de la Administración de Justicia, Doña Raquel Martínez Cantón tomó posesión en el Órgano en fecha 20 de Enero de 2021. Las necesidades de la plantilla se centran, más que en un aumento de la misma, en la creación de nuevos Juzgados y ello teniendo en cuenta que tras la incorporación del Juzgado de Primera Instancia 9 en el reparto ordinario de asuntos una vez finalizado el periodo de especialización así como la creación del Juzgado de Primera Instancia 11 apenas ha tenido repercusión real es la disminución de entrada de asuntos contando que en este primer trimestre del año finalizará con casi 600 demandas nuevas lo que supone que en el compute anual no se aprecie una disminución en la carga de trabajo.

Respecto a las instalaciones ha de destacarse que el Juzgado se encuentra dividido en dos estancias bastante alejadas la una de la otra lo que dificulta la comunicación y atención del personal funcionario que se encuentra al otro lado del Juzgado. Ello afecta principalmente al ciudadano que tiene que acudir primero a unos despachos para luego indicarle con claridad que el Negociado por el que pregunta se encuentra en otras dependencias del edificio. A su vez hay que destacar que el Juzgado cuenta con estanterías en lugar de armarios cerrados para la colocación de los procedimientos en dos de los negociados manteniéndose a la vista los procedimientos una vez colocados. El Juzgado no cuenta con Sala de Audiencias de uso exclusivo; sólo tiene asignada la Sala 1 y la Sala 14 para los días de señalamientos. El Juzgado cuenta con 12 ordenadores y 6 impresoras y las Salas de vistas asignadas para la celebración de juicios disponen de medios de grabación y videoconferencia.

Por todo el personal del Juzgado se utiliza y se accede a través de las distintas aplicaciones telemáticas a los servicios ofertados desde el Punto Neutro Judicial y se da cumplimiento a Observancia y cumplimiento por parte del personal del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia (Instrucción 2/2003 del C.G.P.J, de 26 de febrero de 2003), a las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010 así como Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010 para el registro de procedimientos. Se dispone del sistema Arconte para grabación de vistas. Se utiliza LEXNET de forma completamente normalizada. Todos los funcionarios están dados de alta en las aplicaciones oportunas de Averiguación patrimonial, domicilio etc., utilizando cada uno su clave, sin que se haya detectado ninguna utilización indebida de los mismas.

Actualmente se llevan libros informáticos de resoluciones finales que proporciona el propio Sistema de Gestión Procesal. El libro de Decretos Definitivos cuenta con 18 paginas siendo el ultimo Decreto el 190/2023 y el Libro de Resoluciones llega hasta la pagina 35 siendo el ultimo Auto el numerado como 156/2023 y la ultima Sentencia la numerada 54/2023.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

La cuenta del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Almería, se encuentra abierta en la Entidad Santander con el nº 0241 y presenta al día de la inspección un saldo de 2.220513,30 euros. La llevanza de la cuenta de consignaciones se ha visto muy resentida por motivo de la huelga de LAJS. Se pide designación de cuenta a procuradores, en el certificado de titularidad prefiere que sea del cliente salvo que se haga constar en el poder que pueden aceptar cantidades indemnizatorias. La gestión de los movimientos de la cuenta se realiza con normalidad, realizándose los pagos con un tiempo razonable desde sus ingresos y así especialmente en lo que se refiere a pagos periódicos. Se observa el atasco originado con la huelga de Letrados de la Administración de Justicia.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 1.117 procedimientos en fase de tramitación, 12 exhortos, 15 asuntos de jurisdicción voluntaria, 2.379 procedimientos en fase de ejecución, 287 escritos de trámite y 303 escritos de ejecución pendientes de proveer.

Con carácter general la tramitación es correcta, pese a ello continua siendo excesiva la carga de trabajo de este juzgado, como en continua siendo excesiva la carga de trabajo de este juzgado, como en crecimiento de la conflictividad y litigiosidad no ha ido en paralelo con la creación de nuevos órganos judiciales. Es loable que toda la situación procesal se encuentra reflejada en Adriano, incluidos los asuntos pendientes de proveer y las demandas pendientes de incoar. Se utiliza la firma digital tanto por la LAJ como por el Magistrado. El uso de LEXNET esta completamente normalizado. Es loable el trabajo realizado por la Letrada de la Administración de Justicia en cuanto a exigir el OCR a Procuradores, así como en la descripción documental en Adriano, llevándose una tramitación muy completa y homogénea.

Se observa un elevado grado de adaptación del Adriano, en cuanto a fases y estados, a la realidad del Juzgado, constando incluso los asuntos pendientes de incoar así como los escritos pendientes de proveer. Lo que supone que existe un control de los asuntos del Juzgado lo que permitiría una tramitación digital completa.

La Sra. Letrada de la Administración de Justicia en su calidad de responsable de la documentación de los autos deberá adoptar las medidas necesarias para que las actuaciones impresas para que trabaje la juez, sean destruidas una vez utilizadas por este, ya que las mismas no constituyen expediente judicial. Igualmente deberá de dictar las instrucciones precisas para que las actuaciones externas, exhortos, acuses de recibo etc... sean digitalizados e incorporados al Expediente Judicial Electrónico.

Es precisa la dotación de una impresora, así como un terminal y numero de teléfono nuevo.

Es de destacar, a pesar del volumen de trabajo de este Juzgado, la buena organización y control de la Oficina judicial.

Felicitar a todo el Juzgado por la mejora y mantenimiento que se observa desde la inspección anterior en noviembre de 2014 a la actual.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

2.26- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000035/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE PRIEGO DE CÓRDOBA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÓRDOBA el día 06/07/2023 y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por la Unidad Inspectoral correspondiente a la Presidencia de la Audiencia Provincial, el 6 de Noviembre de 2018.

La plantilla está compuesta por una Jueza, 1 Letrado de la Administración de Justicia, 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 3 Justicia, 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 3 funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, así como 2 funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

En cuanto a la distribución del trabajo, sin perjuicio de la separación de la sección civil y penal, debe potenciarse el negociado civil, pues es el que acumula todo el retraso del órgano y al sobrepasar el 90,15% el volumen de entrada en relación al módulo teórico de la carga de trabajo del Consejo General del poder judicial. Además de la carga, ha contribuido a dichas disfunciones la falta de experiencia de las incorporaciones al negociado civil, que a pesar de los esfuerzos realizados y la colaboración que están prestando otros compañeros, por ahora no se están viendo recompensados con una bajada de pendencia.

Se estima además necesaria la dotación de un refuerzo de tramitación para desatascar la situación actual. Los funcionarios de auxilio deben practicar más salidas, dado que la frecuencia de un día a la semana se estima insuficiente a la vista la gran cantidad de actos de comunicación pendientes. El Letrado de la Administración junto con la Jueza deben reorganizar el trabajo a fin de optimizar los medios personales para prestar un mejor servicio público en todos los asuntos que se tramitan, todo ello sin perjuicio de interesar, como se ha indicado, de la Administración instrumental mayor dotación de personal.

El Juzgado se encuentra ubicado en la localidad de Priego de Córdoba en la calle Ronda nº 17. Se trata de un edificio inaugurado en el año 2009, que alberga exclusivamente este órgano judicial al tratarse de un Juzgado Único.

No obstante, en sus instalaciones se engloba las correspondientes dependencias para el Médico Forense y para el Ministerio Fiscal cuando ejercen sus funciones presenciales en el mismo. Están situados en el sótano varios archivos para los procedimientos más antiguos, piezas de convicción, así como el correspondiente a los libros de Registro Civil. En planta baja se encuentra el Registro Civil, sala de vistas con videoconferencias y en la primera planta el resto dependencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. En general, al ser un edificio moderno, la estructura del mismo se acomoda a las funciones propias que en él se desarrollan, de amplias dimensiones, que cuenta con estancias espaciosas y servicios diversos, considerándose apropiadas para el adecuado desempeño de su labor por los funcionarios. No obstante, tiene humedades sobre todo en planta baja que llega hasta la sala de vistas, incidencia que se ha comunicado puntualmente a la Delegación.

Las medidas de seguridad se prestan por la Guardia Civil por tres efectivos en turnos



rotatorios, siendo muy satisfactoria su labor. El edificio cuenta con Arco de seguridad, encontrándose situado en la entrada principal, junto a la dependencia de los agentes de seguridad. No dispone este edificio de rampa para discapacitados, pero cuenta con un acceso en planta baja al que se accede sin barrera arquitectónica que permite la entrada al edificio mediante ascensor. Por otro lado, existen dos salas para la celebración de reuniones y varias están vacías. No dispone de biblioteca. Respecto al mobiliario de la oficina, se encuentra acorde con las características del edificio y las necesidades del personal, no obstante algunas necesidades puntuales.

Este Juzgado dispone de una caja fuerte pero no se utiliza.

El juzgado dispone de sistemas de grabación y de videoconferencia ubicados en la sala de vistas, teniendo a día de hoy un adecuado funcionamiento.

Existen dos fotocopadoras con escáner, si bien una de ellas está ubicada en la oficina de Registro Civil, la cual se encuentra en la planta baja del edificio. Por tanto, el resto de funcionarios, ubicados en la planta primera disponen de una única fotocopadora para su uso entré todos, la cual a día de la fecha solo tiene habilitada la función de copia, de muy lento funcionamiento. No obstante, se informa: se dispone de otras dos impresoras con escáner que son las utilizadas en sustitución de la función de escaneado de la única fotocopadora existente. El Juzgado dispone de siete ordenadores, uno por cada funcionario, y otros dos más, uno para la Magistrada-Juez y otro para el Letrado. Se encuentra en buen funcionamiento y estado, aunque en ocasiones han mostrado alteraciones en su funcionamiento con lentitud, más allá de lo normal en la apertura de aplicaciones y, sobre todo, en el sistema de gestión de firmas, produciéndose en más de una ocasión error en la tramitación correcta de éstas por el tiempo empleado en su desarrollo. Tanto la Juez como el Letrado disponen de sendos ordenadores portátiles para trabajo en domicilio. De uso correcto y que en breve van a ser sustituidos por otros de nueva generación.

Respecto a la utilización y acceso a través de las distintas aplicaciones telemáticas de los servicios ofertados desde el Punto Neutro Judicial, todos los funcionarios disponen de las claves necesarias para el acceso a dichas aplicaciones, siendo utilizadas cuando les sea necesario. Igualmente se han dado todas las instrucciones necesarias para que por parte de los funcionarios se lleve a cabo un uso adecuado de los sistemas informáticos, una correcta utilización del sistema procesal Adriano, que implica una correcta actualización de fases y estados, de registro de procedimientos adecuadamente, etc, siendo cumplidas dichas normas por regla general, sin perjuicio de que en algunas ocasiones no puedan llevarse a cabo rigurosamente por la excesiva carga de trabajo que soporta este Juzgado. No obstante, cuando es apreciada tal disfunción, especialmente la actualización de fases y estados, se intenta corregir, sobre todo cuando se trata de procedimientos más antiguos, los cuales están prácticamente sin actualizar, tratándose ésta circunstancia de una anomalía que viene arrastrándose desde hace varios años y que en la práctica resulta muy dificultosa de corregir dado la actividad titánica que ello supondría, a pesar de ser conscientes de la importancia de tal actuación.

En cuanto al cumplimiento del Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, se viene cumpliendo en la Oficina Judicial, en cuanto a los datos que se recogen como necesarios en el mismo y se encuentren en la aplicación "Adriano". Al tratarse de un Juzgado Único, no existe



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

reparto de asuntos por el Servicio Común, del cual carece.

Cuando son recepcionados por el órgano judicial a través de sistema Lexnet son aceptados por la Letrada de la Administración de Justicia, y se incorporan automáticamente al Sistema de gestión procesal, realizando estas comprobaciones y actuaciones diariamente.

En el momento actual se mantiene la llevanza de libros físicos y manuales.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones está abierta en Banco Santander con el número 1490. El saldo, a la fecha del día previo de la visita, cinco de Julio de 2023, arroja la cantidad de 807.583,19 euros. El importe de los mandamientos de devolución/transferencias librados y no cargados en cuenta es de 35.280,75 euros, en un total de 16 mandamientos pendientes. Asimismo se hace constar que al día previo de esta visita, 5 de Julio de 2023, en la posición global existe un total de 829 expedientes activos; con 12 operaciones ejecutadas, 373 operativas, 444 abiertas, 505 creadas, 726 concluidas, 4138 canceladas, y 0 bloqueadas.

El control y gestión de la cuenta que realiza el Letrado de la Administración de Justicia no es adecuado. Desde la última inspección se ha aumentado considerablemente el número de expedientes activos. Se aconseja que en los procedimientos en los que exista pagos periódicos, se solicite la cuenta corriente para que los pagos en ella agilicen la gestión, así como no se encuentra extendido, sólo en algunos asuntos de familia, la posibilidad del ingreso directo de las cantidades en cuenta fijada por el ejecutante o quien reciba el pago conforme prevé el art. 607.7 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

En primer lugar se ha de indicar para hacer una valoración del estado de este juzgado, de la pendencia que hay en el mismo y, por ende, de su funcionamiento, que soporta un nivel de ingreso de asuntos sensiblemente superior en materia civil, próximo al 90%, a los módulos referenciales que el Consejo General del Poder Judicial aprobó con carácter orientativo (Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por el que se publica el Acuerdo suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia), que como es sabido se encuentran fijados para este tipo de órganos mixtos en 680 asuntos civiles (incluida jurisdicción voluntaria y ejecuciones) y 1.000 asuntos penales (excluida ejecución). El pasado año 2022 en materia civil se computó, según Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, la cifra de 1172 asuntos, incluida jurisdicción voluntaria y ejecución, por más que el número de asuntos registrados en el ámbito penal (726) sea cifra inferior a esos módulos.

En segundo lugar, se ha de significar que la plantilla del órgano se considera escasa para el gran volumen de asuntos que soporta en relación con órganos similares de la Comunidad Andaluza, lo que ha quedado agravado por cierta tardanza en la provisión de las bajas ocurridas en los últimos meses. En concreto, el puesto de un funcionario de Tramitación permaneció un mes sin cubrir, y el de Gestor Procesal dos meses. Añádase a lo anterior que al ser juzgado único y llevar el Registro Civil, hay un auxilio judicial destinado a estos menesteres. La huelga, por otro lado, del LAJ y, últimamente, de los funcionarios ha contribuido también a la generación de parte de la pendencia.

Y en tercer lugar, se ha de hacer notar que en los últimos tres años el juzgado ha estado servido por tres jueces diferentes, hasta que la actual titular tomó posesión del mismo en diciembre



de 2021.

Lo anterior queda paliado por el esfuerzo que viene acreditando la jueza titular y los funcionarios, los cuales han creado un buen clima de trabajo dentro de una meritoria dedicación, siendo deseable que se instaure y mantenga una estabilidad en la plantilla para conseguir que se solventen las dilaciones en los procesos civiles y que se resuelva la preocupante cifra de demandas pendientes de incoar (323) y escritos pendientes de proveer (900, todos ellos en civil y su mayor parte pertenecientes al trámite de ejecución).

Todo ello con independencia del la gran nivel de ingreso de asuntos civiles que viene registrando el juzgado en los últimos años y de la necesidad de reforzar la plantilla con un funcionario de tramitación, amén de una mejor distribución del trabajo para que queden compensadas ambas jurisdicciones, toda vez que la Penal concentra proporcionalmente mayor dedicación.

En el ámbito Penal la pendencia es muy aceptable tanto respecto del número de Diligencias Previas pendientes, 65, como del de Procedimientos Abreviados, que asciende a 23. No hay ningún sumario. Igualmente son muy bajos tanto el número de Delitos Leves (10) y el de Delitos Leves Inmediatos (10), como el de Ejecutorias (23).

En el ámbito civil la cifra de pendencia ya deja mucho que desear, siendo elevada en cuanto a asuntos de jurisdicción contenciosa pendientes hasta sentencia, 754, excluido familia y ejecuciones, y aclarada que ha sido la discordancia entre los datos de la estadística del año 2022 y la más reciente del primer trimestre de 2023, siendo de destacar, como quedó indicado, el número elevado de demandas pendientes de incoar, 323, entre ellas, las más significativas, 175 de Procedimientos Monitorios, 49 verbales y 55 ejecuciones.

Respecto de los Procedimientos Monitorios existe un importante número de ellos pendiente del requerimiento previsto en los mismos, lo cual supone un evidente retraso.

En trámite de ejecución se computan 569 asuntos, cifra asumible si tenemos en cuenta que hay un número importante de ellos que se encuentran pendientes de que “inste la parte”, como aparece en los listados que se han presentado con ocasión de esta visita de inspección, y, por lo tanto, se trata de asuntos que están a la espera de que las partes soliciten su continuación, o de que transcurra el plazo correspondiente para que puedan pasar al archivo, y que no consten así en los datos estadísticos.

En relación con los escritos pendientes de proveer la cifra es, como dijimos, exagerada, existiendo 900 en Civil, por más que no aparezca ninguno pendiente en Penal.

El Juzgado presenta un aceptable funcionamiento en la esfera penal, siendo manifiestamente mejorable en al ámbito civil, donde se aprecian el retraso y las graves disfunciones ya indicadas.

Por ello se acuerda la adopción de una medida SEGUIMIENTO, para lo cual trimestralmente el Juzgado debería remitir a la Sala de Gobierno del TSJA el número de demandas y de escritos pendientes.

Asimismo, por indicación del Secretario Coordinador Provincial se acuerda un SEGUIMIENTO trimestral a fin de realizar la labor de arqueo y saneamiento general de la cuenta de consignaciones y depósitos, donde se han detectado disfunciones de control.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incórese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

3.- ASUNTOS VARIOS

3.1- ASUNTOS VARIOS nº 00000138/2022.- Expediente relativo a Instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2022 sobre Llamamiento de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno y por unanimidad, acuerda ACTUALIZAR y MODIFICAR PARCIALMENTE la Instrucción TSJA 2022 Llamamiento de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos en el siguiente sentido y apartados:

1. PUNTO V. Criterios de Ordenación y Preferencias para el Llamamiento de Magistrados/as Suplentes y de Jueces/zas sustitutos/as.

Se modifica parcialmente el apartado 1º. b), que debe decir:

“b) Una segunda lista, en la que se irán incluyendo por su orden los Jueces Sustitutos que cesen en el desempeño de funciones jurisdiccionales tras haberlo hecho durante un plazo superior a ciento veinte días, alternos o consecutivos.

El plazo referido comenzará a computarse desde el día 1 de septiembre de cada año, aun cuando llegada esa fecha se mantuviere el desempeño en virtud de un llamamiento anterior”.

El resto de dicho apartado continúa igual.

2. PUNTO VI. Procedimiento para el Llamamiento.

Se introduce un apartado nuevo 6 con el siguiente tenor literal:

“6. No obstante lo anterior, de manera motivada podrán los Presidentes de las Audiencias Provinciales alterar el orden de cada una de las listas cuando concurren circunstancias especiales que lo aconsejen, debidamente ponderadas por el Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, atendiendo siempre a criterios de eficacia en la prestación del servicio público que pudieren derivar, entre otras, de: a) la acreditada efectividad en el desempeño previo de la función judicial en base a los informes y boletines mensuales de actuación, b) el inmediato desempeño anterior en el mismo órgano o partido judicial en el que ya hubiera actuado el sustituto en el mismo año judicial, c) la distancia del órgano jurisdiccional, y d) alguna otra circunstancia de especial y análoga significación”.

Particípese el presente Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y a los Presidentes de las Audiencias Provinciales de este territorio, para su conocimiento y efectos procedentes.

3.2- ASUNTOS VARIOS nº 00000169/2022.-INCIDENCIAS INFORMÁTICAS- Expediente relativo a oficio de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón. Local comunicando el despliegue del nuevo sistema de gestión procesal @driano en los órganos judiciales de lo Contencioso Administrativo de Andalucía, recibidas nuevas comunicación de la Consejería. Una



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

vez recibido informe semanal del Servicio de Informática Judicial de la Consejería de Justicia sobre el nuevo sistema de gestión procesal @driano. Informe semanal del Servicio de Informática Judicial de la Consejería de Justicia sobre el nuevo sistema de gestión procesal @driano. Recibidos los informes semanales del despliegue del nuevo sistema de gestión procesal @driano y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno y por unanimidad, acuerda TOMAR CONOCIMIENTO y ASUMIR en su integridad el siguiente informe elaborado por el Secretario de Gobierno

INFORME

Expediente relativo a oficio de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón. Local comunicando el despliegue del nuevo sistema de gestión procesal @driano en los órganos judiciales de lo Contencioso Administrativo de Andalucía, "REITERAR la preocupación de esta Sala con las dificultades que a diario están padeciendo aquellos órganos judiciales que han sido implantados con el nuevo Sistema de Gestión Procesal, para lo cual se SOLICITA al Sr. Secretario de Gobierno un INFORME sobre la situación y dificultades actuales que está suponiendo la implantación en los órganos judiciales referidos, para su debate y adopción de medidas, y ESTABLECER como punto del Orden del Día del próximo Pleno a celebrar el día 18 de los corrientes. Particípese a la Consejería de Justicia".

Este informe se realiza en el uso y ejercicio de las competencias de este Secretario de Gobierno, en virtud de lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1608/2005 de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales(ROCSJ) en su Letra i) Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la Comunidad Autónoma con competencias asumidas, las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio de Justicia y a la Comunidad Autónoma cuantas incidencias afecten a los Secretarios judiciales que de él dependan, y en su letra o) Informar a la Sala de Gobierno, bien por propia iniciativa o a instancia de ésta, de todos aquellos asuntos que, por afectar a las Oficinas judiciales o Secretarios Judiciales que de él dependan, exijan de algún tipo de actuación.

El presente informe constara de cinco partes:

- 1.- Informe de los acuerdos dictados por esta Sala.*
- 2.- Informe de los Ilmos. Sres. Secretarios Coordinadores Provinciales, realizando evaluación en cada provincia.*
- 3.- Ventajas del aplicativo @driano.*
- 4.- Incidencias estructurales.*
- 5. Conclusiones y acuerdo.*

- 1.- Informe de los Acuerdos dictados por esta Sala.*



Todos los escritos y comunicaciones que se han recibido en la Secretaría de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, se han registrado en el sistema de gestión gubernativa como Expedientes de Asuntos Varios, y Junta de Jueces. Agrupadas por Jurisdicciones resultan los siguientes:

1.1.En el orden Jurisdiccional Social:

El expediente de asuntos varios 3/2022, se inició por comunicación de los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de lo Social números 1,2 y 3 de Jerez de la Frontera, se le acumulo al nº 22/2022 para dar tratamiento unitario.

El expediente de asuntos varios 22/2022, se inició por comunicación de los Magistrados de los Juzgados de lo Social de Jerez de la Frontera, y fue acumulado al expediente de Asuntos Varios 3/2022, por acuerdo en este, de fecha 8 de febrero de 2022,la sala ha “exteriorizado su preocupación a la vista de las incidencias, ya desde la experiencia piloto en la jurisdicción social de Jerez, la cual provocaba una insostenible situación en el normal funcionamiento y se ha requerido a la Consejería de Justicia para remover los obstáculos existentes a la mayor brevedad posible, pidiéndole un informe actualizado de la situación con un control semanal, tendente a conocer los problemas y soluciones que se adopten hasta su completa normalización, y se le ha hecho saber igualmente que habrá de suspender la implantación del nuevo sistema, hasta tanto el mismo no sea totalmente eficaz para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas”.

El expediente de asuntos varios nº 202/2022, se inició por comunicación del Magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Granada. El 23 de mayo de 2023, adoptó un acuerdo, dando traslado a la consejería sobre los problemas con el sistema de gestión procesal en los juzgados de lo social de Granada

1.2.En el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

El expediente de Asuntos varios nº 41/2023, se inició por escrito, que eleva la Magistrada Decana de los Juzgados de Jaén, y que fue firmado por los Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 2 y 3 de Jaén, por acuerdo de 15 de febrero de 2023 se “exteriorizó la preocupación y la conveniencia de poner a disposición de los juzgados con carácter general en toda la implantación, un técnico, como mínimo, que de forma presencial les asistiera en las numerosas incidencias que a diario tiene el programa, ya que la misma obstaculizaban el normal funcionamiento de los juzgados y se considera insuficiente el servicio técnico habilitado a través del CAU y específicamente creado para dar implantación, deficiencia que ya se puso de manifiesto por esta salas en acuerdos anteriores, dictados sobre el particular, entre ellos de 8 de febrero de 2022, en los asuntos varios 22/2022, y específicamente el dictado el 8 de noviembre de 2022, en el acta de junta de jueces de Almería número 322/2022”



El expediente de Junta de Jueces nº 322/2022, se inició por escrito relativo a Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo de Almería, de fecha 26 de octubre de 2022, respecto de solicitud de suspensión de la implantación del sistema de Gestión Procesal nuevo Adriano, a la vista de las deficiencias detectadas desde su inicio. Se acordó por la sala de gobierno, “solicitar con urgencia informe a la consejería sobre implantación en los juzgados de lo contencioso de Sevilla y Málaga y oficina de registro reparto. Asimismo, la sala entendía que toda implantación de un nuevo sistema de gestión procesal va a tener la lógica dificultades, a superar de forma proactiva por todos los implicados, pero ello no obsta a que se deberán tomar las medidas necesarias para que se anomalía no interfiera gravemente en el normal desarrollo de la actividad del órgano judicial afectado, para ello imprescindible que se dotarán los medios humanos y técnicos necesarios para asegurarles una adecuada actividad procesal. En este sentido, constándole a la Sala la existencia de desajustes entre las funcionalidades de nuevo sistema y las necesidades reales de los usuarios, que además de forma incomprensible se subsanan en un partido judicial y luego se reproducen el otro partido distinto, y dado el impacto que esta situación tiene sobre la actividad procesal diaria. En aras evitar perjuicios a usuarios, profesionales y ciudadanos, se acordaba solicitar a la consejería, la adopción de las siguientes medidas:

Primero, en relación a los juzgados de lo contencioso de Almería, así como el resto de los juzgados de esa jurisdicción en la comunidad autónoma se provea de un técnico desplazado in situ en la sede judicial, para que la vista de las incidencias que se producen, transmita la información de forma adecuada para la solución a la misma, de forma efectiva, y realicen las gestiones oportunas para su solución, permaneciendo en esta situación hasta la total normalización del órgano judicial. De forma paralela, un informe semanal, de manera puntual y concreta sobre cada una de las incidencias acaecidas en estos órganos y aún no resueltas, así como su resolución, una vez haya sido solucionada.

En segundo lugar, en relación a la implantación de los juzgados de lo contencioso de Sevilla y Málaga, así como las futuras, a efectuar en cualquier jurisdicción, que se proceda de forma individualizada previa y concreta sobre un órgano exclusivo y no de forma masiva, a fin de evitar que las incidencias generalizadas puedan ser resueltas antes de seguir con la implantación en el resto de órganos, minimizando, de esta forma, el impacto negativo que supondría en el desarrollo de la normal actividad del partido y orden judicial, por lo mismo se pidió información semanal a la Sala de gobierno de las incidencias acaecida y su resolución. Una vez hubieran sido solucionadas.”

1.3.Otros de distinta procedencia:

El expediente de Asuntos varios nº 169/2022, que se inicia por comunicación despliegue del nuevo sistema de Gestión Procesal @driano, que realiza la Secretaria General para la Justicia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

El expediente de Asuntos Varios nº 52/2023, que se inicia por comunicación del Sr. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores solicitando que la descripción de las notificaciones de @driano aparezca de forma idéntica a la actual de sistema Adriano, de ello se



tomó conocimiento y elevó a la Consejería para su resolución por acuerdo de sala, de 18 de abril de 2023.

El expediente de Asuntos Varios nº 178/2023, que se inicia por copia que remite la Magistrada Decana de los Juzgados de Jerez de la Frontera, del escrito presentado por la Delegada en Jerez de la Frontera del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) Andalucía. con acuerdo de tomar conocimiento, en comisión celebrada el día 9 de mayo de 2023.

2.- Informe de los Secretarios Coordinadores realizando evaluación en cada provincia.

En ellos se evalúa pormenorizadamente en cada provincia la situación actual e incidencias estructurales existentes, así como incidencias no esenciales, quejas y propuestas de mejora propuestas, (consta de 67 páginas)

Reseñados en el Anexo a este Informe:

<https://consigna.juntadeandalucia.es/dc5359b2fa74759df17c9684b6802d58>

3.- Ventajas del Aplicativo @driano

Del global de los informes efectuados por los Sres. Secretarios Coordinadores, podemos concluir que este sistema tiene indudables ventajas, que se reseñan, entre otras:

- 1. El funcionamiento intuitivo en comparación con el anterior sistema de gestión procesal Adriano.*
- 2. Los cambios de fases y estados automáticos, junto con las resoluciones emitidas, acotando el número de acontecimientos a generar.*
- 3. La integración de los sistemas de Portafirmas, LEXNET y NAUTIUS en @driano, ya que tanto las resoluciones pendientes de firma, los escritos pendientes de aceptar, como los asuntos pendientes de aceptar, se muestran en la pantalla de inicio en una sola aplicación, sin tener que estar realizando cambios continuos de sistemas/pantallas.*
- 4. La posibilidad de editar el documento a firmar en la bandeja de portafirmas, sin tener que rechazar la firma para modificar el mismo.*
- 5. La visión conjunta de los procedimientos relacionados con el mismo NIG (procedimiento principal y pieza separada/ procedimiento principal y su respectiva ejecución...).*
- 6. El sistema de tareas, ya que facilita la asignación de tareas a cada negociado, relacionando el documento y otorgando la posibilidad de establecer la prioridad según la urgencia de su tramitación.*
- 7. La posibilidad de ver simultáneamente varios procedimientos, así como el listado de los procedimientos recientemente consultados.*
- 8. La interconexión con instancias superiores para visionar la tramitación de los recursos formalizados contra la resolución interpuesta por nuestro juzgado en el procedimiento en cuestión.*
- 9. La posibilidad de consolidar de forma múltiple los procedimientos, aunque se realizan incidencias sobre su lentitud y avería en algunos supuestos.*



4.- Incidencias Estructurales de @driano.

4.1. En las oficinas de Registro y Reparto, como incidencias estructurales, impeditivas o graves, consideradas de alto impacto en el normal funcionamiento de los órganos judiciales (en especial la de exhortos, comisiones rogatorias, el reparto en ejecuciones que dimanen de Violencia de género y juras de cuentas) y contrarias a lo establecido el reglamento del CGPJ 2/2010.

4.1.1. Los exhortos civiles siguen sin entrar a la bandeja de Nautius, persiste al día de hoy cuando se dio incidencia a finales de junio. En la semana del 26 a 30 de junio llegaron solo tres en Córdoba. Esta situación ha generado de forma colateral que los demás servicios o Juzgados no los admiten en papel, en cumplimiento de la Instrucción 1/2018 del Secretario de Gobierno de Andalucía, habiendo tenido que dictarse Circulares por algunos Secretarios Coordinadores, dejándola sin efecto para su impresión en papel. Igualmente, la pestaña de consultas de exhortos no funciona.

En Málaga capital, según se informa, llevan aproximadamente 3 meses con la incidencia de registrar los exhortos de los ordenes sociales y contenciosos, pero no llegan por Nautius, generando pérdida de los mismos e indicación a los órganos exhortantes para su remisión por otra vía o en papel. Lo mismo ocurre con las diligencias a realizar para estos dos órdenes jurisdiccionales.

4.1.2. El Reparto de jurisdicción Civil a Violencia de Género, ha dado fallos, en la actualidad, no permite registrar las Ejecuciones que dimanen de violencia de género.

4.1.3. Las ejecuciones de título no judicial no se pueden registrar porque exige un procedimiento de origen como las ejecuciones de título judicial.

4.1.4. Las Comisiones rogatorias no se pueden registrar.

4.1.5. Faltan muchas clases de reparto de los concursos, en la jurisdicción mercantil.

4.1.6. No se pueden asignar directamente Procedimientos Ordinarios que dimanen de Monitorios.

4.1.7. Las juras de cuentas presentadas como escrito iniciador no pueden repartirse al juzgado que tramita el procedimiento principal con el mismo NIG, como establece el Reglamento del CGPJ nº 2/2010. (art. 7.3)

4.1.8. Faltan subclases de reparto en la jurisdicción social, que obligan a repartir con tipos no adecuados a la que se solicita en la demanda presentada.

Estas incidencias sin resolver en este punto 4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.7 dieron lugar al aplazamiento en la implantación de los partidos judiciales de Málaga, Granada y Huelva, pendientes de realizar, a lo largo de los meses de Junio y Julio.

4.2. Los errores frecuentes en el funcionamiento del sistema, a menudo relacionados con el visor o el editor de texto, generando acumulación de trabajo y atraso en la tramitación de los expedientes.



4.3. Imposibilidad de renombrar las carpetillas de escritos.(sic informe Jueces y Lajs Juzgados de lo social de Granada), Todos los escritos que presentan las partes se recogen en una carpeta denominada sin más, "ESCRITO DE TRÁMITE" sin saber quién lo presenta, ni su contenido. La carpeta no recoge la denominación elegida por la parte al presentar su escrito, ni permite renombrarla por el juzgado, por lo que en el esquema del procedimiento, se van sucediendo muchas carpetas iguales sin nombre, obligando a abrir una a una, e incluso abrir sus documentos para encontrar el escrito que buscamos.

Ello es esencial para el estudio del procedimiento por los jueces y letrados, teniendo en cuenta que un procedimiento puede tener muchos escritos de trámite de distintas partes, que van a aparecer en el visor con el mismo nombre: escrito de trámite, lo que dificulta la gestión del expediente digital. Cuestión muy importante para poder navegar de forma fluida en el mismo.

4.4. El envío de los asuntos a través de Nautius al órgano superior, es imposible, si supera los 400Mgs de capacidad, y en los asuntos que han sido recibidos, no se visualizan las vistas de manera regular,(solo en contadas ocasiones se ha podido abrir); y en la Audiencia provincial de Córdoba, aun no se ha podido repartir los asuntos a la sección civil.

4.5. Se demanda por los usuarios, una mayor capacidad operativa en el sistema que permita el envío/incorporación de documentos con independencia de su tamaño.

4.6. Lentitud y inoperatividad en la sustitución profesional en el sistema de firma, muy superior al anterior Adriano. Continuos errores en la firma de lotes, que obligan a firmar solamente de uno en uno o bien a desconectar la aplicación y volver a entrar. Actualmente cuando surge una sustitución a un letrado o magistrado por asuntos propios, permiso, etc en general, el CAU no da respuesta al cambio de firmante en @DRIANO lo que obliga a firmar manualmente,

4.7. La imposibilidad de eliminar al representante de la parte (como ejemplo, los procedimientos en los que se persona un nuevo letrado en sustitución del anterior), así como la imposibilidad de eliminar a cualquiera de las partes (como ejemplo, los procedimientos en los que se graba por error a un letrado como parte).

4.8. La imposibilidad de descargar el procedimiento completo en comparación con el anterior expediente judicial electrónico (en @driano sólo permite descargar documento por documento).

4.9. La visualización de documentos es muy complicada. Debería estarse al formato del antiguo Adriano donde la documental anexa a un escrito sólo se abría si se desplegaba la misma. Ahora la documental aparece automáticamente desplegada en el expediente dificultando la visualización del mismo.

4.10. La dificultad y errores para la consulta de los procedimientos por intervinientes.



4.11. *Falta de modelos en el programa, en todas las jurisdicciones, especialmente en la mercantil, cuyos modelos son obsoletos, no adaptados a la Ley Concursal, para agilizar la tramitación.*

4.12. *Deficiencias para el control de la tramitación y el trabajo en la oficina:*

4.12.1. *No existe listado de tareas pendientes para cada negociado con lo que es imposible conocer, si se están realizando las tareas asignadas, desconociendo si están ejecutándose o no.*

4.12.2. *No se pueden consultar en @driano las tareas y minutas que tienen cada funcionario asignados y pendientes de incoar y tramitar.*

4.12.3. *En todos los procedimientos señalados en Arconte figuran como intervinientes todos los Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia (sic. informe Córdoba, de todos los Juzgados de lo Social de Córdoba), y no únicamente los que intervienen en el acto.*

4.12.4. *No se puede realizar la estadística de forma automatizada.*

4.13. *Respecto a las resoluciones dictadas por Magistrados, en primer lugar, indicar que no se pueden visualizar las dictadas por cada uno de los magistrados de la Sala, solamente se puede obtener el listado general de resoluciones dictadas por la totalidad de los magistrados que integran la Sala, anomalía que dificulta la obtención de datos en la estadística; esta incidencia tampoco ha sido resuelta a la fecha presente. En segundo lugar, indicar la dificultad respecto a la localización de sentencias a través de la aplicación, ya que no se pueden filtrar por Magistrados ni por conceptos.*

4.14. *El término medio excesivo de resolución de las incidencias generadas. La asistencia dada a través de incidencia al CAU no es rápida, y en la gran mayoría de las ocasiones, no se da solución en el acto, debiendo esperar a la llamada por el técnico al usuario.*

Se ha informado que las que son de una misma temática, se acumulan a la primera que se dio en toda Andalucía, por lo que el número de estas no sería el real, a la vez que en muchos casos se realizan llamadas en horario de tarde y al no ser respondidas en el órgano, se procede al cierre de la incidencia, sin efectividad real, lo que ha ocasionado muchas quejas por los usuarios (sic Informe de Almería).

Igualmente se ha detectado que existen incidencias resueltas en unos partidos judiciales que no lo están en otros, desconociendo la razón de ello. En relación a la mejora en esta atención, y a petición de los usuarios, se ha reclamado insistentemente por esta Sala, la necesidad de permanencia de un técnico que resolviera aquellas incidencias que surgen tras la implantación efectiva, con la consiguiente retirada del equipo implantador, sin que se haya resuelta por ahora.

5.- Conclusiones y Acuerdo

De todo lo relacionado, esta Sala considera que es impeditiva la situación que presentan los envíos de asuntos vía Nautius, como son especialmente relatados, los envíos de exhortos, los



cuales no llegan al servicio común telemáticamente, al igual que las comisiones rogatorias que no se pueden registrar, las juras de cuentas, que se presentan como iniciadores, que no pueden ser registradas con el mismo NIG al órgano que tramita el procedimiento principal y la imposibilidad de registro de las ejecuciones que dimanen de Violencia de género; estas cinco incidencias contravienen el reglamento del CGPJ, nº 2/2010 Art. 7.3 y sig.(registro obligatorio) y la instrucción nº 1/2018 de este Secretario de Gobierno.

El resto de cuestiones planteadas son relevantes y necesarias para el trabajo diario de los órganos judiciales. Mención especial a la dificultad, en el que se encontraran los juzgados de primera instancia de grandes capitales y los de lo mercantil por la complejidad procesal de los expedientes que se tramitan en estos órganos, en concreto en la especialidad mercantil, los concursos y declarativos de alto volumen de documentación, con problemas con la incoación de las secciones, y las dificultades que se añaden expuestas por los secretarios coordinadores en sus informes.

Por todo lo cual, se propone a la Sala el siguiente ACUERDO:

1. PROPONER al Sr. Consejero de Justicia, la Suspensión de la implantación hasta la resolución de las incidencias impeditivas descritas en este informe, así como la mejora en todas las incidencias relevantes descritas, que afectan al funcionamiento diario de la herramienta para que su uso sea acorde a lo que se requiere, y se minimicen lo máximo posible para no ocasionar un perjuicio mucho mayor del que ya se está ocasionando, con retrasos en la tramitación en muchos ámbitos.

2. ESTABLECER un canal de comunicación sólido con la Consejería, con la creación de un órgano mixto de gestión y consulta, con composición de representantes de todos los usuarios del sistema, en el que se pueda conocer, el estado real de las incidencias existentes, las mejoras que se realizan a las sugerencias planteadas, y un calendario cierto de implantación, siendo necesario una sistematización de las incidencias, aglutinadas por la misma temática y con solución unitaria en todo el territorio, con publicidad general, así como la medidas que la Sala considere oportunas para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales en la prestación de la administración de justicia.

3. SOLICITAR a la Consejería se adopten las medidas tendentes a la mejora en la atención de los usuarios, en especial, una vez se finalice la implantación de la herramienta y continúan las incidencias sin personal técnico para atenderlas.

Participese el presente Acuerdo a la Consejería de Justicia, a los Presidente de las Audiencias Provinciales y a los Jueces y LAJs de órganos implantados con @driano, a través de los Decanos y Secretarios Coordinadores, ello para su conocimiento y efectos procedentes.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Ruegos y Preguntas.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 14 horas y 20 minutos, de la que da fe el Secretario de Gobierno.

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

Fdo.: Lorenzo del Río Fernández

Fdo.- Pedro Jesús Campoy López